

LA PALABRA Y EL SILENCIO

LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
EN COLOMBIA (1977-2015)



INFORME DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

LA PALABRA Y EL SILENCIO

LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
EN COLOMBIA (1977-2015)

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA



**LA PALABRA Y EL SILENCIO
LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN
COLOMBIA (1977-2015)**

Gonzalo Sánchez Gómez
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Germán Rey
RELATOR

Camilo Vallejo Giraldo
María Angélica Nieto Uribe
INVESTIGADOR E INVESTIGADORA

Álvaro Fernando Núñez Zúñiga
ASISTENCIA DE INVESTIGACIÓN

Andrea Torres
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN

**CONSEJO DIRECTIVO
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA
HISTÓRICA**

Presidenta

Tatyana Orozco de la Cruz
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO PARA
LA PROSPERIDAD SOCIAL

Mariana Garcés Córdoba
MINISTRA DE CULTURA

Gina Parody d'Echeona
MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

Yesid Reyes Alvarado
MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Paula Gaviria Betancur
DIRECTORA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Kelly Julieth Leal Castillo
Leonardo Favio Benítez Montes
REPRESENTANTES DE VÍCTIMAS

**CENTRO NACIONAL DE MEMORIA
HISTÓRICA**

Gonzalo Sánchez Gómez
DIRECTOR GENERAL

Andrés Fernando Suárez, Patricia Linares Prieto, María Emma Wills Obregón, Paula Andrea Ila, Doris Yolanda Ramos Vega, Germán Augusto Cano Torres y César Augusto Rincón Vicente
ASESORES DE DIRECCIÓN

DIRECTORES TÉCNICOS

Camila Medina Arbeláez
**Dirección para la Construcción de la
Memoria Histórica**

Álvaro Villarraga Sarmiento
Dirección de Acuerdos de la Verdad

Ana Margoth Guerrero de Otero
**Dirección de Archivo de los Derechos
Humanos**

Martha Nubia Bello Albarracín
Dirección de Museo de la Memoria

Janeth Cecilia Camacho Márquez
Dirección Administrativa y Financiera

Adriana Correa Mazuera
**Coordinación Equipo de
Comunicaciones**

LA PALABRA Y EL SILENCIO

LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN COLOMBIA (1977-2015)

ISBN: 978-958-8944-05-0

Primera edición: noviembre de 2015

Número de páginas: 400

Formato: 15 x 23 cm

Coordinación editorial:

Tatiana Peláez Acevedo

Edición y corrección de estilo:

Cometa Global Cooperativa Multiactiva. Equipo de trabajo conformado por Nelson Amaya, Juan Claudio López, María Teresa Ropaín, María del Pilar Sosa y Mariela Zuluaga

Diseño y diagramación:

Andrea Leal Villarreal

Apoyo gráfico:

Santiago Moreno

Georreferenciación:

Julio Enrique Cortés

Fotografía:

Portada: © Marcha contra el asesinato de Eustorgio Colmenares (1983) - Archivo La Opinión, Cúcuta.

Impresión:

Imprenta Nacional de Colombia

© Centro Nacional de Memoria Histórica

Carrera 6 N° 35 – 29

PBX: (571) 796 5060

comunicaciones@centrodememoriahistorica.gov.co

www.centrodememoriahistorica.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

Impreso en Colombia. *Printed in Colombia.*

Queda hecho el depósito legal.

Cómo citar:

Centro Nacional de Memoria Histórica. *La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977 – 2015)*, Bogotá, CNMH, 2015.

Este informe es de carácter público. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado, siempre y cuando no se altere su contenido, se cite la fuente y/o en cualquier caso, se disponga la autorización del Centro Nacional de Memoria Histórica como titular de los derechos morales y patrimoniales de esta publicación.

La palabra y el silencio : La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015) / Germán Rey ...

[et al.]. – Bogotá : Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015.

400 páginas ; 23 cm. – (Informes de investigación)

ISBN 978-958-8944-05-0

1. Violencia - Colombia - 1977-2015 2. Periodistas - Asesinatos - Colombia 3. Periodismo y violencia - Colombia I. Rey, Germán II. Serie.

303.6 cd 21 ed.

A1511620

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	17
INTRODUCCIÓN	19
1. LA IMPOSICIÓN DEL SILENCIO. LOS ASESINATOS DE PERIODISTAS DE COLOMBIA 1977-2015	25
Para construir un memorial.....	51
Los árboles y el bosque: lo que nos dice la memoria.....	52
2. LOS TIEMPOS DE LA MEMORIA. UNA PERIODIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN COLOMBIA (DICIEMBRE 1977 - AGOSTO 2015)	59
La preparación de la violencia. Primer periodo de la violencia contra periodistas en Colombia (1977- 1985).....	61
El ascenso de la violencia narcotraficante. Segundo periodo comprendido entre 1986 y 1995	77
Actores armados ilegales, conflicto y violencia contra periodistas. Tercer periodo de la violencia contra periodistas en Colombia 1996-2005	89
Descensos y ascensos en la violencia contra periodistas. Cuarto periodo: 2006- 2015	101
3. CAMBIOS EN EL PERIODISMO Y LOS MEDIOS. DE LOS AÑOS SETENTA AL NUEVO MILENIO	109

4. LOS VOLCANES EN ERUPCIÓN. LAS REGIONES COMUNICATIVAS Y LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS	129
El concepto de región comunicativa	147
La opinión pública local, la visibilidad de las acciones de los violentos y los callos que no se pisan	153
La región Norte, en medio del fuego. Datos relevantes por departamento.....	154
Periodismo, violencia y autocensura: realidades del oficio periodístico en la zona Sur de Colombia	177
La violencia contra periodistas en Antioquia.....	184
Santander, Arauca y Caquetá	188
Las necesidades del periodismo regional.....	191
5. LAS ESTRATEGIAS DE LOS GRUPOS VICTIMARIOS	193
Los grupos de narcotraficantes o la cabeza de la hidra.....	193
Los grupos paramilitares o la difusión del miedo.....	200
La guerrilla o la violencia contra la libertad	208
La deslegitimación del Estado por la violencia.....	211
Otros agentes del Estado: las fuerzas militares.....	213
El peligro de la corrupción para el periodismo.....	219
Violencia de género: las mujeres periodistas	221
6. SOBREVIVIENTES: OTRAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS	225
Surgimiento de organizaciones nacionales para la protección de periodistas y el Sistema Nacional de Protección.....	228
7. DAÑO COLECTIVO EN LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	247
La necesidad de pensar el daño colectivo en la violencia contra periodistas.....	252
Marco conceptual del daño colectivo a la comunicación	258
Alcances y expresiones del daño colectivo a la comunicación.....	269
El colectivo que sufre el daño	274
La reparación colectiva.....	298

8. IMPUNIDAD Y NEGACIÓN DE JUSTICIA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS	315
¿Hay un marco ajustado para la investigación, el juicio y la sanción?	320
¿Las investigaciones se adelantan con debida diligencia?	329
El paso del tiempo	342
La impunidad y la memoria	344
9. LOS SIGNOS DE LA RESISTENCIA	347
La solidaridad frente a la amenaza	349
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	361
REFERENCIAS.....	373
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL	389

MATERIAL GRÁFICO

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia. Periodo 2000-2015. Informe CNMH..... 41

Cuadro 2. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo 2000-2015. Informe CNMH. 43

Cuadro 3. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 2000-2015. Informe CNMH..... 43

Cuadro 4. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según presunto victimario. Periodo 2000-2015. Informe CNMH..... 45

Cuadro 5. Para construir un memorial: asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia (diciembre 1977 a agosto 2015). Informe CNMH (inserto)..... 52

Cuadro 6. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por periodos de análisis de 5 y 10 años (diciembre 1977 a agosto 2015). Informe CNMH. 60

Cuadro 7. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según presuntos victimarios. Periodo 1977-1985. Informe CNMH..... 70

Cuadro 8. Principales ciudades en las que se cometieron asesinatos contra periodistas en Colombia. Periodo 1977-1985. Informe CNMH..... 72

Cuadro 9. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo 1977-1985. Informe CNMH. 72

Cuadro 10. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 1977-1985. Informe CNMH..... 74

Cuadro 11. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por regiones administrativas. Periodo 1977-1985. Informe CNMH..... 75

Cuadro 12. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por regiones administrativas. Periodo 1986-1995. Informe CNMH..... 77

Cuadro 13. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por ciudades. Periodo 1986-1995. Informe CNMH. 79

Cuadro 14. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según presuntos victimarios. Periodo 1986-1995. Informe CNMH..... 82

Cuadro 15. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 1986-1995. Informe CNMH..... 87

Cuadro 16. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo 1986-1995. Informe CNMH..... 88

Cuadro 17. Número de periodistas víctimas de asesinato en Colombia. Periodo 1996-2005. Informe CNMH. 91

Cuadro 18. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 1996-2005. Informe CNMH..... 93

Cuadro 19. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo 1996-2005. Informe CNMH..... 98

Cuadro 20. Número de periodistas víctimas de asesinatos en Colombia. Periodo 2006-2015. Informe CNMH..... 103

Cuadro 21. Tamaño de los medios de comunicación en los que laboraban periodistas víctimas de asesinatos en Colombia. Periodo 2006-2015. Informe CNMH 104

Cuadro 22. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 2006-2015. Informe CNMH..... 105

Cuadro 23. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de victimarios. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015) 134

Cuadro 24. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por regiones. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015) 136

Cuadro 25. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)(inserto) 138

Cuadro 26. Lista de medios de prensa pequeños y locales donde trabajaban periodistas víctimas de asesinato en Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015) 140

Cuadro 27. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medios de comunicación. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015) 142

Cuadro 28. Emisoras de radio según las ciudades de residencia de periodistas víctimas de asesinato en Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015) 145

Cuadro 29. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en la zona Caribe, Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015) 168

Cuadro 30. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en la zona Centro, Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015) 180

Cuadro 31. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en la zona Suroccidente, Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015) 180

Cuadro 32. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en la zona Amazonía, Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015) 181

Cuadro 33. Número de asesinatos cometidos contra periodistas directivos de medios en Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015). 196

Cuadro 34. Número de casos por cada tipo de agresión a periodistas en Colombia. Periodo 2006-2014. Informe CNMH. 233

Cuadro 35. Número de casos y víctimas por porcentaje en cada tipo de agresión a periodistas en Colombia. Periodo 2006-2014. Informe CNMH..... 234

Cuadro 36. Número de víctimas según tipo de violaciones a la libertad de prensa en Colombia. Periodo 2006-2014. Informe CNMH. 239

Cuadro 37. Criterios de daño colectivo al periodismo en Colombia, según población afectada..... 295

Cuadro 38. Criterios para reparación colectiva. Hecho de violencia: “Caso desplazamiento forzado de periodistas en 2003, Arauca, Colombia”..... 296

Cuadro 39. Criterios para reparación colectiva. Hecho de violencia: “Asesinato del periodista Efraín Varela en el año 2002, Arauca, Colombia”..... 297

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Referencia geográfica de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia: Periodo 2000-2015. Informe CNMH..... 48

Mapa 2. Referencia geográfica de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015). 131

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Línea de número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por años. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015). 130

Gráfico 2. Líneas del número de agresiones a la libertad de prensa en Colombia, por años. Periodo 2006-2014. Informe CNMH 236

Gráfico 3. Líneas del número de víctimas por cada tipo de violación a la libertad de prensa en Colombia, por años. Periodo 2006-2014. Informe CNMH 240

Hay que aceptar que el mundo está “descuadernado” y que, como el viejo libro cuyas hojas se han venido cayendo, es necesario reencuadernarlo, a la sociedad humana hay que rejuvenecerla con una savia limpia de odios. Porque, ciertamente, nada hemos de conseguir si no nos enfrentamos valerosamente a la pregunta: ¿cómo y por qué pudo pasar y está pasando todo esto?

Guillermo Cano Isaza

*Ese es el gran mal que tiene este país: la imposibilidad de utilizar la única arma decente de confrontación que existe que es la **palabra**.*

Orlando Sierra Hernández

*Tratar de silenciar o callar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es, al miedo, infundirle el **silencio**.*

Orlando Sierra Hernández

...debemos escuchar las palabras que jamás fueron dichas, que permanecieron en el fondo de nuestros corazones (palpen los vuestros, allí están); es preciso hacer hablar los silencios de la historia, esos terribles puntos culminantes, donde ella ya no dice nada y que son, justamente, sus acentos más trágicos.

J. Michelet

AGRADECIMIENTOS

El Centro Nacional de Memoria Histórica expresa su especial gratitud a las víctimas, a sus familiares, amigos, compañeros de oficio y a las organizaciones cercanas a ellas, quienes participaron en la investigación y contribuyeron con sus memorias a reconstruir los dolorosos eventos vividos en las diferentes regiones, así como a su interés en compartirlos para que no se repitan y permitan establecer garantías para la no repetición.

A la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) sin cuyo trabajo de estos años no se habría podido realizar esta investigación. Con tenacidad y rigor ha construido una información imprescindible para todo aquel que desee conocer y explicar lo que ha sucedido con los periodistas colombianos en estas décadas aciagas.

A instituciones como la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo Iberoamericano, ANDIARIOS, FECOLPER, Asomédios, FESCOL, así como a los medios de comunicación colombianos, sobrecogidos por la violencia que asoló a directores, periodistas, colaboradores administrativos y hasta humildes vocea-dores de periódicos.

Al equipo de jóvenes que con entusiasmo participó en el estudio, visitó las regiones y se comprometió a fondo con su realización.

El CNMH es el único responsable del contenido de este informe y hace público su reconocimiento del estricto cumplimiento que se le ha dado a la autonomía académica y operativa, conferida para el desarrollo de su mandato.

INTRODUCCIÓN

Entre diciembre de 1977 y agosto de 2015 se cometieron en Colombia 152 asesinatos de periodistas por razón de su oficio. En ese mismo periodo, Colombia ocupó en varias ocasiones el primer puesto en el listado mundial de delitos contra la libertad de expresión y más concretamente de periodistas asesinados. Durante lustros, el país no pudo salir de este ranking oprobioso y se convirtió en una de las sociedades más violentas para ejercer el periodismo en el planeta.

Numerosos periodistas, particularmente de las regiones, han sido objeto de amenazas, secuestro y expulsión hacia el exilio. Pero 152 murieron en sus casas hasta donde penetraron con sevicia sus asesinos; en la calle o en carreteras o en las propias instalaciones de sus medios de comunicación, a donde llegaron narcos, paramilitares, guerrilleros, integrantes de bandas delincuenciales e inclusive agentes del Estado para cumplir su objetivo. Detrás de las autorías materiales —no siempre conocidas— aún se oculta una buena parte de las autoras o autores intelectuales reales.

Un gran conjunto de periodistas trabajaba en pequeñas emisoras y periódicos de provincia y su tiempo y su pasión los dedicaban a rastrear hechos de corrupción o sucesos que formaban parte del conflicto armado interno que se vivía intensamente en sus poblaciones de origen.

Pero además de los crímenes cometidos y de la variedad de las amenazas promovidas por actores violentos, la historia de este de-

sastre no parece tener fin. Un manto, denso y terrible, de impunidad ha cubierto la gran mayoría de los delitos cometidos contra medios de comunicación y periodistas en Colombia. Buena parte de las investigaciones se han diluido, han tomado intencionalmente caminos desviados o ni siquiera han existido. Hay apenas cuatro casos, en los que se ha podido sentenciar a toda la cadena criminal, desde su determinador hasta quienes llevaron a cabo de manera material los crímenes. Uno de ellos el del periodista Orlando Sierra Hernández, Subdirector de *La Patria* de Manizales. En el mes de junio de 2015, en segunda instancia, la sala penal del Tribunal Superior de Manizales sentenció al político caldense Francisco Ferney Tapasco a 36 años, tres meses y un día de prisión como autor intelectual de su asesinato y a los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar a 28 años, 10 meses y un día de prisión como coautores del homicidio agravado.

Para los demás las pistas se han borrado, ya sea porque quienes participaron en el delito fueron también asesinados, porque las pruebas nunca fueron recogidas, porque el proceso judicial quedó trunco o lleno de explicaciones equívocas o porque el seguimiento de lo acontecido se fue perdiendo en un mundo de olvido. En el periodo estudiado, han prescrito cerca del cincuenta por ciento de los casos de los asesinatos cometidos contra periodistas, y solo se salvan algunos que han accedido a la condición de delitos de lesa humanidad, una realidad que no necesariamente significa que algún día serán dilucidados y sentenciados. Precisamente, en el mismo mes de junio de 2015, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá determinó, en segunda instancia, que el crimen de Jaime Garzón Forero no es de lesa humanidad, un pronunciamiento que ha generado profundas y extendidas críticas. Lo mismo ocurre con la negativa similar de las autoridades colombianas frente al crimen del político y periodista Álvaro Gómez Hurtado.

Pero aquí no se queda el relato de esta historia desdichada. La impunidad ha enviado a la sociedad y sobre todo a los sujetos violentos un mensaje nefasto: asesinar periodistas no trae mayores implicaciones a sus perpetradores. De esta manera, el resultado es

doblemente potente para los estrategas violentos: al asesinato de periodistas se suma romper el tejido comunicativo de comunidades que muchas veces quedan en el desamparo informativo o, lo que es peor, en las interpretaciones únicas.

Avances como los logrados en el caso del homicidio de Orlando Sierra o en el juicio de los acusados de tortura de la periodista Claudia Julieta Duque, son signos de esperanza. En relación a este último, y aunque quedan muchos cabos sueltos, se inició el juicio contra José Miguel Narváez Martínez, exdirector del DAS, como presunto responsable de acciones de tortura contra la periodista, en las que están implicados otros funcionarios de la entidad como su exdirector de inteligencia Gian Carlos Duque de Silvestri y el prófugo de la justicia Enrique Alberto Ariza, entre otros.

Y a pesar de que han disminuido las estadísticas de asesinatos de periodistas desde 2004, aún persisten condiciones que dificultan el ejercicio periodístico de manera grave. Más de un centenar de comunicadores y comunicadoras cuentan actualmente con medidas de protección previstas por el Estado colombiano, lo que significa que realizan su tarea informativa rodeados de escoltas, movilizados en vehículos blindados o inclusive provistos de chalecos antibalas. La libertad de expresión está en grave peligro en una sociedad en la que un centenar de sus periodistas viven bajo estas medidas excepcionales. En los primeros meses del 2015, año en que se publica este Informe, fue asesinado en el andén de su casa en El Doncello, norte del Caquetá, Luis Peralta Cuéllar, quien trabajaba en la emisora Linda Stereo de Caracol.

Uno tras otro, los crímenes de periodistas fueron conformando un panorama tenebroso de agresión que trascendía hacia las comunidades de proximidad, atenazadas por el miedo, la desprotección y las presiones crecientes de los violentos.

Desde hace años el CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica) tuvo claro que era necesario documentar y analizar la situación vivida por las y los periodistas. Finalmente conformó un pequeño grupo de investigación que exploró la memoria a partir de una búsqueda documental, una organización de la información existente y una recopilación directa de material realizada en

buena parte de las regiones del país. A lo largo del país se realizaron más de un centenar de entrevistas con víctimas, familiares, compañeros y compañeras de las personas asesinadas. Estas entrevistas ya reposan en el archivo público del CNMH.

Afortunadamente algunas instituciones nacionales e internacionales como la Fundación para la Libertad de Prensa, la Federación Colombiana de Periodistas, la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo, el Proyecto Antonio Nariño, Medios para la Paz, la Sociedad Interamericana de Prensa, Andianos, universidades e instituciones periodísticas internacionales, entre otras, han hecho esfuerzos invaluable por documentar los problemas vividos por el periodismo colombiano en estas últimas décadas. Su trabajo paciente, oportuno y sistemático ha proporcionado fuentes muy respetables, ha conservado la memoria de las historias de muchos periodistas colombianos, y no ha permitido que prevalezca el olvido definitivo deseado por quienes han actuado con violencia.

Este trabajo, más que ofrecer datos nuevos, recoge los que ya existen y hace un esfuerzo analítico por tratar de explicar lo que pasó, cuáles han sido las implicaciones de la violencia en la historia del país y del periodismo, hacia dónde se orientaban las estrategias homicidas, qué tipo de daño colectivo se ha producido y cuáles son algunas de las lecciones hacia el futuro que deja esta parte oscura de la historia de nuestro país.

A través de esta exploración queda patente que la violencia se ensañó con personas, familias y medios de comunicación con indudable crueldad. Y que cada acción violenta impactó en la comunidad de cercanía, que se vio afectada en uno de sus derechos más vitales: el derecho a la información. Esta afectación finalmente buscaba lastimar a la democracia y a toda la sociedad.

En el primer capítulo del Informe narramos los hechos e intentamos construir una especie de memorial de periodistas asesinados. Teniendo en cuenta la diversidad de los casos, buscamos los trazos comunes que permitan dibujar las características fundamentales de este acontecimiento colectivo.

En el segundo capítulo intentamos una periodización que facilite apreciar la evolución de la violencia contra periodistas, que

coincide casi exactamente con los hallazgos que ha ofrecido a la opinión pública el Informe “Basta Ya”, publicado por el CNMH (2013).

En el tercer capítulo intentamos establecer, para el periodo analizado (diciembre 1977 - agosto 2015), algunas conexiones claves y decisivas entre el desarrollo del periodismo y los medios, y los acontecimientos violentos vividos por las personas que ejercen el periodismo.

En el cuarto capítulo exploramos las diferencias regionales y la particularidad de los golpes contra periodistas en algunas regiones. Acuñamos los conceptos de “región comunicativa” y “tejido comunicativo”, para tratar de observar a las regiones más allá de sus límites geográficos y administrativos y concebirlas como entramados de significados y de mediaciones comunicacionales e informativas.

En el quinto capítulo estudiamos cada uno de los victimarios, tratando de comprobar la existencia de estrategias intencionadas en sus acciones y en sus alianzas contra periodistas y medios y a la vez detectando las diferencias entre el modo de actuar de narco-trafficantes, guerrilleros, paramilitares, políticos corruptos, agentes del Estado y bandas delincuenciales.

En el sexto capítulo analizamos las diversas formas de violencia que se agregan a los homicidios y que han generado una atmósfera de presión, miedo e incertidumbre para el ejercicio del periodismo en diferentes regiones del país: amenazas, secuestros, obstrucción al oficio periodístico, exilio, entre otros comportamientos delincuenciales.

En el séptimo capítulo estudiamos la naturaleza del daño colectivo que la violencia contra periodistas ocasionó en las comunidades, particularmente en las de proximidad.

En el octavo capítulo afrontamos uno de los grandes núcleos de esta violencia que continúa actuando sobre las personas, las familias y las comunidades: la impunidad.

En el noveno capítulo presentamos el movimiento de apoyo y solidaridad que se desató en Colombia para tratar de respaldar al periodismo violentado y amenazado. Esta fuerza colectiva es una

de las grandes lecciones y manifestaciones de esperanza que deja el análisis de estos tiempos difíciles.

Finalmente el Informe se cierra con un conjunto de recomendaciones que extraemos como conclusiones del estudio realizado. Las enseñanzas que deja lo sucedido en estos años como balance de la barbarie, pero también de la dignidad y la valentía, no pueden hacerse a un lado; deben quedar como memoria de una sociedad. De esta manera la memoria se vuelve una dimensión activa y prospectiva de la vida social.

La palabra —oral, escrita, radiofónica, televisiva o digital— es una de las dimensiones fundamentales de la identidad de las personas y las sociedades. Somos lenguaje y expresión, relato y narrativas. Una sociedad es democrática porque sus ciudadanos y ciudadanas pueden expresarse, conversar, intercambiar, diferir.

Los medios de comunicación, como otras manifestaciones de la cultura (el arte, la música, la danza, las fiestas y lo patrimonial), son decisivos porque permiten que las personas y las sociedades se expresen, tramiten pacíficamente sus diferencias y conformen una opinión pública abierta y pluralista.

“Solo la violencia es muda”, escribió Hannah Arendt, y el antropólogo norteamericano Michael Taussig, en un recordado estudio sobre Colombia, habló con acierto sobre el “silenciamiento” que la violencia y los violentos imponen sobre la memoria.

Oficiantes de la palabra, quienes ejercen el periodismo, desde la persona más humilde hasta la más reconocida, son fundamentales en las sociedades que desean ser modernas, democráticas y dignas. En homenaje a la memoria de periodistas víctimas de asesinatos, amenazas, secuestros, expulsiones, exilios y amedrentamientos, este Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica se llama, precisamente, “La palabra y el silencio”.

1

LA IMPOSICIÓN DEL SILENCIO. LOS ASESINATOS DE PERIODISTAS DE COLOMBIA 1977-2015

El 11 de diciembre de 1977, en el puente Calderón de Cúcuta, dos policías asesinaron a Carlos Ramírez París, director de Radio Guaymaral. Con golpes de culata de revólver hicieron que sus vértebras le perforaran los pulmones y muriera a causa de una hemorragia interna. Se le conocía por su liderazgo comunitario, la construcción de un barrio popular y un sobrenombre sonoro: *Trompoloco*. Su caso se convirtió en un referente de lo que en los siguientes diez años se transformaría en una de las realidades más violentas contra el periodismo en el mundo. En efecto, fue el primer caso de asesinato de un periodista colombiano del que se tiene registro en la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) y fue también el primero marcado por lo que sería una tenebrosa constante a través de los años: quedó impune. A sus victimarios se les declaró inocentes en un juicio verbal de guerra.

Pero el caso de Carlos Ramírez París tiene otras características premonitorias, que lo hacen tan singular como el de cada una de las 152 personas asesinadas por razón de su oficio de periodistas, entre 1977 y 2014, según las estadísticas de la FLIP, cotejadas con otras fuentes de prensa como *El Tiempo* y *El Espectador*, además del libro “La censura del fuego” (2004) y otras publicaciones.

Vivía en una ciudad de provincia, era el director de una radio local que tenía acogida entre la gente, compartía el oficio periodístico con el servicio a la comunidad, promovía iniciativas sociales y le seguía la pista a anomalías de las autoridades que contaba a través de las ondas de su emisora local. El asesinato ocurrió a unas pocas cuadras de una comisaría de policía, lo que comprueba el vaivén entre visibilidad e invisibilidad, cinismo y oscuridad, en el que desde entonces ha transcurrido buena parte de los asesinatos de periodistas en Colombia.

Se han asesinado periodistas en autobuses, junto a las redacciones de sus periódicos, abriendo la puerta del garaje de su casa, en taxis y en sitios públicos, en carreteras o inclusive dentro de la cabina de su propia emisora de radio, mientras transmitían en vivo y en directo. Pero también han sido intimidados con sufragios, coronas mortuorias, llamadas telefónicas insultantes, amenazas explícitas o veladas, golpes, listas públicas amenazantes, secuestros, torturas, “chuzadas telefónicas”, expulsiones, pintadas denigrantes y secuestros.

Y todas estas formas de violencia han tenido repercusiones directas no solo en el campo del periodismo sino en la vida democrática de la nación. Porque a la gravísima pérdida de vidas de periodistas que ha habido durante el conflicto interno, se suman exilios, amedrentamiento, silencios, interferencias en el oficio, estigmatizaciones y autocensura, todos comportamientos que le han hecho un daño inmenso a la producción y circulación de la información en el ámbito público y al desarrollo de la convivencia y la vida social.

Lo que se advierte en este recuento escueto y limitado de los hechos es que asesinar periodistas se convirtió en una estrategia de guerra, claramente definida, con la participación diferenciada de los múltiples actores del conflicto interno colombiano y con objetivos que recaían sobre la víctima, sus familiares, el medio de comunicación en el que trabajaban y en general la comunidad en la que vivían y en la que tenían influencia y reconocimiento. El asesinato buscaba acallar, amedrentar, aleccionar, desaparecer, presionar, silenciar. Todos estos verbos y otros más que se intenta-

rán explicar a través del Informe, componen un terrible catálogo de la acción violenta, pero sobre todo nombran los propósitos que se trazaron los victimarios de periodistas, buscando cumplir con sus metas inmediatas y sobre todo con sus previsiones de un futuro en que la sociedad general, regional o local estuviera desprovista de puntos de vista que contradijeran sus objetivos guerreros.

Dos años después, en febrero de 1979, Silvio Emilio Quiñónez fue asesinado en La Dorada (Caldas). Era el dueño del diario panfletario *El Chanchullo*, dedicado a denunciar los hechos de corrupción administrativa. Había sacado a la luz los malos manejos de entidades públicas, sin auditoría ni control.

El 30 de junio de 1979, Carlos Ernesto Castillo Monterrosa fue acribillado en Barranquilla por dos sicarios. En la Radio Revista Deportiva Olímpica se refirió a una guerra familiar entre incipientes productores y traficantes de marihuana en el norte del país, los Valdeblánquez y los Cárdenas. Sería el comienzo de una larga y trágica persecución de negociantes de drogas contra el periodismo colombiano.

El 11 de septiembre de 1980, guerrilleros del comando Pedro León Arboleda del EPL (Ejército Popular de Liberación), asesinaron al periodista Luis Palacio Iragorri, director del *Diario de Occidente* en Cali. De esta manera se fue diversificando el espectro de los victimarios, como también las características y naturaleza periodística de las víctimas.

Hacia la segunda mitad de 1983, un año en el que fueron asesinados en Colombia cuatro periodistas, dos sicarios abordaron y acribillaron al director de *El Caleño* y periodista de RCN Radio del Valle del Cauca, Alirio Mora Beltrán. Las investigaciones preliminares permitieron determinar que las armas de los asesinos eran de dotación oficial y una investigación de la Procuraduría señaló como autores materiales a dos agentes de la policía que actuaron bajo las órdenes del Capitán de la policía Víctor Manuel Beltrán Bustos. Alirio Mora Beltrán se dedicaba a realizar campañas de beneficio como en la que estaba empeñado precisamente en los días en que fue asesinado: “Niño sin rostro”. No era la primera vez que lo hacía. Meses antes había conseguido el alcantarillado para

un barrio subnormal del oriente de Cali. Como escribe Andrés Morales:

A Alirio Mora, director de *El Caleño*, asesinado el 19 de septiembre de 1983, no lo mataron por algo publicado sino por algo que iba a publicar. En Cali todo el mundo sabe, menos la justicia, que lo mataron porque tenía datos y cifras sobre la corrupción de la policía en el Valle y sus oscuros nexos con el narcotráfico. Mora había recibido una documentación y pensaba publicarla pero nadie sabe con exactitud quién se la dio y qué alcances tenía. Hay dos hipótesis y ambas comprometen a la fuerza pública: uno, que los documentos comprobaban la participación de algunos policías en negocios de contrabando, y otra (la de mayor peso), que contenían los nombres de altos mandos involucrados en el comercio de insumos químicos incautados en Chocó (Morales, 2012, página 151).

Lo que sucedió tempranamente en 1983 llegaría a cuotas inconcebibles apenas unos años después. Solo casi dos décadas después el número de periodistas víctimas de asesinato empezaría a disminuir, aunque las amenazas no seguirían la misma progresión.

A la muerte de Mora, cinco años después de la de Carlos Ramírez en Cúcuta, el número de víctimas mortales por razón de su oficio de periodistas en Colombia llegó a la cifra de 14. Y aunque la historia no se determina necesariamente por los rasgos de sus orígenes, este primer lustro ya prefigura algunas de las marcas más persistentes de la violencia contra periodistas y medios de comunicación en el país.

Además de los trazos mencionados hay otros que acompañarán el largo rosario de atentados, exilios, censuras y asesinatos. Para entonces ya prácticamente todos los victimarios habían aparecido en el escenario naciente de la violencia: Narcotraficantes, que comienzan sus vendettas de la “mala hierba”; representantes del Estado (inicialmente policías pero también integrantes de las fuerzas militares); guerrillas y políticos corruptos. Todos ellos acompaña-

rán durante años el listado de muertes que se agrandará en ciertos momentos, como se estudia en el segundo capítulo del presente Informe y que estará determinado por varios factores: el escalamiento de la violencia en diversas regiones del país, la aparición y fortalecimiento de bandas de criminales que ocuparon estratégicamente determinados territorios mientras se expandieron por ellos, el proceso de consolidación de poderes locales y regionales interesados en la tierra, la debilidad del Estado, la fragilidad del sistema de justicia, el acceso a los dineros públicos, el comercio y los negocios ilícitos, los recursos naturales y la economía local y la confrontación entre bandas y ejércitos para hacer alianzas o para eliminarse entre sí. Y entre esta confrontación bélica que alcanza cuotas inconcebibles de barbarie e inhumanidad, está la sociedad y su diversidad de sectores sociales violentados: población campesina, autoridades, sector obrero, militantes políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, personas al servicio del Estado, sacerdotes, pastores, jueces y juezas, mujeres, entre otros. Y periodistas.

Los 14 primeros asesinatos de periodistas en este periodo se extendieron inicialmente como una mancha de aceite por todo el mapa nacional: de Cali a Barranquilla, de Buenaventura y Pereira a Maicao, lo que confirmó desde el inicio que la violencia contra periodistas no fue un fenómeno totalmente concentrado geográficamente. Sin duda la propia dinámica del conflicto —y sobre todo la articulación de la información con la estrategia guerrera de los actores armados— impuso la intensidad de esta violencia. Como lo señala María Teresa Ronderos, quien ha publicado un libro esclarecedor sobre el paramilitarismo en Colombia (Ronderos, 2014), una de las primeras acciones estratégicas de los grupos paramilitares al llegar a un territorio era señalar quiénes eran las comunicadoras, los comunicadores y periodistas más importantes y hacerlos objeto de amenazas o asesinatos (Ronderos, M.T., 2015, entrevista trabajo de campo de CNMH).

Con el tiempo la oleada de violencia se focalizará en algunas regiones del país azotadas por narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. La prensa y la radio fueron los medios que pusieron la mayor cuota de muertes, lo que quizá se explica por la

importancia que ya tenían —secular la prensa escrita, y de casi medio siglo las emisoras de radio—. Es posible que este énfasis se deba a la cercanía de los periódicos y la cotidianidad de la radio. En efecto, de los catorce periodistas asesinados tan solo tres trabajaban para medios grandes, mientras la mayoría lo hacía en pequeñas emisoras locales y en periódicos o publicaciones escritas que inclusive habían fundado en sus ciudades de arraigo. La proximidad de la información con las comunidades parece ser una variable de la violencia contra periodistas. Más que una proximidad física ha sido una cercanía a los problemas de la comunidad, una memoria persistente de lo que sucede y una puesta de relieve de lo que algunos desean que permanezca en la oscuridad. Pueden ser los malos manejos de una entidad pública en una ciudad de provincia, el robo en una empresa de salud o el peculado promovido por funcionarios en las instalaciones de un puerto.

Sin embargo, lo que ya se observa a fines de los setenta es la aparición lenta, larvada, de los grupos ilegales, en medio de un contexto en que el conflicto armado avanzaba y el narcotráfico se consolidaba como una poderosa fuerza del crimen. También se fortalece un enfoque estatal de la seguridad y un énfasis en los enemigos, señalados como comunistas, y entre los cuales empiezan a aparecer periodistas y medios de comunicación.

Los asesinatos atribuidos a desconocidos o sicarios empezaron a resonar, lo que demuestra que desde sus inicios esta violencia se proponía borrar todas las huellas, en particular las que conducían a los autores intelectuales o determinadores de los crímenes. Por el asesinato de Amparo Leonor Jiménez, sucedido el 11 de agosto de 1998 cuando llegaba a su casa en Valledupar, fue condenado Libardo Prada Bayona, quien confesó que había recibido diez millones de pesos por matarla, pero no identificó a los autores intelectuales o determinadores. En el caso de Guzmán Quintero Torres, los dos inculpados como autores materiales afirman no haber participado en el crimen, cuya autoría intelectual se orienta hacia integrantes de las fuerzas militares en alianza con paramilitares.

Muy tempranamente los procesos de investigación se fueron diluyendo: autores materiales que nunca fueron investigados, investigaciones que se desviaron por senderos retorcidos que no conducían a ninguna parte, perpetradores que fueron asesinados uno tras otro, han sido solo algunos ejemplos de lo que sucedió no con uno, sino prácticamente con la mayoría de periodistas víctimas. En una conferencia pronunciada por el Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio en el 2003 y titulada “En qué van las investigaciones por amenazas a periodistas”, dice textualmente que el objetivo de crear nuevas unidades dentro de su institución era “garantizar resultados eficaces en las investigaciones” (Ruiz y Bertoni, 2003, página 13). Pero desde muchos años atrás y hasta el presente, a pesar de esa intención institucional de entonces, los procesos de investigación carecen de estas garantías.

Miles de expedientes se arruman unos sobre otros cuando se ha hecho alguna diligencia investigativa, ya sea para testimoniar que han prescrito o que están a punto de prescribir.

Entonces la fiscalía aquí no me dio ninguna razón —dice una de las familiares de una de las víctimas— que aquí no aparecía el expediente (...) por último nos dimos cuenta que en Bogotá estaba el proceso como de tres hojitas y que nunca investigaron nada. Ha sido una situación muy dolorosa. (CNMH, 2013, entrevista trabajo de campo en Caquetá).

Pero muchos de los crímenes se han difuminado en medio del más absoluto desinterés sin que se hubiera dado ni siquiera un paso en la tarea de esclarecimiento de lo sucedido. El origen desconocido de los atropellos extiende un manto de oscuridad para promover la impunidad, como otro signo del poder de los victimarios, quienes eluden la más mínima responsabilidad ocultándose con seguridad en el anonimato y el olvido.

Ya se percibe un clima de intolerancia contra periodistas y el periodismo cuando se revisa documentalmente el periodo comprendido entre 1975 y 1985. No es una intolerancia desconocida para

quienes la sufrieron o para quienes la han estudiado e investigado. Pero en ella ya se manifiestan características que tienen que ver con la configuración de la opinión pública y el papel social de los medios de comunicación y el periodismo. Como expresión de este clima, en el periodo referido aparecen tensiones con un relativo protagonismo: las acusaciones de aparición de una “mano negra”, los conflictos ideológicos entre derecha e izquierda y la crítica a las posiciones políticas del periodismo escrito, sobre todo al de Bogotá y las capitales de departamento, cada uno de ellos afiliado con una opción partidista o ideológica. Una de las primeras oleadas de exilios de periodistas ocurrió en este periodo y puede atribuírsele a las presiones de las guerrillas, al fortalecimiento de los grupos narcotraficantes y al enfoque anticomunista de autoridades, fuerzas militares y organismos de seguridad. Las doctrinas de la guerra fría aun campeaban en la formación militar. Inclusive una de sus brigadas, la famosa Brigada 13, tenía una fama ganada de constricción y amenazas contra periodistas. En este periodo salieron del país desde Gabriel García Márquez hasta Daniel Samper Pizano, María Jimena Duzán, Olga Behar y Antonio Caballero, entre otros.

El evento más importante de esta época fue sin duda la aparición de la revista *Alternativa*.

Alternativa no era solamente un nombre. Fue, en efecto, una posibilidad periodística que surgió en un momento en que la información estaba concentrada férreamente en el sistema de medios y específicamente en lo que se llamaba “la gran prensa”. En Colombia, en diferentes ciudades y momentos, han existido ejemplos de prensa alternativa y crítica, que se han concretado en libelos, publicaciones de humor político, programas de radio críticos y periódicos y semanarios con posiciones políticas diferentes a las tradicionales (González, 2013). Pese a la contundencia y relevancia de algunos de ellos, su influencia ha sido relativa y casi nunca nacional.

Yo creo que *Alternativa* fue una revista que trató de darle voz a todos los grupos de la izquierda colombiana —afirma Antonio Caballero, uno de sus impulsores— sin diferenciar entre unos y otros, sin tomar partido, aunque se tomara partido al hacer eso,

pero era una revista abierta. *Alternativa* tuvo una circulación mucho mayor que cualquier otro periódico de la izquierda en toda su historia (Alvarado, H., 1994/01/15, comunicación personal).

Como lo señala Andrés Rodríguez Cortés, los objetivos de la revista se podrían resumir de la siguiente manera:

Divulgar las luchas populares,

Contrainformación y lucha ideológica contra “los medios de información del sistema”,

Circular en un lenguaje sencillo investigaciones sobre la realidad nacional,

Proporcionar la unidad de izquierda. (Rodríguez, 2012)

La revista, fundada por Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, Bernardo García, Jorge Villegas y Orlando Fals Borda, fue objeto de un atentado con una bomba de alto poder que explotó en la madrugada del martes 11 de noviembre de 1975. En un artículo publicado por la revista, titulado “El atentado contra *Alternativa*: Blanco es y gallina lo pone...” se culpa a los movimientos reaccionarios “que viven a sus anchas dentro del sistema y en especial dentro de los altos mandos de las fuerzas armadas, cuyo Comandante Supremo, de acuerdo con la constitución, es el presidente de la república” (*Alternativa*, 1975).

La guerra puso en la mira a las personas que ejercían el periodismo por varios motivos que ya se insinúan en los años setenta e incluso mucho antes. El periodismo, y muy especialmente el periodismo escrito, se había conformado como un poder por sus relaciones con la política y su predominio en la configuración de una opinión pública centrada en el papel y la voz de los dirigentes, unas específicas comprensiones del país, la limitación de las voces y los sistemas de interpretación de los problemas nacionales y la determinación de la agenda informativa que se mimetizaba con la agenda de las hegemonías políticas y económicas del país y particularmente con sus propios y más directos intereses. Desde La Colonia el periodismo colombiano estuvo asociado o en con-

tradición con el poder dominante. El periodismo era concebido popularmente como uno de los poderes y en la práctica era difícil, y aún lo es hoy, para el común de la población colombiana diferenciar entre periodismo y poder. Es más, el periodismo ha contribuido a avivar una parte de las violencias que ha tenido Colombia en diferentes momentos de su historia tardía y moderna. Sea porque las exacerbó resaltando odios, ideologizando las tensiones de la convivencia social o achacando causas y causantes donde no existían, promoviendo la estigmatización o inclusive los señalamientos con nombre propio. O porque distorsionaba, callaba o hacía invisibles ciertos actores y acontecimientos.

El humor de Jaime Garzón desquiciaba a unos *agelastas*¹ parapetados en el DAS que aupaban a los jefes paramilitares para que lo asesinaran, como en efecto lo hicieron una mañana del 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía a las instalaciones de Radionet. Las columnas clarividentes de don Guillermo Cano Isaza en *El Espectador*, donde advertía con argumentos sólidos sobre los peligros del narcotráfico y sus carteles para la sociedad, hicieron que los criminales lo asesinaran, dinamitaran las instalaciones del periódico del que era su director y persiguieran y mataran sistemáticamente a miembros del diario, desde sus cargos administrativos y comerciales hasta importantes figuras de su nómina periodística. Menos conocidos son los casos de otros periodistas, sobre todo de regiones, como el de Lides Renato Batalla, asesinado por desconocidos frente a su casa en Buenaventura, el 7 de septiembre de 1984, quien realizaba investigaciones sobre corrupción administrativa y tráfico de drogas en un puerto desde entonces martirizado por la delincuencia múltiple. O el de Luis Roberto Camacho Prada, corresponsal de *El Espectador* en Leticia y propietario del periódico *Ecos del Amazonas*, en el que denunció a capos de mafia que empezaban a tomarse el puerto sobre el río y divulgó los pagos de sobornos a las autoridades de la región fronteriza.

¹ Milan Kundera hace una alusión a la palabra *agelasta* (aquellos que no tienen humor) en su *Discurso de Jerusalén* en 1985.

La mimesis entre periodismo y política hizo que el primero caminara por bordes peligrosos que lo comprometían con causas e intereses y que la segunda se acostumbrara a las alabanzas, la distorsión o el ocultamiento.

Con el asesinato de Guillermo Cano Isaza y demás colaboradores de *El Espectador* y posteriormente con la explosión controlada que destruyó la sede principal del periódico en Bogotá, el país fue advertido claramente sobre la guerra emprendida por el narcotráfico contra el periodismo colombiano. El primer caso conocido fue el de Carlos Ernesto Castillo Monterrosa en Barranquilla, a mediados de 1979, quien había informado sobre una guerra entre familias involucradas en el negocio inicial de la marihuana en la Costa Atlántica. Unos meses después, el 14 de octubre de 1980, Libardo Gil Ceballos fue asesinado por sicarios en Maicao en la Guajira cuando investigaba el tráfico de estupefacientes en la región. Pero fue solo en 1983 cuando se comete, en Medellín, el asesinato del primer periodista que trabaja sobre el narcotráfico en una región asolada por las mafias del negocio de las drogas. Se trató de Nelson Anaya Barreto, a quien un sicario le disparó un 26 de septiembre en las calles de la ciudad antioqueña. Sus más recientes columnas, en *El Colombiano* y *El Espectador*, las había dedicado precisamente al tráfico de drogas y sus repercusiones en la economía y la política de la región. Sus reflexiones avanzaron, sin embargo un poco más y de manera terriblemente peligrosa: señaló a algunos funcionarios públicos de tener vínculos con bandas de narcotraficantes.

El terreno en que incursionó Nelson Anaya Barreto no solo puso el dedo en la llaga de un presente sobre el cual pocos hablaban públicamente en ese entonces, sino sobre todo en un futuro que comprobó hasta la saciedad que en efecto existían conexiones macabras entre las redes del crimen organizado y los intereses de algunas autoridades, personas al servicio del Estado y políticos.

La revisión de la violencia contra periodistas en los primeros cinco años de la década de los ochenta ya muestra un incremento en ascenso de los asesinatos promovidos por el narcotráfico. Se suman a los ya mencionados, los asesinatos de Alirio Mora Beltrán (1983) y Christian Martínez Sarria (1984). A partir de

la segunda mitad de la década de los ochenta, se hace aún más agresiva la estrategia criminal de las bandas de narcotraficantes, en particular la del cartel de Medellín. En enero de 1986 fue asesinado Alberto Lebrún Múnera, en julio de 1986 Luis Roberto Camacho Prada, en octubre de 1986 Raúl Echevarría Barrientos, en diciembre de 1986 Guillermo Cano Isaza, en julio de 1987 Fernando Bahamón Molina, en marzo de 1989 Héctor Giraldo Gálvez, columnista y abogado de *El Espectador*, en mayo de 1989 Carlos Enrique Morales, en septiembre de 1989 Guillermo Gómez Murillo, el 13 de octubre William Bendeck Olivella, el 17 de octubre Diego Vargas Escobar, el 10 de octubre Martha Luz López, gerente de sede de *El Espectador* en Medellín, y Miguel Arturo Soler Leal, jefe de circulación de dicha sede. Todos crímenes de periodistas cometidos por narcotraficantes. Se había desatado una verdadera avalancha guerrera contra el periodismo como parte de la estrategia criminal del narcotráfico que tenía en ese momento varios objetivos: por una parte, doblegar a los medios de comunicación para que se pusieran del lado de la no extradición; pero, por otra, bloquear toda posibilidad de referencia al narcotráfico como la empresa criminal que ya era, a su impacto desastroso en el país, al señalamiento de sus cabezillas y sobre todo a la espesa red de conexiones que empezaban a construir con autoridades, políticos, bandas delincuenciales e integrantes del propio Estado. La paulatina inserción del narcotráfico en la vida del país lo que menos necesitaba era medios que informaran sobre sus actividades y la penetración que estaban logrando en sectores muy sensibles de la vida regional y nacional. Esta articulación criminal de las mafias en la estructura del Estado en diferentes niveles fue una de las causas más importantes del estímulo de la violencia contra medios y periodistas en Colombia. En la medida en que el crimen organizado infiltraba y cooptaba más a las instituciones, se acrecentaba su poder, su prepotencia y sus acciones delincuenciales contra el periodismo y contra periodistas. No se trataba solamente de un poder militar sino de un poder político que en su conjunción buscaba imponerse también como un poder de la opinión. Por

eso quien se oponía o develaba sus reales intereses pasaba de inmediato a ser considerado como un enemigo al que había que eliminar.

Sin embargo hay otros signos en estos primeros años de la violencia contra periodistas. El primero fue su temprana vinculación con la corrupción. Prácticamente desde los primeros casos, ya se presentan crímenes de periodistas relacionados con su labor de investigación de la corrupción y especialmente de la corrupción administrativa. Denunciaban hechos de corrupción acontecidos localmente y que tenían como resultado el asalto a los dineros públicos por parte de funcionarias y funcionarios venales. En general, la corrupción estaba relacionada con la política local y con la participación de personas vinculadas a la política en el desfalco de entidades muy concretas. El asalto a las arcas públicas, el enriquecimiento de funcionarios y la asociación criminal entre políticos y actores armados ha sido uno de los determinantes de la violencia contra periodistas en Colombia. José Jesús Valencia Castro, periodista de Radio Manizales y de *La Patria*, fue asesinado el 10 de mayo de 1980 en Manizales, porque defendía a los damnificados del terremoto que por esa época asoló al eje cafetero, además de las críticas que venía haciéndoles a los empresarios taurinos que realizaban corridas en Manizales. A Mario Pineda Pineda (1983), del semanario *La Razón*, lo mataron de tres tiros en la espalda cuando denunciaba con energía los peculados e irregularidades que se estaban cometiendo en la tesorería y en los servicios públicos del municipio de Sevilla en el Valle del Cauca. José Antonio Dumet (1984) fue asesinado cuando hacía sus denuncias sobre corrupción desde el Círculo de Periodistas de Sucre.

Los asesinatos por denuncias contra la corrupción menguaron, aunque no se extinguieron, cuando el horizonte de la violencia contra periodistas fue arrasado primero por la acción del narco-tráfico y después por el poder de los grupos paramilitares. Sin embargo existen algunos casos, en medio de ese predominio, en que se empezaron a fortalecer alianzas entre actores armados ilegales y personas corruptas de la política o al servicio del Estado, en una

relación delincencial perfectamente explicable. Paulatinamente las bandas de paramilitares empezaron a tener dominio territorial que se fue acentuando a medida que algunas autoridades se plegaron a sus exigencias y permitieron que las bandas criminales cooptaran el funcionamiento de los estados locales y regionales. La parapolítica empezó a ser funcional y aliada de la embestida paramilitar buscando entonces, como lo señalaron algunos investigadores, “refundar” la sociedad y el Estado (López, 2010).

Esa refundación no necesitaba de medios o periodistas objetivos o críticos, sino de voceros oficiales y divulgadores entusiastas. A quien se alejara de sus intereses se le estigmatizaba definiéndolo de inmediato como colaborador o colaboradora de la guerrilla, se le amenazaba o se le asesinaba.

Las columnas de opinión empezaron a exasperar a los asesinos intelectuales que aupaban a los autores materiales para que procedieran con violencia en contra de periodistas indefensos. El caso más reconocido es el de Guillermo Cano Isaza en *El Espectador*, pero existen otros como el de Raúl Echevarría Barrientos, anterior al de Cano Isaza, que solía escribir columnas a favor de la extradición de narcotraficantes e incluso pidió la pena de muerte para los mafiosos en su columna “Molinos de papel”, del *Diario de Occidente* de Cali.

Varios hechos significativos complementan la caracterización de la violencia contra periodistas en los primeros diez años del periodo analizado: las tensiones de la política local, el primer asesinato de un periodista en Buenaventura y la muerte temprana de una periodista por investigar el surgimiento de escuadrones de la muerte en Urabá.

Con algunas pocas excepciones no son hechos nacionales los que definen el comienzo de la violencia contra periodistas. Son sobre todo acontecimientos locales en los que las y los periodistas están muy cercanos a los problemas políticos y sociales de la región y lo local. Esta proximidad agudiza el conflicto y pone en contacto a periodistas con victimarios en un clima progresivo de indefensión y amenaza. La tarea periodística, que se manifiesta en investigaciones y denuncias, es más fuerte cuanto más cercana está al núcleo de los acontecimientos, como si el radio de acción de las noticias o de las opiniones emitidas creara *per se* una atmósfera de

peligro. Las denuncias a acuerdos clientelistas en un concejo, así como a las irregularidades de la administración municipal, llevaron al asesinato de Mario Pineda, quien había sido amenazado tan solo un mes antes de su muerte por el comandante de la policía local si lo llegaba a denunciar en “ese hijueputa pasquín”. En 1986, una de las víctimas fatales de la criminalidad creciente en Aguadas (Caldas) fue Luis Eduardo Muñoz Cifuentes, periodista de *La Patria* y *El Colombiano*, quien fue raptado en la noche, por dos hombres, en momentos en los que departía con un amigo en un establecimiento público, y posteriormente asesinado.

Mariam Ruiz Castañeda, la directora de la emisora de radio Ondas del Darién, fue asesinada a tiros en Turbo en abril de 1987. Había publicado un trabajo periodístico sobre la aparición de escuadrones de la muerte en la zona de Urabá, siendo este, probablemente, el primer asesinato de una periodista por vinculaciones de sus textos con el seguimiento del nacimiento de los grupos paramilitares.

El 25 de agosto de 1987, paramilitares al mando de Carlos Castaño asesinaron en Medellín al médico y humanista Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos y autor de columnas de opinión en el periódico *El Mundo*. Su hijo, el escritor Héctor Abad Faciolince, escribió que en el año de su muerte “la guerra sucia, la violencia, los asesinatos selectivos se estaban ensañando sistemáticamente contra la universidad pública, pues algunos agentes del Estado y sus cómplices del para-estado, consideraban que allí estaba la savia ideológica de la subversión” (Abad- Faciolince, 2006). El mismo año 1987, Nelson Gavini Alzate fue asesinado en Medellín. Amenazado de muerte, Gavini escribía en el periódico *Revolución*, de orientación comunista. En noviembre de 1988, Oswaldo Regino Pérez, periodista de *El Universal* de Montería, fue asesinado por una alianza entre paramilitares y miembros del Ejército, aparentemente por el despliegue informativo dado a las masacres de El Tomate y La Mejor Esquina llevadas a cabo por grupos paramilitares. Unos meses más tarde sucedería algo semejante con Luis Daniel Vera López, de Radio Metropolitana de Bucaramanga, que había hecho reportes sobre masacres atribuidas al grupo paramilitar de Los Masetos. En septiembre y octubre de 1989, se produjeron seis muertes

de periodistas, entre ellas la de Guillermo Gómez Murillo, quien fue baleado en Buenaventura mientras veía televisión en la casa de sus padres y la de William Bendeck Olivella, a quien dos pistoleros le dispararon varias veces en su casa en Montería. El primero hacía denuncias de corrupción administrativa en el puerto y el segundo criticaba vehementemente a los traficantes de droga y a la guerrilla.

El 26 de febrero de 1990 fue acribillada en Cimitarra (Santander) Silvia Margarita Duzán Sáenz, junto a tres líderes campesinos del proyecto de desarrollo y paz del Carare-Opón. Trabajaba en ese momento en un documental de la productora privada Citurna para el canal 4 de la televisión inglesa.

Unos meses después, murió en un operativo policial Diana Turbay Quintero, secuestrada junto con otros periodistas por Pablo Escobar. En abril de 1991, cuando investigaban la masacre de Segovia (Antioquia) fueron asesinados el periodista de *El Espectador* Julio Daniel Chaparro y el reportero gráfico Jorge Enrique Torres. Solo en ese año fueron asesinados en Colombia diez periodistas, entre ellos dos de la emisora La Voz de la Selva del Caquetá —Carlos Julio Rodríguez y José Libardo Méndez—, quienes fueron emboscados recibiendo múltiples disparos. Diez años después, el 6 de julio de 2001, José Duviol Vásquez, también de La Voz de la Selva, fue baleado por un individuo que se acercó al vehículo en que viajaba y le disparó. Había puesto en evidencia, unos días antes, la existencia de un casete en el que la alcaldesa de Florencia de ese entonces, Lucrecia Murcia Losada, le entregaba dinero a concejales. La alcaldesa acusó al periodista de terrorista de la información.

Una de las muertes más publicitadas fue la de Jorge Enrique Pulido (1989), director del noticiero de televisión Mundo Visión, en el que mantenía una postura muy firme frente al narcotráfico. Había hecho una serie de programas sobre los miembros de los carteles de Medellín y Cali, y una entrevista a la madre del inmola-do Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

El 12 de marzo de 1993, a las 7:30 de la noche fue asesinado el director del periódico *La Opinión* de Cúcuta, José Eustorgio Colmenares, cuando estaba descansando en el solar de su casa. Días después, el ELN se atribuyó el crimen.

Entre 1993 y 2000 se produjeron 45 asesinatos de periodistas, una de las cifras más espeluznantes en la historia del periodismo mundial. El de Manuel Martínez Espinosa (1993), asesinado en la puerta de su casa mientras esperaba que su esposa le abriera la puerta del garaje; el de Iván Darío Pelayo (1995), muerto por un comando del ELN en los estudios de la radio en la que trabajaba en Puerto Rondón, Arauca.

El cuerpo de Luis Alberto Rincón, director de una pequeña productora local de televisión, fue encontrado junto con el de su compañero de trabajo Alberto Sánchez Tovar, a la orilla de una carretera en El Playón, Santander, en noviembre de 1999. Fueron acribillados a bala después de haber grabado la fiesta de un paramilitar de la zona. También entre noviembre y diciembre de 2000 fueron asesinados por las FARC dos periodistas de La Voz de la Selva de Florencia (Caquetá).

Aunque en ese periodo se mantuvo la violencia de los grupos narcotraficantes que continuaban enfrentándose al Estado y desplegaban su poder en otras zonas del país, como en el norte del Valle, el periodo de los noventa fue sobre todo el de la violencia paramilitar contra los medios de comunicación y los periodistas.

Cuadro 1. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia. Periodo 2000-2015. Informe CNMH

Año	Número de víctimas
2000	8
2001	9
2002	10
2003	7
2004	3
2005	2
2006	3
2007	2
2008	0
2009	1

2010	2
2011	1
2012	1
2013	2
2014	1
2015	1
Total de víctimas Periodo 2000-2015	53

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

En el 2002 se posesionó, como presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Entre ese año y el 2007, se produjeron 27 asesinatos de periodistas colombianos por razón de su oficio. A partir del 2004, como se aprecia en el cuadro, disminuyeron las muertes aunque se acentuaron otros delitos como la autocensura, las amenazas y las dificultades para adelantar el oficio, entre otros.

Más adelante, se analizará de manera detallada lo sucedido en los diferentes hitos o momentos del desarrollo de las violencias contra medios y periodistas en el país, así como las estrategias particulares de los victimarios y las reacciones del Estado, de las y los periodistas y de la comunidad.

El 27 de abril de 2001 fue asesinado en Tumaco (Nariño), Flavio Iván Bedoya, periodista corresponsal del semanario comunista *Voz*. Su último trabajo había sido una entrevista con un comandante de la guerrilla de las FARC sobre uno de los enfrentamientos con los paramilitares en el corregimiento de Llorente (Tumaco). El crimen fue atribuido a grupos de paramilitares. El 16 de julio de 2001, fue acribillado en una calle de San Pablo, en el Magdalena Medio, Eduardo Estrada Gutiérrez, líder comunitario que se estaba preparando para ser periodista del proyecto de consolidación de la Adecosan (Asociación de comunicación de San Pablo), cuyo sueño era el de consolidar la emisora comunitaria, en el marco de la Asociación Red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, apoyadas por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Cuadro 2. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo 2000-2015. Informe CNMH

Tamaño de los medios	Periodo			Total 2000-2015
	2000-2005	2006-2010	2011-2015	
Gran medio	2	0	0	2
Varios medios (Solo grandes medios)	0	0	0	0
Mediano o pequeño medio	30	5	6	41
Varios medios (Medios pequeños)	5	2	0	7
Varios medios (gran medio/pequeño medio)	1	1	0	2
Agremiaciones	0	0	0	0
Freelance	0	0	0	0
Voceadores	1	0	0	1
Totales por periodo	39	8	6	53

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 3. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 2000-2015. Informe CNMH

Tipo de medio	Periodos			Total 2000-2015
	2000-2005	2006-2010	2011-2015	
Prensa escrita	10	1	2	13
Radio	22	6	1	29
Televisión	8	0	1	9
Prensa escrita y radio	0	1	0	1
Agremiaciones	0	0	0	0
Freelance	0	0	0	0
Voceador	1	0	0	1
Totales por periodo	41	8	4	53

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuando iba caminando con su hija frente a las instalaciones del periódico *La Patria* en Manizales, un sicario le disparó dos tiros en la cabeza a Orlando Sierra, en ese momento Subdirector del diario. Había criticado de manera contundente a personas de la política de su departamento, en especial a Omar Yepes Alzate, a Víctor Renán Barco y a Ferney Tapasco, este último político de la región quien tuvo durante cerca de veinte años el dominio de la Asamblea de Caldas y quien perdió legalmente su investidura por efecto de las columnas de opinión de Sierra. Después de una crítica a su hijo, Dixon Ferney Tapasco, aspirante a la Cámara de Representantes, fue agredido y amenazado de muerte por este. Su asesino material, Luis Fernando Soto Zapata, fue sentenciado a prisión y liberado en el 2007 por rebaja de penas. Murió al año siguiente en un enfrentamiento con la policía.

La publicación de un artículo realizado por Jaime Rengifo, periodista de Maicao, sobre los enredos y la corrupción de las autoridades locales hizo que en un muro cerca de su casa apareciera unos días después un mensaje amenazador: “Muerte a Rengifo”. El 29 de abril de 2003 fue asesinado de cinco disparos en un hotel. Trabajaba en la emisora de radio Olímpica y en el periódico *Guajiro Quincenario*.

El nuevo milenio comienza con el fin del gobierno del presidente Pastrana y el comienzo del de Álvaro Uribe Vélez. Andrés Pastrana había apoyado la inclusión de periodistas dentro de los planes de protección de defensores de derechos humanos, preocupado por el notable incremento de los asesinatos y amenazas de periodistas.

Hacia mediados de 2000 disminuyeron los porcentajes de violencia contra periodistas, en comparación con las cifras de las dos décadas precedentes, las mayores del periodo estudiado. Como se observa en los cuadros anteriores, en los primeros quince años del nuevo milenio se produjeron 53 asesinatos de periodistas, lo que significa que en este periodo se cometió una tercera parte del total de homicidios contra periodistas. Dos de ellos, Fabio Leonardo Restrepo y John Jairo Restrepo, el primero reportero y el segundo camarógrafo, fueron asesinados cuando realizaban una nota periodística en Girón (Santander) para un canal de televisión local de Barrancabermeja. Este crimen condensa dos cuestiones que están presentes en el recuento

de la violencia contra periodistas en Colombia: por una parte, la arremetida contra los medios locales y por otra, la televisión, un medio de comunicación que, a pesar de su cobertura, no ha sido el que ha recibido más impactos de esa violencia.

Cuadro 4. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según presunto victimario. Periodo 2000-2015. Informe CNMH

Victimarios	Periodos 5 años			Periodo 15 años 2000-2015
	2000-2005	2006-2010	2011-2015	
Guerrilla ELN	1	0	0	1
Guerrilla FARC	8	0	0	8
Guerrilla EPL	2	0	0	2
Guerrilla (sin identificación de grupo)	0	0	0	0
Paramilitarismo	9	2	1	12
Fuerza Pública (Policía y Ejército)	0	0	1	1
Bandas criminales	1	0	0	1
Narcotráfico	2	0	0	2
Corrupción política	8	5	3	16
Autor material (Autor identificado)	0	0	0	0
Desconocidos	8	1	1	10
Total según periodos de 5 años	39	8	6	
Total según periodos de 15 años				53

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Ocho periodistas fueron asesinados en el año 2000, nueve en el año 2001, diez en el 2002 y siete en el 2003, año a partir del cual empieza a descender la cantidad de periodistas asesinados en el país. En el 2004 fueron tres, en el 2005 dos, en el 2006 tres y en el 2007 dos, Javier Darío Arroyave en Cartago y Elacio Murillo Mosquera en Istmina. El primero había resaltado el negocio ilícito de drogas y gasolina en la zona, mientras que el segundo había escrito unos días antes del crimen un artículo sobre la presencia de paramilitares en San Juan (Chocó). En el 2008 no se registró ninguna muerte de periodistas a causa del conflicto y en los siete años siguientes se presentaron en su conjunto siete. Había descendido el número de crímenes de periodistas y Colombia empezó a salir de los listados oprobiosos a nivel mundial.

El inicio del milenio fue trágico. Ocho periodistas colombianos fueron asesinados. Entre ellos estaban Carlos José Restrepo Rocha en San Luis (Tolima) y Juan Camilo Restrepo Guerra en Ebéjico (Antioquia) de Radio Galaxia Stereo, muertos por grupos paramilitares. En los dos últimos meses de ese año fueron asesinados, como ya se ha mencionado, dos periodistas del mismo medio de comunicación, la emisora La Voz de la Selva del Caquetá: Alfredo Abad López y Guillermo León Agudelo. El primero fue atacado al salir de su residencia en Florencia y el segundo fue degollado en su propia casa. Ambos delitos se han atribuido a la guerrilla de las FARC. Ricardo Ruiz Cantillo, periodista de Radio Galeón en el Magdalena había hecho denuncias sobre las continuas muertes en Pivijay y el incremento de los asaltos atribuidos a grupos armados ilegales. Fue asesinado a plena luz del día en la plaza de mercado del pueblo, el 15 de noviembre de 2000. María Helena Salinas Gallego, una de las mujeres que se agrega a la memoria de la violencia sufrida por las periodistas y que trabajaba en varias emisoras de radio, fue asesinada en el municipio de San Carlos en Antioquia presuntamente por la guerrilla.

El 2001 comienza con el asesinato del periodista Arquímedes Arias Henao en el Tolima, de Eduardo Estrada en San Pablo, de José Duviél Vásquez en Florencia, todos por bandas de paramilitares. Édgar Tavera Gaona y Pablo Emilio Parra Castañeda, quie-

nes trabajaban en emisoras comunitarias, el primero en Güepsa (Santander) y el segundo en Planadas (Tolima), lo fueron por la guerrilla de las FARC. Los asesinos de Jorge Urbano Sánchez, un periodista de la Emisora Mar Estéreo que venía criticando la vinculación entre expendedores de droga y la policía, huyeron en una lancha rápida en Buenaventura; y los de Yesid Marulanda Romero hicieron lo mismo en una moto después de cometer el delito en un barrio del sur de Cali. A Álvaro Alonso Escobar, del semanario *El Informador* de Fundación, en el departamento del Magdalena, primero le quitaron toda la pauta —por lo que se vio obligado a sostener la publicación con su propio dinero—, y después le quitaron la vida. Dos años antes habían asesinado a uno de los periodistas del semanario.

Mapa 1. Referencia geográfica de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia: Periodo 2000-2015. Informe CNMH



Fuentes: FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) Estadísticas; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Nota 1: Existen asesinatos que la FLIP no considera que fueron por razones de oficio. Por eso, sus estadísticas se limitan a 143 casos hasta la terminación de este informe.

Nota 2: Los 152 casos que se registran incluyen casos del libro “La censura del fuego” (González y Lozano, 2004).

Edinsón Alberto Molina fue baleado a pocos pasos de su casa, minutos después de su salida de la sede de la emisora Puerto Berrio Estéreo, en donde dirigía en su calidad de periodista y abogado el programa “Consultorio Jurídico”, el 11 de septiembre de 2013. Unos días después, José Darío Arenas, del periódico *Extra del Quindío*, fue abordado en una de las calles de Caicedonia por unos sicarios que le dieron muerte. Era un humilde voceador de periódicos.

La quinta parte de los 53 asesinatos cometidos contra periodistas en el mencionado periodo 2000-2015, se cometieron en el año 2002. Efraín Varela, director de la emisora Meridiano 70 en Arauca había aparecido dos semanas antes de su asesinato en una lista de amenazados. Primero lo secuestraron y después lo ejecutaron a la entrada de un colegio de las afueras de la ciudad. Gimpler Perdomo, Víctor Omar Acosta y José Emeterio Rivas, Dennis Segundo Sánchez Lora, Marco Antonio Ayala, Elizabeth Obando y Mario Prada Díaz cayeron uno a uno en este fatídico año en que sobresalieron los crímenes promovidos por las redes de corrupción y los actores armados ilegales, en particular grupos paramilitares y las guerrillas. Prada Díaz era el dinámico director del periódico *Horizonte Sabanero*, que denunciaba las irregularidades de los gamonales en Sabana de Torres, publicación que dejó de circular después de su muerte.

Durante el cubrimiento de la persecución desatada por las autoridades contra el grupo guerrillero de las FARC que había secuestrado a un grupo importante de diputados del Valle del Cauca, fueron muertos un conductor y un camarógrafo del canal RCN, Walter López y Héctor Sandoval.

Los siete periodistas asesinados en el 2003 son el punto de inflexión de los crímenes por razón del oficio. Guillermo Bravo se encontraba trabajando frente al computador en su casa en Neiva, José Nel Muñoz fue encontrado sin vida y con señales de tortura en un paraje en el Putumayo, Luis Eduardo Alfonso Parada había tenido que desplazarse de su casa en Arauca hacia Bogotá mientras laboraba en la misma emisora en la que había reemplazado como director de noticias al también inmolado Efraín Varela, Jaime Rengifo cayó

en un hotel en la Guajira y William Soto Cheng recibió cuatro balazos posiblemente por sus denuncias de un fraude electoral en que participaban políticos coadyuvados por personas en cargos estatales.

Oscar Alberto Polanco Herrera, periodista de televisión del Valle del Cauca, Martín Larrota Duarte, periodista de radio del Cesar y Jaime Alberto Madero Muñoz fueron las tres víctimas del 2004. Las del 2005 tuvieron como denominador común el de haber sido víctimas de la corrupción política: Rafael Enrique Prins Velásquez venía haciendo denuncias sobre irregularidades cometidas por el alcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López (*El Gatico*), Julio Hernando Palacios Sánchez de Cúcuta había sido denunciado por injuria y calumnia por sus comentarios sobre políticos nortesantandereanos y Gustavo Rojas Gabalo hasta último momento puso en evidencia los conflictos de tierras en San Anterito y la situación de corrupción en Córdoba.

A Atilano Segundo Pérez Barrios lo balearon mientras veía televisión en la sala de su casa en Cartagena y a Milton Fabián Sánchez lo acribillaron dos sicarios por los mismos días en que hacía seguimiento a expendios de droga en Yumbo. Estos dos crímenes se produjeron con quince días de distancia en el mes de agosto de 2006.

En el 2007 murió Elacio Murillo Mosquera en Istmina, días después de escribir un artículo sobre la presencia de paramilitares en San Juan (Chocó) y unos meses después Javier Darío Arroyave, director de la emisora Ondas del Valle, fue hallado muerto en su casa en Cartago (Valle).

En 2009 fue asesinado también en su propia residencia de Patía en el Cauca, José Everardo Aguilar, periodista de Radio Super y Bolívar Estéreo y en el 2010, Rodolfo Julio Maya y Clodomiro Segundo Castilla Ospina en Montería. El primero, amenazado días antes, acusado de ser integrante de las FARC, era un líder indígena que realizaba informes para Radio Payumat; y el segundo, a quien le habían retirado hacia poco su escolta, investigaba sobre irregularidades administrativas y el funcionamiento en la región de grupos paramilitares.

En 2011, el periodista asesinado en razón de su oficio fue Luis Eduardo Gómez, en Arboletes (Antioquia). De 70 años, era testigo

en la Fiscalía de casos de parapolítica. Tan solo dos años antes su hijo había sido asesinado por paramilitares.

En el 2012, Guillermo Quiroz, periodista de *El Meridiano de Córdoba*, fue asesinado por policías en Sincelejo.

PARA CONSTRUIR UN MEMORIAL

Mencionar en un cuadro a las personas asesinadas por razón del oficio del periodismo en las diferentes regiones de Colombia entre diciembre de 1977 y agosto de 2015 es un ejercicio de la memoria que tiene como propósitos nombrar y reconocer; también, recordar, promover el análisis y hacia el futuro contribuir a la verdad y a la no repetición.

El trabajo para elaborar el cuadro 5 fue realizado a partir especialmente de la información que ha construido paciente y sistemáticamente la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), que se fue complementando con la que tienen otras organizaciones (CPJ, Fecolper, SIP, entre otras) y con aquella que está en libros y publicaciones dedicados específicamente a ello, como por ejemplo, “La censura del fuego. Periodistas asesinados en Colombia” de Jorge González y Jairo Lozano publicado en el 2004, “1986-2006. Cronología de agresiones al periodismo colombiano”, de Ignacio Gómez, publicado por la Fundación Guillermo Cano en el 2006 y “Entre el silencio y el coraje”, que reúne textos de Ignacio Gómez, Jorge Cardona, María Teresa Ronderos, Fernando Ramírez, Marta Ruiz y Andrés Morales, publicado por la FLIP y Editorial Planeta en el 2012.

Aunque se ha buscado que sea lo más completo posible no se trata de un reporte exhaustivo y es probable que falten periodistas, que deberán agregarse a esta suerte de Memorial. Una de las recomendaciones que emergen de este trabajo es afinar la tarea de composición del cuadro de asesinatos, así como el de afrentas y violencias sufridas en estos años.

Existen diferentes criterios para calificar la “razón” del oficio. Se trata de personas que han ejercido el periodismo, con entrena-

miento profesional o sin él, y lo han hecho de manera sistemática, generando información en cualquier instancia de la cadena productiva (reportería, edición, dirección, fotografía, editorialista, caricaturista, locución, cámara, pero también personal administrativo, de mercadeo, de la asesoría jurídica, técnicos, e inclusive voceadores y vendedores de periódicos), a través de medios de comunicación, de diferente tamaño, periodicidad, cobertura, enfoque, ya sean de carácter comunitario, local, regional, nacional o internacional. Además, todas estas personas estuvieron relacionadas con el desarrollo del conflicto armado interno colombiano y en general con su violencia reciente.

Algunas figuras emblemáticas y de relevancia especialmente política, como por ejemplo, Álvaro Gómez Hurtado o Luis Carlos Galán Sarmiento, no aparecen en este cuadro, siendo claras víctimas de la violencia política y habiendo realizado actividades informativas relevantes, el primero especialmente en el periódico *El Siglo* y el segundo en el semanario *Nueva Frontera* y en el periódico *El Tiempo*. Sus nombres han sido incluidos dentro de la categoría de los magnicidios o en el de los asesinatos de prominentes figuras políticas colombianas.

Cuadro 5. Para construir un memorial: asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia (diciembre 1977 a agosto 2015). Informe CNMH.

(Ver cuadro en la contratapa del informe)

LOS ÁRBOLES Y EL BOSQUE: LO QUE NOS DICE LA MEMORIA

Cuando se observa el cuadro de los asesinatos perpetrados contra periodistas en el periodo comprendido entre 1977 y 2015, nos parece estar frente a un bosque. Uno tras otro se van acumulando todos los crímenes, casi hasta perder la identidad individual, las historias personales. El bosque tiene la virtud de mostrar de manera contundente la magnitud de lo acontecido y de dar un testimonio de la gravedad de los sucesos.

Cuando se exploran los hechos, se empieza a diluir la aparente uniformidad de la totalidad del cuadro y comienzan a notarse las evoluciones históricas, las diferencias, los posibles agrupamientos, las especificidades de los hitos. Se resaltan entonces los medios más golpeados, las comunidades en que las afrentas fueron más persistentes, las motivaciones de los victimarios y los temas que desencadenaron los actos de barbarie. Cuando los datos consignados se miran desde la perspectiva del tiempo, los lugares y la redes, de lo que estaba sucediendo en el conflicto armado interno o de las transformaciones que estaban viviendo el país y el periodismo, sobresalen otras características de lo sucedido que no son tan evidentes en la totalidad del bosque. Es un trabajo pausado y paciente, de ensayo y error, de hipótesis que a veces se construyen y a veces se deshacen, como si se tratara de reconstruir un tejido del que apenas tenemos algunas de sus hebras. Y aun después de haber hecho el trabajo de restauración, queda el convencimiento de que muchas cosas están aún incompletas y que la memoria es un lento proceso que no siempre termina en la verdad.

El despliegue en el tiempo es fundamental para entender el acontecimiento vivido por el periodismo colombiano. A diferencia de otros sucesos estudiados por el CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica), este tiene el problema, y a la vez la clave, de no estar concentrado en el tiempo, sino de extenderse a través de varias décadas. El asesinato de una persona debe sobresaltar a una sociedad, pero el asesinato progresivo de ellas pone en vilo su propia existencia como comunidad. Cuando se ubican todas las muertes de periodistas en una línea de tiempo se puede observar, por una parte, una cierta progresión que tiene momentos especialmente intensos en algunos lapsos de tiempo; y, por otra, que esta progresión es consecuente con líneas de tiempo que han sido estudiadas en otros campos como las masacres, el desplazamiento o los atentados contra la población civil. En otras palabras, si se superponen los análisis temporales del conflicto interno colombiano, el cuadro dedicado a los asesinatos de periodistas es completamente consecuente con lo que estaba ocurriendo en otras áreas de la confrontación. Más adelante se harán las comparaciones pertinentes.

Algo similar ocurre cuando se toman los datos colombianos y se les compara con los listados y las estadísticas que durante años han realizado organizaciones internacionales sobre la violencia contra las y los periodistas en el mundo. En alguno de estos años, Colombia ocupó el oprobioso primer lugar en el mundo.

Los lugares que quedan consignados en el cuadro son también fundamentales para un ejercicio reconstructivo de la memoria, ya sea el lugar de ejercicio periodístico, como el lugar donde se cometieron los hechos. Hay una geografía de la violencia contra periodistas que también es coherente con las anotaciones geográficas que se hacen en trabajos anteriores de la memoria como el Informe “Basta ya” (GMH, 2013).

Cuando se superponen las descripciones temporales con las geográficas, el tejido tiende a resaltarse aún más. Hay zonas del país, asoladas en determinados momentos históricos por el predominio de uno o varios actores armados, que eran focos de peligro para la actividad informativa y en las que se concentró la agresión contra periodistas de una manera que no obedecía al azar sino a los contextos, sus dinámicas, sus procesos y sus actores sociales, económicos, políticos y hasta culturales. Los problemas de la información en el conflicto armado colombiano tienen que ver con los conflictos territoriales, los predomios y hegemonías de los actores involucrados en la guerra, el estado de la confrontación entre ellos, sus estrategias intencionadas de captura del poder local o del desplazamiento de pobladores. También, por supuesto, de elementos más estrictamente comunicativos como la situación de quienes ejercen el oficio de periodistas en las regiones, su mayor o menor grado de indefensión, sus formas de hacer periodismo, su formación y grado de asociación, la combinación de su tarea informativa con otras en ocasiones alejadas o incluso en contradicción con la labor informativa, sus relaciones con la comunidad y también con actores específicos, el tipo de fuentes usadas, etc.

Un cuadro como el que se divulga en este capítulo no es solo el memorial de unas vidas sacrificadas en y por el conflicto armado interno colombiano, sino también por otros problemas directa o indirectamente relacionados con este. Y es además, una primera

exploración del papel de la información en una sociedad, una mirada sobre lo que significa hacer periodismo en comunidades atravesadas por problemas como la guerra, el miedo, la corrupción, la voracidad económica, los poderes locales, las redes criminales, entre otros.

Son varias las hipótesis preliminares que el Informe adelanta a partir del Cuadro presentado:

Una primera es que la intensidad de la violencia contra periodistas está directamente relacionada con la proximidad del conflicto y con el significado de la información dentro de él. Esta hipótesis puede relacionarse con el hecho de que sean los medios regionales y locales los más golpeados, así como lo son sobre todo la prensa escrita y la radio. Al periodista que investiga, que acude a otras fuentes de información diferentes a los poderes hegemónicos, que hace visibles atropellos o que denuncia las arbitrariedades o los desafueros, de inmediato le amenazan, presionan, estigmatizan o acallan. Una de las características de la violencia contra periodistas es el interés de los victimarios por llegar hasta las fuentes que les proveen información. Estaban frecuentemente interesados en las fuentes, que son uno de los meollos del periodismo y que deben ser salvaguardadas a toda costa como una de las condiciones fundamentales del oficio de periodista. Este interés acompañó en varios casos a los actores armados ilegales así como a los legales.

Una segunda hipótesis es la de la periodización del conflicto, que se estudiará en la segunda parte de este Informe. Aunque el caso del periodismo se despliega en un periodo de tiempo relativamente largo, es posible establecer unas marcas históricas en que la violencia arreció, explicable por el predominio de poderes ilegales en determinadas zonas del país y por sus formas de acción, intenciones e intereses.

Una tercera hipótesis, que nace de los hechos ocurridos, es la prefiguración desde los años setenta de algunos de los hilos más importantes de la violencia contra periodistas: la participación del narcotráfico y la incorporación del manejo de la información a su funcionamiento como crimen organizado; la temprana presencia

de la corrupción y los corruptos como origen de una parte importante de la persecución; el ascenso progresivo de las bandas de paramilitares y su influencia territorial; la intervención de políticos en algunos de los eventos más destacados de este panorama de violencia particular; y la existencia de alianzas entre actores armados ilegales, estos y políticos corruptos, o entre grupos de paramilitares, autoridades y fuerzas militares.

La participación de autoridades y representantes del Estado, es decir, de la legalidad, dentro de este cuadro de la violencia es evidente y merece un análisis especial.

Una cuarta hipótesis, que se confirma en el cuadro, es la fuerte naturaleza local y regional de la violencia contra periodistas y medios regionales, lo cual pide una indagación más profunda sobre la conformación de lo que llamaremos “regiones comunicativas”, es decir, aquellas zonas del país cuyo tejido, historia y funcionamiento comunicativo es específico.

Una quinta hipótesis tiene que ver con la evolución que la violencia contra periodistas tiene en el periodo de tiempo estudiado y que muestra que, aunque pueda provenir de los mismos victimarios, hay particularidades que diferencian momentos en un mismo tipo de victimario. La estrategia del cartel de Medellín con Pablo Escobar a su cabeza difiere de otros momentos de violencia narcotraficante contra periodistas.

Una sexta hipótesis ratifica que las y los periodistas conformaron un sector especialmente focalizado por los victimarios, y que la información constituyó un área de la vida social de relevancia dentro de las dinámicas del conflicto. Ni medios ni periodistas participaron por simple azar en las consecuencias de la guerra. Ambos eran estratégicos en ella por sus implicaciones directas en la comunidad, por su intervención en la visibilidad de los actores, por su capacidad de movilización de dimensiones muy importantes de la opinión pública, por la revelación de conexiones que de otro modo pasarían desapercibidas y por el peligro que en ellos apreciaban los guerreros.

El incremento progresivo de la violencia se construyó sobre la constatación social de que matar periodistas no le reportaba mayor peligro a los victimarios y que, en cambio, tenía repercusiones

estratégicas en los medios y en la comunidad, a quienes se buscaba aleccionar, enmudecer y llenar de miedo. Este incremento se fue disminuyendo cuando los crímenes de periodistas empezaron a tener una relevancia social, un mayor repudio de la sociedad y costos políticos más evidentes.

Como sucede con otros crímenes, los autores intelectuales de las muertes de periodistas permanecen en la sombra, así haya fuertes indicios para saber quiénes pudieron estar interesados en su desaparición. Como se verá, el problema central de esta violencia es su total impunidad. Han sido muy pocas las aceptaciones explícitas por parte de los grupos paramilitares vinculados a los procesos de Justicia y Paz sobre sus asesinatos a periodistas.

LOS TIEMPOS DE LA MEMORIA.
UNA PERIODIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA PERIODISTAS EN COLOMBIA
(DICIEMBRE 1977 - AGOSTO 2015)

En su capítulo sobre “Imaginación y memoria”, Paul Ricoeur resalta el significado de la expresión de Aristóteles, “la memoria es del tiempo” (1999). También Sarah Cohen, premio Pulitzer por una famosa investigación en el *Washington Post* sobre muertes de niños dentro del sistema de salud de la ciudad de Washington, en su conferencia del VII Congreso de Consejo de Redacción (2014) en Bogotá, insistió en que toda investigación periodística debería tener en cuenta tres grandes asuntos: el tiempo, el lugar y las redes.

Cuando se tiene frente a sí el recuento de los asesinatos de periodistas ocurridos entre 1977 y 2015, se corren varios riesgos: el primero, que la totalidad impacte de tal manera a la comprensión que se olviden los sujetos y sus historias, que los contextos en que sucedieron los hechos se homogeneicen y que pierda fuerza analítica el despliegue del tiempo.

Una de las herramientas que tiene la historia, y en general las ciencias sociales, es tratar de encontrar dentro de la totalidad periodos específicos, sin que se rompan las continuidades o se generen compartimentos temporales separados.

Por eso es importante realizar un ejercicio de periodización que, por una parte, permita ver y analizar de forma más detallada el acontecimiento (en este caso, la violencia contra periodistas) y por otra, pueda proponer causalidades y posibles hipótesis explicativas sobre lo sucedido. Si se revisan las cifras de asesinatos, los presuntos victimarios, las regiones y municipios en que sucedieron los hechos y la naturaleza de los medios aparecen con claridad cuatro periodos dentro de los casi cuarenta años estudiados.

El primero, comprendido entre 1975 y 1985, se puede calificar como un periodo de violencia larvada, en potencia, una suerte de preparación de la violencia; el segundo, comprendido entre 1986 y 1995, como un periodo con predominio del narcotráfico; el tercero, comprendido entre 1996 y 2005, como un periodo de agudización de la violencia contra periodistas generada por los actores armados ilegales en particular por los grupos paramilitares y las guerrillas; y el cuarto, entre 2006 y nuestros días, caracterizado por el descenso de los asesinatos contra periodistas pero el fortalecimiento de otras formas de violencia contra el periodismo.

Cuadro 6. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por periodos de análisis de 5 y 10 años (diciembre 1977 a agosto 2015). Informe CNMH

Periodos de tiempo	1977-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015	Total 1977-2015
Cada 5 años	9	9	34	28	27	31	8	6	152
Cada 10 años	18		62		58		14		

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

LA PREPARACIÓN DE LA VIOLENCIA. PRIMER PERIODO DE LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN COLOMBIA (1977-1985)

En materia de violencia contra periodistas y medios, los años setenta son mucho menos conocidos que las décadas a partir de los ochenta. Los motivos que explican esta ausencia de análisis pueden ser el menor número de casos de periodistas asesinados y la ausencia de organizaciones preocupadas por la denuncia y el registro sistemático de los hechos violentos contra el periodismo. También el significado de la violencia y la diversidad de actores que hacia finales de los setenta y, sobre todo, comienzos de los ochenta, se amplió de manera relevante, aumentando también sus acciones violentas.

El corpus de piezas periodísticas analizado nos muestra que en el periodo de los setenta se publican críticas a actos del gobierno que se califican de censura. El 24 de febrero de 1974, la revista *Alternativa* publica un artículo con el título de “Radio: comienza la censura”, en el que se refiere a dos emisoras, Radio Santafé de Bogotá y el radio periódico el Clarín de Medellín. En la nota periodística se mencionan tres hechos concretos de censura, la clausura del noticiero Santafé por haber transmitido informaciones para desmentir las versiones sobre las luchas de los trabajadores de los bancos, del radio periódico El Clarín por haber informado sobre el secuestro de un industrial en Medellín y la prohibición de ingreso de los periodistas de *Voz Proletaria* a un encuentro en el que hablaba la entonces ministra del trabajo. El decreto 2398 del 6 de noviembre de 1975, faculta al Ministerio de Comunicaciones para recobrar transitoriamente el dominio pleno de las frecuencias o canales de radiodifusión explotadas por particulares, para contrarrestar situaciones de conmoción interna. Estos sucesos de la radio contrastan con el pronunciamiento del expresidente Carlos Lleras Restrepo, que en conferencia en el CPB (Círculo de Periodistas de Bogotá), defendió la libertad de prensa y el derecho que tienen las y los periodistas a no revelar sus fuentes, mostrándose también contrario a la definición de un estatuto de periodistas.

Estos acontecimientos representan dos grandes tendencias que ha vivido el periodismo colombiano a través de los años. Por una parte, los gestos de censura mediante prohibiciones y, por otra, la propuesta de reglamentaciones de su oficio. En el fondo se trata de una mirada jurídica sobre los límites del periodismo, su papel en contextos específicos de orden público y más tarde de lucha contra el terrorismo y su incidencia en los asuntos de seguridad nacional. Esta mirada, que se concreta en reglamentaciones provenientes del congreso o del gobierno, expresan la sensibilidad del poder político frente al poder de los medios, su incidencia en la opinión pública y, sobre todo, su sentido crítico frente a los problemas del país.

En una caricatura de la revista *Alternativa* publicada el 6 de octubre de 1975, bajo el titular de “Cuando oigo hablar de libertad de prensa saco mi revólver”, se ironizan las reacciones del general Varón Valencia, Ministro de Defensa en ese entonces, a raíz del discurso del presidente Alfonso López Michelsen sobre la libertad de prensa, pronunciado días después del atentado contra la revista. El comienzo de este primer periodo está muy determinado por el enfoque de la guerra fría, la lucha anticomunista y la sensibilidad progresivamente exacerbada sobre los peligros de la subversión y la necesidad de medidas de seguridad nacional. En este contexto la información, y concretamente las tareas del periodismo, se empieza a colocar en el centro de las preocupaciones de ciertos sectores del Estado colombiano, en particular del gobierno, las fuerzas militares y los organismos de seguridad. La revolución cubana, el incremento de los movimientos sociales, la presencia de las guerrillas en diferentes zonas del territorio nacional, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, la influencia del marxismo, el ascenso de los movimientos estudiantiles especialmente en las universidades, las luchas campesinas, entre otros fenómenos, generan una reacción por parte de las autoridades y los encargados de la seguridad. Tanto el Estatuto de Seguridad del gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala como las acciones de la denominada Brigada 13, generaron la primera oleada de exilios de periodistas fuera del país.

Esta reacción lleva a las autoridades a catalogar progresivamente como filocomunistas y enemigos potenciales del establecimiento a periodistas que ejercieron la crítica, y desde entonces empezó a consolidarse una idea que se haría aún más explícita y agresiva en el periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez: que había periodistas de una u otra orilla, y que quien no estaba con los planteamientos del gobierno estaba contra él, pasando de inmediato a engrosar las listas de los terroristas, de los auxiliares de los grupos armados ilegales y, en general, de los enemigos de la democracia y la sociedad. En su prólogo al libro de Fabio López de la Roche “Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010)”, el periodista Javier Darío Restrepo escribe:

[A]l cabo de ocho años de gobierno, el presidente Álvaro Uribe había logrado poner de su lado los medios de comunicación; había tendido sobre sus opositores un manto de sospecha y descalificación, que los hacía ver desde amplios sectores de la opinión como terroristas, aliados de la subversión o sicarios morales. Algunos de ellos habían salido del país hostigados por amenazas anónimas; otros resistieron pero pagando un alto costo de inseguridad, incertidumbres y escaseces por la pérdida de sus empleos y de apoyos para recuperarlos (Restrepo, 2014).

Análisis jurídicos, como los que han hecho Botero, Jaramillo y Uprimny (2006) son muy importantes a la hora de reconstruir el contexto en el que se producen los fenómenos de violencia contra periodistas y medios en Colombia. Hay un ambiente jurídico que define no solo las reglas de juego del ejercicio periodístico y la producción y circulación de información, sino unas claves de interpretación de hechos que pueden ser considerados como formas de la censura, obstáculos para el oficio periodístico o, en general, prácticas violatorias de la libertad de prensa. En algunos casos, estas modalidades interpretativas son complementarias de otras acciones que son consideradas como violatorias de los derechos humanos y dentro de ellos, de la libertad de expresión.

El 4 de diciembre de 1975, en publicación del periódico *El Tiempo*, el candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado declaró que la libertad de prensa es un “paquidermo contemporáneo”, que está agonizando no solo en Colombia, sino en todo el mundo y lanzó fuertes críticas en contra de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), tildándola de ser una entidad mediocre, que muestra parcialmente la información mundial; así mismo, afirmó que la prensa nacional no cumple con las funciones, ya que lo que hace es denunciar pero no perseguir, sin combatir a la corrupción que según él es muy grande (*El Tiempo*, 1975).

Ya para entonces, y según se encontró en la investigación documental del periodo realizada para este Informe, se dieron discusiones públicas sobre injuria y calumnia en el periodismo en que intervinieron expresidentes, mientras se promovió la norma que prohíbe que los medios de comunicación sonora den a conocer la identidad de los menores de edad que hayan incurrido en la comisión de delitos.

En la madrugada del 11 de noviembre de 1975, estalló una bomba de mediano poder en la sede de la revista *Alternativa* en Bogotá, sin que se produjeran víctimas. Unos días después, otro explosivo, que produjo daños materiales, estalló en la casa del periodista Enrique Santos Calderón, directivo de la misma revista. El gobierno rechazó el atentado contra la revista *Alternativa*, mientras que el presidente señaló que se investigarían los hechos y enfatizó que no había motivos valederos para que estos no se esclarecieran, así fuese *Alternativa* un medio de comunicación de oposición. No puede haber discriminación —dijo— entre opositores y simpatizantes, para investigar lo sucedido.

En un artículo de *Alternativa* titulado “Blanco es, gallina lo pone”, se narran los hechos del atentado contra las instalaciones de la revista. Ocurrieron en la madrugada del 11 de noviembre, una hora después de que el personal de la revista saliera del lugar. Declaran que el atentado es un acto político enmarcado en una campaña de intimidación contra la revista, que había recibido amenazas por vía telefónica. En un pequeño apartado, Gabriel García Márquez calificó el hecho como terrorismo oficial, debido

a la calidad de los artefactos con los que hicieron el atentado (*Alternativa*, 1975).

El atentado contra la revista es un atentado claramente político —se lee en una nota de *Alternativa*—. En ningún caso se trata de alocados tirabombas (...) ni del acto suelto y espontáneo de algún terrorista de derecha obrando por su cuenta. La sola precisión del atentado y el poder explosivo de la bomba descartan semejante apreciación. El hecho está claramente enmarcado dentro de la campaña de intimidación de todos conocida, que se ha venido adelantando contra esta revista (*Alternativa*, 1975).

Es muy interesante la atribución que hace la revista a grupos paramilitares, señalando que:

[E]s probable, como lo afirma Matallana, que aún no existan grupos paramilitares de derecha en el país. O cómo es factible que estén hasta ahora surgiendo o inclusive, actuando ya en la sombra, sin reivindicar públicamente sus actos de violencia fascista. En cualquiera de estas eventualidades es claro que esta índole de terrorismo intimidatorio representa un llamado a que la derecha constituya grupos de acción contra el avance del pensamiento y la influencia socialistas (*Alternativa*, 1975).

Y un poco más adelante señalan, acudiendo al ejemplo de regímenes autoritarios como los de Argentina, Guatemala y Brasil, que:

[E]stos comandos paramilitares o parapoliciales, operan en directa coordinación con los servicios secretos oficiales. No nos pueden caber mayores dudas sobre el origen y la intención del atentado sufrido por *Alternativa*. Las amenazas telefónicas, las continuas provocaciones y celadas en lugares apartados (para entregarnos “materiales ultra confidenciales” sobre las Fuerzas Armadas), las advertencias de sectores amigos dentro del ejército sobre las intenciones de algunos estamentos militares de “hacer-

nosla pagar”, el fracaso de la presiones para obtener la clausura de *Alternativa*, son todos elementos suficientemente indicativos (*Alternativa*, 1975).

La exploración documental del periodo muestra también otros hechos relacionados con atentados a periodistas y a medios de comunicación, además de la acción criminal del MAS (Muerte a Secuestradores) y de la guerrilla, especialmente el M19 y el ELN.

El atentado contra *Voz Proletaria*, ocurrido en ese periodo, fue analizado de esta manera por la revista *Alternativa*:

La ofensiva contra la prensa independiente lanzada por los altos mandos militares y secundada por parlamentarios, gremios económicos y prensa del sistema, fue complementada en forma violenta esta semana con el ataque a bala que sufrió el miércoles por la noche la editorial “Voz Proletaria”, semanario del partido comunista. El ataque contra la editorial se produce poco después que estallaran bombas en la embajada soviética y en la Cinemateca Distrital donde se presenta un festival de cine cubano y en los mismos días en que el ministro de Defensa, general Varón Valencia, anuncia en dos ocasiones, la inminente adopción de medidas restrictivas contra la prensa. Las reiteradas declaraciones de Varón Valencia, apoyadas de forma entusiasta por todos los diarios conservadores, suscitaron la protesta unánime de las agremiaciones de periodistas y terminaron por inquietar a sectores de la misma prensa liberal, que en un comienzo azuzó a los mandos militares contra *Alternativa* y *El Bogotano*, pero que ahora expresan preocupación por el hecho de que sea el ministro de las armas el que lleva la voz cantante en materia de control de la prensa (*Alternativa*, 1975).

En 1977, el ELN se toma dos emisoras, interrumpe con amenazas la transmisión de un partido de fútbol y ordena la reproducción de un casete en el que se solicita apoyo del pueblo al ELN. Intimidan a periodistas y al personal técnico, a quienes encierran, y ponen una bomba que el F2 logra desactivar.

Héctor Gómez, Jairo Saravia y Rafael Serrano fueron retenidos en sus salas de redacción en 1983 y conducidos al Magdalena Medio santandereano por el Frente 12 de las FARC. En su retención, la guerrilla los interrogó y los acusó de “armar un grupo de autodefensas”, anotó Serrano en su entrevista. Sin embargo Héctor Gómez señaló que “el secuestro de la[s] FARC fue para que se entrevistara a un comandante guerrillero y se llevaran publicidad y hacerles imagen”.

En virtud del decreto de Estado de Sitio, el gerente de la emisora La Voz del Galeras y cinco locutores/redactores, fueron llevados a la cárcel entre uno y ocho meses. Existe una columna de opinión de Daniel Samper Pizano criticando las medidas excesivas asumidas por alcaldías municipales.

La revista *Alternativa* da la noticia sobre el asesinato del periodista Silvio Emiro Quiñones el 19 de marzo de 1977, por sus investigaciones de las irregularidades del Instituto Nacional La Dorada (*Alternativa*, 1978, página 23).

En 1982 se produce el secuestro de María Jimena Duzán por parte del M19 y ocurre también el atentado contra su residencia, atribuido al MAS por el periódico *El Espectador*. En su cautiverio entrevistó a Jaime Bateman y otros dirigentes. Como publicó *Semana* el 11 de mayo de 1982:

En la víspera de su primer artículo en el diario, 24 horas después de haber sido depositada por el M-19 en una avenida de Bogotá, una bomba estalló en la casa de la periodista. María Jimena acaba[ba] de entrar a su casa. Entraba en el segundo piso, saludando a su madre cuando se produjo la explosión que arrancó de cuajo la puerta de la calle y la arrojó. (...) Cinco minutos después, cuando los vecinos se agolpaban frente a la puerta, sonó el teléfono. María Jimena pensó que se trataba del director Guillermo Cano. Pero en el teléfono oyó una voz “Vieja h.p habla el M.A.S. La próxima vez, la matamos” (*Semana*, 1982).

Sin embargo, esto no impidió la publicación en *El Espectador* de las entrevistas a Jaime Bateman e Iván Marino Ospina, en las que

contaron cómo se financiaba el M-19, los secuestros que hacían y su relación con las FARC.

El 6 de febrero de 1983 se presenta un atentado fallido contra la sede del diario *Vanguardia Liberal* en Bucaramanga; la bomba es desactivada por cuerpos especializados. En menos de ocho días, se registra un segundo atentado contra ese diario, presumiblemente con un artefacto que fue lanzado desde un carro.

Ese día —anota Alejandro Galvis Ramírez— el transformador que había en el poste terminó en la esquina. Quedamos sin luz, nos pusieron luz a las 10 de la mañana del día siguiente. El periódico del día de la bomba ya había salido, la pusieron a las 6 de la noche. Y después de la bomba que fue a las 6 nos lograron poner luz en el periódico a las 10 de la mañana del día siguiente y trabajamos con velas, mucha gente nos trajo computadores portátiles, hicimos un periódico muy gráfico y logramos sacarlo a las 11 de la mañana. Ocho paginitas muy gráficas con todo lo que había pasado, con la bomba básicamente, no tenía más información. Y logramos sacarlo y eso fue un orgullo poderles decir que pueden atentar contra nosotros pero el periódico sigue vivo (Galvis, A., 2013, entrevistado por CNMH, Trabajo de campo).

Acerca de los presuntos perpetradores del atentado, se manejó en ese momento como una de las hipótesis la autoría por parte de miembros del MAS, pues se acusaba al periódico de tener “alianzas comunistas”. Es clave subrayar la postura recia de la periodista Silvia Galvis frente a los militares involucrados en plena guerra sucia contra la izquierda, sus denuncias y estas retaliaciones contra el medio.

Si bien no existen estrictamente nexos entre este conjunto de hechos y los presentados posteriormente, sí es posible señalar que ya para los setenta existía un clima de presiones y amedrentamiento en el que intervenían agentes del Estado, guerrillas y sectores de la ultraderecha, además de planteamientos orientados a establecer más regulaciones a los medios de comunicación y peligrosos intentos de promover estrategias que terminaban lesionando

la libertad de prensa. No es nada nueva la atribución de violencia a actores de la sociedad que aparecerán nuevamente señalados décadas después. También se detecta en el periodo un clima de intolerancia que hacía parte de una determinada lógica anticomunista y que convertía en enemigos a ciertos periodistas y medios de comunicación, así como a expresiones periodísticas de minorías legales como el partido comunista. El asesinato del periodista Silvio Emiro Quiñones es atribuido en ese entonces a grupos corruptos. De manera simultánea, algunos grupos guerrilleros presionan a medios de comunicación y a comunicadores. Todos estos signos se agravarían posteriormente de una forma aún más violenta y explícita.

Estudios más pormenorizados podrán explorar las constantes, como también los cambios, que se han producido en actores claves como las fuerzas militares en relación con la comprensión de la libertad de expresión, el periodismo y la tarea de las y los periodistas, considerando las transformaciones sociales, periodísticas y comunicativas vividas en estas décadas en el país. En todo caso, podemos observar distancias entre unas fuerzas militares adoctrinadas en el anticomunismo de la Escuela de las Américas de los años sesentas, setentas y ochentas, y las que se han conformado bajo los nuevos principios de la seguridad y los derechos humanos en las últimas décadas. Francisco Leal Buitrago escribe:

[L]a doctrina de seguridad nacional es una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad que implica la importancia de la “ocupación” de las instituciones estatales por parte de los militares. Por ello surgió para legitimar el nuevo militarismo surgido en los años sesenta en América Latina. La Doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales (Leal, 2003, página 75).

Como se expone más adelante, miembros de las fuerzas militares y, en general, de las instituciones de seguridad del Estado han tenido protagonismo en la violencia contra periodistas, ya

que han participado en hechos delictuosos de la mayor gravedad, como han sido las amenazas, la estigmatización, los obstáculos en el ejercicio del oficio, las presiones indebidas para priorizar la información oficial, el espionaje, el exilio y el asesinato.

Cuadro 7. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según presuntos victimarios. Periodo 1977-1985. Informe CNMH

Victimarios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1977-1985
	1977-1980	1981-1985	
Guerrilla ELN	0	0	0
Guerrilla FARC	0	0	0
Guerrilla EPL	1	0	1
Guerrilla (sin identificación de grupo)	0	0	0
Paramilitarismo	0	0	0
Fuerza Pública (Policía y Ejército)	1	0	1
Bandas criminales	1	1	2
Narcotráfico	2	1	3
Corrupción política	2	3	5
Autor material (Autor identificado)	0	2	2
Desconocidos	2	2	4
Total según periodos de 5 años	9	9	
Total según periodos de 10 años			18

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Una revisión de las posibles causas de los asesinatos de los primeros periodistas, ocurridos durante este primer periodo, demuestra que ya se insinuaban casi todos los problemas que viviría el país en los siguientes años con mucha más fuerza y contundencia. Estaban las drogas aunque en la escala de las disputas por el poder sobre la producción y distribución de la marihuana —las guerras de la marimba— en el norte del país, la corrupción administrativa concentrada en determinadas instituciones y promovida por autoridades y funcionarios locales, la participación de la policía en alguno de los crímenes y las acciones de la guerrilla en contra de la libertad de información. Quienes estaban a las puertas de la arremetida contra el periodismo que se vivió en Colombia especialmente entre 1986 y el 2006, son nada menos que algunos de los temas y sujetos más involucrados en la generación de violencia. Los datos son importantes para caracterizar cada uno de los periodos.

Durante el primer periodo (1977-1985), el mayor número de asesinatos se dio en cuatro ciudades: Pereira, Cali, Buenaventura y Bogotá (cuadro 8). En el siguiente periodo, dominado por el poder de grupos narcotraficantes, dos de estas ciudades, Cali y Bogotá, continuarían presentando y acrecentando asesinatos de periodistas, aunque Medellín ocuparía un lugar de predominio en estas listas macabras.

Las 18 víctimas en este primer periodo fueron informadores de medios pequeños y locales (cuadro 9), como será una constante de toda la realidad nacional de violencia contra periodistas que analiza el presente Informe. Sin embargo la situación de comunicadores y comunicadoras, aunque ya preocupante y grave, distaba mucho de la que se viviría en los dos periodos posteriores, entre 1986 y 2005, cuando fueron eliminados 119 periodistas, es decir, el 79 por ciento del total.

Cuadro 8. Principales ciudades en las que se cometieron asesinatos contra periodistas en Colombia. Periodo 1977-1985. Informe CNMH

Ciudad	Número de asesinatos 1977-1985
Pereira	2
Cali	2
Buenaventura	2
Bogotá	1

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 9. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo 1977-1985. Informe CNMH

Definición	Tamaño de los medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1977- 1985	Total asesina- tos de perio- distas por tamaño de los medios (1977-2015)
		1977- 1980	1981- 1985		
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia nacional e internacional	Gran medio	0	1	1	16
Periodistas que trabajan en varios grandes medios	Varios medios (Solo grandes medios)	1	1	2	5
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia regional o local	Mediano o pequeño medio	6	3	9	94

Periodistas que trabajan en medios pequeños o medianos	Varios medios (medios pequeños)	1	1	2	15
Periodistas que trabajan en uno o varios grandes medios y también en uno o varios pequeños medios	Varios medios (gran medio/pequeño medio)	0	2	2	11
Periodistas que trabajan en organizaciones no periodísticas	Agremiaciones	0	1	1	4
Periodistas independientes	Freelance	1	0	1	5
Voceador de venta de prensa escrita	Voceadores	0	0	0	2
Total según periodos de tiempo de 5 años		9	9		
Total según periodos de tiempo de 10 años				18	
Total en el período analizado por el Informe					152

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

De 1977 a 1985, los 18 asesinatos cometidos tuvieron predominancia geográfica en el departamento Valle del Cauca (cuadro 10). La violencia proviene fundamentalmente de la corrupción política y de iniciales arremetidas del narcotráfico que en el siguiente periodo se acrecentarán notablemente; se presenta un asesinato asociado con la guerrilla del EPL. Un primer análisis nos permite señalar que el crimen político tiene prevalencia y que el narcotráfico es un actor que empieza a aparecer en el panorama de la violencia contra periodistas. Hay una focalización regional en los departamentos y ciudades en que se concentra su operación delictiva; parece existir una orientación de la violencia hacia

cabezas de medios que ejercen como periodistas; la radio es el medio con mayor número de asesinatos. Por otra parte, no hay una participación significativa de la guerrilla en el panorama de los acontecimientos violentos contra el periodismo. El periodismo radial merece especial atención, ante el elevado número de personas asesinadas que formaban parte de sus equipos de trabajo. La radio ha tenido desde su aparición, en la década de los treinta del siglo pasado, una gran importancia en la escenificación de lo regional y en la cercanía a las personas, pues conecta directamente la circulación de las noticias con otras oralidades, culturalmente más arraigadas. Su inmediatez y rapidez de emisión facilita que los eventos violentos sean conocidos por la comunidad de forma casi inmediata, generando una evidente contrariedad en los violentos e inclusive interfiriendo en la consolidación de sus planes. Pero la radio también tiene la virtud de difundirse viralmente y de transformarse muy pronto en otras formas de narración popular, lo que genera en comunidades sometidas por el silencio o por el silenciamiento una situación de alerta y en muchos casos de repudio, como lo escribió hace años, en un reconocido trabajo, el antropólogo norteamericano Michael Taussig (1995).

Cuadro 10. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 1977-1985. Informe CNMH

Tipo de medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1977-1985
	1977-1980	1981-1985	
Prensa escrita	3	4	7
Radio	3	2	5
Televisión	0	0	0
Radio y televisión	0	0	0
Prensa escrita y radio	2	2	4

Agremiaciones	0	1	1
Freelance	1	0	1
Voceador	0	0	0
Total según periodos de 5 años	9	9	
Total según periodos de 10 años			18

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

El Valle del Cauca fue la región del país que presentó el mayor número de asesinatos en el primer periodo. En otras regiones fue leve, como en Antioquia, Córdoba, Arauca y Santander, pero en una posterior arremetida contra el periodismo estas zonas del país serían protagonistas (cuadro 11).

Cuadro 11. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por regiones administrativas. Periodo 1977-1985. Informe CNMH

Departamento	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1977-1985
	1977-1980	1981-1985	
Norte de Santander	1	0	1
Atlántico	1	0	1
Caldas	2	0	2
Quindío	1	0	1
Risaralda	1	1	2
Valle del Cauca	2	5	7

Guajira	1	0	1
Bogotá	0	1	1
Antioquia	0	1	1
Sucre	0	1	1
Amazonas	0	0	0
Caquetá	0	0	0
Córdoba	0	0	0
Magdalena	0	0	0
Santander	0	0	0
Tolima	0	0	0
Arauca	0	0	0
Bolívar	0	0	0
Cauca	0	0	0
Meta	0	0	0
Cundinamarca	0	0	0
Cesar	0	0	0
Huila	0	0	0
Nariño	0	0	0
Putumayo	0	0	0
Chocó	0	0	0
Total según periodos de 5 años	9	9	
Total según periodos de 10 años			18

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Aunque existieron problemas graves relacionados con la libertad de expresión durante el primer periodo caracterizado —que se extiende desde la segunda mitad del gobierno de Alfonso López Michelsen, todo el gobierno de Turbay Ayala y buena parte del de Belisario Betancur—, su perfil general no fue de la gravedad de los dos siguientes.

EL ASCENSO DE LA VIOLENCIA NARCOTRAFICANTE. SEGUNDO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1986 Y 1995

Como se observa en el cuadro 12, este periodo significó un gran crecimiento de la violencia contra los periodistas colombianos, con una diferencia desmesurada frente a la década anterior. De 18 asesinatos ocurridos entre 1977 y 1985, el país pasó a 62 asesinatos entre 1986 y 1995.

Cuadro 12. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por regiones administrativas. Periodo 1986-1995. Informe CNMH

Departamento	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1986-1995
	1986-1990	1991-1995	
Norte de Santander	0	3	3
Atlántico	0	1	1
Caldas	1	0	1
Quindío	0	1	1
Risaralda	0	0	0
Valle del Cauca	8	4	12
Guajira	0	0	0
Bogotá	4	1	5

Antioquia	12	3	15
Sucre	0	0	0
Amazonas	1	0	1
Caquetá	1	2	3
Córdoba	2	2	4
Magdalena	1	2	3
Santander	3	2	5
Tolima	1	0	1
Arauca	0	3	3
Bolívar	0	1	1
Cauca	0	2	2
Meta	0	1	1
Cundinamarca	0	0	0
Cesar	0	0	0
Huila	0	0	0
Nariño	0	0	0
Putumayo	0	0	0
Chocó	0	0	0
Total según periodos de 5 años	34	28	
Total según periodos de 10 años			62

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Los dos grandes periodos de la violencia contra periodistas comprendidos entre 1985 y 2006 coinciden con el escalamiento de la guerra al que alude el Informe del GMH, “Basta ya” (2013):

[U]na primera ola de violencia asociada al conflicto armado ocurrió entre 1982 y 1995 debido a la expansión de las guerrillas. No obstante, tuvo lugar en un ambiente de violencia generalizada protagonizada por el narcotráfico, y en medio de la guerra sucia auspiciada por las élites regionales, los narcotraficantes y miembros de la fuerza pública a través de los grupos paramilitares. La Constitución del 91 significó un corto descenso en la escalada de la violencia gracias al desarme de algunas guerrillas y el fin del narcoterrorismo (GMH, 2013).

Durante los meses de 1986 que precedieron al fatídico 17 de diciembre, día en que fue asesinado Guillermo Cano Isaza, el director de *El Espectador*, se cometieron seis asesinatos de periodistas, una tercera parte de los que habían sido muertos en toda la década anterior. En este periodo de tiempo, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá y Santander fueron las cuatro regiones del país en que sucedieron más crímenes y Medellín dobló a cualquier otra ciudad colombiana con los 12 asesinatos que ocurrieron dentro de sus límites urbanos (cuadro 13).

Cuadro 13. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por ciudades. Periodo 1986-1995. Informe CNMH

Municipios	1986-1995 (10 años)
Medellín (Antioquia)	12
Cali (Valle del Cauca)	6
Bogotá	5
Florencia (Caquetá)	3
Cúcuta (Norte de Santander)	3
Montería (Córdoba)	2
Barrancabermeja (Norte de Santander)	2
Santa Marta (Magdalena)	2
Segovia (Antioquia)	2

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

De 1984 a 1990, los asesinatos de periodistas se incrementan a 39, producidos fundamentalmente por las bandas del narcotráfico y ya se percibe el ascenso de la violencia paramilitar. La realidad del cartel de Medellín y concretamente de la confrontación de Pablo Escobar Gaviria con el Estado colombiano, es probablemente una de las características fundamentales de este periodo de tiempo analizado. Un hecho emblemático del periodo es, sin duda, el asesinato de don Guillermo Cano y la persecución deliberada a *El Espectador* por el cartel de Medellín como parte central de la lógica de ataque al Estado y a la sociedad por parte de los grupos mafiosos.

Ignacio Gómez muestra el significado de esta embestida de Pablo Escobar y el narcotráfico contra *El Espectador*:

En Medellín, que había sido la plaza principal del periódico por fuera de Bogotá, el diario optó por trastearse a una sede sin avisos y mantener su planta de redacción casi clandestina. Aun en la calle, los reporteros estaban en real “riesgo inminente” de asesinato y secuestro; además, recibían sentencias de muerte por carta, por teléfono y por rumores de la policía. En el Magdalena Medio, una extensa región agroindustrial en el centro-norte del país, apareció Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, un grupo político que abiertamente respaldaba las masacres contra la Unión Patriótica y cuestionaba el antipatriotismo de la defensa de la extradición. Luego de las primeras revelaciones del diario sobre las relaciones del nuevo movimiento con Pablo Escobar y su grupo de “anticomunistas”, su revista fue publicada con un inserto que decía “Si quieres al Magdalena Medio, no compres *El Espectador*”.

Nos mandaban mensajes en audios y también en panfletos que nos dejaban por debajo de la puerta y también sufragios (...). Venían los periódicos de Bogotá, *La República*, *El Tiempo*, *El Espectador* en un solo flete, pero bajaban *El Espectador* en la vía Las Palmas o la vía Santa Helena y lo quemaban y amenazaban con revólver (CNMH, 2013, trabajo de campo, Medellín, entrevista).

La amenaza forzó la renuncia masiva de quienes distribuían el periódico en la zona. A mediados del año, los anunciantes comenzaron a recibir cartas y llamadas que les advertían de bombas en sus establecimientos anunciados en el diario. Las explosiones con más de veinte muertos eran noticia cotidiana del mes y los petardos con un solo muerto muchas veces no clasificaban como historias locales.

El 16 de agosto de 1989, después de ratificar las decisiones de dos jueces exiliados y uno pensionado que señalaron la responsabilidad de Escobar en el asesinato de Cano, el magistrado Carlos Valencia fue acribillado por otro sicario motorizado en el centro de Bogotá, mientras esperaba un bus hacia su casa” (Gómez, 2006, página11).

En marzo de 1987, una carga de dinamita destruyó el busto en bronce de Guillermo Cano que había sido puesto en el Parque Bolívar en Medellín como homenaje a los cien años de la inauguración del periódico.

En 1987, Mariam Ruiz Castañeda, directora de la emisora Ondas del Darién, fue asesinada a tiros en Turbo por un trabajo periodístico que estaba realizando sobre la aparición de escuadrones de la muerte en Urabá. Ese mismo año, paramilitares asesinaron a Héctor Abad Gómez, como parte de una feroz arremetida de los criminales contra defensores de los derechos humanos. En 1987, también fue asesinado en Medellín Nelson Gavini Alzate, director del periódico *Revolución*, de orientación comunista.

Los asesinatos de periodistas que cubren informativamente los crímenes cometidos por bandas paramilitares se incrementan notablemente. Así sucede con Oswaldo Regino Pérez, periodista de *El Universal* de Cartagena, el 11 de noviembre de 1988, presuntamente por su cobertura de las masacres de La Mejor Esquina y El Tomate; y con Luis Daniel Vera, asesinado el 11 de abril de 1989, que seguía periodísticamente en Radio Metropolitana de Bucaramanga los crímenes de la banda de Los Masetos.

El periodismo enemigo de los narcos. El primer análisis de este segundo periodo (cuadro 14) nos permite destacar algunos elementos.

Cuadro 14. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según presuntos victimarios. Periodo 1986-1995. Informe CNMH

Victimarios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1986-1995
	1986-1990	1991-1995	
Guerrilla ELN	0	4	4
Guerrilla FARC	0	4	4
Guerrilla EPL	0	0	0
Guerrilla (sin identificación de grupo)	0	1	1
Paramilitarismo	4	1	5
Fuerza Pública (Policía y Ejército)	0	1	1
Bandas criminales	3	0	3
Narcotráfico	16	3	19
Corrupción política	0	4	4
Autor material (Autor identificado)	0	1	1
Desconocidos	11	9	20
Total según periodos de 5 años	34	28	
Total según periodos de 10 años			62

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Se trata de una década en la que arrecia la violencia narcotraficante contra los periodistas y los medios que son claramente definidos como “enemigos” y como un sector social estratégico en el actuar de las bandas mafiosas. No tenemos en ningún caso una simple sumatoria de delitos agrupados por el azar, sino un hecho colectivo de un actor violento —los narcos— que ubican en su foco estratégico al periodismo y a quienes lo ejercen. Si se recurre a los estudios sobre el narcotráfico se podrán seguramente constatar algunas causas mucho más explícitas de este comportamiento criminal en el terreno del periodismo.

El narcotráfico ya se había fortalecido como asociación criminal, había permeado sectores de la legalidad y de las instituciones del Estado, había tendido puentes con comunidades y grupos de la sociedad y pretendido participar en la gestión de la política y los asuntos públicos del país. Pero también el Estado había desatado una lucha contra él, que concretó en la activación de la extradición, la persecución policiva, la participación de entidades antidrogas colombianas y de los Estados Unidos o la acción de los jueces.

En el conflicto desatado por el narcotráfico, aún falta por analizar con mayor cuidado y rigor histórico el papel que cumplieron los medios de comunicación, el periodismo y quienes lo ejercían.

Para los narcotraficantes la opinión pública empezó a ser tan importante como su visibilidad mediática y la construcción social de su imagen. Comprendieron rápidamente que la información era un lugar estratégico para validar socialmente su acción, oponerse a las iniciativas del Estado, difamar a las instituciones, presionar a través del chantaje y el descrédito a quienes se les oponían o los perseguían, recurrir a mensajes intimidatorios dirigidos a amplios sectores de la sociedad. Desde la otra orilla, es decir, desde las fuerzas estatales que los perseguían, la información también era estratégica y fundamental, lo que proporciona a esta guerra en esos años una dimensión central que se jugaba en el ámbito de la opinión pública, la información y, por supuesto, el periodismo.

Es importante reconstruir el papel social que la comunicación ha tenido en los procesos conflictivos, porque su rol en momen-

tos determinados de la historia del país muy seguramente está relacionado con las modalidades de la violencia. Y esta especie de interacción entre periodismo y conflicto, entre información y guerra, tiene que ver con el propio desarrollo de los medios, con la evolución de su agenda, con la participación de periodistas y su cercanía con los actores y sus acciones criminales, con el interés de las autoridades y la sociedad sobre ciertos temas que de otro modo continuarían siendo invisibles, con la lógica estratégica de los guerreros y su articulación con el dispositivo informativo, entre otros asuntos.

Todos fuimos cobardes, menos él, que parecía tan tímido —escribió Juan Gossaín, refiriéndose a Guillermo Cano—. Los periodistas, temerarios a la hora de criticar a una actriz de telenovela o de vapulear a un jugador de fútbol, nos morimos del susto cuando aparecieron los narcotraficantes. Menos él, que se murió de verdad. Mañana sábado se cumplen 25 años de su asesinato. Armado solo con papel periódico y tinta de imprenta, Guillermo Cano, director de *El Espectador*, fue el primer periodista que tuvo el coraje de hacerles frente a los criminales que empezaban a corromper a los colombianos. Ninguno de sus colegas, ni siquiera sus discípulos, se atrevió a secundarlo cuando empezó a revelar, con pruebas, que el honorable congresista liberal Pablo Escobar Gaviria era el jefe de una mafia monstruosa, que había transportado cocaína en unos camiones que decomisaron en Pasto y que se robaba las lápidas del cementerio de Medellín. Sabía que se jugaba la vida en defensa de una sociedad indolente, que convivía con semejantes malhechores, que les ofrecía fiestas, que los adulaba, que se lucraba de ellos. Protegido solo por el escudo de su autoridad moral, siguió adelante, denunciando que los partidos políticos se financiaban con ese dinero manchado de sangre. Como Don Quijote, libró su propio combate en medio de la soledad más desgarradora (Gossaín, 2011).

En su libro “Crónica de cuatro décadas de política colombiana”, Daniel Pécaut, refiriéndose a este periodo histórico, dice que

un nuevo actor ha entrado a la escena y ha tenido la capacidad de desafiar a todas las instituciones, “que han provocado una sacudida social que se extiende por diversas regiones y un terror insólito que golpea a políticos, jueces y periodistas” (Pécaut, 2006). Pécaut habla del terror producido por los narcotraficantes y específicamente menciona que este terror golpea a las y los periodistas.

El desarrollo de los medios influyó en estas interacciones entre información y conflicto en los años ochenta (Rey, 2006), ya sea porque su presencia se había diversificado no solo nacional sino regionalmente, porque la televisión ya era para entonces un medio de gran penetración en las audiencias, porque los medios de comunicación eran vitales en la internacionalización de las acciones criminales de los narcotraficantes y sobre todo de sus acciones criminales, o porque empezaba a existir una opinión pública menos sumisa frente al poder de los delincuentes. Los medios también tenían unidades de investigación y el fenómeno del narcotráfico empezaba a ser importante en la agenda de medios y de periodistas. Y aunque los grupos delincuenciales intentaban cooptarlos —y existieron casos—, la cobertura de los medios era para ellos un gran problema. La evolución de la agenda periodística, que ha sido objeto de algunos estudios, debería ser aún más investigada, particularmente en esta indagación mayor sobre la violencia contra periodistas en el país. No es que las agendas de todos los medios colombianos hubieran reconocido en estos años al narcotráfico en su verdadera dimensión y peligro, pero sí es verdad que algunos medios ya la colocaron en su debido puesto de importancia. La evaluación sería de este punto referida al narcotráfico, pero también a grupos paramilitares y al papel de las fuerzas militares, permitiría hacer un balance más justo y equilibrado de la participación de los medios en el conflicto colombiano.

Cada paso en la tarea periodística acerca más a la fuente, al generador de violencia, con unas consecuencias imprevisibles y siempre riesgosas. Está la cercanía física, que los coloca casi de inmediato en una posición de indefensión y los convierte en un objetivo militar de sus acciones delincuenciales, como se apreciará una vez se analicen los casos y las modalidades delictivas. Pero también

está la cercanía del oficio con los intereses de los actores ilegales, es decir, con el hecho de que el periodismo de alcance amplio, de gran cobertura, visibiliza, pone en evidencia lo que permanece oculto, impele a la controversia social.

La articulación del periodismo con otros procesos sociales involucrados en el conflicto es también una clave para entender la interacción. Más adelante se tratarán de explorar estas relaciones, buscando encontrar cuáles son aquellas que desencadenan acciones violentas, que van desde el asesinato hasta la autocensura de los periodistas.

El periodismo colombiano también vivió en este periodo una relación con el Estado que se agravaría en los siguientes años. La filosofía de la guerra fría, y sobre todo las posturas anticomunistas que se habían acentuado desde el periodo anterior, veían en la información independiente y en la opinión crítica un peligro en vez de una ayuda para la democracia. Esta actitud se reforzaría con enfoques de sectores de la extrema derecha que buscaban eliminar toda oposición a la política tradicional.

Durante este segundo periodo el mayor número de asesinatos de periodistas corresponde a quienes trabajaban en prensa escrita, 29; mientras que 20 lo eran de emisoras de radio (cuadro 15). Del total de 16 periodistas pertenecientes a grandes medios, asesinados en Colombia desde 1977 hasta el 2015, 11 lo fueron en este periodo, lo que ofrece una clave de interpretación importante. Los narcotraficantes, atosigados por la petición de extradición y en palabras suyas en “guerra contra el Estado”, buscaban estratégicamente golpear a los grandes medios de comunicación y presionar, de esta manera, a las estructuras de poder del país, en particular a las del Estado y del gobierno. Por eso la emprendieron de manera tan decisiva como bárbara contra *El Espectador*, hubo secuestros de periodistas de grandes medios, como los de Andrés Pastrana, Maruja Pachón de Villamizar, Diana Turbay y Francisco Santos, y hubo quienes se vieron obligados al exilio, como fue el caso de Mauricio Gómez Escobar.

Cuadro 15. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 1986-1995. Informe CNMH

Tipo de medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1986-1995
	1986-1990	1991-1995	
Prensa escrita	18	11	29
Radio	7	13	20
Televisión	3	1	4
Radio y televisión	0	0	0
Prensa escrita y radio	5	1	6
Agremiaciones	1	0	1
Freelance	0	2	2
Voceador	0	0	0
Total según periodos de 5 años	34	28	
Total según periodos de 10 años			62

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 16. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo 1986-1995. Informe CNMH

Definición	Tamaño de los medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1986-1995	Total asesinatos de periodistas por tamaño de los medios (1977-2015)
		1986-1990	1991-1995		
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia nacional e internacional	Gran medio	8	3	11	16
Periodistas que trabajan en varios grandes medios	Varios medios (Solo grandes medios)	3	0	3	5
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia regional o local	Mediano o pequeño medio	14	21	35	94
Periodistas que trabajan en medios pequeños o medianos	Varios medios (medios pequeños)	5	0	5	15
Periodistas que trabajan en uno o varios grandes medios y también en uno o varios pequeños medios	Varios medios (gran medio/pequeño medio)	3	2	5	11
Periodistas que trabajan en organizaciones no periodísticas	Agremiaciones	1	0	1	4
Periodistas independientes	Freelance	0	2	2	5
Voceador de venta de prensa escrita	Voceadores	0	0	0	2
Total según periodos de tiempo de 5 años		34	28		
Total según periodos de tiempo de 10 años				62	
Total en el período analizado por el Informe					152

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, "La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia"; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Frente a la acción explícita de los carteles del narcotráfico, empezaron a darse también manifestaciones de que una nueva fuerza violenta se había incubado, la de los grupos paramilitares, en no pocos casos apoyados por integrantes de las fuerzas militares y autoridades nacionales y locales. En 1987, fue asesinada Mariam Ruiz Castañeda de Ondas del Darién; en 1988 lo fue Luis Daniel Vera López, reportero judicial de Radio Metropolitana de Bucaramanga por sus reportes por las masacres perpetradas por la banda paramilitar de Los Masetos; en ese mismo año Oswaldo Regino Pérez fue asesinado en Montería por el despliegue que le dio a las masacres de El Tomate y de La Mejor Esquina; y en febrero de 1990, Silvia Margarita Duzán Sáenz fue asesinada en Cimitarra, Santander.

Durante el segundo periodo arreciaron las acciones violentas contra periodistas por parte de las guerrillas. En este periodo también se puede constatar que el más alto número de periodistas muertos pertenece a medios locales y regionales (cuadro 16). Con relación al periodo anterior, la violencia contra periodistas se convierte en una violencia que se da en las regiones y los contextos municipales en los que hay predominio del narcotráfico y progresivamente del conflicto armado interno. Fue este el periodo en que Colombia pasó a formar parte de los primeros lugares en las cifras mundiales de asesinatos de periodistas.

ACTORES ARMADOS ILEGALES, CONFLICTO Y VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS. TERCER PERIODO DE LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN COLOMBIA 1996-2005

El periodo comprendido entre 1996 y 2005 fue uno de los más difíciles para el periodismo colombiano en las cuatro décadas analizadas. Lo fue también para el país, porque en esos años hubo claramente un recrudecimiento del conflicto armado, particularmente en las regiones. En 1990, seis años antes, había aumentado la violencia en Urabá y se produjeron asesinatos selectivos contra sindicalistas; las masacres se incrementarían el año siguiente en casi todas las regiones del país, mientras que se acentuaba la per-

secución sistemática y deliberada contra militantes de la Unión Patriótica. Los grupos paramilitares se centraron en la persecución de Pablo Escobar y a la muerte de Fidel Castaño, en 1994, se conforman las Autodefensas de Córdoba y Urabá.

Un fenómeno de proporciones gigantescas se empezaba a consolidar en el país: ejércitos de paramilitares copaban territorios con el apoyo de sectores de las fuerzas militares, políticos y empresarios regionales. En 1997 nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia como una asociación criminal que integraba a diferentes grupos, con presencia en amplias regiones del territorio nacional.

La presión pavorosa del narcotráfico, que el periodismo colombiano había vivido en el periodo anterior, se reforzó con la acción de diferentes actores violentos como los propios grupos paramilitares, ahora organizados federativamente, las guerrillas, algunos agentes del Estado y políticos corruptos. Probablemente haya sido este el periodo más concentrado en la acción de los denominados actores del conflicto, cuya influencia continuaría, aunque de modo distinto, en el cuarto momento de la periodización propuesta.

El ascenso paramilitar es consecuente con el agravamiento de la situación de las personas que ejercen el periodismo. Su expansión guerrera se concentraba en las regiones en las que existían pequeños proyectos periodísticos, con su tarea informativa expuesta y a la luz pública. Estratégicamente los grupos paramilitares ponían sus ojos sobre todos aquellos liderazgos locales que podían oponerse a su poder. Su concentración en la confrontación armada contra las guerrillas y la cooptación de las estructuras y del funcionamiento del Estado local para fortalecer su presencia y apoderarse de los dineros públicos, fueron dos realidades que de inmediato pusieron en la mira a periodistas regionales y de pequeños medios.

En el primer caso, porque operaron siempre con la lógica de que aquel que no está conmigo está contra mí. No pocas personas que ejercían el periodismo fueron alinderadas con la guerrilla y por ello amenazadas, expulsadas o asesinadas. Se encuentran va-

rios casos en que inclusive se les estigmatizó con el apelativo de “sapos”, un nombre repetido insistentemente en sus rituales tenebrosos de la muerte. Las y los periodistas caminaban así por una delgada franja en medio del conflicto, que en cualquier momento y ante disímiles interpretaciones se convertía en una transgresión no permitida por alguno de estos actores, trasladando el hacer periodístico hacia territorios de lo bélico.

En el segundo caso, porque se convirtieron en un peligro público para la acción de guerrillas y grupos paramilitares. Con relación a estos últimos, la tarea informativa que se concentraba en la corrupción era, sin duda, una grave interferencia que los guerreros —y sobre todo los políticos en sociedad con los guerreros— no toleraban. Como se observa en el cuadro 5, una buena cantidad de ellos lo fueron por sus investigaciones o sus denuncias en los medios en que laboraban.

Cuadro 17. Número de periodistas víctimas de asesinato en Colombia. Periodo 1996-2005. Informe CNMH

Año	Número de asesinatos
1996	2
1997	6
1998	4
1999	7
2000	8
2001	9
2002	10
2003	7
2004	3
2005	2
Total 1996-2005	58

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Como se observará en el capítulo de este Informe dedicado a los victimarios, hay propósitos comunes en sus acciones contra periodistas, que obedecían, sin embargo, a objetivos estratégicos diferentes. La concreción de sus actos criminales también difiere: en todos hay una intención explícita de silenciar a quienes habían construido a través del periodismo unos lazos de confianza y credibilidad con las poblaciones de proximidad y generar el terror entre sus colegas de oficio y en las comunidades de cercanía. Ya para entonces se había extendido la certeza de que matar a periodistas era una acción que terminaba en la impunidad y desaparecía sin aparentes consecuencias, a aquellos que eran piedras en el zapato de los guerreros. Fue lo que sucedió con Gildardo Ariza Olarte, el director de la emisora Ondas del Carare asesinado por las FARC en Vélez cuando apenas despuntaba el año 1995. Por ese entonces el periodista denunciaba los atropellos que ocasionaban los Frentes 11 y 23 de esa guerrilla contra la población campesina de la región.

A Guzmán Quintero, periodista de *El Pílon* de Valledupar ya lo habían amenazado por sus escritos sobre desafueros de la fuerza pública y por las acciones de grupos paramilitares en la Sierra de Perijá. Lo asesinaron en septiembre de 1999 en un lugar público y en medio de dos colegas, muy seguramente por hacer públicos los delitos de todos los actores de la guerra y por las denuncias que hacía desde su medio de prensa. A Jaime Garzón lo acribillaron de seis balazos en el mismo año unos sicarios que se transportaban en moto, en las calles cercanas a Radionet, sentenciado por el jefe paramilitar Carlos Castaño, en asocio con miembros del Estado, como se ha podido constatar en medio de una investigación que avanza hacia la impunidad con la conocida lentitud de la justicia y que ya sufrió desviaciones generadas por el propio DAS en el pasado.

A fines del 2001 Álvaro Alonso Escobar, director del semanario *Región* en el departamento del Magdalena, fue asesinado porque denunciaba actos de corrupción al interior del sistema de salud y además le hacía un seguimiento constante a la información política local. Era sucesor en el cargo que había ocupado Hernando Rangel Romero, asesinado también dos años antes, quien de su propio pecunio ayudaba a sostener el medio de comunicación que

dirigía. Es tan solo uno de los periodistas asesinados en este periodo y cuyo crimen se achacó a políticos corruptos en asociación, en este caso, con paramilitares. A uno de ellos se le vinculó como autor material del crimen. Un tipo de alianza semejante de políticos y paramilitares se dio en el 2002 en el caso del periodista Mario Prada Díaz, director del periódico *Horizonte Sabanero*, cuyo cuerpo fue hallado con cuatro impactos de bala en Sabana de Torres días después de haber sido secuestrado. Cercano a la Unión Patriótica, Mario Prada denunció precisamente en su última columna el papel nefasto de los gamonales en la vida de la región.

Crímenes como los de Orlando Sierra en Caldas y Efraín Varela en Arauca —este último de enorme conmoción en el tejido periodístico local—condujeron al exilio a un grupo importante de comunicadores y comunicadoras, que tuvieron que abandonar sus trabajos y sus vínculos de proximidad.

Llama la atención en este periodo el número de delitos cometidos por desconocidos contra periodistas, lo que habitualmente no es sino una estratagema de sus autores intelectuales para hundir los crímenes en un clima de desconocimiento, desconfianza e impunidad inicial.

Corresponde a este periodo el asesinato de casi la mitad de periodistas en las cuatro décadas analizadas en el presente Informe. Como queda claro en los cuadros que se presentan a continuación, 42 de las 58 víctimas eran de pequeños o medianos medios regionales.

Cuadro 18. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 1996-2005. Informe CNMH

Tipo de medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1996-2005
	1996-2000	2001-2005	
Prensa escrita	9	7	16
Radio	9	15	24

Televisión	7	6	13
Radio y televisión	0	0	0
Prensa escrita y radio	0	1	1
Agremiaciones	0	0	0
Freelance	2	0	2
Voceador	0	2	2
Total según periodos de 5 años	27	31	
Total según periodos de 10 años			58

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Esta primera constatación empieza a perfilar la naturaleza de la violencia ejercida en menos de diez años: quien la sufrieron más directamente fueron periodistas, y la agresión se extendió como un incendio sin control por buena parte de la geografía nacional. Un importante porcentaje de los hechos de violencia se dirigió contra periodistas de la radio, y de manera un poco menor hacia informadores de prensa escrita y de televisión. La explicación es evidente: durante estos años, las radios comunitarias y ciudadanas empezaron a aparecer en casi medio millar de poblaciones convirtiéndose, en muchas ocasiones, en el único medio de comunicación que tenían los ciudadanos para informarse de lo que estaba sucediendo en momentos en que se incrementaba el conflicto en numerosas zonas del país.

En el informe “Basta Ya”, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica se lee:

Pero aquella [la violencia] volvió a remontar desde 1996 hasta el 2005, cuando guerrillas y paramilitares se disputaron los territorios a sangre y fuego. La competencia por la hegemonía militar y política en las regiones significó el peor baño de sangre para el país en décadas y la ruptura de todos los límites morales de la guerra. La degradación los tocó a todos. (GMH, 2013, página 34).

La lista de víctimas de asesinato en este periodo comprendió oficios periodísticos de distinta índole, se incrementaron los asesinatos atribuidos a las guerrillas, creció la incidencia de políticos corruptos en los actos violentos y se acrecienta la diversidad regional en la cartografía de los crímenes de periodistas con particular relevancia en Arauca y Caquetá. Mientras que varios periodistas de estas regiones fueron asesinados, incluyendo a tres de la emisora “La Voz de la Selva”, muchos comunicadores tuvieron que salir desplazados de sus lugares de trabajo, conformando una verdadera diáspora comunicativa.

Mientras que va cediendo la violencia del narcotráfico contra el periodismo que fue especialmente alta en los años ochenta, entre 1996 y 2005 el panorama está tomado por la violencia paramilitar que se ejerce sobre periodistas que investigan sus acciones —las masacres especialmente— y por la guerrilla. Ya se anuncia, como si fuera un mensaje macabro, la inclusión de corruptos dentro de la lista de perpetradores, en alianza con los actores armados o bandas delincuenciales. Esta relación entre corrupción y hechos de violencia, que es una suerte de hilo con diversos rostros, comenzó a hacerse evidente en la década de los setenta y atraviesa todo el periodo analizado por el Informe. Probablemente son variables las formas e intensidad de la corrupción, el tipo de alianzas de las personas corruptas y las maneras de intervenir en la gestión pública y su desmantelamiento a través del robo, la asignación de contratos o la desviación de los presupuestos.

Colombia ocupó en estos años los primeros lugares mundiales por sus altísimas cifras de asesinatos de periodistas. En 1997, Colombia ocupó el segundo puesto en la lista mundial de periodistas asesinados, según el CPJ. En 1998, ocupó el primer lugar en el mundo. En 1999, el tercer lugar, después de Sierra Leona y Yugoslavia. En el año 2000, nuevamente el primero, junto con Rusia y Sierra Leona. En 2001, el segundo después de Afganistán y en 2002, el segundo después de Rusia.

Como características de este periodo se destacan: el poder creciente de los actores armados, el aumento de las amenazas y la intención de silenciar, expulsar o poner a su servicio a las personas

que ejercen el periodismo en sus regiones de arraigo. En 1997, la guerrilla secuestró a 18 periodistas, una cifra que aumentó el año siguiente cuando llegó a 24 casos. En 2002 se contabilizaron 112 agresiones contra periodistas, en las que sobresalían las amenazas (75), el secuestro (12) y los atentados (10). En el año 2004, se produjeron 11 secuestros, 7 de ellos en Arauca dentro de los cuales 2 fueron generados por el ELN y 5 por las FARC. El secuestro fue un mecanismo particularmente usado por la guerrilla y los grupos paramilitares para aleccionar a periodistas con el propósito de reorientar la cobertura informativa de acuerdo a sus intereses, esto es publicitar los hechos con una mirada sesgada.

Pero lo más preocupante son los círculos viciosos que se generan entre todas estas manifestaciones: el poder genera amedrentamiento, y el miedo reducción de la tarea informativa y finalmente autocensura. De esta manera se logran los propósitos de los violentos sobre la producción, circulación y apropiación de la información.

Inhibidos por el miedo a ser amenazados o agredidos, muchos periodistas en Colombia han optado por dejar de hablar sobre temas sensibles a intereses ilegales. Asuntos como la corrupción, el narcotráfico y la acción de los grupos armados ilegales han salido de las agendas informativas de los medios regionales o apenas se registran escuetamente. La autocensura es la característica predominante del periodismo en Colombia (FLIP, 2006).

Un informe que sobre el periodo 1995-2001 publicó la Fundación para la Libertad de Prensa, nos alerta sobre una sociedad que no ha sabido dimensionar el daño causado ante los atentados fatales a periodistas: “La sociedad colombiana aun no es consciente de lo que significa que un periodista sea asesinado por causa de su oficio. No siente que la agresión a un periodista o el ataque a un medio sea una violación a su derecho a ser informado”, se lee en un resumen del trabajo de Investigación “Análisis de la libertad de prensa en Colombia: 1995-2001”, realizado por la FLIP para el Ministerio del Interior.

En el informe de la misma entidad sobre la situación de la libertad de expresión en 1998, se dice:

Junto con los secuestros y las demás amenazas por parte de las organizaciones ilegales armadas, la corrupción política, las presiones económicas, el desconocimiento de las autoridades sobre el papel del periodista en la sociedad, los intentos cada vez más frecuentes de acoso judicial contra periodistas y las arbitrariedades que impiden el acceso a la información de interés público, los asesinatos de periodistas agravaron la situación de la Libertad de Expresión en 1998 (FLIP, 2002).

En síntesis, en este periodo 1996-2005 se concentra buena parte de las dimensiones del problema de la violencia contra el periodismo colombiano. En primer lugar, se incrementó el número de asesinatos, es decir, se llegó al máximo punto de presión violenta contra periodistas, ejercida por todos los sujetos violentos: guerrillas, paramilitares, políticos corruptos, agentes del Estado y narcotraficantes. La oleada de violencia ejercida por estos últimos al comienzo del periodo, continúa vinculada y fortalecida con el paramilitarismo y las guerrillas, siendo el capital narcotraficante movilizador de primer orden de las violencias colombianas de todas las épocas.

En segundo lugar, hay una clara diferenciación en cuanto a la ubicación de los crímenes contra periodistas en este periodo. Están situados fundamentalmente en los pequeños y medianos medios locales y regionales y sobre todo en las emisoras de radio. ¿Cómo se explica esta topología del delito contra la libertad de expresión en Colombia? Vamos a considerar algunas de sus particularidades. Estos periodistas estaban en el centro mismo y en la médula de la operación violenta de los grupos guerreros. La información se refiere siempre a personas y hechos concretos del día a día, y no solamente expone los acontecimientos sucedidos sino a sus posibles provocadores. Es una constatación y un ejercicio de memoria social en medio de quienes solo desean hacerse invisibles, o ser reconocidos por su poder en la sombra, con la menor afectación personal y colectiva. Quienes ejercen el periodismo en el nivel lo-

cal son absolutamente conocidos en sus regiones, perfectamente detectables por cualquier persona y generalmente están en una situación evidente de indefensión, que los hacen fácilmente víctimas potenciales. Son muchos los testimonios que se recogieron en el trabajo de campo para este Informe que se refieren a ello y a los anuncios casi premonitorios de lo que podría suceder y sucede. Y también son muchas las confirmaciones en otros estudios sobre las transmutaciones que se llevan a cabo en el ejercicio del periodismo local por las asechanzas de la guerra: cosas sobre las que se habla, sucesos que permanecen en la invisibilidad, relaciones con los violentos, vínculos con las autoridades locales, mecanismos de salvaguarda frente a los cambios que llevan a cabo las redacciones centrales de los medios a los que se envían noticias regionales, etc.

Otra razón de esta focalización de la violencia en el periodismo local es su carácter heterogéneo. Con cierta frecuencia, en las regiones una misma persona combina su ejercicio del periodismo con el liderazgo social, los intereses políticos y la cercanía con movimientos y partidos. Unos nexos que pueden ser sincrónicos con la actividad periodística o que pertenecen a su pasado ciudadano. Algunos de ellos fueron alcaldes, concejales o dirigentes políticos en el pasado, con lo que su actividad periodística se ve contaminada por otros intereses.

Cuadro 19. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo 1996-2005. Informe CNMH

Definición	Tamaño de los medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1996-2005
		1996-2000	2001-2005	
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia nacional e internacional	Gran medio	2	2	4

Periodistas que trabajan en varios grandes medios	Varios medios (Solo grandes medios)	0	0	0
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia regional o local	Mediano o pequeño medio	17	25	42
Periodistas que trabajan en medios pequeños o medianos	Varios medios (medios pequeños)	3	3	6
Periodistas que trabajan en uno o varios grandes medios y también en uno o varios pequeños medios	Varios medios (gran medio/pequeño medio)	3	0	3
Periodistas que trabajan en organizaciones no periodísticas	Agremiaciones	0	0	0
Periodistas independientes	Freelance	2	0	2
Voceador de venta de prensa escrita	Voceadores	0	1	1
Total según periodos de tiempo de 5 años		27	31	
Total según periodos de tiempo de 10 años				58

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

En tercer lugar, el periodo, que finaliza ya entrado el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, está especialmente signado por el incremento de la intervención paramilitar, y, sobre todo, por el inicio del proceso de negociación del Estado con los grupos paramilitares, que, aunque no es el único factor, incidirá en un notable descenso de los asesinatos de periodistas, como se verá a continuación.

En cuarto lugar, el periodo presenta un conjunto de hechos de violencia colectivos, de especial significación. Si en el segundo periodo fue notable la acción del narcotráfico contra *El Espectador*, en este tercero se deben destacar los crímenes contra los perio-

distas de La Voz de la Selva, atentados contra emisoras y medios indígenas, especialmente en el Cauca, y el desplazamiento y exilio de un buen número de periodistas que ejercían su oficio en el departamento de Arauca. Estas diásporas y agresiones subrayan el carácter colectivo de la violencia ejercido contra periodistas en algunos años y en ciertos lugares del país y pueden ser atribuidos directamente a la intensificación del conflicto armado interno en este caso en tres zonas, particularmente golpeadas por la violencia guerrillera en confrontación con las fuerzas militares del Estado: Cauca, Caquetá y Arauca.

En quinto lugar, se asienta el fenómeno de la autocensura que crecerá en el cuarto periodo. De esta manera los perpetradores van logrando resultados con su estrategia de miedo. La agenda se restringe, algunos temas salen del debate público, se aumentan las estrategias de cuidado frente a la acción de los violentos y se entroniza una atmósfera de “calma chicha” en la que todos saben lo que sucede pero no existen condiciones para decirlo. El silencio empieza a vencer a la palabra. Sin embargo los propios medios de comunicación encontraron algunos caminos para hacerle frente a la violencia, como la publicación de informes de carácter colectivo, que no permitiera la identificación de sus autores. En algunos medios de comunicación, las unidades de paz tuvieron un papel importante en la representación informativa del conflicto colombiano.

En sexto lugar, surgen proyectos desde la comunidad periodística y la sociedad civil, estrategias de alerta y protección para garantizar el ejercicio del periodismo. A sus propuestas se suman organizaciones de la sociedad civil y del Estado, ya sea a través de la creación de la subunidad especializada en libertad de prensa, ubicada dentro de la Unidad de Derechos Humanos o de la creación de un mecanismo estatal con participación de varias instituciones de gobierno así como de representación de los periodistas, anunciada por el presidente Andrés Pastrana el 5 de mayo de 1999. En el capítulo final se destacan estas iniciativas generadas desde la sociedad y el Estado, ya que pueden servir de referentes para otras realidades que viven situaciones similares.

En séptimo lugar, el periodo está atravesado por una permanente situación de amenaza y agresión contra el oficio de periodista y contra quienes lo ejercen, que acompaña con su pesado manto de violencia a los asesinatos ocurridos en el periodo y sobre los cuales ya se han avanzado interpretaciones en este capítulo. El secuestro, la amenaza, los atentados, el acoso judicial, el exilio, son algunas expresiones de la expansión de la agresión violenta sobre el ejercicio libre del periodismo en estos años.

DESCENSOS Y ASCENSOS EN LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS. CUARTO PERIODO: 2006- 2015

Entrado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las estadísticas de asesinatos de periodistas disminuyeron sensiblemente por medidas asociadas al desmonte del paramilitarismo, ante el seguimiento internacional de la realidad vivida por las personas que ejercen el periodismo, que atrae la atención de medios y de organizaciones de periodistas y de derechos humanos internacionales; a los mecanismos de protección diseñados por las instituciones periodísticas y el gobierno; a los esfuerzos realizados por entidades como la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) en temas como las redes de alerta, la denuncia pública, la investigación y los mecanismos de protección de periodistas promovidos junto con otras organizaciones colombianas; a los extendidos procesos de formación de periodistas y a una mayor atención al periodismo regional.

La negociación con los grupos paramilitares tuvo, sin duda, un efecto positivo en el descenso de los crímenes de periodistas. Sin que se haya acabado su incidencia, se ha limitado su radio de acción sobre los diversos municipios del país.

Sin embargo, existen otras realidades del contexto que han influido en los cambios experimentados en este periodo. Uno es el resultado del programa de alerta y protección de periodistas implementado por el Estado colombiano en colaboración con organizaciones no gubernamentales, que ha tenido efectos positivos en cuanto a la seguridad de comunicadoras y comunicadores, la vali-

dación social del oficio de periodista y el interés de diversas instituciones oficiales de protección de los derechos humanos que han puesto sus ojos en la importancia social de la libertad de expresión.

Otra es la atención de la comunidad internacional alarmada por la situación de las y los periodistas en medio del conflicto. No cabe duda que los rankings internacionales, el monitoreo de los casos, los programas de asilo en el exterior, los foros y conferencias internacionales han influido en convertir a la violencia contra el periodismo colombiano en un asunto de la agenda pública y progresivamente en actos con repercusiones y consecuencias. Además de las organizaciones periodísticas internacionales, se debe destacar el papel de las representaciones diplomáticas de países como el Reino Unido, los Países Bajos, Suecia y Noruega, además de los Estados Unidos y la Unión Europea entre otros. Pero sobre todo ha sido muy interesante y proactiva la intervención de la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y del Relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.

Según las estadísticas del Comité para la protección de los periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), en 2004 Colombia ya había dejado de estar entre los primeros diez países del mundo en que se asesinaban más periodistas.

Ese año se le ubicó en el puesto 17. En el 2008, en el 12, con un asesinato. En el 2009, el 17, nuevamente con un periodista asesinado. En el 2010, por primera vez no aparece en los 20 primeros países del mundo. Algo similar ocurre en el 2011, mientras que en el 2012, con un asesinato, ocupa el puesto 15, y en el 2013, con un asesinato, el puesto 13.

En el Informe “¡Basta ya!”, antes citado, se lee:

A partir de 2005, con la desmovilización de las AUC y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el Estado ha retomado el control relativo del territorio en zonas de alta influencia de grupos armados. En consecuencia, la violencia por causa del conflicto ha empezado a disminuir progresivamente en casi todas sus expre-

siones. A pesar de ello el reacomodamiento de la guerrilla y el rearme paramilitar continúan representando importantes desafíos para la seguridad nacional (GMH, 2013, página 34).

La realidad del periodismo empezó a cambiar. De los 58 asesinatos de periodistas en el tercer periodo se pasó a 14, una cifra que inclusive tiende a disminuir en los últimos cuatro años. Nuevamente la mayor proporción se genera en el periodismo local y regional, es decir, en los pequeños medios, especialmente de la radio y la prensa escrita.

Cuadro 20. Número de periodistas víctimas de asesinatos en Colombia. Periodo 2006-2015. Informe CNMH

Año	Número de asesinatos
2006	3
2007	2
2008	0
2009	1
2010	2
2011	1
2012	1
2013	2
2014	1
2015	1
Total 2006-2015	14

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 21. Tamaño de los medios de comunicación en los que laboraban periodistas víctimas de asesinatos en Colombia. Periodo 2006-2015. Informe CNMH

Definición	Tamaño de los medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 2006-2015
		2006-2010	2011-2015	
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia nacional e internacional	Gran medio	0	0	0
Periodistas que trabajan en varios grandes medios	Varios medios (Solo grandes medios)	0	0	0
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia regional o local	Mediano o pequeño medio	5	6	11
Periodistas que trabajan en medios pequeños o medianos	Varios medios (Medios pequeños)	2	0	2
Periodistas que trabajan en uno o varios grandes medios y también en uno o varios pequeños medios	Varios medios (gran medio/pequeño medio)	1	0	1
Periodistas que trabajan en organizaciones no periodísticas	Agremiaciones	0	0	0
Periodistas independientes	Freelance	0	0	0
Voceador de venta de prensa escrita	Voceadores	0	0	0
Total según periodos		8	6	14

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 22. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medio de comunicación. Periodo 2006-2015. Informe CNMH

Tipo de medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 2006-2015
	2006-2010	2011-2015	
Prensa escrita	1	2	3
Radio	6	2	8
Televisión	0	0	0
Radio y televisión	0	1	1
Prensa escrita y radio	1	0	1
Agremiaciones	0	0	0
Freelance	0	0	0
Voceador	0	1	1
Totales por periodo	8	6	14

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

De los tres mayores victimarios en este periodo —grupos paramilitares, políticos corruptos y FARC—, los segundos demuestran con su incremento el poder violento de la corrupción, que no da muestras de debilitarse aun en las llamadas etapas del posconflicto. Las regiones más golpeadas fueron Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba y el Cauca, que forman parte de la geografía más violenta del periodismo en general en todos los periodos.

Pero, como lo observaron en su momento los Informes de la FLIP sobre el estado de la libertad de prensa en el país, mientras disminuían los asesinatos aumentaba la autocensura y otros fenómenos agresivos que incidían sobre el periodismo y sobre la sociedad local y nacional. No se debe dejar de mencionar la actitud del Presidente Álvaro Uribe Vélez en contra de defensores de derechos

humanos y de algunos periodistas, como lo ocurrido a Gonzalo Guillén, a quien el primer mandatario de la nación señaló por “[dedicar] una carrera periodística a la infamia y la mentira”; o la calificación de “mentiroso” y “miserable” que dio a Daniel Coronell (FLIP, 2007). Estas acusaciones públicas solían tener como consecuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados. “Con la perspectiva del tiempo me doy cuenta que las chuzadas siempre coincidieron con etapas de desprestigio y amenazas”, señaló en una entrevista el periodista Daniel Coronell (2011).

Las “chuzadas”, es decir la interceptación ilegal de las llamadas telefónicas de periodistas por parte de organismos de seguridad del Estado, particularmente del DAS, fueron uno de los episodios más graves contra la libertad de expresión en este periodo. Investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia han determinado con toda claridad la responsabilidad de altos funcionarios de los cuerpos de seguridad del gobierno de Uribe Vélez en este delito, e inclusive a través de investigaciones judiciales se han tratado de establecer las responsabilidades de otros funcionarios y funcionarias y las del propio Presidente de la República.

A los nombres de Guillén y Coronell, ya mencionados, se agregan los de Hollman Morris y Alfredo Molano, quienes también fueron objeto de campañas de desprestigio por parte del Presidente Álvaro Uribe, de interceptaciones ilegales por parte de organismos estatales y de amenazas por parte de desconocidos.

Las consecuencias que entraña este comportamiento, proveniente del más alto cargo de un gobierno, podrían ser inmensamente graves, no solo para quienes ejercen el oficio del periodismo y para sus familias, sino para su medio de comunicación y, en general, para la existencia en democracia en una sociedad.

El criminal atentado contra el exministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos, promovido por las guerrillas de las FARC el 15 de mayo de 2012 en el norte de la ciudad de Bogotá, se produjo mientras el abogado y político participaba activamente en labores periodísticas.

Según las estadísticas de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), en el 2006 se presentaron 140 violaciones contra la

libertad de expresión y 166 víctimas, concentradas en amenazas, trato inhumano o degradante, obstrucción al trabajo periodístico y exilio. En el 2007, se pasa a 162 violaciones y 261 víctimas, con una pequeña disminución de periodistas que salieron al exilio. En el 2008, bajan los datos a 129 violaciones y 180 víctimas particularmente centradas en las amenazas. En el 2009, se reportaron 143 violaciones y 239 víctimas, mientras que en el 2010, 117 violaciones y 169 víctimas.

En el Informe anual sobre la libertad de prensa en Colombia de diciembre de 2004, la FLIP resume con claridad esta advertencia:

En el seguimiento que hizo la FLIP al estado de la libertad de expresión en Colombia durante 2004 hubo, en términos generales, una mejoría. El solo hecho de que hubiera menos asesinatos y atentados graves contra periodistas ya en sí mismo es un logro considerable. Sin embargo, hay síntomas nuevos preocupantes. Para empezar documentamos el caso de tortura a una reportera, algo sin antecedentes conocidos en el país. Segundo, las obstrucciones y agresiones a los periodistas para impedirles ejercer su labor se aumentaron en más del 50 por ciento. Tercero, la impunidad es la regla general, lo que incentiva perversamente a que se siga agrediendo a los periodistas. Cuarto, se sigue percibiendo en la información no cuantitativa que recibe la Fundación, una autocensura generalizada por el miedo. Esto lleva a medios y a periodistas a no informar bien, o a dar informaciones parciales o, lo que es peor, a callar graves problemas que aquejan a su comunidad. Se está violando así no solo la libertad de expresión y pensamiento, sino también el derecho a recibir información veraz como manda la Constitución colombiana (FLIP, 2005).

Una dinámica sombría parece presidir la realidad del periodismo colombiano: se está ante un fenómeno vivo que se adapta, se reconvierte y encuentra nuevos mecanismos para tratar de frenar su misión. En este cuarto periodo disminuyen sensiblemente los asesinatos de periodistas, pero crecen los mecanismos de autocensura, se repliegan algunas de las fuerzas agresoras pero

aparecen otras, como las bandas emergentes denominadas “bácrim”, descende la violencia en algunas regiones pero crece en otras, pierden fuerza algunas de las motivaciones que avivan la confrontación, pero surgen otras. La FLIP señala, finalizando el 2012, que Antioquia es el departamento más riesgoso para ejercer el periodismo ya que en los últimos dos años han sido reportados a esa Fundación 14 amenazas, un exilio y, en julio de 2011, el homicidio del periodista Luis Eduardo Gómez en Arboletes, al norte de Apartadó. Como lo señala el informe, gran parte de estos actos de violencia contra periodistas en Urabá pueden ser atribuibles a reductos que sobrevivieron de la desmovilización del grupo del paramilitar alias *El Alemán*, hoy conocidos como Autodefensas Gaitanistas o Los Urabeños (FLIP, 2012).

Sobre los procesos violentos que se han atenuado quedan sus rescoldos, pero aparecen también nuevas formas de acción violenta. Y esta transformación reafirma viejos problemas para el periodismo o da lugar a nuevos. Así lo testimonian periodistas que fueron entrevistados por la FLIP para el informe citado en que se denuncian periodistas agredidos por escoltas, discriminación a las y los periodistas locales cuando de noticias de relevancia nacional se trata, por ejemplo, visitas presidenciales a la región, autocensura para evitar amenazas o acciones violentas, acusaciones y peleas entre medios de la región, falta de formación y amarillismo.

En este Informe se explorará la violencia contra periodistas ejercida por diferentes actores violentos, sus lógicas de actuación, los temas que estimulan su agresividad, sus visiones estratégicas del periodismo, es decir, los mecanismos que explican, así sea parcialmente, sus estrategias de horror.

3

CAMBIOS EN EL PERIODISMO Y LOS MEDIOS. DE LOS AÑOS SETENTA AL NUEVO MILENIO

El periodo en que el periodismo colombiano experimentó los niveles más altos de violencia fue también uno de los periodos más decisivos de su historia.

El paisaje de los medios de comunicación cambió en el mundo y se transformó muy radicalmente en Colombia. Pero esta renovación de ninguna manera fue la causa de la violencia contra los periodistas que debe ser atribuida fundamentalmente al conflicto interno y especialmente a aquellos actores que han sido centrales en su desarrollo. Sin embargo es importante observar los cambios que se vivieron en los medios durante estas cuatro décadas para comprender de mejor manera las transformaciones del oficio y sobre todo el papel del periodismo en la vida del país. Este análisis permitirá establecer sus conexiones con el conflicto interno cuando sean evidentes y comprobadas, subrayar las diferencias entre el periodismo nacional y el periodismo local, observar el surgimiento de medios que se acercaron dramáticamente a los contextos de la guerra y reconocer algunas prácticas que han incidido negativamente en la situación de las y los periodistas y en la evolución de su oficio.

Pero lo que quizás es más importante en un ejercicio analítico como el que se propone en este capítulo, es evaluar el desarrollo

que está teniendo hoy el periodismo y sacar algunas conclusiones sobre el daño ocasionado en la sociedad, la reparación que se precisa y sobre todo la determinación de algunas de las condiciones de no repetición hacia el futuro.

La no repetición tiene que ver con una fuerte valoración colectiva del significado del periodismo para una sociedad y su democracia, con la lucha del Estado contra la impunidad —y por tanto contra el mensaje de que las vidas de periodistas carecen de valor—, con la promoción de la asociatividad periodística y con el fortalecimiento de la actividad informativa independiente en las regiones.

Porque lo que enseña el estudio de lo que ha sucedido en el periodismo es menos una cuestión del pasado y más una condición del futuro. El periodismo vive uno de los cambios más profundos y decisivos de su historia, y de lo que está sucediendo en estos años saldrá un panorama muy diferente del oficio periodístico. Lo fundamental será si ese nuevo rostro del periodismo tendrá un carácter más pluralista, democrático y participativo.

En la década de los setenta, la televisión apenas tenía 15 años. La radio, un tanto más antigua, había comenzado en los treinta, e internet ni siquiera aparecía en los sueños anticipatorios de la ciencia ficción. Hasta entrado el siglo veinte, Colombia había sido fundamentalmente un país de periódicos. Sobre todo de algunos periódicos nacionales y progresivamente de prensa escrita en las capitales de los departamentos. Pero todos ellos tuvieron prácticamente desde la colonia y después en la independencia y el surgimiento de la república una marca indeleble: estaban asociados a la política. Esta relación entre medios y política se expresa a través de la vinculación del periodismo con la representación de los procesos políticos de la sociedad, como también con la afiliación a determinadas posturas y partidos políticos.

La asimilación del periodismo con el poder tiene raíces muy antiguas. Consiste en el apoyo de la prensa escrita a los gobiernos, su participación activa y durante años en la generación de la agenda informativa y su incidencia en la creación de la opinión pública. En general los periódicos colombianos han sido fuertemente ins-

titucionales, aunque hay algunos de ellos que han guardado una distancia más crítica e independiente. Durante décadas la agenda informativa estuvo dominada completamente por la prensa escrita, vinculada a su vez con las élites y con aquellos ciudadanos que a través de la educación tenían acceso a ella.

Al ser considerados como uno de los poderes de la sociedad, los medios quedaron involucrados de inmediato en el conflicto. Sus actores los consideraban como canales adecuados para comunicar a la comunidad sus propósitos y defender sus intereses, pero también como eventuales enemigos de su presencia en los territorios de su dominio.

La relación entre los medios y el conflicto interno colombiano ha sido estudiada desde varias perspectivas: Por una parte, desde sus operaciones de representación de la guerra, es decir, desde las maneras como han mostrado públicamente el desarrollo del conflicto. Pero por otra, desde las prácticas comunicativas y periodísticas que se generaron dentro de las salas de redacción para llevar a cabo tales operaciones.

En ambas perspectivas los medios de comunicación tuvieron incidencias claras, importantes y diferenciadas. Mientras los periódicos locales, regionales y nacionales representaban el transcurrir de la guerra a través fundamentalmente del registro noticioso, la radio se acercaba de manera más directa a los acontecimientos y las pequeñas emisoras y radios comunitarias de las regiones más asoladas por el conflicto tenían un papel de intermediación informativa mucho más próximo y comprometido que, consecuentemente, las hacía más vulnerables y arriesgadas. Las estadísticas confirman que también fueron las más golpeadas, como queda registrado en los testimonios recogidos para la elaboración de este Informe. La proximidad tenía que ver con el lugar de medios y periodistas en la comunidad local, con la confianza pública en ellos depositada y con los nexos que se tenían con los diferentes actores del conflicto. “La comunidad para él era todo. Era una obsesión ayudar a la gente”, señala una fuente del Cauca, mientras que otra recuerda:

Todo el mundo que nos encontramos dice cómo hace falta don Jota, Dios mío, este pueblo se murió, ya no hay quien nos defienda. Si necesitamos pasar una información nos cobran 15.000, 20.000. Desde que don Jota no está, así se dañen las calles o no haya energía no hay quien se queje, no hay quien nos defienda, dice la gente (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento del Cauca).

En las entrevistas realizadas, al referirse a la cobertura del conflicto las fuentes suelen distinguir entre las emisoras comerciales y las comunitarias, mientras resaltan el sentido de las emisoras locales.

Aquí se inicia la emisora comunitaria desde el seno de las organizaciones porque no había posibilidad alguna de expresar lo que estaba sucediendo. Los medios de comunicación departamentales no prestaban atención porque siempre se ha generalizado que todo movimiento que se haga de izquierda tiene que ver con la insurgencia y con el terrorismo, eso es una estigmatización que ha llevado a otro tipo de cosas. [Y más adelante anota:] El propósito único es realmente darle voz a la comunidad, que sea escuchada, visibilizar toda la problemática, darla a conocer, crear conciencia, tejido social, pensamiento colectivo, respeto de la vida, defensa del territorio en contra de las multinacionales (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento de Arauca).

Las narraciones sobre los atentados y crímenes de estos periodistas locales son piezas de una gran intensidad y fuerza. Se dice en una de ellas recogida en el trabajo de campo:

Entonces atraviesa todo el parque, va hasta la oficina del Corregidor en la otra esquina, entra y papá está frente al micrófono porque él era periodista y muy gomoso de la radio, estaba terminando el noticiero, un programa de opinión que hacía todas las mañanas. Él estaba frente al micrófono. Entonces esa persona llegó y le dijo: “Qué hubo Enrique”. Él volteó a mirar. Estaba

frente al micrófono. De una vez le pegó tres tiros desde la puerta (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento del Caquetá).

Señala otra fuente en el Caquetá:

Ya me voy aunque sea a apoyarlos con el programa y la lectura de noticias, porque imagínese él tan solo. Madrugaba y me iba con él, los dos solitos. El escribía y hacía todo el guión y por la noche revisaba las noticias, las leía y al otro día madrugaba a leerlo y a apoyarlo porque yo dije, este hombre ya quedó tan solo (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento del Caquetá).

Han sido varios los estudios que desde hace años exploraron las formas de representación del conflicto e hicieron en su momento, como se planteará en un capítulo posterior de este Informe, análisis críticos sobre la exagerada presencia del registro noticioso frente a otros géneros mucho más desvalidos e infrecuentes, el unifuentismo, es decir, la sustentación de la información de guerra en pocas fuentes, nada diversas y generalmente provenientes del gobierno o los propios actores del conflicto y la ausencia de memoria y contextos de los relatos.

Las prácticas periodísticas también han sido motivo de análisis. Sus tendencias son influenciadas por factores internos como externos. Los internos tienen que ver con el funcionamiento de los medios, es decir, dependen de factores como las obligaciones de los corresponsales, las condiciones laborales de los medios, las políticas de seguridad para quienes ejercen el periodismo, su formación y actualización, la naturaleza de la planta periodística, las posibilidades internas —económicas y editoriales— para dar tiempo suficiente para la elaboración de la investigación o para que puedan desplazarse a las zonas de los sucesos, la estructura interna de las secciones, la capacidad de trabajo integral frente a la focalización por áreas, entre otros temas. Como anota Arturo Guerrero:

[S]i bien los grupos violentos y los políticos corruptos son los responsables de buena parte de las amenazas y atentados contra comunicadores, las condiciones laborales y el sistema de consecución de avisos publicitarios son mordazas eficaces a la libertad de información. Los reporteros contratados dentro de la planta de un medio, generalmente los más pudientes, son “toderos” sin especialización que deben producir grandes cantidades de material para numerosas emisiones diarias, en horarios que no respetan la noche ni los festivos. En estas condiciones no es posible adelantar investigación ni seguimiento a las noticias, ni tratarlas como procesos. Es habitual, además que estos medios tengan definidas preferencias políticas o compromisos económicos con las fuentes. Sus periodistas comprenden que a estas “hay que hacerles pasito” o no contrariar sus intereses con la información que produzcan (Guerrero, 2010).

En las entrevistas de campo se encuentran confirmaciones a lo señalado por Arturo Guerrero.

Acá hay temas álgidos que uno podría investigar, pero a veces la obsesión lleva a los periodistas a cometer demasiados errores porque se apasionan no con la investigación sino contra el funcionario que están investigando (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento del Caquetá).

Critico mucho la manipulación de los periodistas, el chantaje que a veces hacen en el periodismo, que los intereses particulares marquen la línea del trabajo periodístico (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento de Arauca).

Continúa Guerrero:

En muchas regiones donde no hay industria y el comercio es débil, el Estado es el único anunciante fuerte, de manera que las autoridades se vuelven intocables. Ahora bien, el grueso de los comunicadores regionales carece de contrato fijo, o trabaja como

independiente. Varios tienen un periódico semanal, quincenal o mensual, o hacen un noticiero en alguna emisora de radio o canal local de televisión. En este caso opera el sistema de “cupos publicitarios”, o arrendamiento de espacios, que obliga al periodista a conseguir y contratar la pauta, al mismo tiempo que escribe y realiza sus informaciones. “En una mano uno carga la cámara y en la otra las ofertas para vender”, dicen estos periodistas convertidos en cobradores de noticias, en comerciantes de la información, en publicistas o en relacionistas públicos de los poderes que suministran los avisos (Guerrero, 2010).

“Aquí hay muchos colegas que viven de la pauta —dice una de las fuentes consultadas en Caquetá para este Informe— que tienen un ‘cupo’ y de él viven y qué pueden hacer ellos, manejar las cosas de manera que puedan tener el cupo siempre” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento del Caquetá).

Los factores externos, en los que se ha insistido en el presente Informe, tienen que ver con la ubicación social de medios y de periodistas en el conflicto y con las estrategias y práctica de los victimarios frente a ellos. Es natural que el ejercicio del periodismo se haya visto impactado por los mecanismos de presión de actores del conflicto, como la exigencia de publicación de materiales oficiales, los secuestros para enviar información, la autocensura, las presiones jurídicas a través de demandas y juicios en que resultan involucrados medios y periodistas, la estigmatización, la confección de listas, los resquemores por publicaciones hechas o por el “tono” de las notas informativas, entre muchos mecanismos utilizados.

El paso de organizaciones familiares a organizaciones empresariales, la modificación del mercado publicitario y la conformación de grupos mediáticos corporativos nacionales y regionales, son tres cambios que incidieron en el funcionamiento de los medios en las décadas del conflicto interno. La conversión en empresas transforma los procesos de elaboración de la información debido a la importancia que empieza a tener la planificación, el diseño organizacional interno, el análisis sistemático de costos y

las necesidades crecientes de inversión económica. Todos estos cambios tienen repercusiones en los modos de construir la información y en la determinación de la rentabilidad en los enfoques informativos y editoriales. Crece la importancia de las gerencias, los departamentos de mercadeo y las áreas de comercialización, y se consolidan los estudios de mercado, los mecanismos de conocimiento y acercamiento de las audiencias y los ejercicios de rediseño de los productos periodísticos. Las salas de redacción se replantean generando implicaciones sobre el perfil de editores y periodistas y la cultura periodística. La formalidad reemplaza a la informalidad, los compromisos personales se adaptan a las identidades corporativas y las agendas informativas ceden algo de su independencia a los intereses comerciales.

Los diversos estudios que se han hecho sobre la información del conflicto en los medios de comunicación colombianos muestran, en primer lugar, que la representación del conflicto ocupaba un espacio importante dentro de la agenda diaria de los medios, y con frecuencia su registro saltaba a las primeras páginas de los periódicos o a las noticias de entrada de los noticieros de televisión (véanse Rey, 1998; Rey y otros, 2003; Bonilla y García, 1988; Arenas, Rey y Cajiao, 2003).

En segundo lugar, se percibía una oficialización de la información, que se caracterizaba especialmente por la naturaleza de las fuentes y la ubicación geográfica de los temas referentes al conflicto. En el primer caso, las fuentes institucionales del Estado sobresalían ampliamente y en el segundo, Bogotá aparecía como el epicentro de los problemas. En el periodo del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el Palacio ocupó un lugar muy destacado de provisión e interpretación de la información de guerra, seguido por las fuerzas militares (ejército y policía, especialmente). Esta centralidad de la información se afirma en su ubicación en la capital. Los centros del poder administrativo son los mismos centros de la operación militar contra los actores armados ilegales, entre otros motivos, porque este primer periodo de gobierno estuvo muy marcado por las negociaciones con los grupos de autodefensas y la aprobación en el Congreso de la ley de Justicia y Paz.

Lo que llama más la atención. Sin embargo, es la gran ausencia de la sociedad en el listado de los “intérpretes” del conflicto, de por sí, muy concentrados. Fuentes como la academia, las iglesias, los sindicatos o inclusive, las víctimas, brillan por su ausencia, en un tema que precisaría con urgencia de su voz. De esta manera, la opinión se va concentrando, a medida que la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe va avanzando y va presionando la ubicación de los actores y las voces, en el lado de lo “institucional”. La polarización de “o estás conmigo o estás contra mí” rápidamente se toma el paisaje de los proveedores de información, a pesar de que el propio gobierno se ha quejado de la crítica de los medios y sobre todo de distorsiones y persecuciones al gobierno frente a temas particularmente álgidos. Se recuerdan, por ejemplo, los problemas que vivieron las revistas *Semana* y *Cambio*, al informar sobre temas del conflicto, en una dirección que no era precisamente la que deseaba el gobierno. Los altos porcentajes de aceptación y de imagen que mantuvo el Presidente Uribe Vélez en las mediciones de opinión tuvieron un efecto indudable sobre los temas de las “definiciones institucionales” y el apoyo de los medios, que llegó a su punto máximo en los episodios que llevaron al grave conflicto entre Colombia y Ecuador, por la operación militar que concluyó con la muerte de Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC.

Lo interesante es que este vacío social en la interpretación no se ha encontrado solo en la representación del conflicto, sino también en la representación de otros temas sociales. Quizá lo que se está demostrando es el poco pluralismo que tiene el periodismo colombiano y el restringido país que pasa por sus noticias. En el fondo, lo que existe es una comprensión de la sociedad bastante limitada, tanto temática como narrativa e interpretativamente.

Tanto por su cantidad, como por su función y pluralismo, las fuentes son uno de los puntos más delicados en el periodismo colombiano si nos atenemos a los estudios realizados en estos años. En cantidad, son numerosas las noticias con dos o menos fuentes y preocupantemente elevado el de las informaciones sin fuentes, o con fuentes no identificadas o parcialmente identificadas.

En cuanto a la función, los estudios muestran que las fuentes no suelen contrastar y ampliar la información, sino reiterar, es decir, cuando hablan varias fuentes, suelen hablar de lo mismo. Tal nivel de afinidad es muy sospechoso en conflictos en que las versiones pueden ser confusas o contrastantes. En cuanto al pluralismo, los niveles de diversidad son preocupantemente bajos.

Hay una consistencia entre los titulares y la información, así como entre la información y las fotografías. En los noticieros de televisión colombianos los principales asuntos de la información sobre el conflicto son política interna, derechos humanos y lo bélico-militar. En prensa escrita, el orden encontrado fue primero, lo bélico-militar, seguido de derechos humanos y política interna.

La información del conflicto es una información en que la memoria es muy frágil, más de corto que de largo plazo; se trata, entonces, de una información sobre hechos, más que sobre reacciones a los hechos o seguimiento, con niveles más grandes de similitud, que de disimilitud. Según informes realizados por el PAN (Proyecto Antonio Nariño), en cuanto a los contextos de la información, en los noticieros de televisión, 50 por ciento aparece sin contexto, 38 por ciento señalan los antecedentes del hecho, 15 por ciento las relaciones con otros hechos y 3 por ciento las consecuencias del hecho. Y en cuanto al epicentro de la información, mientras en el consolidado general de los noticieros de televisión el 43 por ciento lo ocupa la geografía rural-municipal-regional, en los regionales es el 68 por ciento y en los noticieros nacionales baja al 37 por ciento. En el noticiero local, el epicentro es Bogotá-ciudades capitales, que concentra el 51 por ciento de la información. En la prensa escrita, el primer lugar lo tiene la no identificación geográfica, seguida de lo rural y municipal, Bogotá y las ciudades capitales con porcentajes muy similares.

En materia de géneros periodísticos, el panorama tiende a ser desolador. El registro noticioso es el género por excelencia, y esto es fácilmente explicable. Sin embargo, lo preocupante no es lo que existe, sino lo que no existe. Géneros como la crónica, la entrevista, el informe especial o el perfil, tienen una presencia muy baja en los periódicos y ratifican el fenómeno de desplazamiento de

estas narrativas hacia otros medios, como las revistas, los libros periodísticos y, más recientemente, los medios digitales (PAN, 2005).

Una de las grandes preocupaciones tiene que ver con la manera de representar a las regiones y el conflicto en los medios nacionales. La crítica frecuente cuando se analiza el tema en las regiones es la ausencia en los medios comerciales de una visión ajustada de las regiones y, por otra parte, de una situación muy angustiosa de quienes ejercen el oficio del periodismo en el ámbito regional.

El periodismo, especialmente el nacional, tiene una versión de la región que reproduce las comprensiones alejadas del centro, en la que se resaltan como objeto de noticia determinados problemas, con una mirada coyuntural más que de los procesos, las especificidades y los contextos regionales.

Existen, además, unas relaciones muy complicadas entre editores centrales y regionales y, además, unas realidades muy difíciles para el ejercicio regional del periodismo, especialmente en la cobertura del conflicto, puesto que allí se viven más directamente —y más desprotegidamente— las presiones de los actores armados ilegales que actúan en sus municipios y regiones. Análisis de las prácticas periodísticas, como el que ha hecho la periodista Patricia Gómez en su libro “La guerra: una amenaza para la prensa” (Medios para la Paz, 2004), ratifican estas dificultades en el día a día del ejercicio del oficio.

Por eso es fundamental una reconsideración de la perspectiva de región que tienen los medios comerciales nacionales, y de la situación de las y los periodistas locales, ubicados en el ojo de la confrontación. En ocasiones, los problemas no provienen solamente de los actores armados ilegales, sino también de las relaciones con la fuerza pública, un tema en el que ya hay debates muy interesantes entre periodistas y militares.

Una de las discusiones más frecuentes es la referida a la propiedad de los medios. El panorama en este campo ha cambiado no una, sino varias veces en estas décadas, aunque estas variaciones no siempre han modificado los grandes problemas que lo atraviesan. Los dos grandes periódicos nacionales, *El Tiempo* y *El Espectador* han cambiado de dueños.

El Tiempo fue inicialmente vendido al grupo Planeta de España, quien después de algunos pocos años lo vendió a Luis Carlos Sarmiento Angulo, un inversionista colombiano con grandes intereses, particularmente en el sector financiero. La familia Santos, durante años propietaria del periódico, salió completamente de su propiedad. Sus últimas decisiones con relación a la cobertura del conflicto fueron el seguimiento de la información del periódico en esta materia, los cambios en la llamada Unidad de Paz y la publicación de un Manual específicamente dedicado al manejo de la información de guerra.

El Espectador, abrumado por los problemas económicos y la obsolescencia tecnológica a la que lo condujo entre otros factores el cerco publicitario impuesto por el Grupo Grancolombiano y la persecución emprendida por el narcotráfico, fue vendido al Grupo Santodomingo, que a su vez tiene la propiedad de uno de los dos canales de televisión que existen en el país —Caracol Televisión— y la recién creada emisora de radio Blue.

El grupo PRISA de España es a la vez dueño de la cadena de radio Caracol, que le fue vendida por el Grupo Santodomingo; y la familia Ardila Lülle es desde hace años dueña de RCN Televisión y de la cadena radial del mismo nombre. Los periódicos regionales tienen, a su vez, una estructura de propiedad concentrada en familias que durante años han sido sus propietarios, muchas de las cuales siguen teniendo el dominio accionario. El grupo de revistas de *Semana* pertenece a Felipe López Caballero, hijo del expresidente Alfonso López Michelsen.

La propiedad de los medios de comunicación en Colombia está atravesada por algunos problemas centrales: la concentración, que hace que sean pocos los que tienen su dominio, que además se ha mantenido durante años; la tendencia a diversificar dicha propiedad, una vez van apareciendo en el horizonte otros medios y se va comprobando su eficiencia tanto económica como de convergencia económica. Esta diversificación va concentrando no solo la propiedad sino también la producción de opinión e información.

Entretanto estaban ocurriendo también procesos muy interesantes en la información sobre el conflicto, que Jorge Iván Bonilla

y Camilo Tamayo resaltan en su libro “Las violencias en los medios, los medios en la violencia” cuando escriben:

[T]rabajos como los de Rey (1998c), Barón (2000), García Romero (2001) y Estrada (2001) aportan elementos interesantes para analizar la naturaleza de las representaciones periodísticas del conflicto armado. A partir de sus análisis se puede deducir que la fascinación que producen “los hechos de guerra” en las agendas mediáticas obedece a que estos acontecimientos están asociados a valores-noticia que privilegian el drama, la tragedia, la novedad, la espectacularidad, el antagonismo y el heroísmo. Narrativas frente a las cuales los “hechos de paz” viven en un constante opacamiento debido a que no están relacionados con lo insólito, dramático e impactante (Bonilla y Tamayo, 2007, página 28).

Sin embargo el panorama no quedaría completo si no se resaltara también el papel que el periodismo colombiano ha tenido en la investigación, análisis y difusión de muchos acontecimientos del conflicto, que sin su intervención habrían pasado total o relativamente inadvertidos como el ascenso paramilitar, la violencia en las regiones, el crimen organizado, los vínculos entre política y paramilitares, la corrupción, entre otros. Las dinámicas de visibilidad – invisibilidad han sido constantes en el periodismo de estos años.

Uno de los hechos más importantes en el paisaje mediático colombiano de este periodo fue la aparición y el fortalecimiento de medios locales: pequeños periódicos y semanarios, emisoras comunitarias de radio y televisiones locales. Los medios ciudadanos, vinculados con el liderazgo y la política locales, han tenido una presencia muy importante de la iglesia católica, de colectivos comunitarios y organizaciones sociales. Con una infraestructura pequeña y grupos de redacción relativamente formados, estos medios empezaron a aparecer en muchas zonas del país, entre ellas las que tenían procesos de violencia promovidos por los actores armados. Cerca de medio millar de emisoras de radio crecieron por toda la geografía nacional, en medio de dificultades jurídicas, problemas financieros y tropiezos tecnológicos.

En el panorama de los medios de comunicación colombianos, los medios locales componen un mapa alterno con una identidad propia y diferenciada. Y si se trata del paisaje de estos medios en las zonas del conflicto, sus características se hacen aún más contrastantes y precisas.

La tradición de los medios locales, también llamados medios comunitarios o ciudadanos, ya tiene varias décadas. Colombia es uno de los países de América Latina en que ha existido un crecimiento más sostenido de estos medios. El aumento de los medios locales, primero emisoras ciudadanas, después canales locales de televisión y más recientemente medios digitales, se explica por el dinamismo de sus promotores, casi siempre instituciones u organizaciones de la sociedad civil, su conexión estrecha con procesos locales, su ubicación en comunidades en las que llenan un vacío de información y entretenimiento y las transformaciones del marco jurídico que les abrió espacios de participación —no siempre suficientemente democráticos, como sucede con las reglamentaciones de la radio y la televisión—. Los medios digitales se han incrementado recientemente por los cambios tecnológicos que se están viviendo en el mundo y en el país.

Pero también los medios locales se han ubicado en una orilla diferente a los medios comerciales, definiendo otro lugar de la comunicación y la producción simbólica. Se trata no solamente de un “lugar” tecnológico o jurídico, sino sobre todo de un lugar de enunciación social. En general, los medios generan procesos de relación con las audiencias, desde afiliaciones afectivas hasta interacciones que buscan refrendar las esperanzas y las demandas de la gente. Los medios locales acentúan estas relaciones y producen otras, gracias a su cercanía, al lenguaje que utilizan, a la proximidad de sus líderes y lideresas con la comunidad y, sobre todo, a la composición de su programación y su papel social.

En los medios comerciales se buscan identificaciones entre contenidos y audiencias, aunque están sobre todo determinadas por las exigencias del mercado; en los medios locales, estas identificaciones son mucho más densas y están acompañadas de su propia versión del dinamismo de los mercados locales, como se observará más adelante.

En muchas regiones del país, los medios locales se han convertido en el único canal de comunicación de comunidades aisladas y desprotegidas. Una comunicación que va desde el reporte de sus viajes o de sus novedades más personales, hasta la información sobre un país que en ocasiones resulta tan lejano (y abstracto) como el mundo.

Pero las emisoras comunitarias o los medios ciudadanos tienen un conjunto de características que resaltan su papel dentro del conflicto, y más concretamente dentro de las comunidades en las que adquieren sentido (consultar trabajos como Pereira, 2000; Ángel y otros, 1997; Bayuelo y otros, 2008; Cadavid y otros, 2007). Clemencia Rodríguez ha identificado algunos de sus rasgos: la conformación de esferas públicas locales en las que se pueden expresar y encontrarse diversas identidades; el fortalecimiento de lo local en términos de territorio y de cultura, que entre otras cosas se manifiesta en la búsqueda de estéticas y narrativas locales, formatos propios y lenguajes cercanos a la comunidad. “La insistencia en la gobernabilidad —escribe— y la transparencia. Los medios comunitarios se están convirtiendo en veedores de lo público, monitorean las administraciones municipales, los servicios públicos, los presupuestos, los contratos” (Rodríguez, 2006). A todo ello se agregan otros dos rasgos: la insistencia en que se construya desde la diversidad y la inclusión de identidades diferentes y la insistencia en que se encuentren formas no violentas de lidiar los conflictos. Señala un comunicador del Proyecto NASA para este Informe:

En medio del conflicto hemos trabajado por construir la paz, a pesar del conflicto a través de la radio tratamos de sensibilizar a los jóvenes sobre cómo organizarnos, hacer asambleas (...) [y más adelante explica que] [i]nformar lo que acá se hace con relación a los derechos humanos, así como las cosas buenas, por ejemplo, los trabajos comunitarios. La emisora ha sido muy útil para dar a conocer todo lo que acá se hace a través de los cabildos, del proyecto NASA, de las Juntas (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento del Cauca).

En la introducción al libro “Lo que le vamos quitando a la guerra: Medios ciudadanos en contextos de conflicto armado en Colombia”, Clemencia Rodríguez escribe:

Colombia es pionera a nivel mundial en comprender el papel que puede cumplir un medio ciudadano en un contexto de conflicto armado. ¿Por qué Colombia? Primero, porque hace parte de América Latina, la región del mundo con más experiencias y conocimiento acumulado desde los 1970s sobre medios comunitarios/alternativos/ciudadanos. Y segundo, porque en Colombia existe uno de los conflictos armados más viejos del continente. Es en la intersección entre estos dos elementos que comprendemos el lugar de Colombia: una larga y profunda trayectoria teórica y práctica en el área de medios ciudadanos (compartida con toda América Latina) cruzada con la experiencia del conflicto armado, elemento único del país (Bayuelo y otros, 2008).

Este papel protagonista y diferente de los medios ciudadanos atrajo la atención de los actores del conflicto colombiano. Tenían una cercanía con las comunidades que no lograban los medios regionales o nacionales comerciales, mantenían una continuidad de la información sobre lo que estaba ocurriendo en territorios que se veían muy lejanos y en los que las noticias eran episódicas, contribuían a la expresión de la comunidad y sobre todo a conectar lo que estaba pasando en el conflicto con su vida cotidiana y facilitaban escuchar las voces de las víctimas que en otros medios se volvían invisibles. Estratégicamente se les veía como medios que podían divulgar sus puntos de vista y que generaban información que podría estrechar las relaciones entre su acción y las afinidades comunitarias. Los problemas también se vivieron al interior de los medios comunitarios: falta de rigor, lenguaje comprometido con algunos de los actores, sesgos ocasionados por los cupos o la orientación de la pauta oficial o restricciones en la agenda, son algunos de ellos.

Uno de los temas importantes dentro de los cambios de los medios de comunicación fue la paulatina profesionalización del ofi-

cio periodístico que se debió a la transición hacia empresas de las organizaciones que antes tenían una estructura de funcionamiento familiar, a la aparición de facultades y escuelas de formación en las universidades regionales, junto con el relevo de periodistas empíricos; y a las exigencias de lectores y audiencias, que aumentaron sus demandas de calidad hacia los medios.

La aparición de nuevos temas en la agenda informativa de los medios o la especialización cada vez mayor de algunos de ellos (salud, temas ambientales, entretenimiento, economía), disminuyó la excesiva concentración mediática en lo político y a la vez exigió la aparición de secciones y periodistas con otros intereses y entrenamientos.

La conformación de grupos mediáticos regionales, el debilitamiento de las asociaciones de periodistas y el surgimiento de proyectos periodísticos dedicados a fortalecer la calidad de su ejercicio, especialmente en las regiones, son tres dimensiones muy importantes en la transformación del paisaje mediático colombiano.

Las regiones habían tenido medios como periódicos y emisoras de radio, pero no grupos mediáticos que por una parte, aglutinaran diversos medios en una operación de convergencia; y, por otra, que agruparan a medios de diferentes regiones del país en un mismo emprendimiento corporativo. Los periódicos nacionales tuvieron grandes dificultades para encontrar versiones regionales viables, mientras que los regionales lograron posicionarse en sus respectivas zonas territoriales. Eso explica que, dentro de las estrategias de silenciamiento de algunos de los actores ilegales, las columnas de opinión del periodismo local o los programas de radio realizados en la región fueran considerados como ataques directos que no podían soportar. Varios de estos columnistas o directores de programas de radio fueron asesinados, sobre todo por los narcotraficantes y más tarde por las asociaciones criminales en las que participaban políticos corruptos de las regiones. Algunos periódicos regionales, como *Vanguardia Liberal* o *El Colombiano*, fueron atacados en sus periodistas y sus infraestructuras, mientras que periódicos nacionales como *El Espectador* sufrieron una intervención planeada e intencional de parte de sectores delincuenciales y mafiosos.

La organización de periodistas —concentrada sobre todo en aquellos que trabajaban en medios comerciales— se fue debilitando progresivamente. Entretanto se fortalecían los gremios que agrupaban a los periódicos, las agencias de publicidad y los medios de comunicación electrónicos. El debilitamiento de los primeros significó una zona más de indefensión para quienes ejercen el oficio, mientras que el fortalecimiento de los segundos consolidó la presencia de los medios especialmente en sus requisitorias jurídicas, económicas y tecnológicas. Sin embargo, es importante resaltar la labor de los gremios en cuanto al seguimiento y crítica de la violencia contra periodistas, ya que como se observará en uno de los capítulos finales de este informe, se involucraron en proyectos para la defensa de la libertad de expresión, la calidad informativa y la protección.

Uno de los hechos más interesantes fue el cambio en el tipo de organización y en el reciclaje de los liderazgos. Todo ello profundamente unido a la modificación de los enfoques, y sobre todo las agendas programáticas de la movilización de las y los periodistas. En varias zonas del país aparecieron colectivos de periodistas, plataformas y mesas de comunicación en que la organización partió más de las bases, redefinió los objetivos de las luchas, buscó otras alianzas y enfrentó de manera directa la relación de la comunicación y la información con el conflicto armado.

Paralelamente a todo ello surgieron proyectos periodísticos ejemplares que responden a otras dinámicas, otros tiempos y otras comprensiones de la comunicación y el periodismo, como la Fundación para el nuevo Periodismo Iberoamericano, hoy Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Medios para la paz, el proyecto Antonio Nariño (PAN), FENCOLPER, el movimiento de Comunicación y Desarrollo, el programa de Periodismo Responsable, Consejo de Redacción, el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), entre otros. También han tenido un protagonismo importante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Instituto de Prensa y Sociedad (Iips), Reporteros sin fronteras, la Deutsche Welle, la Fundación Friedrich Ebert y especialmente su Centro de Competencias en Comunicación (C3), el Comité de

Periodistas de Nueva York (CPJ), la Fundación Konrad Adenauer, la USAID, la AECID, la Cooperación de gobiernos como Suecia, Noruega, Francia, el Reino Unido, el Reino de los Países Bajos, el PNUD y la Unión Europea. Su ingente acción será analizada más adelante en este Informe, no solo como una tarea necesaria de la memoria sino por su potencia pedagógica, es decir, por su aporte a la comprensión de las experiencias que, construidas desde países en conflicto, pueden ayudar a encontrar caminos transitables y efectivos a otras sociedades con problemas similares.

4

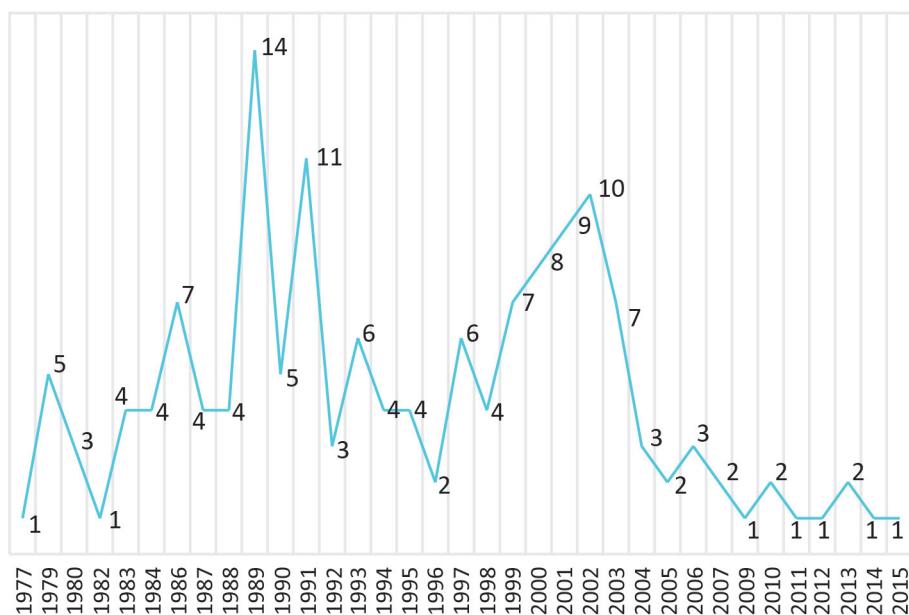
LOS VOLCANES EN ERUPCIÓN. LAS REGIONES COMUNICATIVAS Y LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

En Colombia el conflicto armado interno se ha vivido intensamente en las regiones. Basta acudir a las estadísticas de los asesinatos para comprobar que la violencia contra periodistas se ubica en determinadas regiones según periodos históricos específicos. Es interesante contrastar el desarrollo general del conflicto en el país y sus regiones, con los sucesos que vivió el periodismo entre 1977 y 2015. Los movimientos estratégicos de los principales actores, sus propósitos dentro de la confrontación, su comprensión de la importancia de la opinión pública local, regional, nacional e incluso internacional y la articulación de la información con sus objetivos guerreros, son fundamentales para explicar lo que sucedió en la violencia contra medios y periodistas. Entre 1977 y 1985, el mayor número de asesinatos de periodistas se produjo en el Valle del Cauca; entre 1986 y 1995, las dos principales regiones de violencia contra periodistas fueron Antioquia y nuevamente el Valle del Cauca, seguidas por Bogotá, Santander, Caquetá, Córdoba, Norte de Santander y Arauca. Entre 1996 y 2005, retorna el Valle de Cauca al primer lugar, seguida por Santander y Magdalena, Tolima, Bolívar y Huila.

En el total, las cinco regiones colombianas con más asesinatos son Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Bogotá y Caquetá.

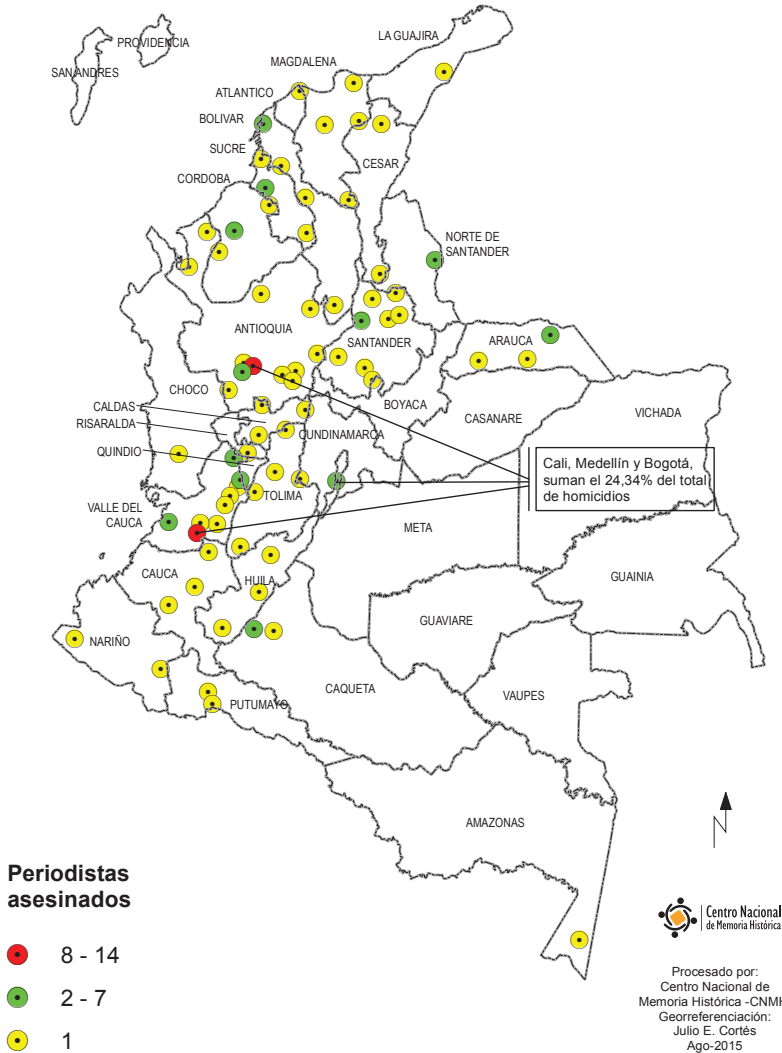
Cali, Medellín, Bogotá, Florencia, Buenaventura, Cúcuta, Cartago y Montería, fueron las ciudades en que se concentraron los mayores porcentajes de asesinatos de periodistas, particularmente en las tres primeras ciudades capitales. Pero esta geografía evidente no puede ocultar el paso de la muerte por regiones, pequeños municipios y zonas rurales del país.

Gráfico 1. Línea de número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por años. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)



Fuentes: CNMH, 2015; FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) Estadísticas; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Mapa 2. Referencia geográfica de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)



Fuentes: FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) Estadísticas; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH. Nota 1: Existen asesinatos que la FLIP no considera que fueron por razones de oficio. Nota 2: Los 152 casos que se registran incluyen casos del libro “La censura del fuego” (González y Lozano, 2004).

Lo que nos demuestra esta georreferenciación es la presencia de las grandes ciudades y de los grandes medios en una parte de la violencia contra periodistas, pero sobre todo una expansión del crimen en aquellas regiones y pequeñas localidades en las que el conflicto se iba extendiendo de acuerdo a la estrategia de los actores de la guerra.

La agresión contra periodistas de medios reconocidos buscaba visibilidad más allá de los límites territoriales, impacto en los centros del poder, silenciamiento de voces importantes e incómodas y un efecto de amedrentamiento con repercusiones en otros medios y en general en toda la sociedad en que figuras del periodismo eran valoradas y apreciadas. En esta modalidad se inscriben, entre otras, la muerte de Diana Turbay o los asesinatos de Jaime Garzón y de Jorge Enrique Pulido, como también las amenazas que hacen salir al exilio a periodistas de reconocidos medios nacionales, sobre todo de prensa y televisión.

Las otras agresiones se dirigían al centro del dominio o de la confrontación de los actores armados, y tenían un radio de acción mucho más concentrado y local. Se buscaba incidir directamente en la información de proximidad, es decir, en aquella que concernía exclusivamente a la zona en que sucedían los hechos, fueran masacres, actos de corrupción o confrontaciones bélicas. Pero también se ocupaban de periodistas con liderazgo local, personas que con su reconocimiento en la sociedad se convertían en contradictoras y en obstáculos para el ejercicio omnímodo de su poder.

Si se observa ya no la geografía de las regiones donde ocurrieron los asesinatos, sino la geografía de los medios, se pueden sacar otras conclusiones complementarias. Por una parte, el mayor número de crímenes sucedió en el territorio de los pequeños medios y, por otra, fueron los medios de cercanía los que sufrieron en mayor medida el impacto intencionado de la violencia.

Hasta el 2015, 21 periodistas que trabajaban en grandes medios de comunicación fueron víctimas de asesinato, es decir, un poco menos del 15 por ciento de todas las víctimas, mientras que la cifra para quienes trabajaban en medios pequeños es de 112.

Cuando se analiza la pertenencia a tipo de medio, se constata que las personas asesinadas han sido por igual de prensa y radio con porcentajes que superan ampliamente a la televisión. Y se trata de publicaciones escritas, sobre todo regionales y locales y emisoras de radio, locales y comunitarias.

Cuadro 23. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de victimarios. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Victimarios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1977-1985	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1986-1995	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1996-2005	Periodos 5 años		Periodo 10 años 2006-2015	Total de víctimas de asesinato por presunto victimario 1977-2015	Asesinatos atribuidos a grupos guerrilleros
	1977-1980	1981-1985		1986-1990	1991-1995		1996-2000	2001-2005		2006-2010	2011-2015			
Guerrilla ELN	0	0	0	0	4	4	1	0	1	0	0	0	5	23
Guerrilla FARC	0	0	0	0	4	4	2	6	8	0	0	0	12	
Guerrilla EPL	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	
Guerrilla (sin identificación de grupo)	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	3	
Paramilitarismo	0	0	0	4	1	5	7	7	14	2	1	3	22	
Fuerza Pública (Policía y Ejército)	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	
Bandas criminales	1	1	2	3	0	3	0	1	1	0	0	0	6	

Narcotráfico	2	1	3	16	3	19	3	2	5	0	0	0	27	
Corrupción política	2	3	5	0	4	4	5	8	13	5	3	8	30	
Autor material (Autor identificado)	0	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	
Desconocidos	2	2	4	11	9	20	4	7	11	1	1	2	37	
Total según periodos de 5 años	9	9		34	28		27	31		8	6			
Total según periodos de 10 años			18			62			58			14		
Total en el periodo del Informe													152	

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 24. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, por regiones. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Departamento	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1977-1985	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1986-1995	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1996-2005	Periodos 5 años		Periodo 10 años 2006-2015	Total de víctimas de asesinato por Departamento 1977-2015
	1977-1980	1981-1985		1986-1990	1991-1995		1996-2000	2001-2005		2006-2010	2011-2015		
Amazonas	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Meta	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cundinamarca	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
Chocó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Atlántico	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Risaralda	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Guajira	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Nariño	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2
Putumayo	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
Quindío	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3
Cesar	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	3
Caldas	2	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4
Cauca	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	4
Huila	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	4

Norte de Santander	1	0	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	5
Sucre	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	1	1	5
Tolima	0	0	0	1	0	1	1	3	4	0	0	0	5
Córdoba	0	0	0	2	2	4	0	0	0	2	0	2	6
Arauca	0	0	0	0	3	3	1	2	3	0	0	0	6
Bolívar	0	0	0	0	1	1	1	3	4	1	0	1	6
Magdalena	0	0	0	1	2	3	2	2	4	0	0	0	7
Caquetá	0	0	0	1	2	3	2	1	3	0	1	1	7
Bogotá	0	1	1	4	1	5	2	0	2	0	0	0	8
Santander	0	0	0	3	2	5	4	3	7	0	0	0	12
Antioquia	0	1	1	12	3	15	2	0	2	0	3	3	21
Valle del Cauca	2	5	7	8	4	12	2	8	10	2	1	3	32
Total según periodos de 5 años	9	9		34	28		27	31		8	6		
Total según periodos de 10 años			18			62			58			14	
Total en el periodo del Informe													152

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Ha sido así por el tipo de presencia territorial de las guerrillas, el desarrollo de la embestida paramilitar, los enclaves y las rutas del narcotráfico, las tensiones alrededor de la posesión de la tierra y los flujos colonizadores. También por el desarrollo de la política local, la debilidad del Estado, las redes clientelares y la poderosa atracción de las fuentes de dinero representadas por el latifundio, la explotación y distribución del petróleo, la agroindustria y más recientemente la enorme diversificación de las posibilidades de la minería extractiva legal e ilegal. Uno solo de estos fenómenos bastaría para convertir a una región en un volcán. Pero en el caso colombiano, todos estos factores se encontraron en espacios geográficos concentrados e intercomunicados, así como en periodos históricos que transformaron a las regiones —particularmente a algunas de ellas— en verdaderos polvorines.

Como escribe Fernán González en su libro “Poder y violencia”:

La continuación del conflicto en antiguas regiones y su expansión a nuevas conformaron dos grandes escenarios macrorregionales de guerra: el del norte del país, donde los paramilitares impusieron su hegemonía, y el del suroccidente, controlado tradicionalmente por las FARC. Estos dos escenarios de la confrontación desembocarían en la consolidación de varios corredores geográficos, que agrupaban regiones contiguas que eran centrales en los desenvolvimientos militares y económicos de la guerra (González, 2014).

Estas dos regiones a las que alude González son también las dos grandes macrorregiones en las que se producen más asesinatos contra periodistas, aunque hay otras en las que, como se estudiará con mayor detalle más adelante, la gravedad de la situación ha sido profunda y duradera. Por ejemplo la de Arauca, los Llanos Orientales, Antioquia y Santander, regiones sobre las que se encuentran informes especiales, realizados en buen momento por la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa).

Y en medio de esta red de volcanes en erupción, estaba el ejercicio del periodismo regional.

El periodismo escrito colombiano tuvo manifestaciones regionales que, aunque efímeras y limitadas, fueron creando una opinión pública local. Anota el historiador Eduardo Posada Carbó:

Sin lectores y sin lectores que compren cualquier aventura periodística está sujeta a una vida pasajera. Así lo entendieron quizás quienes en 1812 decidieron publicar un periódico bajo el nombre de *El Efímero*. Y efímera fue la vida de la gran mayoría de periódicos que se fundaron en el país a lo largo de todo el siglo XIX (Posada Carbó, s.f.).

El mismo Posada Carbó resalta el papel de la prensa escrita en la construcción de la democracia en asuntos como el desarrollo de los partidos, las tareas electorales, la formación de la opinión pública y la existencia de una ciudadanía crítica del comportamiento de los gobiernos; pero también algunas voces desde la prensa “fueron responsables de las encrispadas atmósferas de opinión que condujeron a las confrontaciones sectarias y a la violencia”.

Unos periódicos más que otros sufrieron internamente las consecuencias del conflicto. *El Espectador* fue el periódico nacional más perseguido y con mayores consecuencias sobre la vida de sus periodistas, pero también periódicos regionales como *El Colombiano* de Medellín, *Vanguardia Liberal* de Bucaramanga, *Diario de Occidente* de Cali, *La Patria* de Manizales, *La Opinión* de Cúcuta, entre otros, vivieron experiencias traumáticas y estremecedoras.

Pero cuando se recorre en Colombia la geografía de la violencia contra periodistas, van emergiendo pequeños proyectos de prensa escrita que subsistían con dificultad, salían cada vez que se podía, estaban sostenidos en redacciones muy pequeñas o unipersonales y se mantenían con la pauta local o con la exigua inversión de los dineros de sus dueños. Eran experiencias de información concentradas en pequeños municipios, periódicos de seguimiento y denuncia de los sucesos locales y en algunos casos publicaciones humorísticas o satíricas que hacían las delicias de unos y las iras de otros.

Los asesinatos de periodistas y propietarios de estos pequeños medios asestó un golpe mortal también al propio medio y a

la posibilidad de información en zonas del país que terminaron huérfanas de la palabra y sumidas en el silencio. En un esfuerzo necesario de memoria del periodismo colombiano, deberían estudiarse juiciosamente, rescatando las pocas huellas que quedan de ellos. El cuadro 26 nos presenta algunos de sus dicientes nombres.

Cuadro 26. Lista de medios de prensa pequeños y locales donde trabajaban periodistas víctimas de asesinato en Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Medios pequeños y locales de prensa	Tipo de medio	Ciudad	Departamento
Diario El Chanchullo	Prensa	La Dorada	Caldas
Revista Milla Deportiva	Prensa	Maicao	Guajira
Semanario La Razón	Prensa	Sevilla	Valle
Diario La Batalla	Prensa	Buenaventura	Valle
El Informador	Prensa	Santa Marta	Magdalena
Agencia Slide Comunicación	Prensa	Medellín	Antioquia
El Cronista Demócrata	Prensa	Medellín	Antioquia
Periódico regional El Tabloide	Prensa	Tuluá	Valle
Radar Colombiano	Prensa	Cali	Valle
Concordia Fronteriza	Prensa	Arauca	Arauca
Diario La Opinión del Magdalena Medio	Prensa	Barrancabermeja	Santander
Diario del Otún	Prensa	Cartago	Valle
Semanario El Tabloide	Prensa	Cali	Valle
El Informador Socioeconómico	Prensa	Armenia	Quindio
Rondando Los Barrios	Prensa	Girardot	Cundinamarca
El Marqués	Prensa	Armenia	Quindio

El Pilón	Prensa	Valledupar	César
Sur 30 días	Prensa	Banco	Magdalena
Magdalena 30 días	Prensa	Banco	Magdalena
El Tangente	Prensa	San Luís	Tolima
Usocuoello al día	Prensa	San Luís	Tolima
Señal San Luis	Prensa	San Luís	Tolima
Periódico Apocalipsis	Prensa	Magangué	Bolívar
Semanario Voz	Prensa	Tumaco	Nariño
Horizonte Sabanero	Prensa	Sabana de Torres	Santander
El Nuevo Día	Prensa	Roncesvalles	Tolima
Pregón del Pacífico	Prensa	Yumbo	Valle
Chocó 7 Días	Prensa	Istmina	Chocó
Extra del Quindio	Prensa	Armenia	Quindio
29 medios pequeños y locales de prensa			

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 27. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tipo de medios de comunicación. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Tipo de medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1977-1985	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1986-1995	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1996-2005	Periodos 5 años		Periodo 10 años 2006-2015	Total de víctimas de asesinato por tipo de medios 1977-2015
	1977-1980	1981-1985		1986-1990	1991-1995		1996-2000	2001-2005		2006-2010	2011-2015		
Prensa escrita	3	4	7	18	11	29	9	7	16	1	2	3	55
Radio	3	2	5	7	13	20	9	15	24	6	2	8	57
Televisión	0	0	0	3	1	4	7	6	13	0	0	0	17
Radio y televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Prensa escrita y radio	2	2	4	5	1	6	0	1	1	1	0	1	12
Agremiaciones	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Freelance	1	0	1	0	2	2	2	0	2	0	0	0	5
Voceador	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	3
Total según periodos de 5 años	9	9		34	28		27	31		8	6		
Total según periodos de 10 años			18			62			58			14	152

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Sin embargo, si se recorre el panorama de la violencia contra periodistas, surgen los nombres no siempre conocidos de pequeños emprendimientos periodísticos —periódicos, semanarios, revistas—, que durante este periodo experimentaron el asesinato de sus directores y periodistas.

En Colombia, la radiodifusión se inició a finales de la década de 1920. La HJN funcionó en los sótanos del Capitolio Nacional y dio origen a la Radio Nacional de Colombia. En 1929, Elías Pellet Buitrago fundó la emisora HKD con emisiones en la onda corta que posteriormente se llamaría “La Voz de Barranquilla”, y el gobierno otorgó permisos temporales a otras dos emisoras: en Bogotá a Gustavo Uribe para la emisora “HKB La Voz de Bogotá” y en Tunja a Pompilio Sánchez para “Radio Boyacá”. Estas tres emisoras de carácter comercial obtuvieron su licencia oficial en 1930. Simultáneamente en Manizales, Enrique Ramírez Gaviria importó un transmisor y por medio de altoparlantes ubicados en los principales lugares de la ciudad, transmitió la campaña política del Presidente Enrique Olaya Herrera.

El 9 de septiembre de 1931 nació en la capital caldense “Radio Manizales” y, más tarde, “Ecos de Occidente”. En la misma época se fundó en Bogotá la emisora “La Voz de la Víctor”, propiedad de Manuel Gaitán y en Medellín Alfredo Daniels montó un transmisor de onda corta con 50 vatios de potencia, el cual salió al aire con el prefijo HKO y que en 1935 se denominó “La Voz de Antioquia”.

En la casa de Julio Bernal, en Bogotá, funcionó desde 1932 la emisora “Radio Santa Fe”, que desde su origen se orientó hacia la música popular y la música colombiana. Durante este mismo año nació la “Colombia Broadcasting” de los hermanos Alford, que posteriormente se llamó, en 1935, “Emisoras Nueva Granada”.

En Cali se inicia “La Voz del Valle”, en Bucaramanga la base de “Santander Broadcasting” que en 1936 se llamaría “Radio Santander” y dio pie al nacimiento de “Radio Bucaramanga”, mientras que en octubre de 1933 se funda en la ciudad de Cúcuta “La Voz de Cúcuta”.

En 1940 surgieron “Radio Continental” en Bogotá y las cadenas “Azul Bayer”, originada en Nueva Granada y retransmitida por las

principales emisoras del país tres veces por semana durante media hora, también la Cadena “Kresto” con programas nacionales y 23 emisoras enlazadas que presentaban a los cantantes latinoamericanos más importantes del momento. Como competencia surgió en 1941 la cadena “Bolívar” en Medellín. Estas tres cadenas finalmente desaparecieron en 1941 por la falta de apoyo comercial.

El 9 de abril de 1948, el Gobierno, a raíz de hechos políticos, decidió suspender todas las licencias de las emisoras y de los locutores, otorgando permisos provisionales, lo que propició el surgimiento de la Asociación Nacional de Radiodifusión (ANRADIO), que obligaba a todas las radiodifusoras a afiliarse con el fin de obtener el restablecimiento de sus licencias.

El 11 de septiembre de 1948 se inauguró en Bogotá “Emisoras Nuevo Mundo” y es así que por esa misma época la sociedad propietaria de “La Voz de Antioquia” compra el 50 por ciento de “Emisoras Nuevo Mundo”, dando el inicio de la Cadena Radial Colombiana S.A. (Caracol), fundada oficialmente el 2 de septiembre de 1949, con una transmisión desde el Teatro Capitol de Bogotá.

A fines de los setenta, y en las décadas posteriores, se afianzó en el país un movimiento de radios comunitarias o ciudadanas que llegaron a superar el medio millar de emisoras distribuidas a través de todo el paisaje nacional. Muchas de ellas, ubicadas en las zonas del conflicto, con una potencia de transmisión reducida y parrillas de programación en que la información local es importante, se han ganado la simpatía de la audiencia que las apoya firmemente. Sostenidas por comunidades organizadas, iglesias, organizaciones no gubernamentales, colectivos comunitarios y políticos, subsisten a través de la pauta local que proviene de pequeños negocios, subsidios de autoridades locales y de las entidades a las que pertenecen.

Los medios comunitarios se han desarrollado en el contexto de un conflicto armado cuyo centro de operaciones se da justamente en las comunidades más alejadas que es donde la radio comunitaria es el principal medio de comunicación. Esto ha llevado al asesinato de varios directores de radios comunitarias por

lo menos 4 en los últimos 10 años, la amenaza contra decenas de directores, periodistas y productores y el desplazamiento de otros tantos. La presión de los grupos y la falta de presencia efectiva del Estado han generado la práctica recurrente de auto censura y la proliferación de presiones y amenazas (Beltrán, 2014).

Cuadro 28. Emisoras de radio según las ciudades de residencia de periodistas víctimas de asesinato en Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Ciudad (Departamento) a la que pertenecían los periodistas asesinados	Emisoras de radio
Arauca (Arauca)	Meridiano 70
Armenia (Quindío)	Cadena Súper
Barrancabermeja (Santander)	Calor Estéreo, Radio Barrancabermeja
Barranquilla (Atlántico)	Radio revista deportiva Olímpica, Emisoras ABC
Bogotá	Radionet Caracol
Bolívar (Cauca)	Caracol Radio
Bucaramanga (Santander)	Radio Metropolitana
Buenaventura (Valle)	Emisora Mar Estéreo
Buga (Valle)	RCN Radio
Cali (Valle)	Policía Nacional, Freelance
Caloto (Cauca)	Radio Catamat
Carmen de Bolívar	95,5 Estéreo
Cartagena (Bolívar)	Radio Vigía Todelar
Cartago (Valle)	Ondas del Valle
Cúcuta (Norte de Santander)	Radio Guaymaral, Radio Lemas, Radio Punto
Ebéjico (Antioquia)	Galaxia Estéreo
El Doncello (Caquetá)	Linda Estéreo
Florencia (Caquetá)	La Voz de la Selva, Caracol Radio
Fresno (Tolima)	Armonía FM Stereo, Fresno FM Stereo
Granada (Meta)	Emisora La Voz del Ariari
Güepsa (Santander)	Emisora comunitaria
La Joya (Putumayo)	Manantial Estéreo

Maicao (Guajira)	Olímpica, Guajiro Quincenario
Majagual (Sucre)	Radio Majagual
Medellín (Antioquia)	RCN Radio, Radio Reloj
Montería (Córdoba)	Emisora La Voz de Montería, Radio Panzenú
Neiva (Huila)	Panorama Estéreo
Palmira (Valle)	Radio Luna de Todelar
Patía (Cauca)	Radio Súper, Bolívar Estéreo
Pereira (Risaralda)	Caracol Radio
Pitalito (Huila)	Radio Sur
Pivijay (Magdalena)	Radio Galeón
Planadas (Meta)	Emisora comunitaria, Planadas Stereo
Popayán (Cauca)	Radio Súper
Puerto Berrío (Antioquia)	Puerto Berrío Estéreo
Puerto Rondón (Arauca)	Llanorámica Estéreo FM 102.3
San Alberto (César)	Las Palmas Estéreo
San Carlos (Antioquia)	Varias emisoras.
San Onofre (Sucre)	Estación Fuentes, Radio Caracolí, El Meridiano
San Pablo (Bolívar)	Emisora comunitaria
Santa Marta (Magdalena)	Radio Galeón
Santa Marta (Magdalena)	Radio Rodadero
Sincelejo (Sucre)	Radio Costanera
Tame (Arauca)	Emisora Bolivariana, La Voz del Cinaruco
Teteye (Putumayo)	Latina Stereo
Turbo (Antioquia)	Emisora Ondas del Darién
Valencia (Córdoba)	Emisora Ondas de Urrá
Vélez (Santander)	Emisora Ondas del Carare
Yumbo (Valle)	Yumbo Estéreo
48 ciudades	Más de 50 emisoras donde trabajaban los periodistas asesinados

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

EL CONCEPTO DE REGIÓN COMUNICATIVA

El concepto de región ha estado asociado fundamentalmente a un enfoque administrativo y geográfico. Progresivamente se ha hablado de regiones políticas y culturales, según el énfasis con que se las mira. Estos apelativos se superponen unos sobre otros, como si fueran planos o niveles para comprender lo que trasciende a la simple geografía y es una realidad compleja que desborda las categorías con que se las ha estudiado tradicionalmente. En “Guía práctica del ordenamiento territorial en Colombia: contribución para la solución de conflictos”, Orlando Fals Borda y Miguel Borja escriben:

La dolorosa realidad del conflicto armado, especialmente en el campo, le da a este tema visos prácticos que no pueden anticiparse en discusiones formales, pero que ahora se destacan en todo su dramatismo. Por supuesto, no se pretende ignorar la problemática urbana, ya que esta, además de lo político, asume también expresiones violentas y delincuenciales en barrios, calles y espacios definidos, además los fenómenos regionales afectan a las ciudades. Pero las significativas batallas a campo abierto o en pequeños poblados que se vienen registrando son pruebas de que elementos como el control del territorio rural y la ocupación de asentamientos agropecuarios, mineros, silvícolas y campesinos en general, tienen sitio privilegiado en los diseños estratégicos y tácticos de los grupos enfrentados así como para la fuerza pública (Fals y Borja, 1998).

No ha sido habitual que la región —sobre la cual existe una literatura importante en la bibliografía colombiana— sea pensada como región comunicativa. En este Informe proponemos esta denominación para referirnos a que existe un tejido comunicativo en las regiones, que hace posible la producción, el intercambio y la apropiación social de significaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre sus habitantes, grupos y entramado institucional.

Este tejido no se circunscribe solamente a los medios de comunicación y a la labor periodística, sino que también tiene que ver con las demás mediaciones comunicativas de la sociedad, con los modos de generación y circulación de sentidos, con la construcción y funcionamiento de una opinión pública local y regional, con los sistemas de reconocimiento social de la legitimidad de las vocerías en los territorios y con las relaciones entre hegemonías y relevancias comunicativas. En esta realidad comunicativa existen intereses en disputa, comprensiones diferentes que compiten socialmente por prevalecer e influenciar en la población, discursos y contradiscursos y tendencias comunicativas promovidas por las distintas instituciones de la sociedad regional, dentro de la idea propuesta por Nancy Frazer en su texto “Iustitia Interrupta” (1997).

Estas mediaciones comunicativas regionales están unidas a las prácticas de la oralidad, que en muchas regiones asoladas por la violencia son el mecanismo más importante de circulación de la información y los sentimientos, los lugares de encuentro (cafés, iglesias, billares, plazas, casas de la cultura y parques), las expresiones populares como las fiestas, los concursos, los carnavales o las ferias y las manifestaciones patrimoniales intangibles como los cantos, los cuentos o el baile. En los testimonios de las víctimas y sus familiares, habitualmente aparece el puesto destacado que todas las expresiones mencionadas tienen para afianzar la solidaridad en contextos abrumados por el miedo, o favorecer la comunicación en realidades cargadas de silenciamiento.

Los medios de comunicación tienen, obviamente, una importancia en la configuración de las regiones comunicativas, ya que son una de las instancias a través de las cuales se representa y expresa socialmente la región, se proponen conexiones con otras y se interactúa con los significados que son producidos nacional e internacionalmente. En todas las regiones, aunque hay desarrollos desiguales, hay presencia de determinadas estructuras mediáticas nacionales ya sea de prensa, radio o televisión².

2 Sería importante construir un mapa móvil de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores colombianos en todas las regiones del país. La información se encuentra desagregada, la de radio en el Ministerio de Tecnologías

Es muy importante la red de estas relaciones, sobre todo en el curso del conflicto armado interno y en la representación de las violencias, por un motivo básico: la información de los medios nacionales con frecuencia se refiere a las regiones. En los periódicos de circulación nacional hay secciones especializadas sobre las regiones que suelen alimentarse con las noticias y los informes elaborados por periodistas corresponsales o free lance que viven en ellas. En la radio colombiana existe el fenómeno del “encadenamiento”, que es la conexión de las radios locales con las matrices radiales nacionales, sobre todo a la hora de los informativos o en la transmisión de eventos de especial significación (deportes, hechos bélicos, etc.) En la televisión están los corresponsales que transmiten en directo cuando la importancia lo amerita o envían sus notas a la sede central de los canales de televisión para su distribución de acuerdo a los criterios que guían las diferentes emisiones televisivas privadas. También hay una distribución internacional de noticias sucedidas en las regiones, especialmente cuando están unidas a la guerra, que ofrecen ya sea corresponsales de medios internacionales o periodistas nacionales.

Esta primera capa de la infraestructura mediática regional genera un conjunto de prácticas periodísticas relacionadas con el conflicto interno, que tienen que ver con los criterios de edición nacional de la realidad regional, con la valoración periodística que se lleva a cabo en las sedes nacionales sobre la gravedad de los hechos de guerra, con el predominio de determinadas fuentes de la información, con decisiones que afectan la vida laboral de las y los periodistas y hasta con comportamientos que salvaguardan o ponen en peligro su seguridad, sobre todo de quienes están ubicados en zonas con mayores niveles de violencia.

Una segunda capa es la de la infraestructura de los medios regionales y locales. Desde hace décadas ha habido un incremento

de la Información y la comunicación, en ASOMEDIOS y en organizaciones, por ejemplo de radios comunitarias, la de algunos periódicos en ANDIARIOS, la de televisión en la ANTV. El proyecto Antonio Nariño ha hecho aportes en este campo. Este mapa es fundamental para prever la acciones de apoyo al periodismo, así como para determinar impactos de la violencia en las regiones.

de la importancia de los medios de comunicación regionales, inclusive hasta llegar a conformar grupos comunicativos regionales, que tienen diversidad de medios y que sobre todo tienen una influencia importante en las regiones. Aquí se comprenden periódicos regionales que inclusive han superado a los experimentos casi siempre fallidos de los grandes periódicos nacionales y que están profundamente identificados con las regiones, los canales regionales de televisión que son de naturaleza pública y las emisoras de radio regionales.

Una tercera capa es la de los medios locales y comunitarios que agrupa a un conjunto relativamente grande de pequeños periódicos y semanarios, revistas de circulación local, emisoras comunitarias e iniciativas de televisión y de emprendimientos digitales.

Hay regiones en las que la densidad comunicativa de su infraestructura mediática es mayor y con más tradición, en las que existen experiencias de agremiación y centros de formación de periodistas. Valle del Cauca, Antioquia, Santander o Atlántico son ejemplos de ellas. Todas tienen grandes periódicos, emisoras de radio importantes, productoras de televisión, canales regionales y universidades en las que se enseña periodismo. Hay otras, por el contrario, con una gran debilidad de medios. En ellas, por ejemplo, no existen periódicos destacados, canales de televisión y son pocas sus emisoras locales. Más que productoras son receptoras de los contenidos que se generan en otros lugares del país. Pero las diferencias comunicativas de las regiones en Colombia no se dan solo entre ellas sino también “dentro” de ellas. La infraestructura mediática suele concentrarse en las capitales y algunos municipios grandes, mientras que amplias zonas de esas regiones solo tienen pequeños medios comunitarios en algunas de sus concentraciones urbanas.

Este panorama, que no está aun debidamente documentado en Colombia, es fundamental para valorar los daños que la violencia ha hecho en el tejido comunicativo de las regiones. Porque si es grave que en una ciudad como Medellín, con 2.400.000 habitantes, se hayan producido 13 asesinatos de periodistas durante el periodo estudiado, es aún más grave que hayan sucedido 5 en Buenaventura, una ciudad de 384.000 habitantes; o 6 en Florencia

(Caquetá) con 166.000 habitantes. Obviamente lo cualitativo desborda el tema cuantitativo.

La gravedad comparativa no está solamente en la relación entre habitantes y periodistas víctimas de asesinato, sino también entre estos y el tejido comunicativo de las ciudades y las regiones afectadas. De este modo, la región o la localidad sufren un déficit comunicativo de valor comunitario significativo. Aún más. Un solo caso puede producir un daño irreparable en la calidad de la información que recibe la ciudadanía, en la diversidad informativa, en la contundencia investigativa o argumentativa para generar denuncias públicas, en el acceso de la comunidad a los medios, en la legitimidad de la voz periodística en medio del conflicto y en los niveles de miedo y silenciamiento social.

La reconstrucción de este tejido comunicativo no es un simple asunto de aumento cuantitativo de medios. La existencia de un medio de comunicación en una comunidad es un proceso de fortalecimiento de confianza, de construcción de fuentes legítimas de la información, de conocimiento de las realidades del territorio y de afirmación histórica de una voz propia. En muchas ocasiones, el asesinato o las amenazas contra periodistas tienen el objetivo estratégico de terminar de un tajo con todo ello, produciendo una lesión gravísima en la cohesión social y la democracia de una región o una localidad.

El problema regional del periodismo crece por varios motivos que tendrán que ser explicados con análisis mucho más específicos y en profundidad: El desarrollo del oficio periodístico en las regiones experimenta una situación de extrema indefensión y a la vez con enormes presiones de los actores armados, sean legales o ilegales. Sobre su trabajo también interviene la influencia de los medios regionales y locales en la opinión pública, las relaciones de periodistas regionales con los medios nacionales y las consecuencias de la tarea periodística en el desenvolvimiento de la guerra. En cuanto al primero de estos rasgos, hay un acuerdo generalizado sobre las posibilidades, pero también los problemas del periodismo local: es un periodismo arriesgado, que se acerca al foco de los problemas para difundirlos, que ha profundizado sus relacio-

nes con la comunidad en la que realizan su labor. Pero también es un periodismo con deficiencias de formación, que mezcla peligrosamente funciones para poder sobrevivir y que fluctúa entre la independencia y los intereses, evitando intencionalmente determinados temas. Lo explica muy bien Arturo Guerrero en su libro “País lejano y silenciado”:

Si bien los grupos violentos y los políticos corruptos son los responsables de buena parte de las amenazas y atentados contra comunicadores, las condiciones laborales y el sistema de consecución de avisos publicitarios son mordazas eficaces a la libertad de información. Los reporteros contratados dentro de la planta de un medio, generalmente los más pudientes, son “toderos” sin especialización que deben producir grandes cantidades de material para numerosas emisiones diarias, en horarios que no respetan la noche ni los festivos. En estas condiciones no es posible adelantar investigación ni seguimiento a las noticias, ni tratarlas como procesos. [Y continúa señalando:]

Es habitual, además, que estos medios tengan definidas preferencias políticas o compromisos económicos con las fuentes. Sus periodistas comprenden que a estas “hay que hacerles pasito” o no contrariar sus intereses con la información que produzcan. En muchas regiones donde no hay industria y el comercio es débil, el Estado es el único anunciante fuerte, de manera que las autoridades se vuelven intocables. Ahora bien, el grueso de los comunicadores regionales carece de contrato fijo o trabaja como independiente. Varios tienen un periódico semanal, quincenal o mensual, o hace un noticiero en alguna emisora de radio o canal local de televisión. En este caso opera el sistema de “cupos” publicitarios, o arrendamiento de espacios, que obliga al periodista a conseguir y contratar la pauta, al mismo tiempo que escribe y realiza sus informativos. “En una mano uno carga la cámara y en la otra las ofertas para vender”, dicen estos periodistas convertidos en cobradores de noticias, en comerciantes de la información, en publicistas o en relacionistas públicos de los poderes que suminis-

tran los avisos. Así se configura el periodismo “de estómago”, una confusión de roles que trae consigo consecuencias tremendas. A su paso se levanta la especie de los periodistas “extorsivos”, que difunden información falsa con el fin de presionar a los posibles clientes para que pauten. También la de los periodistas “paracaidistas”, los cuales no son profesionales sino oportunistas que crean programas o hacen periódicos solo en pos del dinero de la publicidad (Guerrero, 2010, página 14).

El diagnóstico hecho por Arturo Guerrero, a través de numerosos talleres regionales de periodismo, es tan severo como preocupante y debe tenerse en cuenta para un análisis ponderado y objetivo del papel de los medios regionales y el periodismo en el conflicto interno.

LA OPINIÓN PÚBLICA LOCAL, LA VISIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE LOS VIOLENTOS Y LOS CALLOS QUE NO SE PISAN

La conversión de los medios regionales en objetivos estratégicos de la violencia también tiene que ver con el incremento de su participación en la formación de una opinión pública local que, con sus problemas y limitaciones, es una dimensión muy importante de la gobernabilidad regional y nacional. Durante décadas y hasta bien entrado el siglo veinte, la opinión pública colombiana fue centralizada, hegemónica, homogénea y nada diversa. Las regiones prácticamente no existieron en esa opinión pública o si existieron fue a través de su reducción y estereotipia. Los periódicos regionales empezaron a transformar esta situación, junto a la radio —que estuvo y sigue en parte atada a los sistemas de información de las cadenas nacionales— las televisiones regionales y los medios comunitarios o ciudadanos. El fracaso de las versiones regionales de los periódicos nacionales es una buena muestra de la incomprensión central de lo regional, mientras que el auge de los medios hechos en la región o desde lo local, demuestra la falta que hacía una opinión de y sobre las regiones y una información con

enfoque y acentos propios. El estudio de la información actual de los canales de televisión nacionales muestra que continúa el gran déficit de comprensión de lo regional, cuya narración se hace especialmente desde lo irregular y lo delictivo, desconociendo la vitalidad y el dinamismo que se vive en las regiones. Los medios y el periodismo regional han empezado a conformar, desde hace años, una opinión pública regional que de inmediato se coloca en la mira de los violentos por la agenda que manejan, la visibilidad que proyectan y las críticas que proponen. Las tareas periodísticas en las regiones se desenvuelven entonces, con una enorme proximidad a los actores violentos y a su poder territorial, lo que hace que sea peligroso tratar aquellos temas porque quedan inmediatamente expuestos y desprotegidos.

Esta suerte de situación “imantada” en que el periodismo es atraído y repelido por quienes tienen el dominio territorial de la fuerza, es aplicable también a los militares, y sobre todo a la comprensión que estos tienen del papel de la información en el conflicto, su visión de las y los comunicadores, su percepción de la influencia de la información periodística en la evaluación de su propia labor militar y sus expectativas frente a la construcción y divulgación de las noticias de guerra.

LA REGIÓN NORTE, EN MEDIO DEL FUEGO. DATOS RELEVANTES POR DEPARTAMENTO³

Desde los años 1970, la labor periodística en el Caribe colombiano se ha llevado a cabo en medio del fuego cruzado que han desatado en la región el narcotráfico, la guerrilla, los grupos paramilitares, las bandas criminales, la delincuencia común e incluso en algunos casos los mismos políticos.

³ Documento elaborado con la colaboración de los informes regionales hechos por Consejo de Redacción, organización de periodismo de investigación colombiano, para el informe sobre violencia contra el periodismo 1977-2015 del CNMH.

Ha sido una terrible mezcla de actores violentos, que con sus acciones en contra de las personas que ejercen el periodismo no solo han incrementado las cifras de asesinatos; lamentablemente la censura se ha extendido y hoy por hoy el periodismo del Caribe se ahoga en medio de un silencio perturbador que prácticamente invisibiliza realidades y complejiza aún más las dinámicas de la divulgación de los hechos, dejando a las comunidades sin más y sin mejor información.

El narcotráfico en los años setenta y parte de los ochenta, marcó principalmente a las comunidades de los departamentos de La Guajira y Magdalena. El narcotráfico trajo una violencia desaforada que comenzó afectando a familias y pequeñas organizaciones que lo promovían y terminó golpeando con rudeza a la población civil, dentro de ella a quienes se desempeñan como periodistas. Especialmente en La Guajira, solo registraban tangencialmente los acontecimientos, sin profundizar en detalles y mucho menos investigar.

En los años ochenta al problema de la droga, que ya se había extendido a otras zonas de Colombia, se une el accionar de grupos irregulares como la guerrilla. En medio de estas situaciones las regiones son más frágiles a las acciones de violencia, por ser poblaciones pequeñas donde es más fácil encontrar como blanco a quienes desarrollan labores de comunicación.

A mediados de la década de los ochenta se empieza a conocer la actuación de grupos que se autoproclamaron defensores de la ciudadanía en contra de la guerrilla: las autodefensas, pero que rápidamente comenzaron a aterrorizar a las poblaciones en una clara disputa por la tierra.

En esos tiempos caóticos de amenaza y masacres, el periodismo regional se encargó de transmitir lo que sucedía sin cruzar la línea de lo que era peligroso. Un atisbo de opinión en contra de quienes se consideraban dueños del orden en la sociedad, era sinónimo de estar a favor del enemigo, en este caso la guerrilla.

La Costa Caribe fue la que más tuvo que vivir la cruenta actividad de las autodefensas. No hablar, autocensurarse para abordar los temas que tuvieran que ver con ellas, o simplemente limitarse a

dar cifras, fueron los mecanismos que se adoptaron como protección. “Había que hablar y escribir como si se estuviera caminando sobre cáscaras de huevo porque quien pisara un poco más fuerte de lo permitido seguramente no viviría para contarlo”, dice un comunicador de Córdoba que hoy está exiliado. Una postración informativa se comenzó a apoderar de los medios y muy pocos sacaron su cabeza y se atrevieron a contar las historias.

Esto último se ha mantenido por varios años, con intentos de rebeldía por parte de quienes han querido, además de informar, ir más allá, contextualizar el conflicto armado que vive el país y también mostrar actos de corrupción en el aparato estatal. Lastimosamente, hoy por hoy muchas de esas informaciones son frenadas por los intereses empresariales de los medios de comunicación, o porque realmente no quieren poner en riesgo la integridad física de las personas que trabajan como periodistas en sus medios.

A pesar de que periodistas del Caribe tomaron precauciones para no poner en riesgo su vida, no husmeando más allá de lo permitido, las cifras de los últimos treinta y cinco años muestran que treinta y tres de ellos murieron, la mayoría por razones de su oficio. En esta lista entran reporteros gráficos y voceadores de prensa. En los últimos ocho años 156 han sido víctimas de amenazas.

Asesinatos, exilios y amenazas en el Atlántico

Cualquiera pensaría que el Atlántico, por tener la ciudad más desarrollada de la Región Caribe, Barranquilla, brinda un mejor escenario para hacer periodismo. En cierta medida ello es así, cuando se analizan con detenimiento los medios que allí surgieron y han perdurado, como el diario *El Herald* y el canal regional, Telecaribe. Sin embargo, la realidad también deja ver las olas de violencia que afectaron a la prensa y a periodistas, y que a su paso generaron asesinatos, exilios y amenazas.

Entre los casos de crímenes más sonados están:

1. Carlos Ernesto Castillo Monterrosa, asesinado el 30 de junio de 1979 en Barranquilla-Atlántico. Era periodista y se había

desempeñado en el campo de la farándula en *Cromos* y *Antena*; también, como redactor del *Diario del Caribe*. Al momento de su muerte era el director de la radio revista deportiva Olímpica. Fue asesinado, al parecer y según informaciones de sus colegas, por haber tomado partido en una disputa que sostenían dos familias de la región, dedicadas a la producción de marihuana.

2. El 19 de abril de 1993 fue asesinado Carlos Lajud Catalán, periodista que tenía su programa “Actualidad Deportiva” en la emisora ABC. Empezó a hablar de temas políticos; en el programa hacía denuncias sobre supuestos casos de corrupción y de los nexos con el narcotráfico. Aunque se efectuó la detención de tres personas por este asesinato, Jhonny Merino Arrieta, Eduardo Antonio Campo Carvajal y Eliécer Peña Navarro, según registra la SIP (Sociedad Interamericana de Periodismo), no se condenó a nadie. Los primeros implicados quedaron libres en el año 2003, porque la Fiscalía no pudo probar la responsabilidad de estos en la muerte del periodista. La SIP, con su Proyecto Impunidad, estuvo al tanto del proceso investigativo; en el año 2013 prescribió la investigación.
3. El 29 de marzo de 2012 fue asesinado en el municipio de Sabanalarga (Atlántico) el periodista Jesús Martínez Orozco. En el 2002 incursionó como comentarista en medios radiales de ese municipio, estaba vinculado con el noticiero “La Verdad”, que se emitía por la emisora comunitaria La Nueva. El periodista realizaba la sección cultural del noticiero.
4. En el mes de octubre de 2007, el periodista Giovanni Álvarez, que también trabajaba en esta emisora comunitaria, salió exiliado por amenazas contra su vida cuando empezó a manejar temas sobre corrupción de políticos.

En cuanto a las amenazas, se conoció que Samit Linero fue amenazado el 18 de septiembre de 2007 porque el diario donde trabajaba, *Al Día*, publicó una nota sobre corrupción en Soledad. Curiosamente el tema abordado hacía referencia a que unos electrodomésticos que debían ser entregados a damnificados por el in-

vierno en el año 2005, se los dieron a los concejales pertenecientes a la coalición mayoritaria del momento.

Como dato importante, el primer semestre del año 2007 se caracteriza porque el Atlántico fue el departamento donde más violaciones e infracciones a la libertad de prensa se presentaron, de acuerdo con el informe de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa); se dieron seis amenazas y once víctimas en la obstrucción al trabajo periodístico, y en el trato inhumano hubo diez víctimas.

Otra amenaza fue la que recibió, a través de una llamada anónima, el periodista José Granados Fernández del periódico *El Heraldo* de Barranquilla, en el año 2009. Sucedió después de denunciar la contratación de la Corporación Autónoma del Atlántico y la dilación en el nombramiento del director. El comunicador llegó a dejar ver que los grupos paramilitares habían aprendido a tomarse el poder local y que dicha entidad había sido cooptada por ellos.

En Bolívar se han puesto más muertos

Bolívar ha sido uno de los departamentos de la Costa Caribe donde el periodismo ha puesto más muertos.

1. Nelson De la Rosa Toscazo fue asesinado el 3 de agosto de 1993 en Cartagena. Era reportero gráfico del diario *El Universal* de Cartagena. Fue asesinado por desconocidos que le dispararon a dos cuadras de su casa. Sus compañeros de trabajo aseguraron que había recibido amenazas por la publicación de fotografías de una banda criminal.
2. Freddy Elles Ahumada fue asesinado el 18 de marzo de 1997 en Cartagena. Trabajó ‘freelance’ en varios periódicos como reportero. También era muy conocido en los círculos políticos y sociales de Cartagena.
3. Eduardo Estrada Gutiérrez fue asesinado el 16 de julio de 2001 en el municipio de San Pablo. Era el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y la Cultura de San Pablo (Adecosan), organización comunitaria

afiliada a la Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio. Venía impulsando una emisora comunitaria en ese municipio. Fue asesinado en una calle del municipio cuando se dirigía a su casa en compañía de su esposa Sara González.

4. En el año 2000 también fue asesinado otro periodista miembro de Adecosan, José Duber Tello. Los móviles del crimen nunca se conocieron con claridad.
5. Denis Segundo Sánchez Lora fue asesinado el 16 de julio de 2002: Trabajaba en la emisora 95,5 Estéreo en el Carmen de Bolívar. Conducía el programa radial “A su salud” de la secretaría de Salud del Carmen de Bolívar, donde se trataban temas relacionados con la prevención de enfermedades. Durante 20 años trabajó como locutor y conductor de programas musicales y eventualmente realizaba noticias deportivas, nunca cubrió temas que tuvieran que ver con el conflicto armado. Al momento de su muerte era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 12 de Noviembre, según el reporte de la FLIP.
6. Rafael Enrique Prins Velásquez fue asesinado el 19 de febrero de 2005 en Magangué. Era el director y gerente del periódico *Apocalipsis*. Se desempeñaba como edil de la Comuna No. 1 de la ciudad de Magangué; fue elegido por el Partido Liberal. Días antes de su muerte había publicado fuertes críticas contra el mal manejo administrativo del Fondo Municipal de Tránsito y Transporte de la ciudad. Prins se encontraba con varios amigos en el parque de La Energía en pleno centro de la ciudad, cuando un sicario se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó en seis oportunidades. En el año 2012 se dio medida de aseguramiento contra Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria del chance *La Gata*, por indicios que lo relacionan con el asesinato de Rafael Enrique Prins. Posteriormente fue sentenciado.
7. Atilano Segundo Pérez Barrios fue asesinado el 22 de agosto de 2006 en Cartagena mientras veía televisión en su casa. Trabajaba en Radio Vigía de la cadena Todelar. Fue conce-

jal de Marialabaja y diputado del departamento de Bolívar, llevaba cuatro años como director del programa informativo “Diario de Marialabaja” que se transmitía los domingos por la mañana en la emisora Radio Vigía. Se interesaba particularmente por la situación de violencia en la región de Montes de María. El 20 de agosto denunció que cinco candidatos que se postulaban a la alcaldía de Marialabaja estaban financiados por grupos paramilitares. Dos días después fue asesinado.

En cuanto a los secuestros, en junio de 1999 fue secuestrado por primera vez por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el periodista Jorge Enrique Rivera Sena, quien se desempeñaba como corresponsal del diario *El Universal* en El Carmen de Bolívar. En una oportunidad más fue secuestrado por este grupo que también lo golpeó.

En este departamento, en octubre del mismo año, también se dio otro secuestro, pero este fue masivo. Seis periodistas fueron plagiados por las FARC desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre para mostrarles lo que habían hechos las AUC.

A raíz de todas estas muertes y de la presencia aun de grupos irregulares en el territorio, la opción tomada fue autocensurarse, no tocando temas del conflicto armado. Incluso la FLIP, en un trabajo realizado en el año 2004 a varios medios impresos del país sobre calidad informativa y cubrimiento del conflicto armado, concluyó que en este departamento es donde más se usan las agencias de prensa para abordar los temas, porque el periodismo local se abstiene de informar sobre estas realidades.

Otro de los aspectos complejos sobre el ejercicio del periodismo en el departamento de Bolívar, al igual que en el resto de la Costa Caribe, es el pago usual del sueldo con los cupos publicitarios, y el gran cliente para estos casos es el Estado (gobierno y alcaldías). En Bolívar en el año 2007 se entregaron 804 millones de pesos, mientras que en Cartagena el monto fue de 300 millones y todos fueron entregados de manera directa, es decir, sin haber licitaciones. Y eran muy pocos los que podían gozar de esta torta.

Dadas las desigualdades que se estaban presentando en la repartición de la pauta publicitaria oficial, se comenzó a hablar de la transparencia que debía rodear el tema. Los trabajos por intentar mejorar este aspecto comenzaron en la alcaldía de Cartagena, donde se creó un Comité de Pauta en el año 2009. Aunque existía este Comité y una reglamentación para esta distribución, que trató de ser más equitativo con la entrega de la pauta oficial, siempre se presentaron quejas por la distribución que se seguía haciendo a dedo. La FLIP les ha hecho el acompañamiento para el establecimiento de la norma y en la aplicación de la misma.

En Cesar ya nadie habla

Periodistas de este departamento tienen muy claro que “el pasado no se olvida”. Hacer periodismo en el Cesar pasando del registro a la investigación es casi una afrenta para los violentos y las mafias de la corrupción que se enquistaron en el departamento. Entre quienes fueron víctimas de asesinato están:

1. Amparo Leonor Jiménez Pallares fue asesinada el 11 de agosto de 1998 en Valledupar. Era periodista del Noticiero de televisión QAP. Además de periodista se desempeñaba como coordinadora de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz (Redepaz) para el Cesar y La Guajira. También como delegada del Programa Presidencial para la Reinserción. Fue asesinada en la mañana del 11 de agosto cuando volvía a su casa de dejar a su hijo en el colegio. Un sicario la esperaba y antes de que la periodista pudiera bajarse de su carro, le propinó varios disparos que cegaron su vida. Desde enero había recibido amenazas contra su vida pero, según sus allegados, no les había dado importancia. El 22 de agosto la Policía capturó a Libardo Humberto Prado Bayona como autor material del homicidio de la periodista; de manera errónea fue dejado en libertad por el Inpec, ya que debía estar recluido en la cárcel de Santa Marta cumpliendo una condena de 20 años y 10 meses de prisión. Según la Policía de Valledupar, el

asesinato fue ordenado por grupos al margen de la ley, pero no especificó si fue guerrilla o paramilitares. En el año 2011, el Consejo de Estado condenó al Inpec a pagar una millonaria suma de dinero a los familiares de la comunicadora por tener responsabilidad en su asesinato.

2. Guzmán Quintero Torres fue asesinado el 16 de septiembre de 1999 en Valledupar. Se desempeñaba como jefe de redacción del periódico *El Pilón*. También, como corresponsal del noticiero Televista transmitido por el canal regional Telecaribe, y era catedrático de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recibió reiteradas amenazas de muerte en noviembre de 1995 a través de llamadas telefónicas por haber publicado en el periódico *El Heraldo* informaciones sobre la conformación de nuevos grupos armados en el centro del Cesar. Por estos hechos pidió licencia en el periódico de Barranquilla, después renunció y comenzó a trabajar en la Gobernación del Cesar, antes de llegar a *El Pilón* en octubre de 1998.
3. Martín La Rotta Duarte fue asesinado el 7 de febrero de 2004 en San Alberto. Era el gerente y propietario de la emisora La Palma Estéreo en el municipio. Fue asesinado con arma blanca mientras dormía en la sala de su casa. Al parecer el asesinato del comunicador se dio después de que se negara a entregar dinero a paramilitares para seguirle permitiendo el funcionamiento de la emisora. Sin embargo, el paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias *Juancho Prada*, líder del frente Héctor Julio Peinado de las AUC confesó en el 2007 la responsabilidad en el homicidio del periodista. “Cansado de tanta cháchara le envié la razón de que dejara de criticarnos y no hizo caso y se dio la orden de ejecución”, dijo el paramilitar en su declaración. El autor intelectual del asesinato de La Rotta Duarte se acogió al beneficio de sentencia anticipada.

En lo que tiene que ver con amenazas, en el 2005, el 12 de diciembre, llegó un panfleto firmado por las Nuevas AUC a la emisora Maravilla en Valledupar. En el listado de personas amenazadas

estaba el director de noticias de Radio Guatapurí, Enrique Camargo Plata. Al parecer, las amenazas se dieron por la información que publicó el periodista sobre la anulación de la elección del alcalde de Aguachica. Por este tema también fue amenazado el director del diario *El Pilón*, Galo Bravo, en el mes de septiembre del mismo año.

Las amenazas siguen siendo el pan de cada día. Y también se convierten en una forma de coartar la libertad de expresión. Un caso es lo que le pasó a Ana María Ferrer en Valledupar, que a través del periódico *El Observador de las Regalías* denunciaba irregularidades en la ejecución de estos recursos en municipios del Departamento. El 29 de septiembre llamó un hombre a la emisora Maravilla Estéreo pidiendo ayuda para desmovilizarse y dijo que a él lo habían contratado para asesinar a la periodista. Desde ese momento la comunicadora precisó qué pensaría muy bien antes de meterse a investigar un tema, porque en las regiones las personas dedicadas al periodismo no están blindados para investigar temas y denunciar.

En Córdoba, la verdad ahogada por la violencia

En Córdoba, un departamento que ha vivido en medio de la violencia, originada primero por la guerrilla y después por los grupos paramilitares, no ha sido posible un minuto de paz. El ejercicio del periodismo no ha podido escapar de la espiral de violencia y periodistas han sido envueltos en ella por el hecho de querer informar lo que sucede en el territorio. Entre los asesinatos de periodistas se cuentan:

1. Oswaldo Regino Pérez fue asesinado el 11 de noviembre de 1988 en Montería. Se desempeñó como corresponsal del diario *El Universal* de Cartagena, dirigía un programa en la emisora Ondas de Urrá y era presidente del comité seccional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Fue asesinado en la vía a Planeta Rica a la entrada del caserío Los Pericos, cuando se movilizaba en una moto y desconocidos le dispa-

raron desde otra moto. Fue asesinado, aparentemente, por el despliegue informativo que le dio a las masacres de El Tormate y Mejor Esquina, atribuidas a los grupos paramilitares de Córdoba, que en ese entonces eran conocidos como Los Mochacabezas.

2. William Bendeck Olivella fue asesinado el 13 de octubre de 1989 en Montería. Tenía su noticiero Avanzada de Córdoba en La Voz de Montería. Había denunciado la infiltración del narcotráfico en el asesinato de Luis Carlos Galán. También se refirió, en sus emisiones, a la llegada de Gonzalo Rodríguez Gacha *El Mexicano*, a la región. Dos pistoleros le dispararon en varias ocasiones en la puerta de su casa, ubicada en la capital cordobesa.
3. José Domingo Cortés Soto fue asesinado el 15 de noviembre de 1992 en el municipio de Valencia. El periodista trabajaba en la Emisora Ondas de Urrá en Montería y era el director del programa ‘Fiesta, folclor y de todo’. Fue asesinado cerca al municipio de Valencia por cuatro presuntos guerrilleros que ingresaron a una finca en la que el periodista se encontraba con su pareja, Cecilia Domínguez Barrios. Los sujetos dispararon en contra de ambos, causándoles la muerte.
4. Gustavo Rojas Gabalo fue herido el 4 de febrero de 2006 en Montería. Tenía su programa “El show del Gaba” en radio Panzenú. El programa lo tenía desde hacía 25 años y en él combinaba música vallenata con comentarios y críticas a sectores políticos y administrativos del Departamento. Rojas Gabalo, apodado *El Gaba*, fue herido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los últimos temas que el periodista había abordado tenían que ver con las denuncias de corrupción en la Secretaría de Salud del Departamento de Córdoba, y en la comisión de delitos por parte de desmovilizados de las Autodefensas. Fue dado de alta el 12 de marzo, pero el 17 tuvo una recaída y falleció el día 20 de ese mismo mes en la ciudad de Medellín. Doce días después del fallecimiento, las autoridades capturaron como presuntos autores a Ramiro Antonio Berrío Beltrán alias *El Guaji-*

ro o *El Rondero*, a José Manuel Pérez Jiménez alias *El Pambe*, y a Santiago Luna Primera, alias *El Negro*, los dos últimos desmovilizados de las AUC. Los capturados fueron dejados libres después. Posteriormente, por este mismo hecho fue capturado Oledín Tirado, alias *Fuego Verde*, quien meses después de quedar libre fue hallado muerto en la vía que conduce del corregimiento La Ye hacia Sahagún. De los otros tres señalados como presuntos autores también aparecieron muertos Ramiro Berrío y José Manuel Pérez.

5. El 30 de julio de 2009 fue asesinado en Montería el locutor de la emisora Tropicana, Jamel Torres Zamora. Su muerte no se asocia con el oficio periodístico, ya que según las autoridades fue por una riña callejera.
6. Clodomiro Segundo Castilla Ospino fue asesinado el 19 de marzo de 2010 en Montería. Dirigía la Revista *El pulso del Tiempo*. Fue asesinado a las nueve de la noche, por desconocidos que lo ubicaron en la entrada principal de su vivienda en la Urbanización El Puente, en Montería, cerca de un CAI de la Policía. El periodista había denunciado amenazas de muerte en su contra, por lo que el Ministerio del Interior le mantuvo un esquema de seguridad durante algún tiempo, pero que en la fecha del atentado no tenía.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que Clodomiro Castilla había solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a periodistas del Gobierno colombiano. El Estado había autorizado un esquema de protección al periodista, que fue suspendido por petición de Clodomiro Castilla en el mes de febrero de 2009. Pero en noviembre del mismo año, ante el aumento del riesgo, el comunicador había solicitado la protección nuevamente. Castilla Ospino había servido como testigo en algunos procesos de ‘parapolítica’ del departamento de Córdoba. La esposa de Clodomiro también fue víctima de un atentado y la hija debió salir de la ciudad por amenazas.

En cuando a los secuestros; el 15 de julio de 1998 fue secuestrado en Cereté el periodista Morgan Jiménez Bula, por parte de las FARC.

Córdoba también tiene su historia de exiliados: El 2 de julio de 1999, el periodista Carlos Augusto Pulgarín Guevara, corresponsal de *El Tiempo* en Montería, debió salir de la ciudad por amenazas de muerte contra su vida. Las primeras amenazas se dieron el 29 de junio, a través del contestador del diario, debido a un reportaje sobre los combates entre las FARC, Autodefensas y Ejército. Lo tildaban de ser jefe de prensa de la guerrilla y por ser defensor de los indios. Tres días después se repitió la amenaza por intermedio de tres hombres que lo interceptaron y le dijeron que dejara de defender a los indios, el periodista había publicado unos artículos sobre la muerte del líder indígena Lucindo Domicó que se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Urrá. El periodista fue trasladado a Barranquilla hasta donde siguieron las amenazas. En septiembre de ese año fue trasladado a Bucaramanga, allá también fue amenazado y a principios del mes de diciembre abandonó el país. Se fue para Perú, pero hasta allá llegaron las amenazas. El gobierno colombiano pidió en ese entonces al gobierno peruano protección para el periodista exiliado.

Ese mismo año salió por amenazas el periodista de *El Meridiano de Córdoba*, Víctor Sánchez, quien también argumentó intimidaciones por parte de los grupos paramilitares.

En agosto de 2006, y en un par de ocasiones posteriores, varios periodistas de la ciudad fueron amenazados por informar sobre la aparente desviación de recursos de la salud pública a grupos paramilitares de la zona, algunos de estos en proceso de desmovilización con el gobierno. Además de las amenazas, algunos de los periodistas tuvieron que abandonar la ciudad para proteger sus vidas.

En el año 2007 en Colombia, actores de las campañas electorales (aspirantes y simpatizantes) eligieron el trato inhumano hacia la prensa como mecanismo para intentar silenciarla. Víctimas de esos hechos fueron el reportero gráfico Milton Otero y el director del quincenario *El Observador*, Julio Otero. El tres de octubre de ese año ambos fueron golpeados por una turba de simpatizantes de la coalición política Colombia Democrática, encabezada por el exalcalde de Chinú, José Betín Figueroa. Los comunicadores habían denunciado al exalcalde y los actos de corrupción durante su

gobierno, así como los vínculos de personas de esta organización política con grupos paramilitares.

En el año 2010, Córdoba fue considerado el departamento más peligroso para ejercer el periodismo, por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa. Además de la muerte de Clodomiro Castilla, también se dieron amenazas contra otros comunicadores. Édgar Francisco Astudillo Vásquez recibió en el mes de mayo una amenaza a través de un panfleto que le ordenaba irse de la ciudad. Estos hechos se dieron después de que sacó un informe sobre las bandas criminales que actúan en el departamento. Astudillo Vásquez estuvo por fuera de la ciudad más de un año. También recibieron amenazas Alex Pájaro del diario *El Propio*, Alexis Tordecilla, Rafael Gómez, Jorge Otero y Pompilio Silva.

En años más recientes, 2012 y 2013, la periodista Ginna Morelo Martínez, entonces editora del diario *El Meridiano de Córdoba*, denunció intimidaciones relacionadas con una investigación sobre el conflicto por la tierra en su región.

En Colombia, y en particular en la Costa Caribe, ante los asesinatos de periodistas que sucedían cada año, también la opción fue la autocensura, para evitar cualquier peligro proveniente de uno u otro bando. Un trabajo de la FLIP con periodistas de la Costa Caribe en el 2007 mostró que los temas relacionados con el paramilitarismo siguen causando temor y autocensura, a pesar de la desmovilización de esos grupos.

Las formas de coartar la libertad de expresión no tienen límites en Córdoba. Una forma particular de violaciones a la libertad de prensa se dio en Córdoba y Sucre en el año 2006: recoger los diarios cuando tienen información que no les interesa que conozca la comunidad cercana, o interrumpir las emisiones de determinados programas.

Un ejemplo de ello fue lo que sucedió con las transmisiones de las sesiones del Congreso el 18 de octubre del año 2007, cuando se hizo el debate que relacionaba a personas de la política con paramilitares, y en los dos departamentos se interrumpió la transmisión. Y dos semanas después una edición de *El Meridiano de Córdoba*, que traía información de la ‘parapolítica’, también fue recogida.

Cuadro 29. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en la zona Caribe, Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Departamento	Periodos de 10 años				Total de periodistas víctimas de asesinato en el periodo 1977-2015 por departamentos
	1977-1985	1986-1995	1996-2005	2006-2015	
Atlántico	1	1	0	0	2
Bolívar	0	1	4	1	6
Cesar	0	0	3	0	3
Córdoba	0	4	0	2	6
Guajira	1	0	1	0	2
Magdalena	0	3	4	0	7
Sucre	1	0	3	1	5
Total de periodistas víctimas de asesinato por periodos	3	9	15	4	31

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

La Guajira

Los periodistas asesinados en La Guajira son:

1. Libardo Gil Ceballos fue asesinado el 14 de octubre de 1980 en Maicao. Era el director y gerente de la revista deportiva *Milla*. Cuando salía de su apartamento, hacia las cuatro de la mañana, fue abordado por desconocidos que le quitaron su vida de un disparo y le robaron sus pertenencias.
2. Wilson Martínez fue asesinado el 6 de abril de 2001, también fue secretario de Gobierno y periodista de Fonseca. Denunció cómo Juan Francisco Gómez Cerchar, *Kiko Gómez*, alcal-

de de Barrancas entre 2001 y 2003, utilizaba los recursos del municipio para gastos personales. Según un reporte de la Fiscalía, tras sus denuncias, el 6 de abril de 2001, cuatro personas llegaron a su casa preguntando por él, dispararon contra un hermano y se llevaron a Martínez, a quien luego encontraron muerto en la vía que va de Fonseca a Barrancas. En la investigación, el fiscal 2 especializado de Riohacha se inhibió de abrir investigación contra Marcos Figueroa García, pariente lejano, según *Kiko Gómez*, de su esposa Bibiana Bacci García.

3. Jaime Rengifo Ravelo fue asesinado el 29 de abril de 2003 abril en Maicao. Era el director del programa radial “Periodistas en Acción”, que se emitía por la emisora Olímpica Estéreo. En el programa hacía serios cuestionamientos al Ejército, la Policía, a funcionarios públicos y a paramilitares. El 29 de abril fue atacado en la entrada del Hotel Venecia y murió víctima de varios impactos de bala. José Gregorio Álvarez Andrade, alias *Pedro*, excomandante del frente contra insurgencia Wayúu de las AUC, que operó en Riohacha y Maicao en el año 2003, dijo que en la muerte del periodista Rengifo Ravelo participaron miembros de la fuerza pública. Las declaraciones las entregó en el marco de las versiones libres realizadas el 18 y 19 de octubre de 2011 en Barranquilla, dentro del proceso de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Álvarez Andrade y Jairo Alonso Samper Cantillo, alias *Lucho*, fueron acusados en 2010, por un Fiscal de Derechos Humanos, de ser los responsables de la muerte del periodista.

El asesinato de Jaime Rengifo sirvió para que la prensa de La Guajira comenzara a autocensurarse porque nadie quería correr la misma suerte. Es tal el grado de autocensura que existe en este departamento, que de los seguimientos que desde el año 2006 lleva la FLIP sobre amenazas y violaciones a la libertad de prensa en este departamento no hubo registros de ello en los años 2006, 2007 y 2010. En los otros cinco años, es decir, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013 solo se registraron seis amenazas con igual número de víctimas.

Magdalena

Los periodistas asesinados son:

1. Álvaro Rojas Bustamante fue asesinado el 4 de marzo de 1988 en Santa Marta. Se desempeñaba como periodista del radio periódico El Informador y de *El Siglo*. Fue asesinado cuando se dirigía a hacer una diligencia en El Rodadero, sicarios que se desplazaban en una motocicleta dispararon ráfagas de ametralladora contra su automóvil.
2. Rodrigo Ahumada Bado fue víctima de un atentado el 26 de septiembre y murió el 8 de octubre de 1991 en Santa Marta. Era locutor, periodista y propietario de la emisora Radio Galeón de Santa Marta. También era dueño de una programadora en el canal regional Telecaribe. En el pasado, se había desempeñado como congresista y, al momento de su muerte, era candidato a la Cámara de Representantes. El 26 de septiembre de 1991, cuando salía de una reunión política, el periodista fue víctima de un atentado en el que le propinaron varios disparos y que, 12 días después, terminaría provocándole la muerte. Rodrigo Ahumada en sus comentarios anticipó los estragos que harían las tractomulas que transportaban el carbón en plena zona urbana y de los daños que ocasionaría el embarque en el puerto local. Gilberto Raúl Marriaga Robles, de 25 años, que tenía un puesto de venta de frutas en el mercado, confesó ser la persona que disparó sobre Ahumada Bado. El sicario purgó una pena de 15 años entre las cárceles La Modelo en Barranquilla y el Barne en Tunja. Nunca se supo quién o quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio del hombre de radio.
3. Rafael Antonio Solano Brochero fue asesinado el 20 de octubre de 1991 en Fundación. Fue corresponsal de *El Tiempo* y era propietario de una agencia de prensa y publicidad en Fundación donde prestaba servicios “freelance”. Fue asesinado de cuatro balazos por desconocidos en la puerta de su residencia en el barrio Las Tablitas. Nunca se conoció quién fue el autor intelectual y los móviles del crimen. El autor ma-

- terial, José Norberto Márquez, se fugó de la cárcel de Fundación. La investigación prescribió el año 2011.
4. Hernando Rangel Moreno fue asesinado el 11 de abril de 1999 en El Banco. Era locutor y periodista independiente del informativo *Magdalena 30 días*, Sur y Región del municipio de El Banco. Fue asesinado en la terraza de la casa de su vecino, mientras veían por televisión una pelea de boxeo. Un joven desconocido se le acercó por detrás y le propinó varios disparos. Rangel era abogado, se desempeñaba como periodista independiente. Desde los primeros días de enero de 1999 venía promoviendo un paro cívico contra la administración local. Lo mataron 24 horas antes de que se realizara el paro que promovió contra el alcalde Fidias Zeider Ospino. La Fiscalía ordenó capturar como principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato de Rangel al alcalde Zeider Ospino. El 6 de enero de 2000, luego de ser escuchado en indagatoria, se le dictó medida de aseguramiento con detención preventiva. El mandatario estuvo recluso en un penal del departamento del Atlántico hasta el 10 de marzo del año 2000, cuando fue dejado en libertad por falta de pruebas, la investigación fue precluida el 18 de diciembre de 2008 por considerar que no existen elementos indiciarios suficientes que permitieran inferir su grado de participación y responsabilidad en el homicidio de Hernando Rangel Moreno (Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—).
 5. Gustavo Ruiz Cantillo fue asesinado el 15 de noviembre del año 2000 en Pivijay. Era periodista de radio Galeón. A lo largo de su carrera se desempeñó, fundamentalmente, en dos medios radiales. En los años ochenta en Radio Libertad, de Barranquilla, como corresponsal, y desde los años noventa hasta el momento de su muerte, en Radio Galeón, de Santa Marta. Era popular por su capacidad para transmitir sus informes noticiosos en un lenguaje sencillo y coloquial. Fue asesinado en la plaza de mercado de la localidad, mientras buscaba noticias para sus informes diarios del programa no-

ticioso Mi Radioperiódico, transmitido por Radio Galeón. Dos hombres lo seguían de cerca y uno de ellos le disparó por la espalda en la cabeza. Un mes antes, Ruiz Cantillo había sido amenazado por tres desconocidos que lo interceptaron en una calle de Pivijay y sin preámbulos le dijeron: “No seas tan bocón, porque te puede ir mal”. El periodista le confesó el incidente a un cuñado y este dijo que Gustavo no dudó en atribuir la amenaza a sus informes periodísticos, sobre todo por aquellos relacionados con el incremento de muertes y asaltos en el área rural de Pivijay, de los que responsabilizaba a grupos armados al margen de la ley. La Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa pudo establecer que Ruiz Cantillo estaba investigando y denunciando la forma en que los paramilitares estaban controlando todo el departamento, incluyendo los contratos de la administración pública. También le preocupaba la violencia de los hombres de las autodefensas. La investigación fue asumida por un fiscal especializado de Santa Marta. El 19 de enero de 2004, la Fiscalía catalogó el caso como “resolución inhibitoria por el vencimiento del término consagrado en la ley, sin que fuera posible la individualización e identificación de los autores o partícipes de los hechos materia de investigación”. La investigación quedó suspendida y se dejaron vencer los términos para actuar. En agosto del 2006, por presión de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá y fue reactivada la investigación (Proyecto Impunidad-Crímenes contra periodistas). En el año 2008 la Fiscalía vinculó y capturó a Alberto Martínez Macea, Norberto Quiroga, Ever Mariano Ruiz Pérez, Saúl Severiche Caballero y a *Jorge 40*, por el homicidio del periodista.

6. Álvaro Alonso Escobar fue asesinado el 23 de diciembre de 2001 en Fundación. Era el director y fundador del periódico *Fundación al Día*. Este medio escrito trataba noticias de índole local y en época electoral ejercía una vigilancia especial sobre los comicios en el municipio. El periodista también era promo-

tor de artistas de música vallenata y había tenido amenazas de un alcalde de Fundación, quien fue asesinado en el año 2000. Escobar fue asesinado por un hombre que llegó en una motocicleta a su casa, tuvieron una corta discusión y luego el desconocido le disparó. Por la muerte del periodista fue condenado por parte del Juzgado Primero Penal de Circuito el exparamilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Édgar Ariel Córdoba Trujillo, alias *Cinco Siete*, a 24 años y dos meses de cárcel. El paramilitar admitió su responsabilidad como coautor en los delitos de homicidio agravado por el caso del periodista Escobar y de concierto para delinquir por pertenecer a las AUC.

7. Jaime Alberto Madero Muñoz fue asesinado el 20 de septiembre de 2004 en Santa Marta. Voceador de prensa. Fue asesinado por un sicario el día 20 de septiembre de 2004, después de haber ignorado una advertencia de un desconocido que le dijo “deje de vender esa vaina”. Madero siguió vendiendo la noticia y minutos después fue asesinado a las 12:30 de la tarde. El hecho se produjo cerca de la plaza principal de mercado de esa ciudad, donde todos los días vendía los periódicos locales y nacionales.

De otro lado, en el departamento del Magdalena desde el 2006 se han presentado amenazas contra periodistas de la región. Los años más críticos en lo que se refiere a amenazas a periodistas fueron 2006, 2007, 2011 y 2012, en los que 30 periodistas fueron víctimas de amenazas, de acuerdo con el reporte de la Fundación para la Libertad de Prensa.

Al periodista Rafael Jiménez Padilla, en su programa Aracataca Informa a través de la emisora Macondo Estéreo, el gerente de esta le dijo, tres días después de las elecciones del 30 de octubre de 2011, que ya no debía tocar temas políticos y locales en su programa porque un candidato a la alcaldía lo había llamado y que este prefería que no se mencionara la situación electoral que estaba muy tensa en ese momento por una impugnación del candidato perdedor de las elecciones a la alcaldía que alegaba un supuesto fraude. El periodista se fue para Barranquilla por temor de su seguridad personal y laboral.

En el 2011 este departamento fue ubicado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.

En este departamento también se vivió la obstrucción para que la población estuviese informada. El 26 de octubre de 2011, cuatro días antes de las elecciones, fuentes cercanas a la Fundación para la Libertad de Prensa denunciaron que casi todos los ejemplares del periódico *El Informador* de Santa Marta habían sido recogidos en horas de la mañana. Según la editora, Cecilia Vives, hay sospechas de que fue por la publicación de una noticia, en la cual un candidato a la alcaldía alegaba un presunto complot para involucrarlo con paramilitares por medio de falsos testimonios.

Algo similar pasó con una edición dominical de *El Heraldo* en esa misma ciudad, en junio del mismo año. Fue comprada la edición en su totalidad, cuando curiosamente se publicaba un análisis crítico contra todos los candidatos a la gobernación del departamento.

Sucre

La lista de asesinados la integran:

1. José Antonio Dumet Acevedo fue asesinado el 9 de abril de 1984 en Sincelejo. Pertenecía al Círculo de Periodistas de Sucre. Se destacó por numerosas denuncias de corrupción administrativa. Fue asesinado por desconocidos que se le acercaron y le propinaron varios disparos cuando se encontraba en la puerta de su casa.
2. Santiago Rodríguez Villalba fue asesinado el 2 de febrero de 1997 en Sincelejo. Fue periodista de Radio Costanera donde dirigía el programa Contraataque, se desempeñaba desde 1995 como jefe de prensa de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre). En 1990 ocupó el cargo de secretario de Gobierno de Sincelejo. Fue asesinado en la noche del 2 de febrero, por dos hombres que llegaron a su residencia en la urbanización Los Tejares, en Sincelejo. Pidieron hablar con él sobre la venta de un vehículo y cuando este salió a la terraza recibió tres disparos que cegaron su vida.

- El crimen causó sorpresa porque no se conocían amenazas hacia Rodríguez Villalba. Los familiares dijeron que su periodismo combativo quedó atrás desde que entró a Carsucre.
3. Francisco Castro Menco fue asesinado el 8 de noviembre de 1997 en Majagual. Periodista de radio Majagual. Era el presidente de la Fundación Cultural de Majagual. Esta fundación comunitaria se encargaba de transmitir diferentes programas radiales en este municipio azotado por la violencia. Francisco Castro siempre quiso que sus programas fueran un espacio independiente para la comunidad, alejándola de las fuerzas activas de guerrillas y paramilitares que operaban en la zona. Castro Menco había sido amenazado por paramilitares, quienes le advirtieron que cesara en la defensa de los campesinos de la región. Fue asesinado de varios disparos por desconocidos que entraron a su casa. En el 2008, el Proyecto Impunidad – crímenes contra periodistas le pidió al presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, que se investigara el asesinato de este periodista porque habían transcurrido once años y el proceso seguía en etapa investigativa según informó la Fiscalía. En una diligencia de Justicia y Paz, el 2 de septiembre de 2012, el exparamilitar José Heriberto Navarro Martínez, alias *Mano Quemada* o *Solito* se responsabilizó por el homicidio del periodista comunitario.
 4. Rodolfo Julio Torres fue asesinado el 21 de octubre de 1999 en San Onofre. Se desempeñaba como corresponsal de la Emisora Fuentes de Cartagena. Antes, trabajó como corresponsal de Radio Caracol, en Sincelejo, y en el periódico *El Meridiano de Sucre*. Fue asesinado en la madrugada del 21 de octubre cuando varios individuos lo sacaron de su casa a la fuerza y se lo llevaron. Horas después, el cuerpo sin vida fue encontrado al lado de una carretera en San Onofre. Un año atrás circularon unos panfletos que lo vinculaban con el grupo guerrillero del ELN, se cree que estos panfletos fueron distribuidos por las AUC.
 5. Guillermo José Quiroz Delgado fue asesinado el 27 de noviembre de 2012 en San Pedro. Trabajó en Sonora Estéreo

en el noticiero Notisabana, era corresponsal de *El Meridiano de Sucre*. Había denunciado la aparición de panfletos amenazantes en el municipio de San Pedro. Fue víctima de golpes en la cabeza y, varios más fuertes, en el ojo derecho, la espalda y los brazos. Mientras se encontraba aún con vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica María Reina, en Sincelejo, relató que, mientras cubría una serie de protestas en la vía que conduce a San Pedro y Magangué, fue detenido por la Policía y montado a un camión en el que fue golpeado antes de ser lanzado del vehículo en movimiento. La policía dice que Quiroz fue quien se tiró.

Tres aspectos definen el escenario al cual se enfrenta en la actualidad el gremio de periodistas en la Costa Caribe colombiana: la autocensura, la disminución del poder de los medios de comunicación y las dificultades para ejercer el periodismo de manera independiente.

Nada de esto ha sido fortuito, una serie de factores que pasan por la violencia y se entretajan con el excesivo poder concedido a los sectores políticos, incluso desde los medios de comunicación, han convertido el ejercicio en una práctica compleja.

El ejercicio periodístico en la región se caracteriza hoy por comunicar temor y por sus grandes vacíos en la propuesta de contenidos. El lugar común es el registro de los hechos, y aun cuando hay ejercicios notorios, son casos aislados que dan cuenta de una falta de seguimiento, profundización e investigación permanente frente a temas de complejidad notoria como la corrupción de las instituciones políticas, el alterado orden público en la ruralidad y la creciente horda violenta en la zona urbana.

PERIODISMO, VIOLENCIA Y AUTOCENSURA⁴: REALIDADES DEL OFICIO PERIODÍSTICO EN LA ZONA SUR DE COLOMBIA

Se abstiene uno de situaciones, pero hemos tratado de ‘morder’ todos los temas.
Edwin Ballesteros, editor El Nuevo Día (Tolima)

Ese mismo temor infundido por el conflicto, ha permitido que los colegas sientan menos atractivo el cubrimiento de estos temas.
Felipe González, periodista opanoticias.com (Huila)

Literalmente el corresponsal en la provincia trabaja con las uñas, y aquellos que trabajamos por nota definitivamente tenemos que depender de lo que pasa en la región y si no hay nada de interés nacional, pues no se gana nada.
Gustavo Molina, corresponsal de Noticias Uno (Cauca)

Las crueles dinámicas del conflicto armado, el poder que ejercen los grupos armados legales e ilegales, y la alianza criminal entre la corrupción y la violencia, corresponden a los obstáculos más fuertes que el periodismo y los medios de comunicación regionales han tenido que afrontar en el sur y occidente de Colombia.

Esta reflexión ahondará esas realidades, evidentes en los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, una extensa región donde la agresión, el miedo, la autocensura, los riesgos y las presiones, sumados a las pésimas condiciones laborales, hacen parte de la cotidianidad y quehacer de las personas que ejercen el periodismo.

El panorama más desalentador lo entrega la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa). En un reciente informe, “Protestas Sin Garantías para Cubrir – Informe sobre la situación en Colombia 2013”, indica que del total de periodistas víctimas de asesinato en el periodo, 55 casos se presentaron en los departamentos mencionados (FLIP, 2014, página 12).

4 Documento elaborado con la colaboración de los informes regionales hechos por Consejo de Redacción, organización de periodismo de investigación colombiano, para el informe sobre violencia contra el periodismo 1977-2015 del CNMH.

La región del sur donde han muerto más comunicadores es el Valle del Cauca, con 32, seguido del Caquetá con siete. En el Tolima se reportan cinco homicidios; en Cauca y Huila, cuatro respectivamente; y en Putumayo y Nariño, dos en cada zona.

A ello se suman innumerables casos de periodistas amenazados, agredidos, censurados, desplazados y exiliados, otros quedaron heridos en medio de ataques guerrilleros, enfrentamientos o cubrimientos de protestas sociales, y otros perdieron sus medios de comunicación o sus herramientas para ejercer la labor de informar.

¿Por qué en esta región del país se ensañaron contra periodistas y contra medios de comunicación?

Históricamente en esta zona de Colombia nacieron y se asentaron las estructuras armadas más robustas del grupo guerrillero FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La primera de ellas fue comandada por Pedro Antonio Marín, alias *Manuel Marulanda* o *Tirofijo*, quien creó un grupo de guerrillas tras la operación ‘Marquetalia’ que adelantó en el Tolima el Ejército en mayo de 1964, para “atacar el territorio donde se concentraban los campesinos alzados en armas”, historia que se reseña en el informe ¡Basta Ya! publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. (GMH, 2013, página 121).

Desde allí se inicia el fortalecimiento del grupo ilegal, y rápidamente logra su expansión, aumento en el número de combatientes y su estructura organizativa se consolida en frentes y columnas, los cuales se ubican en corredores estratégicos del Caquetá, Cauca, Tolima y Huila.

Casi paralelamente a la fundación de las FARC en 1965, surgieron el Ejército de Liberación Nacional —ELN— (1962) y el Ejército Popular de Liberación —EPL— (en 1967) cuyas historias se remiten al encuentro entre los jóvenes habitantes de las ciudades formados y radicalizados según los lineamientos de las revoluciones cubana y china, y los herederos de las antiguas guerrillas

gaitanistas del Magdalena Medio, el Alto Sinú y el Valle del Río San Jorge, unos y otros descontentos con las restricciones de participación política en el Frente Nacional (GMH, 2013, página 123).

Junto a los procesos de expansión de las FARC y las acciones militares que se acrecentaron por orden de los gobiernos, la prensa se convirtió en ‘testigo’ directo de las diversas dinámicas del conflicto que se vieron reflejadas en ataques, tomas guerrilleras a pueblos, secuestros masivos, desplazamientos forzados, crímenes selectivos, permanentes enfrentamientos, extorsiones, y un sin número de acciones armadas que afectaron directamente a la población civil.

Aspectos que además se sumaron a negocios ilegales como el narcotráfico, y nexos entre las FARC, personas líderes de la política y las mismas entidades de seguridad del Estado como el Ejército y la Policía. También nacieron los grupos de autodefensas, que generaron en el país otro panorama de dolor, muertes, desapariciones y destrucción.

¿A qué costo se registraron y narraron todos estos fenómenos y episodios del conflicto armado interno? Gustavo Molina, periodista del Cauca, actualmente corresponsal de Noticias Uno, relata:

Cubriendo los temas de Toribío (Cauca), año 2005, cuando entrar a esa población era toda una hazaña en medio del fuego cruzado, te silbaban las balas en los oídos, tú sentías las bombas que te caían al lado del carro donde te transportabas. Otras situaciones, como llegando a la Bota Caucana (sur del Cauca) donde era el santuario pues del ELN, en el municipio de Santa Rosa, recuerdo que íbamos detrás de una caravana militar, y de repente haces parte de una emboscada, donde te toque correr, y sentir que ya no vas a salir de ese sitio, es angustiante, todo por una nota, que no cuesta más de 100 mil pesos” (Molina, 2014, entrevista).

La FLIP reseña casos de periodistas asesinados que murieron mientras cubrían hechos de orden público, por sus denuncias directas de narcotráfico y relación de poderes políticos locales con las FARC o entidades de seguridad del Estado (FLIP, 2014).

Cuadro 30. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en la zona Centro, Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Departamento	Periodos de 10 años				Total de periodistas víctimas de asesinato en el periodo 1977-2015 por departamentos
	1977-1985	1986-1995	1996-2005	2006-2015	
Huila	0	0	4	0	4
Tolima	0	1	4	0	5
Total de periodistas víctimas de asesinato por periodos	0	1	8	0	9

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 31. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en la zona Suroccidente, Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Departamento	Periodos de 10 años				Total de periodistas víctimas de asesinato en el periodo 1977-2015 por departamentos
	1977-1985	1986-1995	1996-2005	2006-2015	
Cauca	0	2	0	2	4
Nariño	0	0	2	0	2
Valle del Cauca	7	12	10	3	32
Total de periodistas víctimas de asesinato por periodos	7	14	12	5	38

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 32. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en la zona Amazonía, Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Departamento	Periodos de 10 años				Total de periodistas víctimas de asesinato en el periodo 1977-2015 por departamentos
	1977-1985	1986-1995	1996-2005	2006-2015	
Amazonas	0	1	0	0	1
Caquetá	0	3	3	1	7
Guainía	0	0	0	0	0
Guaviare	0	0	0	0	0
Vaupés	0	0	0	0	0
Putumayo	0	0	2	0	2
Total de periodistas víctimas de asesinato por periodos	0	4	5	1	10

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

La región, además de ser epicentro del conflicto, también ha sido escenario de procesos de paz, entre ellos los ‘diálogos del Caquán’, negociaciones fallidas entre el Gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, realizadas entre 1998 y 2002.

Durante el proceso y terminación de las negociaciones, varios periodistas tuvieron que afrontar las presiones del grupo guerrillero y sufrieron desprotección durante la operación de retoma del control del Ejército de la zona.

El conflicto en el sur y occidente de Colombia no solo generó agresiones directas contra periodistas, también ocasionó ataques contra la infraestructura de transmisiones y en varios casos la guerrilla decomisó equipos de comunicación, especialmente de radios comunitarias e indígenas. Los hechos más graves se presentaron en los departamentos de Huila, Tolima, Cauca y Valle del Cauca.

El 3 de julio del año 2012 fue destruida la antena de la estación radial ‘Voces de nuestra tierra’, afiliada al Consejo Regional Indí-

gena del Cauca, CRIC, y, para la misma fecha, la emisora Nasa de Toribío decidió parar de emitir por causa de las balaceras entre Ejército y guerrilla cerca de su sede.

A su turno, la Fecolper (Federación Colombiana de Periodistas) reportó ataques contra las instalaciones de la Emisora Oriente Es-téreo en Cali, Valle, y contra la Emisora Nueva Era en Algeciras, Huila (Fecolper, 2014).

A estos casos se suman situaciones denunciadas por la red de emisoras comunitarias del Tolima: en el 2011, la emisora comunitaria de Planadas dejó de emitir luego de que la guerrilla les quitara los equipos de transmisión. Según testimonio de Marisol Mesa, coordinadora de la red de emisoras comunitarias del Tolima:

Estábamos haciendo unos programas que apoyó el Ministerio de Cultura, y el cooperante era en ese momento Usaid, y en aquella época (2011) emitimos un programa con información del proyecto Red Unidos del Gobierno Nacional, la emisora lo sacó porque no le vio nada grave, resulta que a la semana siguiente, la guerrilla se llevó los equipos de transmisión de la emisora, que estaban en una finca y a las 3:00 p.m. la emisora se fue del aire, el mensaje que dejaron es: dígame a los de la emisora que no vuelvan a sacar nada del Gobierno y que si quieren los equipos tienen que entrar a negociar con nosotros, además le vamos a cobrar una multa, pues que tocó hacer la negociación emisora-guerrilla para que nos devolvieran parte de los equipos y ponerla al aire, pero bajo esa premisa (Mesa, 2014).

También es importante mencionar de las múltiples advertencias que la guerrilla de las FARC le hizo a medios de comunicación y periodistas para que dejaran de informar ciertos temas, casos conocidos en todos los departamentos que hacen parte de este informe.

¿Qué no se puede contar?

En el sur y occidente de Colombia, temas relacionados con el conflicto armado, casos de corrupción, paramilitarismo, delin-

cuencia común y bandas criminales, son temáticas que, por el riesgo que representa, no se desarrollan a profundidad en los medios. Señala Felipe González, periodista de *opanoticias.com*, del Huila: “Ese mismo temor infundido por el conflicto, ha permitido que los colegas sientan menos atractivo el cubrimiento de estos temas”,

En el equipo de redacción de *El Nuevo Día del Tolima*, según Edwin Ballesteros, editor de mencionado medio de comunicación, han hecho grandes esfuerzos para visibilizar casos de corrupción administrativa, sin embargo advierte *que* “se abstiene uno de situaciones, pero hemos tratado de ‘morder’ todos los temas”.

En el Huila, uno de los casos más sonados fueron las amenazas contra el jefe de redacción del *Diario del Huila*, Germán Hernández Vera, quien tuvo que salir durante varios años de la región, por denuncias realizadas desde el año 2005 sobre corrupción en el Hospital Universitario de Neiva.

Por otro lado, el periódico regional *La Nación* de Neiva afrontó presiones tras denunciar e insistir en las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de 7.000 millones de pesos, recursos provenientes de excedentes de regalías, contra la exalcaldesa Cielo González Villa y contra el exalcalde Héctor Aníbal Ramírez Escobar.

En Cauca, Caquetá y Nariño, periodistas consultados aseguran que prefieren no tocar temas de corrupción, paramilitares, y los mal llamados ‘falsos positivos’. “Es mejor quedarse uno quieto, porque aquí la cosa es a otro precio. Se hacen denuncias, pero de manera muy general, la verdad es mejor quedarse uno callado y cuidarse”, manifestó un periodista de Florencia, quien prefirió omitir su nombre.

En regiones como el Valle del Cauca, temas de narcotráfico, corrupción y grupos de delincuencia organizada son muy poco ampliados, y los que se atreven a informar son periodistas que viven en la ciudad de Cali y cuentan con respaldo de sus medios. “Dependiendo de la coyuntura del momento de orden público se pueden tocar temas de narcotráfico y dependiendo de qué lugar lo hagas. Es diferente denunciar en Cali que hacerlo en Buenaventura, por ejemplo”, manifestó Fabio Posada de *El País* de Cali.

La autocensura y el miedo son dos situaciones que afrontan permanentemente en estas zonas del país quienes ejercen el periodismo. Se cohíben de investigar y profundizar en los temas mencionados para evitar riesgos, pero también se debe a que muchos viven de la pauta publicitaria, cupos que en su mayoría provienen de entidades estatales. Agregó Fabio Posada:

La autocensura es una medida de autoprotección del puesto, del cargo porque definitivamente los dueños de los medios también presionan, así como los políticos, así como otras fuentes de poder económico, claro que influyen en la agenda para que la información salga a su favor, entonces es cuando uno empieza a ver reflexiones sobre qué es la noticia, que es lo que se publica (Posada, 2014, entrevista).

Pese a ese panorama, en esta región periodistas y medios han realizado alianzas informativas para aproximarse a ciertos casos. Esto se ha visto con más frecuencia tras el surgimiento de medios digitales independientes, así como a través de alianzas entre medios digitales locales, emisoras, canales de televisión y prensa regional. Edwin Ballesteros testimonia:

El espíritu del periódico es con visión crítica y en esa medida en lo posible pues hemos abordado temas de corrupción, no de ahora pero si a lo largo de todo los 21 años, cuando no se ha podido por situaciones de riesgo hemos hecho alianzas periodísticas con *Semana* o Colprensa o con portales como La Silla Vacía, Verdad Abierta, ellos reproducen temas nuestros, nosotros temas de ellos, pero especialmente se ha hecho digamos en temas sensibles (Ballesteros, 2014, entrevista).

LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN ANTIOQUIA

La violencia contra periodistas ha sido continua y pertinaz en Antioquia, una de las regiones que aparece permanentemente en

las estadísticas de asesinatos y en el mapa regional de las amenazas contra el oficio. Estos índices se pueden explicar porque la región ha sido asolada por todos los sujetos del conflicto armado interno y en todos los periodos que se proponen en este Informe: primero por los narcotraficantes y después por las guerrillas, que han tenido focos de operación en zonas determinadas del departamento como el nordeste o Urabá. Después por las bandas paramilitares, que organizaron grupos criminales desde sus propios orígenes en ese departamento, como lo demuestra el cuidadoso seguimiento histórico que hace María Teresa Ronderos en su libro “Guerras recicladas” (2014), los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y, en general, la literatura sobre el desarrollo de la guerra en Colombia.

A finales de los años setenta y especialmente en los años ochenta, Antioquia fue una de las regiones más impactadas por la violencia del narcotráfico. Esta violencia se dirigió hacia la ciudadanía, hacia policías, hacia integrantes de los sistemas de justicia y de organismos de seguridad, y también golpeó estratégicamente a personas del periodismo, y con más fuerza a las vinculadas con la prensa escrita, que en esas décadas empezaron a denunciar las actuaciones de los nacientes carteles. Al final de la década de los ochenta, se destaca el caso de la corresponsalía del periódico *El Espectador*, que fue un claro objetivo militar del Cartel de Medellín, y cuyos atentados le quitaron la vida a una buena parte de sus integrantes, incluyendo a sus empleados administrativos. Se trató de una violencia semiselectiva, pues aunque se tenían periodistas como objetivos, más allá de lo que informaran a través de su labor diaria, el caso *El Espectador* permite pensar en una violencia abierta y declarada contra el medio.

En el periodo de los años noventa y en años posteriores al 2000, se recrudeció la violencia vinculada con los grupos paramilitares y las bacrim, que se caracterizó por ser profundamente selectiva, pero además por abrirse paso en nuevas zonas como el Urabá antioqueño y el Bajo Cauca. Se asesinaron periodistas icónicos como Luis Eduardo Gómez, quien fue muerto en el municipio de Arboletes, mientras los grupos criminales buscaban amedrentar

a periodistas que investigaban temas vinculados a las agendas paramilitares, como el narcotráfico, las tierras y la corrupción. En el Informe “Las noticias se extinguen en el Bajo Cauca”, publicado por la FLIP (Fundación para la libertad de prensa), se lee:

Los años de violencia contra los medios de comunicación que ha vivido el Bajo Cauca obligaron a los medios a callar y de paso ha condenado a sus más de 400.000 habitantes a un rotundo silencio informativo (...). Temas como la proliferación de la minería ilegal, la extorsión, la complicidad entre agentes de la fuerza pública y bandas criminales; el aumento del microtráfico, así como la existencia de zonas vedadas incluso para el Ejército, hacen parte del silencio informativo (FLIP, 2013).

Las consecuencias de la violencia sobre el periodismo en estas zonas de Antioquia fueron concretas y evidentes: disminuyeron las emisoras de radio, se fueron apagando uno tras otro los programas noticiosos, la música reemplazó a la información y se generó el éxodo de periodistas, quienes tuvieron que salir desplazados de sus comunidades locales. Las medidas cautelares y de protección se acrecentaron y hubo ceses de actividades ante los peligros que experimentaban para cumplir con su oficio.

El narcotráfico y la minería ilegal han sido asuntos persistentes en la realidad de la violencia contra periodistas en Antioquia, región en la que se acentuó la presencia de bandas criminales como Los Rastrojos y Los Urabeños, con una notable presencia desestabilizadora especialmente en la zona del Bajo Cauca.

En la violencia vinculada con los grupos guerrilleros se destacan los secuestros simples (o retenciones) para impedir la información periodística, para darles instrucciones sobre sus propósitos o acciones o para ejercer coacción que garantice la lectura de sus comunicados, especialmente a través de emisoras de radio. Este comportamiento se presenta sobre todo en el nororiente y en el suroriente antioqueño.

En la actualidad, en Medellín se viven amenazas permanentes en el cubrimiento de ciertas comunas. Esto perjudica la labor de

periodistas judiciales y reporteros gráficos, sobre todo de medios impresos populares como el *Q'Hubo*. En este caso concreto, las bandas urbanas obstaculizan el ingreso a los territorios y amenazan a periodistas que cubren crímenes menores. Uno de los periodistas entrevistados señaló a este respecto que, en ocasiones, algunos de los jóvenes involucrados en la problemática de convivencia en los barrios “se molestan mucho porque los medios normalmente publican la información sostenida en las versiones de la policía y algunas veces de la alcaldía, pero nunca aparecen ni sus reflexiones ni sus posturas frente a hechos concretos ocurridos en el contexto del conflicto urbano” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista a periodista en Antioquia).

En las entrevistas que se hicieron en el trabajo de campo de este Informe, se revelan algunas dimensiones de la violencia que provienen del tejido de criminalidad de Medellín asociado al microtráfico y el microcrimen, así como al funcionamiento de los “combos”, grupos delincuenciales afirmados en el narcotráfico y la extorsión que están muy extendidos. El peligro se concreta en las noticias que identifican a estos grupos criminales o a sus miembros, así como a toda información que puede ser de utilidad para las autoridades. Anota una de las fuentes consultadas:

La principal fuente de demandas y reclamos contra el periódico no está en la legalidad sino en los criminales ya sea porque aparece su alias o su foto mencionados en alguna noticia. Lo que procuramos hacer en nuestra tarea periodística es extremar todos los controles, para que no haya nada especulativo ni gratuito, ni frívolo. Por ejemplo la información sobre la denominada Oficina de Envigado la chequeamos y balanceamos mucho y la analizamos detenidamente pero no generamos autocensura (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista a periodista en Antioquia).

Entretanto otro periodista de la región anota que “la delincuencia organizada aquí en la ciudad tiene estructuras muy peligrosas, armadas y agresivas; trabajar en este contexto de conflicto en la ciudad no es entonces fácil”.

La impunidad de las amenazas y agresiones ha generado quejas, al igual que los esquemas de protección que tienden a permanecer en el tiempo, lo que obstaculiza el oficio del periodismo, porque reduce la confianza con las fuentes y vuelve más engorrosa la logística de los cubrimientos. También se ha perdido la confianza en las autoridades de protección, porque pueden aprovechar la cercanía para hacerle inteligencia a la persona protegida (cuando es una amenaza para las mismas autoridades, como la policía) o a sus fuentes (que algunas veces están vinculadas a redes criminales).

SANTANDER, ARAUCA Y CAQUETÁ

Han sido tres regiones particularmente agobiadas por la violencia contra periodistas, en las que además se ha experimentado una colectivización de la agresión: en Arauca, por el exilio interno de un conjunto importante de comunicadoras y comunicadores hacia Bogotá, ante el crecimiento de las situaciones reales de amenaza y peligro en la región; en Caquetá, por los asesinatos de colaboradores de la emisora de radio La Voz de la Selva; y en Santander, por la realidad vivida por las personas que ejercen el periodismo, especialmente del Magdalena Medio.

Estos hechos colectivos significan una orientación estratégica de grupos violentos sobre poblaciones sociales específicas —en este caso la de periodistas— con propósitos unificados de daño, que a la vez producen influencias extendidas y profundas sobre el tejido comunicativo de las regiones. Medios y periodistas desplazados son mediadores sociales acallados, son menos voces, son comunidades atemorizadas, son un enorme handicap para el funcionamiento de la democracia local.

Santander

Los años finales de la década de 1980 e inicio del año 2000 fueron complejos para el departamento de Santander por su cercanía

con el Norte de Santander y el Magdalena Medio. A fines de los 80, *Vanguardia Liberal*, el periódico publicado en Bucaramanga, sufrió una serie de ataques perpetrados por el narcotráfico, las FARC y el ELN. Entre ellos la bomba el 16 de octubre de 1989.

El secuestro de periodistas para que publicaran comunicados de los grupos guerrilleros es un fenómeno que ocurrió no solo en Bucaramanga sino en Barrancabermeja, y en general es una práctica extendida en las diferentes regiones en que tienen presencia los grupos guerrilleros. Así mismo, constantemente se les acusó de ser colaboradores de la guerrilla y/o de los grupos paramilitares, lo que significaba una tremenda estigmatización con un aumento de su indefensión y vulnerabilidad.

Se presentaron también asesinatos de personas que ejercían el periodismo. En San Pablo, sur de Bolívar, a una hora y media en chalupa desde Barrancabermeja, el 16 de julio de 2001 fue asesinado Eduardo Estrada, un líder comunitario que se preparaba como periodista para dirigir la emisora comunitaria del municipio.

En Barrancabermeja fue asesinado el periodista Ismael Jaimes, director del Diario *La Opinión del Magdalena*.

Mario Prada Díaz fue asesinado en Sabana de Torres tras ser tildado de simpatizante de la guerrilla. Era el fundador del diario *Horizontes Sabaneros*.

Arauca

Desde que fue dinamitada la sede de radio Caribabare en 1984 hasta el asesinato de Eduardo Varela en el 2002, la situación de la libertad de expresión en el departamento de Arauca ha sido de enorme gravedad. Junto a las amenazas constantes contra periodistas de las FARC y el ELN, están las estigmatizaciones por parte de algunos representantes de las fuerzas militares y de personas vinculadas a la política regional. En el Informe de la FLIP sobre la situación de la libertad de prensa en el 2014, se lee:

Arauca es el departamento en el que se registran más agresiones a la prensa por parte de las guerrillas de las FARC y el ELN. Entre 1991 y 2003 fueron asesinados de forma selectiva seis periodistas, sus homicidios tenían el claro objetivo de apagar sus voces. Un periodista asesinado cada dos años, en un departamento con aproximadamente 70 periodistas, resulta aterrador. No es exagerado afirmar que esos asesinatos decapitaron al periodismo (FLIP, 2014).

Bajo el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, al crearse la zona de Consolidación, varios defensores de Derechos Humanos fueron acusados de rebelión, entre ellos el periodista Emiro Goyeneche, que hoy en día solo conduce algunos programas de Saravena Stéreo. Carmen Rosa Pabón es, por su parte, una de las comunicadoras que ha recibido más amenazas a lo largo de sus 30 años como periodista. Hace parte del Comité de Impulso y ha tenido que salir desplazada de la región. La muerte de Efraín Varela en el 2002 causó gran impacto, tanto por su reconocimiento en la comunidad como por su liderazgo dentro del grupo de periodistas de la región. Sin duda, el desplazamiento de los 16 periodistas del Arauca, en marzo de 2003, fue un hecho doloroso que en este Informe se valora como un acontecimiento profundamente relacionado con el tema del daño colectivo.

Como sucedió en Antioquia, la arremetida de los grupos violentos contra periodistas trajo implicaciones inmediatas en su oficio: la información se diluyó, los temas referidos al conflicto salieron de la agenda noticiosa, prácticamente se acabaron la investigación y las visitas presenciales a otros municipios. También aumentaron las presiones, tanto de los actores ilegales como de los legales.

Especialmente, resulta preocupante la injerencia sobre contenidos que realiza el Ejército. La FLIP constató que existen presiones sutiles o directas sobre los periodistas por la información favorable o desfavorable que se publique relacionada con las fuerzas armadas. Además realizan perfiles de los periodistas que mantienen una línea crítica con la institución y realizan labores de inteligencia sobre los reporteros que ellos identifican como ‘problemáticos’ (FLIP, 2014).

Caquetá

Sin duda, la serie de cinco asesinatos de los miembros de la emisora La Voz de La Selva perjudicó el desarrollo del periodismo radial de la región. Estos asesinatos han sido asociados con el papel protagónico de la familia Turbay, que tenía gran influencia en Florencia y en general en el departamento. En la era del Caguán, las personas vinculadas al periodismo local tuvieron el privilegio de conocer muy de cerca lo que pasaba en ese entonces en las negociaciones de paz. Pero algunas de ellas fueron señaladas como simpatizantes de la guerrilla una vez culminaron dichas negociaciones. En el departamento del Caquetá se presenta el mismo fenómeno de las estigmatizaciones de algunos periodistas por ser aparentemente “simpatizantes” de grupos guerrilleros o de grupos paramilitares. Varios periodistas de la región están exiliados.

LAS NECESIDADES DEL PERIODISMO REGIONAL

Periodistas entrevistados coinciden que además de las dificultades que afrontan, como los riesgos tras el cubrimiento de temas de conflicto, hace falta mayor formación y mejores condiciones laborales.

En esta zona del país, el 85 por ciento de los periodistas viven de la pauta publicitaria y del salario mínimo. Así lo testimonia Felipe González, periodista de opanoticias.com:

En el Huila, no te miento si te digo que por lo menos son tres los periodistas que ganan dos millones de pesos y son por ahí cinco los que ganan más de un millón y ahí para abajo muchos periodistas viven de un salario mínimo, muchos viven de la pauta, de cupos publicitarios, entonces sin garantías de salud, de riesgos laborales, entonces es muy complicado exigirle a un periodista, que investigue, profundice, cuando está pensando más en conseguirse la plata para pagar el mercado, el arriendo, entonces yo creo que en el momento en que los medios puedan brindarle

esas garantías laborales a sus periodistas, pues se puede actuar de forma más tranquila y libre (González, Felipe, entrevista CNMH, Huila, 2013).

Relato muy similar al de Fernando González, periodista de la FM del Tolima: “Las condiciones laborales no son las mejores, especialmente en radio es complicado, cada uno negocia lo suyo, como hay periodistas de 2 millones hay periodistas de 250 mil pesos, es triste decirlo, pero esa es la realidad” (González, Fernando, entrevista CNMH, Tolima, 2013).

De este panorama tampoco se libran los corresponsales de medios nacionales. El 95 por ciento laboran mediante la figura de freelance, es decir ganan por noticia aprobada. “Literalmente el corresponsal en la provincia trabaja con las uñas, y aquellos que trabajamos por nota definitivamente tenemos que depender de lo que pasa en la región y si no hay nada de interés nacional, pues no se gana nada”, manifestó Gustavo Molina, corresponsal de Noticias Uno en el Cauca.

También hicieron referencia a que, pese a que hay facultades de periodismo o comunicación social, los recursos económicos no alcanzan para cubrir gastos que permitan realizar estudios profesionales.

Por otro lado, y de manera alentadora, se puede mencionar que en esta región recientemente se ha presentado el surgimiento de medios digitales, que le aportan a la pluralidad de la información.

Según el Estudio de Medios Digitales en Colombia (2013) realizado por la organización de periodistas Consejo de Redacción y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en estos departamentos existen 111 medios, los cuales aportan a que existan mayores espacios comunicativos e independientes.

5

LAS ESTRATEGIAS DE LOS GRUPOS VICTIMARIOS

Cuando se observan los asesinatos de periodistas, como también la diversidad de las amenazas y delitos que sufrieron durante el periodo analizado, se puede concluir superficialmente que la violencia que provenía de los grupos victimarios fue homogénea y similar. Pero basta acercarse con atención a los hechos, y sobre todo recorrer sus testimonios, para empezar a encontrar diferencias y particularidades.

LOS GRUPOS DE NARCOTRAFICANTES O LA CABEZA DE LA HIDRA

El narcotráfico identificó en el periodismo un poder y un enemigo potencial. Esta doble tensión la explicaba el hecho de que, como organización criminal, la visibilidad de sus delitos los ponía en un peligro inmediato; y como grupo de militancia necesitaban de los medios de comunicación y el periodismo para difundir sus exigencias y puntos de vista, especialmente sobre la no extradición.

La visibilidad, sin embargo no fue inmediata e inclusive pasó por varios momentos. La sociedad inicialmente no era consciente del peligro que se estaba larvando en el poder desmesurado de un

negocio descomunal, de las prácticas delictivas que componían estructuras criminales complejas y de la enorme agresividad y de la capacidad corruptora de un delito que se fue extendiendo entre autoridades, instituciones y diferentes sectores de ella. Señala Alberto Donadío:

En los años setenta, no es que el narcotráfico no existiera sino que no se sabía que existía, pues ahora se sabe que ya desde fines de los sesenta, la reina de la coca estaba exportando cocaína desde Medellín en gran escala. Los carteles como tales en los años setenta no estaban identificados (Donadío, 2013, entrevista CNMH, Bucaramanga).

La prevención a la comunidad del desastre que se avecinaba fue la labor de algunos medios, y sobre todo de algunos y algunas periodistas. Lo hicieron cuando casi nadie lo afirmaba, e inclusive cuando había una condescendencia social con los advenedizos. Las columnas de opinión tuvieron una importancia decisiva en el reconocimiento social de qué tipo de problema se estaba gestando en la sociedad y, sobre todo, cuáles eran sus ramificaciones, sus implicaciones, modos de actuar y consecuencias. No parece que ningún otro grupo victimario haya sentido, de manera tan aguda, el peligro que significaban los editoriales y las opiniones de páginas editoriales de los periódicos. Quizá porque aspiraban a intervenir directa y explícitamente en la política, y porque el “lavado” de capitales, y especialmente de imagen, fue algo que se propusieron dentro de su específica estrategia de poder, primero regional y después nacional. Cuando Pablo Escobar, que había comenzado como un ladrón de lápidas, fue poniéndose a la cabeza del poderoso cartel de Medellín y ya tenía las riendas de un negocio que le reportaba ingentes ganancias, dio el paso hacia el liderazgo social y la representación política. Del bajo perfil se pasó a la exhibición pública y de esta a la manifestación cínica de su poder. Esto escribía Guillermo Cano en un editorial de *El Espectador* del 5 de mayo de 1984, dos años antes de su asesinato:

A la mafia se la dejó crecer a la vista de las autoridades sin malicia y de la sociedad complaciente y acogedora. Los grandes y más representativos empresarios del narcotráfico son delincuentes inequívocamente identificados y con domicilio conocido. Y no sabemos que se les hubiera hecho objeto de algún tipo de control de sus actividades ni que sobre sus movimientos delictivos se hubiera establecido una vigilancia que en algún momento coyuntural hubiera podido frustrar sus designios criminales. Los grandes capos de la mafia se oían en el escenario del país con insolente desparpajo, engreídos de su bonanza económica (Cano, 1984).

En ese momento la exposición pública del narcotráfico creció, y comenzaron a aparecer las columnas de opinión de periódicos regionales y nacionales. Los primeros, más cercanos a los acontecimientos y los segundos más alejados y también más poderosos. Cuando colisionaron los intereses del narcotráfico con las opiniones de los periódicos, la estrategia de silenciamiento y amedrentamiento se hizo clara y explícita. Fue desde la compra completa de las ediciones de la prensa escrita en las que se les criticaba y la adscripción de periodistas venales a los carteles, hasta el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de periodistas adversos al narcotráfico.

La controversia dura del narcotráfico empezó en 1982, o sea, fin del gobierno de Julio César Turbay e inicio de Belisario Betancur. En ese momento es cuando arranca Luis Carlos Galán a denunciar el tema de los “dineros calientes”. Aquí siempre nos inventamos eufemismos, pero se trataba de la presencia de dineros de la mafia en la política (Castillo, 2014, entrevistado por María Isabel Naranjo).

Cuadro 33. Número de asesinatos cometidos contra periodistas directivos de medios en Colombia. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Periodos 5 años		Periodo 10 años 1977-1985		Periodos 5 años		Periodo 10 años 1986-1995		Periodos 5 años		Periodo 10 años 1996-2005		Periodos 5 años		Periodo 10 años 2006-2015		Total asesinatos directivos 1977-2015
1977-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005	1996-2000	2001-2005	1996-2000	2001-2005	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2006-2010	2011-2015	
5	4	10	10	8	10							2	0			49
						20				18				2		

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Como se aclara en este Informe, quienes más sufrieron las repercusiones de la violencia en estas décadas no fueron periodistas de los grandes medios ni especialistas de opinión. Pero vale la pena tratar de analizar por qué sus escritos e informaciones desataron las iras de los grupos de narcotraficantes. Además de una intención política que suele rodear a las relaciones entre medios y narcos, existe una seducción en estos por el poder ilustrado de los medios como una clave de distinción que necesitaban urgentemente para formar parte de una sociedad de la que eran excluidos a pesar de sus fortunas, sus extravagancias y su poder criminal. Tener acceso a los medios, y sobre todo argumentos de convicción en la opinión pública, era un objetivo ineludible para el narcotráfico, primero para tratar de sostener la imagen política que deseaban consolidar y posteriormente por el debate sobre la extradición que convirtieron en un motivo fundamental de su lucha política y sus iniciativas de presión social.

La estrategia del narcotráfico frente a medios y periodistas fue en ascenso. Junto a las amenazas y los asesinatos empezaron los atentados contra la infraestructura periodística, la focalización en medios que, como *El Espectador*, sufrieron los embates criminales en diferentes representantes de su cadena productiva y la planificación intencionada de una estrategia delictivo-comunicativa en contra de la extradición. Uno de los periodistas, entrevistado en Antioquia en el trabajo de campo de este Informe, describió la situación de hostigamiento contra *El Espectador* así:

[S]ufrieron las bombas que le ponían a la sede de *El Espectador* en el barrio El Prado, los ataques contra los repartidores del periódico, las llamadas... a medida que aumentaban las amenazas se tenían que ir corriendo a una habitación más atrás de la casa, o sea desde la fachada hacia atrás, hasta que terminaron en la cocina todos, las secretarias, el periodista y el fotógrafo. Todos terminaron en la cocina y toda la casa adelante desocupada por el temor y la zozobra crecientes (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista a periodista departamento de Antioquia).

Como lo describe Alejandro Galvis Ramírez, director de *Vanguardia Liberal*, refiriéndose a una ciudad diferente a Medellín:

Bucaramanga había sido una plaza muy sana y en los últimos años mucha gente feliz contaba que había vendido su casa por un 50 por ciento más. Y lo que nos empezamos a dar cuenta en Bucaramanga, era que se nos estaban viniendo muchos narcotraficantes de otras partes a refugiarse acá... A raíz de estos pronunciamientos nos metió una bomba Escobar al periódico, de unos 84 kilos de S4, que nos destruyó unos 2000 metros cuadrados de edificio. Los 30 metros del frente sobre la calle, el primero, segundo y tercer piso, fue totalmente destruido. El edificio del frente también se cayó, mejor dicho todo fue un desastre. Con tres o cuatro muertos y 17 heridos... eso fue una catástrofe (Galvis, 2013, entrevista CNMH, Bucaramanga).

El primer asesinato de un periodista relacionado con los carteles de la droga fue temprano y en la Costa. Ocurrió el 30 de junio de 1979 en Barranquilla y se atribuyó a la guerra entre los Valdeblánquez y los Cárdenas, dedicados al negocio de la marihuana. Carlos Ernesto Castillo Monterrosa, quien trabajaba en la revista deportiva Olímpica fue acribillado por dos sicarios. Unos meses después, en Maicao, Libardo Gil Ceballos fue muerto cuando adelantaba una investigación sobre el tráfico de estupefacientes en la región. En septiembre de 1983 cayó el primer columnista que había dedicado algunas de sus columnas al tráfico de drogas y sus repercusiones en la economía y la política de la región. Nelson Amaya Barreto trabajaba en *El Colombiano* y *El Espectador* y fue asesinado por un sicario en Medellín en septiembre de 1983.

En la década de los ochenta crece la violencia de los grupos de narcotraficantes contra medios de comunicación y periodistas: Alberto Lebrún Múnera trabajaba para *El Espectador* cuando fue asesinado a comienzos de 1986, Luis Roberto Camacho Prada fue amenazado en 1984 por denunciar la progresiva toma de Leticia por parte de capos de la mafia y asesinado en esa ciudad el 16 de julio de 1986, Raúl Echevarría Barrientos, subdirector

del *Diario de Occidente*, que apoyaba en sus escritos la extradición, fue asesinado dos días después de escribir favorablemente sobre la pena de muerte para los mafiosos. El 17 de diciembre de 1986 fue asesinado Guillermo Cano Isaza, director de *El Espectador* y unos meses después lo fue Fernando Bahamón Molina. En marzo de 1989, cuando representaba a la familia Cano en la investigación por la muerte de don Guillermo Cano, fue asesinado Héctor Giraldo Gálvez; en el mismo año cayeron otros colaboradores de *El Espectador*, Guillermo Gómez Murillo, Martha Luz López y Miguel Arturo Soler Leal. Se trató de una arremetida que tenía como objetivo preciso a periodistas y colaboradores administrativos de un mismo medio, *El Espectador*, que además había sufrido un feroz atentado contra su infraestructura y su funcionamiento periodístico. En Montería, dos pistoleros dispararon contra William Bendeck Olivella el 13 de octubre de 1989 y Diego Vargas Escobar fue asesinado mientras salía de las instalaciones de RCN radio en Medellín.

Los casos de asesinatos de periodistas por parte de grupos del narcotráfico tienen una constante: realizaron informes sobre las acciones ascendentes del crimen organizado, los enfrentaron en sus propias regiones, mostraron sus conexiones con el poder político y revelaron algunas conexiones con otros poderes locales que ellos habían empezado a cooptar, como la policía y las redes internas de corrupción administrativa. Profesionales del periodismo de opinión mostraban, entretanto, el peligro de los capos, su gigantesco negocio, su capacidad de corrupción y el aumento progresivo de sus crímenes y delitos. También la pasividad de las autoridades y la impunidad.

El narcotráfico no fue únicamente un periodo de la violencia contra periodistas. Por el contrario, se extendió a través de todo el periodo estudiado y, como la hidra de la mitología, generaba una nueva cabeza a medida que caían las anteriores. El crimen organizado y la estructura mafiosa se fueron modificando, penetrando cada vez más las estructuras del Estado, el ejercicio de la política, las estructuras de la economía y el desarrollo de la guerra. De los carteles originarios al narcotráfico de hoy se encuentran algunas

constantes, pero sobre todo un conjunto importante de variaciones. Una de las más destacadas fue el encuentro con los grupos paramilitares. Su supuesta lucha anti comunista y su oposición creciente a los frentes guerrilleros, en diferentes territorios, no estuvo alejada en ningún momento de su participación en el negocio del narcotráfico, la cooptación del Estado para usufructuar su poder y entrar a saco en sus instituciones y sus presupuestos, las alianzas con políticos nacionales y regionales, sus vinculaciones con agentes del Estado y la expulsión a fuego y masacres de numerosas comunidades para apoderarse de las tierras que les pertenecían.

De este modo, las y los periodistas fueron cayendo por las alianzas macabras entre estos grupos de poder y los aparentes cambios de rostro del narcotráfico.

LOS GRUPOS PARAMILITARES O LA DIFUSIÓN DEL MIEDO

A medida que el crimen se expandía por diferentes regiones del país, también se fue acrecentando la violencia contra periodistas, que no estuvo solamente concentrada en las zonas en las que había carteles —Medellín y Cali, y más tarde el norte del Valle— sino que inclusive se expandió hasta Leticia en la Amazonía colombiana. Y poco a poco, a la deriva del mismo conflicto interno, la estrategia violenta de los grupos de narcotraficantes contra periodistas se fue encontrando con el pavoroso ascenso del poderío paramilitar. Esta es una de las características de la violencia contra periodistas en Colombia: Concentrada inicialmente en las pretensiones y los modos de actuar de un determinado actor criminal, se fue mezclando con otros actores, otras estrategias y otras zonas del país. El primer encuentro de violencias fue entonces el de los grupos de narcotraficantes con las nacientes bandas paramilitares.

La aparición y el fortalecimiento de las bandas paramilitares significó otro tipo de amenaza contra el periodismo. Los grupos paramilitares han sido parte activa del conflicto interno colombiano. Actuaban en zonas estratégicamente determinadas de la geografía nacional; tenían múltiples redes de relación con otros

actores armados ilegales (como los mismos grupos de narcotraficantes o bandas delincuenciales); establecieron alianzas con militares, policías, grandes terratenientes y políticos; y construyeron un poder territorial local y regional de indudable importancia. Sus objetivos estratégicos mezclaban la voracidad territorial con el negocio de las drogas, la cooptación de las estructuras del poder político con el discurso anticomunista y el enfrentamiento de la insurgencia guerrillera. La diferencia de los propósitos con los carteles del narcotráfico, así como sus evidentes cercanías y afinidades, conformaron otro tipo de violencia y otra forma de arremeter con medios y personas en ejercicio del periodismo.

Como se lee en el Informe “Basta ya”, los grupos paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia “basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y la sevicia, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual” (GMH, 2013, página 35).

La estrategia paramilitar frente al manejo de la información tenía una serie de particularidades: estaban preocupados por la información que producían periodistas y medios sobre sus acciones, buscaban enviar mensajes efectivos que lograran estimular el miedo en la población, presionaban a periodistas para que orientaran de determinada manera su información sobre ellos y sobre sus enemigos (sobre todo las guerrillas), violentaban intencionalmente la pluralidad informativa asesinando a quienes se apartaban de las versiones oficiales que necesitaban como mecanismo de guerra, negaban u otorgaban permisos para que se pudiera acceder al lugar de cubrimiento y eran permisivos cuando la información sobre robos, asesinatos y otros delitos les era funcional para la difusión social del terror. Solían interesarse en las notas periodísticas que se publicaban, como también en aquellas que se estaban trabajando, sobre todo las relacionadas con las indagaciones sobre sus acciones en las zonas de influencia o las denuncias sobre las administraciones municipales y el manejo en particular de los recursos públicos. Esta actitud muestra el interés que tienen estos grupos armados en blindar las acciones de ciertos gobiernos

en particular, ya sea porque el político hace parte del grupo armado o porque es funcional a la acción paramilitar.

Producir miedo es casi siempre un propósito criminal, pero fue sin duda uno de los grandes objetivos estratégicos de las bandas paramilitares. Y el periodismo y los medios son cajas de resonancia y de expansión del miedo en las comunidades, especialmente cuando se trata de medios comunitarios y de periodistas cuya tarea está profundamente ligada con los conglomerados locales. Mucho se ha investigado en la literatura de medios sobre sus relaciones con el terror y el terrorismo, fundamentalmente estudiando cómo se puede generar y sobre todo expandir el miedo a través de los medios de comunicación y particularmente de los noticieros y las diversas formas de la ficción. Pero en este caso se trata de una cadena que une a actores armados, conflicto, estrategia comunicativa y miedo, tanto en la población en general, como en el propio sector de la comunicación. Es esto, en parte, lo que explica el ensañamiento paramilitar contra el periodismo local que concentra los porcentajes más elevados de asesinatos pero también de exilios, amenazas, secuestros y obstáculos al oficio. “Uno va aprendiendo —señala una periodista— a que el miedo no lo paralice, a que el miedo no lo limite. Y a valorar el miedo; hay unos niveles del resentimiento y del miedo. Cuando a veces estoy entrevistando a alguien yo instintivamente sé que me va a traer problemas” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista departamento de Arauca).

El afán de dominio territorial a cualquier costo, puso de inmediato en peligro a las y los periodistas de aquellas regiones en que el poder paramilitar se fue extendiendo como una mancha persistente.

La incorporación de la crueldad extrema en el repertorio de violencia paramilitar contribuyó a la construcción de una reputación terrorífica. Esta se convirtió en una caja de resonancia lo suficientemente eficaz como para dar credibilidad a sus amenazas y para demostrar el límite de violencia que estaban dispuestos a rebasar con el propósito de competir por el territorio. La reputa-

ción de violencia buscaba instalar el miedo en la sociedad para romper los vínculos entre la población civil y la guerrilla, y luego restablecerlos de otro modo, en función de sus intereses estratégicos. A diferencia de la insurgencia, la sevicia fue funcional en el paramilitarismo en la medida en que este grupo armado pretendía tener el control duradero de la población a través del miedo, más que a través de una oferta de protección (GMH, 2013, página 56).

La violencia paramilitar contra periodistas se amplió hacia zonas del país que hasta su aparición no habían sido asoladas, construyó formas de agresión inéditas, entendió a la comunicación como una parte clave de su estrategia guerrera e inclusive llegó a crear medios de comunicación propios que les servían de tribuna directa para llegar a las comunidades sin ninguna clase de mediación, como también lo han hecho la guerrilla y la policía a su manera.

La censura directa y la autocensura ocasionada por la acción paramilitar fueron dos constantes de su estrategia contra medios y periodistas. “La radio duró censurada todo el tiempo de los paramilitares —señala una de las fuentes consultadas en el trabajo de campo del presente Informe— totalmente silenciada porque los que se atrevieron a decir algo los llamaron y los callaron”. Y otra de las fuentes periodísticas en el mismo departamento del Caquetá señala que “es mayor la autocensura cuando aparece el paramilitar. Usted escucha los noticieros y la mayoría menciona los hechos pero se cuidan de estar señalando” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodistas departamento del Caquetá). El señalamiento, es decir, la atribución explícita de los delitos a sus autores, es algo que incentivaba aún más la violencia paramilitar. “Hay cosas que uno tiene que contar, que uno tiene que decirlas y de pronto no hay inconveniente con decirlo, hay inconveniente con la manera como se dice, el lenguaje que se utiliza”, ratifica otro periodista de la misma región en el sur del país. El uso del lenguaje aparece frecuentemente relacionado en los hechos de violencia contra periodistas. Sin embargo, la línea

entre un lenguaje adecuado y uno inadecuado es exageradamente fina y de ninguna manera explica y muchísimo menos justifica la violencia de los actores armados. Como señala una periodista de Arauca, “El tonito les fastidia, no tienen piel y cualquier cosa les roza”, mientras anota que “El lenguaje nos trae a veces muchos problemas” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista departamento de Arauca). Este uso estaba vinculado con la estigmatización —una práctica muy frecuente entre paramilitares, guerrilla y agentes del Estado—, el silenciamiento y la presión para transmitir informaciones que convenían a las diferentes estrategias guerreras. Afirma un periodista del Quindío:

Antes usaba muchas palabras, mucho adjetivo. Sigo haciendo trabajos pero con una limpieza total, sin poner adjetivos ni nada. No decir que la persona es ladrona, sino que presuntamente viola tal norma. Si usted utiliza bien el lenguaje no les da para que lo demanden (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista departamento del Quindío).

En “País lejano y silenciado”, de Arturo Guerrero se describe de esta manera el silenciamiento de los medios locales y regionales:

¿Qué sucede entonces con las emisoras, los canales de televisión y los periódicos locales? Callan. Dedicar las horas a transmitir música o programación inane. Entregan sus páginas a la voz de las administraciones que pautan o de los comandantes de las fuerzas armadas oficiales. Hacen periodismo de registro, de día a día, de primicia sensacional, muchas veces roja.

La prensa regional, por su parte, no hace periodismo de investigación porque no tiene recursos, no quiere pisar “callos” o prefiere resguardarse para evitar riesgos. Tampoco acude al lugar de los hechos porque no tiene medios de transporte ni dinero para desplazar enviados especiales. Se restringe a un reporte desde las capitales de departamento o de región, muchas veces limitado a consultas por teléfono. En ocasiones acepta utilizar el transpor-

te militar, camiones, helicópteros o avionetas, a pesar del peligro que esta práctica trae a los reporteros y del condicionamiento que supone para la información (Guerrero, 2010, páginas 12-13).

A diferencia de las acciones de los grupos narcotraficantes — magnicidios y atentados contra periódicos y emisoras de radio con repercusión en la opinión pública— que buscaban una visibilidad pública de su poder, de sus intenciones y propósitos, los grupos paramilitares actuaban de manera más sigilosa pero contundente, amenazando y desplazando a periodistas y, sobre todo, generando miedo a través de prácticas concretas de amedrentamiento. Un tema interesante sería explorar los cambios estratégicos del narcotráfico en su conexión con el paramilitarismo. Desde los días en que los carteles emprendieron una lucha frontal y pública contra su extradición, que llegó a golpear severamente a periodistas colombianos, hasta estos tiempos en que promovieron alianzas con las bandas paramilitares o en que estas se dedicaron explícitamente al negocio del narcotráfico, se replantea la estrategia relacionada con la información y el periodismo.

Una de las acciones más frecuentes de la estrategia paramilitar contra periodistas era acusarlos de guerrilleros o de informantes (“sapos”) según la conveniencia. De esta manera se buscaba deslegitimarlos socialmente, ubicándolos en una u otra orilla y justificando su asesinato, exilio o acallamiento; también aparecían en listas que se hacían públicas y con las que se proponían atemorizarles y eran convertidos, como lo señalan algunos testimonios recogidos en las entrevistas de campo, en “correvediles del conflicto”, es decir en correos que llevaban y traían mensajes de un lado a otro. De esta manera se funcionalizaba el oficio de periodista, se le ponía en grave riesgo y se desfiguraba seriamente su tarea frente a sus colegas y la comunidad. Otra práctica de los grupos paramilitares era convertirlos en enemigos. Si informaban de unos y de otros se transformaban “en enemigos de un lado y enemigos del otro lado, porque, si se iba a grabar, que por qué les da publicidad a unos y no a otros” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista, departamento del Huila). En la

ficha de la sentencia contra Salvatore Mancuso y otros, la Magistrada señala:

Otro empleo sistemático de esta estrategia de guerra fue aquella que se vinculó a la idea del “enemigo” para provocar su exterminación o su humillación. De alguna forma, las lealtades que se buscaban construir al interior de la población civil, alimentaron todo tipo de propagandas fundadas en la barbarie y el temor de la represalia y la intimidación (Colombia, Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, Proceso radicado 11 001 22 52 000 2014 00027, Sentencia 20/11/2014).

Esta suerte de realidad pendular ponía en peligro a medios y a periodistas. Una de las fuentes consultadas en Neiva caracterizaba este efecto de la siguiente manera:

[C]omo el periodismo es un poder, entonces comenzaba el ejército y lo llamaba a uno, después la guerrilla lo llamaba a uno (...) [Y añadía que] la misma guerrilla nos llamaba, en diez o quince minutos arranca la fiesta en tal municipio y entonces ya uno sabía cuál era el cuento y arranque... (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista, departamento del Huila).

Cuando se analizan los asesinatos de periodistas atribuidos a paramilitares se encuentran algunas constantes y reiteraciones en su actuación delincuencial. Una primera es su señalamiento como guerrillero o facilitador de la guerrilla. Efraín Noriega Varela, asesinado en junio de 2002 en Arauca, apareció en una lista de personas que fueron declaradas públicamente como “objetivos militares” por parte de las AUC. Una segunda, es la relación entre el crimen y notas periodísticas en las que se critica a personas de la política local presuntamente vinculadas con grupos paramilitares. Sucedió, por ejemplo, con José Duviol Velásquez, quien tenía pruebas documentales en las que una exalcaldesa de Florencia en Caquetá le entregaba dinero a concejales. Una tercera, es la defensa de población campesina de la región o la relación con defensoras

y defensores de derechos humanos y con lideresas y líderes comunitarios, como sucedió con Silvia Duzán en Cimitarra. Una cuarta, la crítica a miembros de la fuerza pública, militares o policías, ya sea por errores cometidos, como sucedió en el caso del periodista Guzmán Quintero de *El Pílon*, o por su vinculación con grupos delincuenciales. Finalmente, en una quinta situación, se comete el asesinato después de amenazas, e incluso del exilio. Sucedió con personas acogidas al programa de protección de periodistas del Ministerio del Interior, como es el caso de Luis Eduardo Alfonso Prada.

En el primer semestre de 2007, dos paramilitares desmovilizados confesaron, en versión libre rendida ante un juez de la Unidad de Justicia y Paz, su participación en el asesinato de dos periodistas, ocurridos en 2003 y 2004.

En mayo, Juan Francisco Prada Márquez, alias *Juancho Prada*, líder del frente Héctor Julio Peinado Becerra, de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), confesó haber sido el autor material del crimen de Martín La Rotta Duarte, el 7 de febrero de 2004. La Rotta era el director de la emisora La Palma Estéreo, en el municipio de San Alberto, en el departamento del Cesar. La declaración fue hecha en la ciudad de Barranquilla y manifestó que el asesinato fue ordenado por las informaciones manejadas por el periodista, en contra de las acciones de ese grupo armado en la región.

En junio, Pablo Emilio Quintero Dodino, alias *Bedoya*, jefe del Frente Nordeste Antioqueño del Bloque Central Bolívar de las AUC, confesó su participación como autor material en el asesinato del periodista José Emeterio Rivas Rivas. El crimen ocurrió la noche del 6 de abril de 2003, en Barrancabermeja, Santander, al oriente del país. La investigación del asesinato había señalado al exalcalde de la ciudad, Julio César Ardila Torres como presunto autor intelectual. Posteriormente, le fue revocada la medida de aseguramiento, pero aún continúa vinculado a la investigación.

LA GUERRILLA O LA VIOLENCIA CONTRA LA LIBERTAD

Aunque el número de periodistas asesinados por las guerrillas es menor que el atribuido a los grupos paramilitares, también ha existido una estrategia diferenciada de violencia contra comunicadores y comunicadoras, que se manifiesta en secuestros, obstrucciones severas del oficio, presión para que se informen determinadas noticias, estigmatización y amenazas, entre otros delitos. La visión de la comunicación —y, en general del funcionamiento de los medios— que tiene la guerrilla es más ideologizada que la de narcotraficantes y paramilitares. Según la guerrilla, la “gran prensa” (una adjetivación que utiliza frecuentemente) forma parte de los grupos hegemónicos del país y utiliza la información para apuntalar sus propios intereses de dominación. De otro lado, se considera a la información como un instrumento estratégico de la guerra, como una ayuda o traba para la realización de su actividad en contextos y momentos históricos particulares. Su interés en los medios de comunicación es claro. La guerrilla ha tenido emisoras de radio como Radio Resistencia y periódicos y material impreso fundamentalmente dedicados a la divulgación de sus puntos de vista, la búsqueda de influencia en la población, el desprestigio de la fuerza pública y las autoridades civiles, el adoctrinamiento de sus audiencias y en general la presión y la generación del miedo en los territorios en los que tiene presencia.

En la noche del viernes 12 de marzo de 1993, fue asesinado José Eustorgio Colmenares, fundador y director del periódico *La Opinión* de Cúcuta, por el ELN, alegando “parcialidad informativa a favor de la burguesía”, además de “informar con lujo de detalles sobre las operaciones del Ejército y la Policía”. En su declaratoria de delito de lesa humanidad, la Fiscalía afirma que el asesinato se produjo como “consecuencia de un patrón sistemático y generalizado contra la población civil” y que su preparación, tipo de armamento y el panfleto que hicieron circular los guerrilleros buscaba atemorizar “a quienes no se unieran a las directrices del accionar guerrillero de esta agrupación ilegal” (El Colombiano, 2013).

La estrategia comunicativa de las guerrillas es consecuente con su caracterización como actor armado. En el Informe “Basta ya”, se escribe:

[L]as guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo (...). La violencia contra la integridad física es el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras que la violencia contra la libertad y los bienes define la violencia guerrillera (GMH, 2013, página 35).

Esta última afirmación es especialmente importante en el caso de medios y periodistas. En el informe de la FLIP del 2006 se dice que las FARC son los presuntos responsables de doce amenazas, un atentado contra infraestructura de medios y dos secuestros; y en el de 2007 se señala que:

[L]os periodistas de la emisora ‘Sarare Estéreo’, en el municipio de Saravena, Arauca, fueron sorprendidos con la llegada de un panfleto firmado por miembros de la guerrilla de las FARC en el que exigían la lectura de un comunicado so pena de tomar represalias en contra del medio y sus periodistas. Dicho comunicado estaba dirigido a los habitantes del municipio de Saravena y del departamento de Arauca. En él hacían un llamado a los alcaldes, secretarios de despacho, concejales, diputados y al gobernador a renunciar a sus cargos por “estar haciéndole el juego” al gobierno central. [Así mismo,] exigía la renuncia de las candidaturas a cualquier cargo público en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. El comunicado estaba firmado por el Bloque Oriental de la guerrilla de las FARC, y pese a la exigencia hecha en este, los periodistas de la emisora se negaron a publicarlo en cualquiera de sus espacios. Ante estos hechos, las autoridades brindaron algunas medidas de seguridad para el medio y sus periodistas (FLIP, 2007).

Tal como señala una fuente entrevistada para este informe cuando se refiere al asesinato de uno de sus colegas en Caquetá atribuido a las FARC:

[Él] tuvo amenazas de la guerrilla porque su programa tenía un estilo como muy directo y fuerte y hacia las denuncia con todos los elementos, con todas las evidencias. Eso le creó muchos problemas. [Y más adelante:] Era uno de los que siempre decía que, si la guerrilla era el ejército del pueblo, por qué atentaba de alguna manera contra el pueblo, porque si dañan un puesto de salud ¿a quién afectan? A la población civil y a la gente humilde porque quienes tienen los recursos tienen las posibilidades de buscar los medios para resolver el problema (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista, departamento del Caquetá).

Como expresiones concretas de los atentados de la guerrilla contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, están: la presión para producir y circular información, el secuestro para hacer coberturas obligadas de hechos de guerra o con sentido expresamente político, las requisitorias sobre el manejo comunicativo de acciones en que están involucradas las guerrillas y la estigmatización de periodistas que consideran contrarios a sus intereses. Anotó una periodista de Arauca:

Un día llegó a mi casa y me dijo que él era de las FARC y que necesitaban que trabajara para ellos, me ofrecieron carro, casa y beca, todo lo que quisiera, incluso que me mandaban a estudiar al exterior si les ayudaba a conseguir la información que necesitaban y yo les dije que no, que a mí eso no me llamaba la atención (...). A los 15 días el tipo llegó a la casa en que vivía y la señora le dijo que yo me había ido para la emisora. Yo me alteré, cerré la puerta de la gerencia y le dije: “Yo a usted le comenté que no quería nada de eso y no me interesa y si usted me sigue jodiendo lo voy a denunciar. El tipo me dijo que lo pensara y que era mejor que lo analizara con cabeza fría, porque si no era por las buenas podía ser por las malas. Yo le dije: “haga lo que quiera”, y desde

ahí empecé a vivir un calvario, me aparecían cartas por debajo de la puerta, me tocaba cambiarme de habitación todas las noches, pasaban y tocaban en la puerta (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista, departamento de Arauca).

La diferencia enunciada en una de las entrevistas realizadas para este Informe es contundente y dramática: “Se diferenciaban la guerrilla de los paramilitares. Unos amenazaban con ponernos bombas, los otros con descuartizarnos” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista, departamento de Arauca).

LA DESLEGITIMACIÓN DEL ESTADO POR LA VIOLENCIA

Un asunto que provoca muchas discusiones y debates en la reflexión sobre el conflicto armado colombiano es el grado de participación del propio Estado en él. El tema aparece de inmediato cuando se revisan los asesinatos de periodistas, pero también cuando se exploran las diversas modalidades de amenazas que han vivido en estos años. En primer lugar, la presencia del Estado se concreta en autoridades de gobierno nacionales, departamentales y locales: Presidencia, ministerios, gobernaciones, alcaldías, instituciones estatales, entre ellas las de seguridad, y especialmente la policía y las fuerzas militares. En segundo lugar, se distingue entre la intervención de la institución como un todo y la responsabilidad específica de personas que hacen parte de las instituciones y que además tienen poder, relevancia y capacidad de influencia en mayor o menor grado dentro de ellas. En tercer lugar, el entramado institucional del Estado es una red, no siempre consistente, entre lo internacional, lo nacional, lo regional y lo local.

La relación entre el Estado y el periodismo es, como ya se ha visto a través del Informe, una relación muy cercana y directa, en la que se dan interacciones y mutuas interdependencias. Y no solo se dan en el presente sino también en el pasado y durante décadas. Antes de que existieran otras formas de seguimiento público de los actos de gobernantes e instituciones del Estado, como

las veedurías, los bancos de datos, los informes de las organizaciones de transparencia o las rendiciones de cuentas, los medios de comunicación eran el instrumento fundamental de la imagen pública de quienes ocupan cargos de gobierno. Este carácter les generaba poder, pero a la vez les producía críticas, recelos y desconfianzas. En el Informe sobre la Democracia en América Latina, dirigido por el excanciller argentino Dante Caputo para las Naciones Unidas hace unos años, se diferencia entre los poderes institucionales y los poderes fácticos, entre los cuales se destaca el de los medios de comunicación.

Las relaciones del periodismo con las autoridades tienen muchos matices: generan abundante información sobre quien gobierna y sobre los actos de su gobierno, denuncian o tramitan denuncias de la comunidad, hacen seguimiento de la inversión de los dineros públicos, contrastan las promesas con las realizaciones, subrayan las irregularidades o critican el tipo de alianzas que tienen y sus implicaciones. Como lo señalan numerosos estudios, las noticias sobre las autoridades forman parte importante de la agenda informativa de los medios y generan prácticas que tienen implicaciones en la calidad de la información que recibe la comunidad como también en la independencia de los medios. Entre esas prácticas están el predominio de fuentes oficiales, la recepción de dinero público por pauta oficial, la proximidad con el poder político, el favoritismo en el acceso a la información pública, la existencia de correas de transmisión directas entre los palacios y las salas de redacción, la publicación de noticias basadas fundamentalmente en boletines oficiales o ruedas de prensa, la pasividad para chequear la información que proviene de las autoridades cuando no el elogio desmedido y el acallamiento de la información crítica sobre gobernantes y sus actuaciones.

La violencia contra las y los periodistas proveniente de las autoridades se produce habitualmente por críticas o denuncias a su gestión, especialmente por su connivencia con grupos ilegales, el robo de los dineros públicos y, en general, el seguimiento informativo de la corrupción.

Con mucha frecuencia las autoridades operan como autoras intelectuales, y el soporte material del crimen es adelantado por sus aliados delincuenciales involucrados como sujetos violentos en el conflicto. Rodrigo Uprimny y Guillermo Puyana, en su análisis del caso del asesinato de Orlando Sierra, muestran que estos delitos son un “concierto para delinquir”, en el que están involucrados políticos, jefes de sicarios, sicarios y personajes del mundo delincuencia en una empresa del orden criminal:

Estos homicidios —escriben— no suelen ser obra de un individuo aislado, que comete el crimen en forma impulsiva o por error. Eso puede ocurrir, pero no es lo usual. Este tipo de asesinatos es usualmente obra de un concierto para delinquir, en donde personas que consideran que han sido afectadas por la labor del periodista, usan sicarios u organizaciones sicariales para matar al periodista. Estos crímenes suelen ser expresión de una forma de criminalidad organizada, en donde unos autores intelectuales deciden el crimen y recurren a organizaciones sicariales para ejecutarlo (Uprimny y Puyana, 2008, página 69).

OTROS AGENTES DEL ESTADO: LAS FUERZAS MILITARES

La información es un asunto central en el enfoque militar de la guerra. A través de la información se construye y se combate al enemigo, se tiene influencia sobre la población, se moviliza a los diferentes actores de la sociedad para ganar apoyo y garantizar respaldo social y se fortalece la identidad del combatiente. La información se usa como una parte integral de la intervención bélica, como queda patente en conceptos como el de “Operaciones de Información”, que se puede entender como el empleo de una serie de herramientas para manejar la información propia y del contrario con el objetivo de identificar y poner en evidencia las estratagemas del enemigo.

Se ha observado a través del presente Informe que la violencia contra periodistas, y particularmente sus homicidios, se ha con-

centrado especialmente en algunas regiones del país; y que periodistas locales y de pequeños medios han sufrido de manera más intensa y pertinaz los efectos de la violencia.

Sin que se pueda señalar que ha existido o existe una estrategia intencionada y planificada del Estado en contra de periodistas y medios, y por tanto de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información, sí se constatan acciones por parte de agentes del Estado que han vulnerado en algunos casos de manera gravísima tanto la vida, como las posibilidades reales de ejercer el periodismo en diferentes momentos de la historia reciente del país.

En general las acciones de este tipo en que se han visto involucrados agentes del Estado van desde la participación de algunos de sus miembros en el asesinato de periodistas hasta la obstrucción del oficio, alianzas con actores armados ilegales para generar desconfianza, intimidación, bloqueo del oficio, censura o autocensura, estigmatización, apoyo a autoridades y personas corruptas de la política que colocan entre sus objetivos criminales a medios y periodistas, presión para que se publiquen los boletines oficiales e intimidación cuando se hace lo mismo de otros actores del conflicto e indagación sobre fuentes periodísticas. En el Informe “Basta ya” se afirma que:

[G]uerrillas, paramilitares y miembros de la fuerza pública, recompusieron y ajustaron sus prácticas de violencia de acuerdo con los cambios en las lógicas de la guerra y en los objetivos que cada uno de estos grupos perseguía. Algunas prácticas fueron usadas más recurrentemente por unos que por otros y se volvieron distintas de su accionar (GMH, 2013, página 35).

En las regiones donde el conflicto ha sido más crudo, periodistas y medios se tornan más amenazados. Las explicaciones a esta situación son obvias: hay una cercanía con actores armados legales e ilegales, los efectos de la información se circunscriben a un radio de acción mucho más limitado, la comunidad está relativamente pendiente de la información que transmiten los medios de

proximidad y el acceso a información es mucho más directo que el que ofrecen los grandes medios nacionales. Hay además, en las localidades, una continuidad informativa asimilable al transcurso de la vida cotidiana, que convierte a las y los periodistas en unos cronistas del transcurrir del conflicto, a diferencia de los grandes medios nacionales, en los que la violencia está determinada por la oportunidad y la relevancia de las agresiones. El ejercicio del periodismo en el nivel local permite conocer los contextos de la guerra y las particularidades de los actores violentos y tiene ciertas claves de comprensión que solo son reconocibles dada la cercanía con el conflicto. Estas particularidades se desvanecen en la información nacional, donde los actos de violencia se suman uno sobre otro de manera indiscriminada, quedando despojados de historias y de contextos.

En el ámbito nacional se han dado actos de violencia promovidos por agencias y agentes del Estado, que han afectado gravemente a medios y periodistas. Entre ellos están las interceptaciones de sus llamadas telefónicas por parte del DAS, la aparición de sus nombres en listas negras, los seguimientos sospechosos e intimidantes a periodistas y sus familias, las amenazas explícitas y continuas que han dado lugar en diferentes momentos de la historia reciente del país a exilios de comunicadores y sus familias, la estigmatización pública por parte de autoridades de todos los niveles comenzando por el propio presidente de la república como sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el acoso a la libertad de expresión y la independencia periodística a través de estrategias jurídicas calculadas.

La cercanía a la guerra hace que el ejercicio del periodismo ponga en grave peligro a quienes lo ejercen, pues la estigmatización de periodistas es una práctica nada infrecuente. De entrevistas realizadas en trabajo de campo para este Informe a periodistas del departamento de Arauca, resaltamos las siguientes afirmaciones:

Refiriéndose a uno de los periodistas asesinados en Arauca, dice uno de los periodistas entrevistados: “Cuando iba a comenzar su noticiero arrancaba con el Campesino Embejucado, porque él decía que estaba mamado de que a uno le preguntaran si era

guerrillero, paramilitar o de dónde”. Otras fuentes señalan: “En el 84 Saravena era pesadito, si no estabas con un grupo entonces eras objetivo militar para cualquiera; o tú estabas con el ejército, o estabas con las FARC o con el ELN.” Y complementan: “Las mismas autoridades, tanto ejército lo estigmatizan a uno. Si va a un sitio dicen que uno está de colaborador. Entonces lo ponen a uno contra la pared” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevistas con periodistas del departamento de Arauca).

En el informe sobre Libertad de prensa de la FLIP en el 2005, se lee que:

Por último, se destaca el discurso estigmatizador y sesgado de algunos alcaldes y gobernadores contra los periodistas. En vez de acudir a los mecanismos legales, estos mandatarios optaron por declaraciones públicas, cartas o referencias explícitas que desvaloraron el rol del periodista en su comunidad y elevaron el riesgo de ejercer su profesión (FLIP, 2006).

La “judicialización” del lenguaje periodístico, así como las fallas en el rigor y la precisión en la cobertura informativa y el énfasis en lo emocional son mencionados por los propios periodistas como eventuales riesgos en medio del conflicto armado colombiano:

Mucha gente se metió a informar sobre el conflicto armado —aduce un periodista antioqueño— desconociendo muchas materias en las que uno debería tener un conocimiento técnico (...), [y] se empleaba un estilo de periodismo muy judicial, muy del estilo de las fuentes —corrobora—. Todo ese tipo de cosas hicieron mucho daño y generaron muchos problemas de inseguridad y amenazas a periodistas que no se tomaban muy en serio como deberían habérselo tomado la cobertura del conflicto armado (...) [y] ese afán de la chiva de los periodistas de salir primero pero no salir bien, ocasionó muchos afanes, imprecisiones, errores y también el malestar y la presión de los grupos armados ilegales (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista, departamento de Antioquia).

La mimesis entre lenguaje periodístico y lenguaje oficial es uno de los temas que surge frecuentemente en las entrevistas realizadas para este Informe, así como las dificultades provocadas por el uso del lenguaje en la información del conflicto y el interés de sus actores por conocer la identidad de las fuentes utilizadas para sus notas de guerra. Dice un periodista de Antioquia:

El lenguaje de las notas estaba muy filtrado por las fuentes oficiales, el lenguaje militar, policial, (...) [mientras que afirma que] hubo en varias ocasiones presiones camufladas de los organismos de seguridad para tratar de tener información privilegiada sobre nuestras fuentes. Acudieron a versiones en las que se nos decía que éramos blanco de amenazas (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodista, departamento de Antioquia).

Con relación a este punto se han encontrado niveles importantes de desconfianza en las propias medidas de protección ofrecidas por el Estado bajo la argumentación de que ellas inmovilizan, e inclusive se transforman en una amenaza para la seguridad. — ¿Cómo le ha ido a usted en el oficio como periodista con las medidas de protección? — Se le pregunta a un periodista de Arauca que proporcionó su opinión para este trabajo—. “Todo le cambia a uno —responde—. No tiene una libertad. La vida privada se me acabó, la vida pública también”. Y otra anota: “Yo con la policía no quería absolutamente nada porque creía que corría más peligro informándoles a ellos”. “Uno siente como si tuviera una lápida a la espalda, con un esquema de seguridad tiene limitada su vida social” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista con periodistas, departamento de Arauca).

Las violaciones a la libertad de prensa de carácter oficial se manifiestan además a través de tres formas: la distribución de la pauta publicitaria, la agresión a periodistas, especialmente durante manifestaciones y disturbios, y finalmente mediante prácticas de obstrucción del oficio. Dice la FLIP en su Informe de 2006:

La manera como las entidades públicas distribuyen la publicidad oficial entre los medios de comunicación —tanto en las capitales como en los municipios— se convirtió en un instrumento para presionar a los medios para que publiquen información favorable (...). [Y agrega:] La labor de la fuerza pública estuvo comprometida especialmente en el manejo de disturbios o manifestaciones públicas, donde en varias ocasiones los periodistas fueron agredidos o ilegalmente detenidos (FLIP, 2006).

Un caso emblemático fue el ocurrido el 29 de agosto de 1996 en el Caquetá, mientras avanzaban las marchas campesinas cocaleras en la región. Luis Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo, reportero gráfico, estaba cubriendo una de ellas cuando fue testigo del atropello de la fuerza pública en contra de las personas campesinas que manifestaban. Grabó esas imágenes y miembros del ejército lo golpearon brutalmente dejándole lesiones en el hígado y le destruyeron su grabadora para tratar de quitarle el casete en el que había registrado los abusos cometidos. Sin embargo, gracias a sus colegas, las imágenes no se perdieron y fueron divulgadas por otros medios de comunicación. El periodista demandó al Ejército por los abusos recibidos y fue amenazado a tal punto que debió exiliarse el 9 de octubre de 1997 a Estados Unidos. En el 2005 presentó una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 24 de julio de 2008, la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad y tres años más tarde sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso. En el año 2012 la Corte condenó al Gobierno colombiano por las múltiples violaciones cometidas contra el periodista. Este proceso fue histórico y generó un precedente de gran importancia jurídica, pese a que en su momento la defensa del Estado colombiano ante la Corte pretendió poner en duda las amenazas, así como desconocer su responsabilidad por no haber brindado adecuada protección al periodista y a su familia ante las persistentes amenazas sufridas.

Señala un pronunciamiento de la FLIP en el 2006:

El departamento del Cauca por su parte fue el epicentro del mayor número de obstrucciones al trabajo periodístico, detenciones ilegales y tratos inhumanos o degradantes. En el marco de algunas marchas indígenas en diferentes municipios de este departamento, fueron retenidos varios grupos de periodistas y algunos medios de comunicación reportaron el robo de equipos de transmisión. El ESMAD se señala como autor de estas violaciones (FLIP, 2006).

EL PELIGRO DE LA CORRUPCIÓN PARA EL PERIODISMO

Ha existido un comportamiento que atraviesa todos los momentos del conflicto interno colombiano y une a todos los actores en su proceder violento contra medios y periodistas: la corrupción. Ya sea porque los actores han infiltrado a importantes instituciones del estado nacional, regional y local o sea porque el desencadenante de la violencia contra periodistas es su denuncia de actos de corrupción. A tal punto que, en los últimos años, los promotores fundamentales de esta violencia provienen de la conjunción de la corrupción y las bandas delincuenciales.

La situación es aún de más gravedad y peligro en las regiones, en las que personas corruptas y actores armados ilegales se alían, logrando beneficios de encubrimiento de sus delitos y sobre todo de acceso al dinero público, que forma parte importante de las finanzas de la guerra. De ahí que el seguimiento informativo a los actos de corrupción se convierte en un problema mayor para las personas corruptas: hace visible su comportamiento, denuncia sus alianzas, sigue insistentemente sus acciones, muestra las implicaciones sociales de sus delitos. Las consecuencias para quienes laboran en el periodismo son el asesinato, las amenazas y el exilio. Un periodista de Caquetá nos habla de Enrique Gutiérrez, una de las víctimas de la violencia ejercida por esta alianza:

Tenía unas virtudes gigantescas, cogía un violín y se ponía y lo tocaba, era un hombre mágico. Era empírico pero donde se iba

Enrique Gutiérrez se iba toda la audiencia. Además tenía un radio periódico que se llamaba El Cirirí, en el que fustigaba mucho la corrupción y a los funcionarios. El Cirirí era una cosa que sentaba a todo el mundo a escucharlo (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista a periodista, departamento de Caquetá).

“Los políticos corruptos —acota un periodista del Cauca— estaban tomando mucho poder y se aliaron con grupos paramilitares, una mezcla criminal. Su periodismo se volvió cada vez más fuerte”. Y señala una de las fuentes consultadas sobre la labor de un colega asesinado: “Yo siempre me sentaba ahí al lado de su silla y sabía que tarde o temprano iba a entrar el asesino” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista a periodista, departamento del Cauca). Un periodista de la golpeada duramente varias veces, La Voz de la Selva, comenta: “En el 86 comenzaron las amenazas, porque él tenía el programa del radio periódico La Comba” (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista a periodista, departamento de Caquetá).

Basta revisar el listado de periodistas víctimas de asesinato para observar el peso de la corrupción y sus motivaciones en la comisión de los crímenes. En 1984, fueron asesinados José Antonio Dumet Acevedo y Lides Renato Batalla por sus denuncias de corrupción en sus respectivas regiones. En 1993, y después de un periodo de años en que disminuyeron las muertes de periodistas relacionadas presuntamente con sus denuncias de corrupción, cae en Barranquilla el periodista Carlos Lajud Catalán, quien estaba realizando notas periodísticas sobre la corrupción de las autoridades de la ciudad. En ese mismo año fue asesinado Manuel José Martínez y el año siguiente Jesús Antonio Medina, ambos periodistas que denunciaban públicamente actos de corrupción. Gerardo Bedoya Borrero, de *El País*, cae abatido en 1997 por mostrar conexiones entre fuerzas militares, dirigentes políticos y narcotraficantes en el Valle del Cauca; en el mismo año, Freddy Elles Ahumada muere después de haber sido amenazado por políticos del departamento de Bolívar. Nelson Carvajal (1998) denunciaba irregularidades en la administración en el Huila y Rodolfo Julio Torres (1999) y Hernando Rangel Moreno denunciaban irregularidades en el Sucre y

Magdalena. El día de la celebración internacional de la Libertad de expresión, el 3 de mayo de 2001, fue asesinado en Cali el periodista Yesid Marulanda Romero por sus denuncias sobre la defraudación de una gran cantidad de personas humildes por parte de un programa de vivienda en la ciudad de Cali y unos meses después en Fundación (Magdalena), lo fue Álvaro Alonso Escobar por denuncias ocurridas en el sistema de salud de su departamento. Mario Prada Silva y Orlando Sierra, cada uno en su región, hicieron severas críticas a gamonales políticos que dominaban el escenario del poder local y fueron muertos en el 2002. Guillermo Bravo Vega fue asesinado en la sala de su casa presuntamente por denuncias por procesos de contratación venales. Gustavo Rojas Gabalo fue atacado por dos hombres en Barranquilla presuntamente por denuncias sobre corrupción de la clase política de Córdoba. Javier Darío Arroyave y José Everardo Aguilar hacían denuncias sobre corrupción en la administración local y departamental cuando fueron asesinados.

Las muertes de los periodistas están fundamentalmente relacionadas con su trabajo de fiscalización y denuncia de procesos de corrupción concretos, pero también por la crítica a los poderes locales de grupos de políticos con prácticas clientelares y cooptación de la administración pública municipal y regional. En algunos casos, estos políticos estaban aliados con actores armados ilegales o con bandas delincuenciales en ascenso.

Estas bandas se han convertido en los años recientes en uno de los enemigos más letales del periodismo, convirtiendo a zonas del país en territorios extremadamente peligrosos para el ejercicio independiente de la información, hasta el punto que algunas de ellas, como sucede en el Bajo Cauca, han sido catalogadas como de las más peligrosas del mundo para el ejercicio de la labor periodística.

VIOLENCIA DE GÉNERO: LAS MUJERES PERIODISTAS

El número de mujeres periodistas asesinadas es mucho menor que el de los hombres. La primera fue la antioqueña Mariam Ruiz

Castañeda, muerta en abril de 1987 en Turbo. Trabajaba en la Emisora Ondas del Darién y realizaba investigaciones sobre los escuadrones de la muerte en Urabá. Marta Luz López (1989), Silvia Margarita Duzán (1990), Diana Turbay Quintero (1991), Amparo Leonor Jiménez (1998), María Helena Salinas Gallego (2000) y Elizabeth Obando (2002) son las periodistas colombianas asesinadas en el periodo estudiado. Pero el sufrimiento de las mujeres ha sido múltiple y diverso: muchas de las esposas y compañeras de trabajo de los periodistas asesinados fueron claves para el desarrollo de su oficio. Colaboraban en la redacción de las noticias, en la consecución de pauta comercial, en la locución y en general en la compañía de un oficio caracterizado por su extrema soledad e indefensión. En muchos de los testimonios recogidos, este papel aparece nítidamente, así como los efectos de los asesinatos sobre las mujeres y sus hijos.

En sentencias de Justicia y Paz los jueces se refieren a la incidencia en la violencia colombiana de la condición de género. En la Ficha de Relatoría de la sentencia contra Salvador Mancuso y otros, la Magistrada ponente, Léster M. González R., dice:

La instrumentalización del concepto de lo femenino fue un ejemplo de la estrategia paramilitar orientada a establecer relaciones con la población civil, la clase política, las organizaciones de carácter privado, y desde luego, para menguar al enemigo. La evidencia indica que hubo en repertorio de prácticas violentas que descansaron sobre las bases de la manipulación de valores que encierra la pertenencia a un grupo cuya identidad está determinada por su género, no solo para conseguir fines estratégicos de la organización armada, sino como el aprovechamiento oportunista de ejercer y detentar la fuerza en medio de la guerra.

En la misma sentencia, la magistrada escribe:

La violencia sexual fue una herramienta de degradación que tuvo un alto contenido comunicante en ese sentido. En este punto es importante resaltar que las especificidades de la cultura y la

composición familiar en el Caribe colombiano, ha girado justamente en torno a la centralidad de la mujer. Este rasgo fue empleado en el accionar paramilitar como una fuente para provocar un dolor intenso en el contrario, exterminando un elemento que cohesionaba y empoderaba el tejido social desde sus bases. De hecho, aquellas que eran “representativas-emblemáticas” de la región fueron vulneradas por los actores armados en su condición de líderes y pioneras de sus comunidades, barrios y veredas con el fin de interrumpir y echar por tierra los procesos de transformación (Colombia, Sala de Justicia y Paz - Tribunal Superior de Bogotá, 2014, Proceso radicado 11 001 22 52 000 2014 00027, Sentencia 20/11/2014).

Las amenazas de los victimarios contra mujeres periodistas se caracteriza por el uso de la tortura física y psicológica, el involucramiento de sus familias y en algunos de sus hijos casi siempre niños o niñas en edad temprana, las afrentas directas contra su condición de mujer y la humillación sexual, entre otros oprobios contra su particularidad de género. Los casos de Maryluz Avendaño y Ana Cristina Restrepo en Antioquia, Jineth Bedoya y Claudia Julieta Duque en Bogotá, Carmen Rosa Pabón en Arauca y Amalfi Rosales Rambal de La Guajira son algunos de los más recientes en el panorama de las afrentas de actores violentos contra mujeres periodistas colombianas. La lucha de Jineth Bedoya es un ejemplo de un hecho personal, de inmensa gravedad, ocasionado por actores violentos en razón de su oficio, que la periodista convierte ejemplarmente en una movilización social contra todas las formas de agresión y humillación social de todas las mujeres y cualquier persona de la sociedad. De esta manera se trasciende la condición periodística para resaltar toda vulneración contra la condición de género. En una intervención, Jineth Bedoya señalaba que “No quiero hablar solamente de violencia sexual, también de violencia institucional, de violencia económica, de toda la estructura de la sociedad que continúa relegando a las mujeres a la tercera o cuarta fila dependiendo del país en que vivan” (*El Universal*, Cartagena, 12/06/2014).

SOBREVIVIENTES: OTRAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

El 18 de febrero de 2006 dos desconocidos llegaron a la entrada del apartamento de un reportero gráfico y le dijeron que tenía ocho días para salir de la ciudad de Pasto. El fotógrafo había sido contratado por un medio francés para hacer un reportaje sobre el paradero de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien en ese entonces llevaba cuatro años en cautiverio. Como parte de su reportería en el municipio de Samaniego (Nariño), entró en contacto con guerrilleros de las FARC para obtener información. Estando allí coincidió en una reunión con algunos políticos y funcionarios públicos locales en los que se tocaron algunos puntos de la campaña electoral en ese entonces. Esa reunión fue grabada y difundida en medios nacionales. En un principio los asistentes de ese encuentro fueron amenazados por el “Frente Anticorrupción de Nariño”. El periodista también fue amenazado y acusado de haber filtrado la información de esa reunión.

Días después recibió un correo electrónico firmado por el mismo Frente con una nueva amenaza en el que le decían: “Se te está acabando el plazo para largarte de Pasto, te vamos a quebrar”. Ante esto, tomó la decisión de desplazarse a Bogotá, ciudad en la que contó con el apoyo de la Fundación para La Libertad de Prensa y la Embajada Francesa. Su plan era salir del país, pero para

hacerlo debía presentar un curso y un examen ante el Sistema de Protección del DAS dirigido en ese entonces por Jorge Noguera. Durante el curso de autoprotección, nadie sabía dónde se estaba hospedando, ni siquiera las organizaciones que lo estaban acompañando. El 18 de marzo al medio día fue raptado. Lo metieron a una camioneta, le taparon la cabeza y según relata:

[M]e llevaron a un sitio que parecía como una finca donde me encerraron en un cuarto que no tenía ventanas, tenía una [luz] halógena puesta las 24 horas. Y yo sentía el olor a campo, de los perros, las vacas, todo eso. Era una finca. Ahí me tuvieron con interrogatorios diarios, me torturaron, gente diferente, me asustaba mucho que no estaban encapuchados, cuando eso es un mal signo, cuando a alguien lo tienen así, es porque no te van a dejar salir vivo (CNMH, 2014, Trabajo de campo, entrevista vía Skype).

El periodista contó su historia fuera del país. Luego de su secuestro, fue liberado en Cali el 31 de marzo en la Parroquia de Fray Damián. El sacerdote que lo recibió se contactó con Naciones Unidas, la FLIP y Reporteros sin Fronteras. Luego de estos sucesos estuvo en una clínica de reposo y finalmente viajó a Francia exiliado.

En tan solo dos meses, este periodista fue víctima de cinco actos de violencia: amenazas, desplazamiento forzado, tortura, secuestro y exilio. Estas otras manifestaciones de violencia han generado un golpe devastador al oficio y a los medios periodísticos colombianos.

Junto a la historia terrible de los asesinatos de 152 periodistas, hay otra que está compuesta de una diversidad de afrentas que los victimarios han convertido en un verdadero catálogo del horror a su entera disposición. En la lógica de la violencia contra periodistas, los perpetradores acuden a este listado para entresacar la acción que consideran más efectiva en un momento determinado. Cada uno de los comportamientos criminales se desglosa en una cantidad de actos diversos. Las amenazas se hacen por teléfono o de viva voz, a través de intermediarios o de los propios criminales, con una expectativa temporal mediata o inmediata. Se amenaza con sufragios, coronas fúnebres, pintadas en las calles, ataúdes, correos

electrónicos, control detallado sobre los desplazamientos cotidianos, seguimiento de los hijos, intervenciones jurídicas, entre otras muchas formas. Las obstrucciones al oficio también son variadas, pero todas buscan el silenciamiento, el quiebre de la información independiente y distanciada de los intereses en conflicto y la ruptura de la conexión entre quien informa y la comunidad a la que se dirige.

En el capítulo 2 de este Informe se propuso una periodización de las acciones de asesinato contra periodistas colombianos, a lo largo de estas casi cuatro décadas de la historia reciente del país. Pero, ¿qué pasó durante el mismo periodo de tiempo en el campo de los otros actos de violencia en los que las víctimas están aún vivas? ¿Qué sucedió con esas víctimas?

Si bien es cierto que los asesinatos son la máxima manifestación de la violación a la libertad de expresión, este capítulo pretende analizar cuáles han sido los otros tipos de violencia, las consecuencias que han dejado y qué medidas han tomado el gobierno colombiano y las organizaciones nacionales e internacionales para garantizar la protección de las personas que ejerce el periodismo en Colombia.

Para esto, se tomaron en cuenta los informes publicados por la FLIP, los textos de la Fundación Guillermo Cano, Reporteros Sin Fronteras, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH, Verdad Abierta, Fecolper, la revisión de prensa y los testimonios de quienes fueron entrevistados en el trabajo de campo. Con especial atención se han observado las estadísticas, que desde los inicios del nuevo milenio han podido llevar con cuidado tanto la FLIP como Fecolper. Los años anteriores no gozan de este beneficio documental, aunque fueron los tiempos en que se generaron e incrementaron estas otras expresiones de la violencia contra periodistas en el país. En buena parte los actos de violencia que detectan las estadísticas del presente se produjeron sobre las bases de los actos del pasado. Aunque hubo periodistas cooptados por el narcotráfico, la gran mayoría fueron amenazados por él. Tenían formas directas de hacer sentir su poder, de tratar de imponer versiones y de convertir a la información en una dimensión importante de la evolución de su guerra contra el Estado.

Los grupos paramilitares y las guerrillas tenían cercanía territorial con las y los periodistas, y a través de todo el Informe se ofrecen muchos testimonios sobre las estrategias que usaban para acercárseles y lograr que sus acciones estuvieran en la agenda informativa y fueran presentadas bajo una atmósfera que no les fuera crítica. Usaban diversas estrategias: desde enviarles razones, secuestrarlos para traerlos a sus campamentos, amenazarlos a través de enviados, hacerles seguimiento, generar acciones de aleccionamiento, estigmatizarlos o definitivamente eliminarlos.

Las agencias del Estado siempre le han concedido importancia a sus relaciones con los medios. Un punto clave de su estrategia es la construcción de información sobre su actuación, su imagen ante la ciudadanía, su participación en la generación de la opinión pública. Ello se hace a través de la red de periodistas asignados a la cobertura de las instituciones estatales y de las diversas fuerzas militares, de los mecanismos institucionales para acceder a su información, de los protocolos para el tratamiento comunicacional de los hechos de guerra. Y en algunos casos de amenazas, obstaculización del oficio, retención de la información, creación de privilegios informativos a las personas periodistas más cercanas y menos analíticas, secuestros y presión para el desplazamiento de periodistas. Más adelante se hará referencia al caso de la periodista Claudia Julieta Duque, que condensa muchas de estas apreciaciones.

SURGIMIENTO DE ORGANIZACIONES NACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN

Tras el panorama vivido a inicios de la década de 1990, varios periodistas sintieron la necesidad de crear una organización que se preocupara por proteger a la prensa. En 1995, los directivos de la FNPI invitaron al Comité de Protección de Periodistas (CPJ) de Nueva York y del Instituto de Prensa y Sociedad del Perú (IPSY) para que asesoraran el diseño de mecanismos de protección de

periodistas en riesgo. Adicionalmente, para evitar que la violencia y la impunidad callaran la libertad de prensa (Ronderos, 2012). Así, en 1996 se creó la Fundación para la Libertad de Prensa, organización que ha sido testigo de otra nueva escalada de violencia contra los medios de comunicación y periodistas. Una parte central de su labor desde ese entonces ha sido monitorear y divulgar los hechos de violencia contra la libertad de prensa y velar por la protección de las personas que ejercen el periodismo en el país.

En su primer informe, la FLIP caracterizó el fenómeno de violencia contra la libertad de prensa, esclareciendo las posibles causas de la indiferencia ciudadana ante los asesinatos y mostrando el papel de los medios como mediadores entre el conflicto y la sociedad civil.

En sus documentos iniciales, la Fundación para la Libertad de Prensa, de la mano con Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones internacionales, visibilizaron el fenómeno de la violencia estableciendo estrategias de presión al gobierno de turno para que se destacaran los hechos violentos y se evitara su repetición.

El gobierno nacional creó en 1995 la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (Ley 199 de 1995, artículo 6) y promovió el sistema de protección de Derechos Humanos. En 1999 consolidó una política de protección que conllevó a lo que hoy se conoce como el Sistema Nacional de Protección. En sus inicios, en el mandato legal la política de protección a la población civil colombiana (Decreto 2788 de 2003) incluyó a periodistas y personas que trabajan en medios, pero no tenía una definición clara de criterios (FLIP, 2014); hasta que se unificó en programa de protección bajo el Decreto-Ley 4065 de 2011, en el que se definieron 19 grupos poblacionales, uno de ellos el de periodistas.

Para la primera década de 1990, el panorama de las violaciones de la libertad de prensa y el contexto en general colombiano era grave. En este periodo Colombia estaba dentro de los tres primeros países con mayor número de asesinatos de periodistas, 60 para ese entonces, y se cometieron 116 masacres a nivel nacional (Cifras del conflicto, 2014). Fue una década en la que se cometieron todo tipo de actos de violencia, desde agresiones físicas, pasando

por exilio, trato inhumano y degradante, violencia sexual y desplazamientos masivos. Actos de violencia cometidos por múltiples actores políticos, fuerzas militares y grupos armados.

El Comité de Protección de Periodistas podía disponer la ejecución de fondos públicos para la protección de periodistas, y los dispuso por primera vez para dotar de carros blindados y guardaespaldas a reporteros de *El Espectador*, que habían recibido la amenaza masiva. Pero dos de los amenazados, atendiendo recomendaciones de la Policía Nacional, abandonaron el país; unos meses después lo hicieron dos columnistas ampliamente leídos, Alfredo Molano y Felipe Zuleta. Ellos y los reporteros habían mostrado los peligros del Plan Colombia que se organizaba en los Estados Unidos para financiar el equipo y entrenar a la tropa que habría de iniciar la ofensiva final contra las FARC. Días después, con el rompimiento de los diálogos de San Vicente del Caguán, un grupo de más de cincuenta periodistas, que se había establecido en la sede del fallido proceso de paz, tuvo que salir de urgencia, tras el anuncio de una ofensiva militar del Gobierno contra la guerrilla, con motivo del rompimiento de los diálogos. Las FARC, por su parte, expulsaron a la fuerza a quienes se negaban a hacerlo (Gómez, 2006).

Se desató entonces, por un lado, una ola de amenazas contra periodistas que habían sido corresponsales tras escuchar las conversaciones de guerrilleros y voceros del Gobierno en El Caguán. Por el otro, ataques de las FARC contra medios de comunicación y su infraestructura en todo el país, y amenazas contra periodistas que habían entrevistado al líder de las AUC, Carlos Castaño.

La FLIP inició entonces una sistematización mucho más ordenada de los tipos de agresiones sufridas por periodistas en todo el país. Las amenazas fueron las más frecuentes, seguidas por los secuestros y los atentados. Durante el 2003, denunció que los actos de corrupción fueron un motor de agresiones contra el periodismo. En el informe de ese año señala:

El conflicto armado sigue siendo una importante fuente de riesgos y amenazas para la prensa, sin embargo la FLIP expresa su preocupación porque en muchos casos las mafias de la corrup-

ción y los actores armados del conflicto (guerrilla y paramilitares) se han aliado para silenciar a la prensa. Durante el año pasado [2002] el gobierno colombiano logró retomar el control de varias zonas rompiendo la hegemonía que tenían algunos grupos guerrilleros en regiones como Arauca. La disputa por el control de estos territorios incrementó el riesgo para la prensa; de hecho, en Arauca se presentó el mayor número de violaciones a la libertad de informar (FLIP, 2003, página 5).

Para el año 2000, el programa de protección de periodistas del gobierno nacional creó el primer mecanismo de protección que se conoció como el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos CRER (Decreto 1592 de 2000) quienes registraban los casos. En él se recaudaba información complementaria, se analizaba el riesgo, se daban recomendaciones y se asignaban las medidas de protección⁵.

Para el año 2007, bajo el CRER se atendieron 102 casos de periodistas. Como dice el informe de la FLIP del mismo año, en el 45 por ciento de los casos las medidas recomendadas por el CRER no se implementaron, de manera parcial o total (FLIP, 2007). En este comité tanto la FLIP como otras organizaciones, tales como Andianos, Asomedios, el desaparecido Medios para Paz y Fecolper, asistían en representación de periodistas. Esta última fue fundada en el 2007 como organización gremial que agrupa a más de 1.400 periodistas de 28 organizaciones regionales y cuyo fin está orientado a defender los derechos laborales de quienes ejercen el periodismo y denunciar las violaciones a la libertad de prensa.

Así, tanto Fecolper como la FLIP monitorean las violaciones a la libertad de prensa y realizan diversas acciones para proteger a periodistas y a personas vinculadas laboralmente a medios. Desde el año 2006, la FLIP ha mantenido consolidadas de manera más precisa las cifras, teniendo en cuenta la capacidad de recibir las

5 Bajo el Decreto 1592 de 2000, el CRER estaba conformado por representantes de otros entes del Estado, de la fuerza pública, y de organismos autónomos y de control. Como invitados permanentes asistían el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representantes de la población en riesgo.

denuncias debido a que se desconoce el número de periodistas que no comunica su situación de riesgo.

Aunque es cierto que el número de amenazas, ataques y muertes dentro del gremio periodístico se ha reducido en los últimos años, la confirmación pública de antiguas sospechas sobre la vinculación de sectores políticos con los grupos paramilitares mostró un escenario perverso en los años posteriores.

La prensa informó en medio de un clima de zozobra: la desmovilización de los grupos paramilitares, las elecciones parlamentarias y presidenciales, y los escándalos de corrupción fueron los grandes temas de la agenda periodística en el 2006 (FLIP, 2006, página 1). En este escenario ocurrieron las amenazas, el desplazamiento forzado, el secuestro, la tortura y finalmente el exilio del periodista que inició este capítulo.

El 16 de septiembre de 2006 fueron víctimas de detenciones ilegales por parte de la SIJIN los comunicadores de la emisora indígena Uxwal Nasa Yuwe Estéreo, Rubiel Lis Velasco y Griseldino Yafué Guetoto, dos periodistas del municipio de Caldono, Cauca. Ese día, dos personas, que inicialmente se identificaron como miembros del Ministerio de Comunicaciones, les dijeron que debían acompañarlos y los subieron en una camioneta; de la emisora, los llevaron hasta Popayán. Luego de la gestión de los abogados de las comunidades indígenas, y por una orden de una jueza de Popayán, fueron liberados tras nueve días de reclusión.

Las amenazas en las regiones se convirtieron en un mecanismo efectivo para el silenciamiento. Como lo muestran los cuadros 34 y 35, que ilustran las cifras por el tipo de violación de prensa, desde el 2006 al 2014, las amenazas correspondieron a un 50,8 por ciento de las 1.236 violaciones a la libertad de prensa ocurridas en el periodo. Para el año 2006, 77 amenazas fueron reportadas a la FLIP con 88 víctimas en total, entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones que trabajan por la libertad de prensa en Colombia. Luego siguieron 227 obstrucciones al trabajo periodístico correspondiente al 18,74 por ciento, 169 tratos inhumanos y degradantes, 71 agresiones, 31 exilios con 30 personas exiliadas, 29 detenciones ilegales, 15 atentados contra infraestructura, 13

estigmatizaciones y secuestros; 9 desplazamientos internos con 10 personas en situación de desplazamiento y 8 heridos en cubrimiento.

Cuadro 34. Número de casos por cada tipo de agresión a periodistas en Colombia. Periodo 2006-2014. Informe CNMH

Tipo de violación	Año								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Amenaza	77	85	71	65	47	93	79	52	60
Obstrucción al trabajo periodístico	17	25	21	39	30	9	23	29	34
Agresión	0	0	0	0	0	0	31	18	22
Detención ilegal	5	2	0	2	0	2	8	4	6
Estigmatización	0	0	0	1	0	1	1	7	3
Otras	0	0	0	0	0	0	1	2	2
Atentado contra infraestructura	1	2	2	0	3	2	3	1	1
Desplazamiento	0	0	0	1	1	0	5	1	1
Exilio	10	7	2	3	2	2	1	3	1
Tentativa de homicidio	0	0	0	0	1	0	2	1	1
Asesinato	3	2	0	1	2	1	1	2	0
Herido en cubrimiento	0	1	1	1	0	1	2	2	0
Secuestro	3	1	1	3	2	0	2	1	0
Trato inhumano o degradante	24	37	31	27	29	21	0	0	0
Violencia Sexual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	140	162	129	143	117	132	159	123	131

Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.

Cuadro 35. Número de casos y víctimas por porcentaje en cada tipo de agresión a periodistas en Colombia. Periodo 2006-2014. Informe CNMH

Tipo de violación	Número de casos	Porcentaje del total de casos	Número de víctimas	Porcentaje del total de víctimas
Amenazas	629	50,89	785	45,45
Obstrucción al trabajo periodístico	227	18,37	402	23,28
Trato inhumano y degradante	169	13,67	274	15,87
Agresiones	71	5,74	106	6,14
Exilios	31	2,51	30	1,74
Detenciones ilegales	29	2,35	40	2,32
Atentados a infraestructura	15	1,21	13	0,75
Estigmatizaciones	13	1,05	13	0,75
Secuestro	13	1,05	23	1,33
Asesinato	12	0,97	12	0,69
Desplazamiento interno	9	0,73	10	0,58
Herido en cubrimiento	8	0,65	9	0,52
Tentativa de homicidio	5	0,40	6	0,35
Otras	5	0,40	4	0,23
Total	1.236	100,00	1.727	100,00

Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.

El gráfico 2 presenta para el año 2007 un incremento de las violaciones a la libertad de prensa, ya que se dieron 22 casos más que en el 2006, con 261 víctimas, 95 amenazas, 70 obstrucciones al trabajo periodístico, 80 casos de trato inhumano y degradante y 10 exilios. Fue el mayor número de casos de agresiones hasta el 2014. La FLIP, al hacer el análisis de la situación, señaló que:

Resulta contradictorio entonces encontrar a estos grupos (paramilitares) como los victimarios de la libertad de prensa. Los temas relacionados con los líderes paramilitares desmovilizados siguen causando intimidación y conllevan a la autocensura. Sin

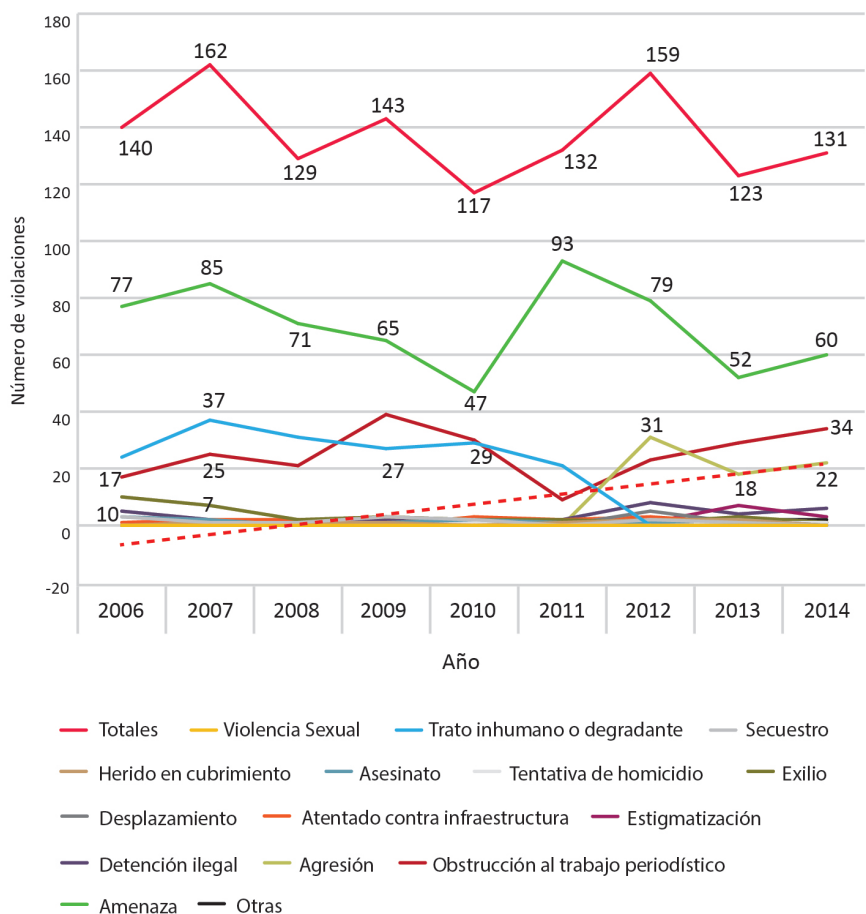
embargo, no puede desconocerse la facilidad con la que delincuentes comunes o políticos corruptos asumen el estatus de paramilitares, como una especie de inmunidad, para intimidar o para protegerse. En esas condiciones, solo las investigaciones judiciales podrían explicar con claridad las cifras de violaciones por parte de paramilitares (19 por ciento del total de violaciones contra la libertad de prensa en 2007). Además, dichos datos se dan bajo el contexto de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz (2 años de funcionamiento) y casi 5 años desde el comienzo de las desmovilizaciones de esos grupos ilegales (FLIP, 2007, página 4).

La propagación de la violencia contra periodistas se dio al incrementarse de manera preocupante la relación de delincuentes comunes con políticos corruptos o la de paramilitares con narcotraficantes. Las prácticas de la violencia seguían siendo las actividades sistemáticas asociadas al miedo, como la amenaza o la extorsión. La obstrucción al trabajo periodístico se evidenció sobre todo en la prensa escrita a través de la destrucción, compra o hurto de periódicos en algunas regiones en las que la información ofrecida por los medios implicaba de manera directa a alguno de los actores involucrados en el conflicto armado interno.

El tres de septiembre de 2007, el diario *El Tiempo* denunció en sus páginas la recolección de ediciones en Tabio, departamento de Cundinamarca. Varios habitantes de esa localidad explicaron que el entonces candidato a la asamblea de Cundinamarca, Julio Eduardo Rivero, conocido como *Yiyo*, y sus familiares compraron todos los ejemplares. En el periódico de ese día, se informaba que Rivero se repartía con el gobernador del departamento, Pablo Ardila, las comisiones cobradas por la adjudicación de contratos (FLIP, 2007, página 42).

Lo aparentemente paradójico era que el político cuestionado era al mismo tiempo el dueño de un medio impreso con una importante circulación y penetración especialmente en sectores populares.

Gráfico 2. Líneas del número de agresiones a la libertad de prensa en Colombia, por años. Periodo 2006-2014. Informe CNMH



Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.

La situación en el 2008 no cambió. El número de amenazas (71) siguió siendo alto. En la obstrucción del trabajo periodístico, se contabilizaron 10 casos, atribuidos principalmente a personas que ejercían cargos públicos.

Es así como a partir de este año se vislumbró, de manera sistemática, la obstrucción al oficio mediante el aparato judicial y público, particularmente negando el acceso a la información, pero también presionando determinadas orientaciones o enfoques de la información a partir del poder discrecional de la asignación de pauta publicitaria.

El análisis de la FLIP durante este año se concentró acertadamente en este tipo de obstrucción al oficio y en las dificultades de acceso a la información, que producen algunas instituciones públicas.

Entre el 2009 y el 2011 se agudizó la obstrucción al trabajo periodístico con las interceptaciones ilegales, que afectaron a personas vinculadas al periodismo, a la defensa de derechos humanos, a las altas cortes y sistemas de justicia, al Senado de la República y a la dirección de medios. Posiblemente el caso más complejo fue el de Claudia Julieta Duque. Fue amenazada no por grupos ilegales, sino por el propio Estado. Su caso es emblemático: por primera vez la Fiscalía investigó a siete altos exfuncionarios del DAS por el delito de tortura psicológica.

En su caso, las denominadas “chuzadas” o interceptaciones ilegales y amenazas iniciaron en el año 2001 cuando descubrió cómo se hizo un montaje para desviar la investigación por el asesinato de Jaime Garzón. Se hicieron aún más persistentes y crueles en el 2004, al estar investigando no solo la muerte de Garzón sino la infiltración del paramilitarismo en la Fiscalía. En una entrevista concedida a Cecilia Orozco en el 2012, la periodista amenazada señala:

Los ataques en mi contra tienen una línea de tiempo que se extiende antes y después del G-3, y es la Fiscalía la que debe esclarecer a qué obedeció tanta saña hacia mí. Una de las carpetas del

DAS sobre mí tiene como título “contra el DAS”. Es claro, entonces, que ese organismo de seguridad me consideraba su enemiga (Duque, 2012, enero 14, entrevista en *El Espectador*).

Luego de varios exilios y haber tomado las riendas de su propia investigación, tras el escándalo de las ‘chuzadas’, el procurador Ordóñez abrió un proceso en 2009 que terminó con la destitución de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, mientras que otros casos fueron remitidos a la Oficina de Control Interno del DAS y en otros más declaró la prescripción.

“A través de mi abogado presenté un recurso de reposición por considerar que el fallo desconocía la existencia de planes para amenazar, desprestigiar, exiliar y torturar psicológicamente”. La Corte Constitucional le dio la razón en octubre de 2008. En una sentencia dignificante le ordenó al DAS desclasificar toda la información que existía sobre ella.

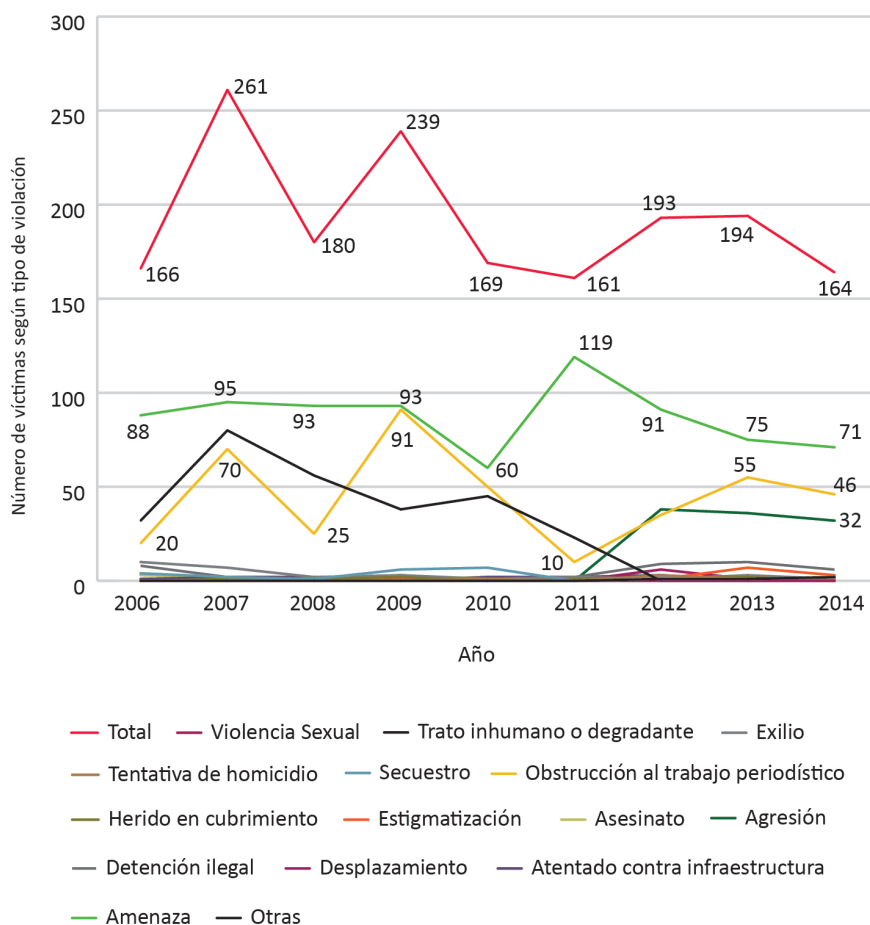
Como lo muestran el cuadro 36 y los gráficos 2 y 3, entre el 2010 y 2011 aumentó casi al doble el número de amenazas pasando de 60 a 119 víctimas de las mismas. Comportamiento que venía disminuyendo en años anteriores.

Cuadro 36. Número de víctimas según tipo de violaciones a la libertad de prensa en Colombia. Periodo 2006-2014. Informe CNMH

Tipo de violación	Año								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Agresión	0	0	0	0	0	0	38	36	32
Amenaza	88	95	93	93	60	119	91	75	71
Asesinato	3	2	0	1	2	1	1	2	0
Atentado contra infraestructura	1	2	2	0	2	2	3	0	1
Desplazamiento	0	0	0	1	1	0	6	1	1
Detención ilegal	8	2	0	3	0	2	9	10	6
Estigmatización	0	0	0	1	0	1	1	7	3
Exilio	10	7	2	3	1	2	1	3	1
Herido en cubrimiento	0	1	1	2	0	1	2	2	0
Obstrucción al trabajo periodístico	20	70	25	91	50	10	35	55	46
Secuestro	4	2	1	6	7	0	2	1	0
Tentativa de homicidio	0	0	0	0	1	0	3	1	1
Trato inhumano o degradante	32	80	56	38	45	23	0	0	0
Violencia Sexual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Total	166	261	180	239	169	161	193	194	164

Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.

Gráfico 3. Líneas del número de víctimas por cada tipo de violación a la libertad de prensa en Colombia, por años. Periodo 2006-2014. Informe CNMH



Fuente: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP.

El aumento al número de violaciones de la libertad de expresión a través de la intromisión del DAS fue dramático. Del escándalo se confirmaron 16 casos contra periodistas. Este fenómeno incluyó un claro mecanismo de impedimento hacia la publicación de la información y la intención de alejarlos de su ejercicio.

Las investigaciones judiciales han señalado dos fenómenos preocupantes. Por un lado, la cantidad de comunicaciones interceptadas. En el informe de la FLIP del 2009 se señala que según el propio fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, la Fiscalía para ese entonces solo pudo revisar una cuarta parte de todas las comunicaciones que tenía en su poder. Por otro lado, en el DAS no solo se hacían interceptaciones ilegales a las comunicaciones y seguimientos de las actividades de las personas, sino que además se diseñaron manuales para amenazarlos, como lo demuestra la investigación de la Fiscalía en el caso de Claudia Julieta Duque (FLIP, 2009, página 11). En las interceptaciones fueron víctimas varios periodistas, entre ellos Hollman Morris, que en su momento era el director del programa ‘Contravía’; Daniel Coronell, exdirector de Noticias Uno; Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Juan Luis Martínez, periodista de Noticias Uno; Norbey Quevedo, editor de investigaciones de *El Espectador*; Ramiro Bejarano, columnista de *El Espectador*; Alejandro Santos, director de *Semana*; Edulfo Peña, editor político de *El Tiempo*; Jineth Bedoya, periodista de *El Tiempo*; Salud Hernández, columnista de *El Tiempo*; Félix de Bedout, periodista de W Radio; Julio Sánchez Cristo, director de W Radio; Darío Arizmendi, director de Caracol Radio; Carlos Lozano, director del semanario *Voz*; y Gonzalo Guillén, corresponsal de *El Nuevo Herald*.

En el 2010, tras las nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales, en algunos departamentos las y los periodistas no tuvieron acceso a los resultados electorales. Sucedió, por ejemplo en ciudades como Arauquita, Barrancabermeja, Cali y Cartago. Además miembros de la policía les negaron el acceso —en algunos casos de sus equipos (cámaras, videograbadoras, etc.)— a los puestos de votación, impidiendo que informaran desde el lugar de la noticia (FLIP, 2010, página 21). Ese año la FLIP confirmó la

ejecución de planes sistemáticos para acallar sistemas informativos periodísticos. Las interceptaciones y los seguimientos ilegales realizados desde el DAS fueron un atentado directo a la democracia, las instituciones y la prensa libre de Colombia.

Los hechos, descritos por la FLIP en el Informe sobre el tema, dan cuenta de cómo desde esa institución se creó una empresa criminal que persiguió y acosó de forma ilegal a periodistas y otras personas influyentes en el escenario político. Desde el DAS se construyeron estrategias de desprestigio en contra de reporteros, e incluso se llegó a amenazarlos directamente (FLIP, 2010, página 22).

En el 2011 la situación en las regiones siguió compleja para ejercer el periodismo. Se consolidaron 119 amenazas con 93 víctimas amenazadas. El 9 de julio de 2011, una chiva-bomba con gran cantidad de explosivos que iba dirigida al Puesto de Policía se detonó al frente de la emisora Radio Nasa en el municipio de Toribio, Cauca.

Si hubo digamos que también amenazaban aquí para volar esto porque nosotros siempre éramos los que informábamos de primero todo lo que estaba pasando, entonces la gente que molestaba aquí a la estación de policía pues eran los que siempre querían acabar con todo, amenazas por medio de mensajes por vías telefónicas nos han llegado también o sea, diciendo que nosotros hablamos mal de esa gente, a ellos no les gusta que hablen digamos nosotros aquí siempre publicamos todo (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento del Cauca).

En los últimos dos años que abarca este informe, otro tipo de violaciones a la libertad de prensa se hizo patente. Este fue el del acoso judicial. Fue visto como una nueva modalidad de censura y afectación contra la libertad de expresión.

El sistema judicial promovió una legislación “quejumbrosa”, mediante la injuria y la calumnia las cuales permiten cuestionar cualquier intento del informar sobre hechos de interés para la

comunidad, acusando que estos están en contra del buen nombre de políticos y particulares quienes incurren en comportamientos sospechosos dentro de sus funciones y acciones (FLIP, 2012, página 14).

En el 2011, el Estado colombiano creó dos instancias previas que liberaron al CRER de las funciones de registro y análisis, ya que no tenía la capacidad para atender de manera debida el creciente número de casos. Así se creó el Grupo Técnico de Recopilación y Análisis de Información CTRAI y el Grupo de Valoración Preliminar GVP, a cargo del análisis y ponderación del riesgo. Estas dos instancias llevan la información al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM). De igual forma, en este mismo año surgió la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad adscrita al Ministerio del Interior (Decreto ley 4065 de 2011) que organizó el nuevo sistema de protección.

En este sentido, la protección a periodistas quedó en el Poder Ejecutivo del Estado con el apoyo de 11 entidades de distintas ramas del poder público. En enero de 2013, la UNP tuvo una apropiación presupuestal de COP\$245.489.631,48, cerca de US 120 millones de dólares con cerca de 7 millones de dólares anuales orientados a la protección de periodistas.

Entre sus limitaciones está la impunidad frente a los casos que causan las violaciones a la libertad de prensa y no prevengan la situación en riesgo, la atención oportuna a periodistas frente al riesgo, el tratamiento inequitativo a periodistas en las regiones, los fraudes al sistema y los procedimientos de terminación de las medidas de protección (FLIP, 2015).

La situación de amenaza no ha desaparecido. A mediados del 2013, el periodista Ricardo Calderón, de la revista *Semana*, transitaba por la carretera que une a Ibagué con Bogotá. Realizaba actividades relacionadas con su oficio y concretamente con delicadas indagaciones en que están implicados grupos de militares. Pronto presintió que lo estaban siguiendo. Cuando se detuvo en un peaje de la vía, un vehículo gris con vidrios polarizados le bloqueó el paso. Dos hombres le llamaron por su nombre y al contes-

tar le empezaron a disparar. Cinco tiros de arma corta quedaron como testimonio del atentado sobre la superficie del automóvil que manejaba. El periodista salió ileso. Las autoridades hablaron de inmediato de un atentado contra la libertad de expresión, mencionaron como autores a fuerzas oscuras y prometieron realizar investigaciones exhaustivas que después de meses no han arrojado resultados.

Un recorrido por estos años en que ha sido posible la recopilación de información de primera mano, su organización y sobre todo su análisis por parte de instituciones comprometidas y serias como la Fundación para la Libertad de Prensa y Fecolper, se puede percibir un cierto mapa de esa otra atmósfera de violencia que rodea la actividad informativa en Colombia. En primer lugar, es indudable que vivimos ante la realidad de un periodismo amenazado. Y lo es desde diversas fuentes de amenaza que involucran a narcos, paramilitares, bandas criminales, guerrillas, agentes del Estado y todas sus mezclas e hibridaciones. Es lamentable que precisamente autoridades y personas al servicio del Estado sean el origen de las amenazas y que la labor periodística se sienta como un peligro para el Estado social de derecho, cuando debiera ser exactamente lo contrario. Como se ha señalado insistentemente, para el conjunto de periodistas víctimas de asesinato en Colombia entre 1977 y 2015, los locales y de regiones sufren más directamente los efectos de las amenazas. En medio de este clima de amedrentamiento y zozobra han trabajado durante años, haciéndose cargo de su soledad y su indefensión, pero velando a la vez porque las comunidades sean informadas de la mejor manera posible.

Una segunda característica del mapa permite observar cómo lo que hemos llamado atmósfera de amenaza llega también a periodistas nacionales y de grandes medios, o a quienes son respaldados por organismos internacionales y de la cooperación y actúan de manera independiente. El deterioro de las entidades de seguridad del Estado y la participación indebida de instancias superiores del gobierno y el Estado —como la propia Presidencia de la República— llevó a vulnerar no solo los derechos de las y los periodistas, sino también el valor de libertades civiles fundamentales

para la democracia, como la libertad de expresión y el derecho a la información. Una de las más graves afrentas que haya vivido el periodismo colombiano, pero también la ciudadanía.

Una tercera característica la conforma el panorama de las modalidades más destacadas de presión en las que, además de las amenazas, están la agresión y la obstaculización del oficio del periodismo. Lo que se intenta impedir es, clara y explícitamente, que cumplan su tarea, que informen a la sociedad. O se desea que la información sea obsecuente con el poder, que repita lo que este quiere o que se pliegue a los comunicados de guerra, las ruedas de prensa o los boletines oficiales. Al final un periodismo domesticado y ajeno a las responsabilidades que le exige y necesita la sociedad.

Las contradicciones de la protección constituyen una cuarta característica. Es fundamental que el Estado y la sociedad se preocupen por defender a las y los periodistas, para que puedan ejercer un derecho que corresponde a toda una colectividad y que es de extrema necesidad, sobre todo cuando una sociedad se ve amenazada por actores violentos. Colombia ha sido un ejemplo en este campo, así el sistema creado tenga fracturas y problemas que deberían ser subsanados. Pero también es muy significativo que, en Colombia, un grupo importante de quienes ejercen el oficio del periodismo tenga que ser escoltado, transportado en vehículos blindados y protegido por agentes del Estado armados. Se trata de un periodismo escoltado.

La corrupción, como quinta característica del mapa, está estrechamente relacionada con esta atmósfera de amenaza que vive el periodismo colombiano. Por eso el problema no cesará con los acuerdos que se logren con la guerrilla, sino con la democratización de un país que renueve profundamente sus costumbres políticas y castigue con severidad toda forma de corrupción, auspiciada por personas al servicio del Estado o de entidades privadas.

Se ha comprobado que representantes de grupos desmovilizados tienen una incidencia directa en el clima de amenaza y obstrucción del oficio periodístico que se vive en el país. Aunque la estrategia contra la prensa de los grupos de narcoparamilitares

desmovilizados se haya atenuado, se debe estar muy alerta con los coletazos de los grupos que se han resistido a la negociación o que, aun después de ella, mantienen sus prácticas guerreras y de apropiación ilegal de bienes y territorios.

Una sexta característica son las variadas formas utilizadas por los actores violentos para atacar a los medios y silenciar a sus periodistas. En el periodo estudiado se incrementaron las acciones contra la infraestructura de los medios: se dinamitaron emisoras de radio y periódicos y se compraron ediciones completas de medios para evitar su circulación en la comunidad y sobre todo su capacidad expresiva ante hechos en que precisamente estaban involucrados quienes querían hacer desaparecer el rastro de sus crímenes y atropellos.

Una de las maneras de silenciar periodistas que se ha aumentado es la presión judicial, su empapelamiento con demandas, llamadas a juicio, indagatorias intimidantes. Una práctica que se ha detectado también en sociedades que no tienen un conflicto humanitario tan agudo como el colombiano.

Es relevante destacar el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como ente protector de periodistas y de la libertad de prensa en Colombia. Por lo menos diez casos de periodistas tienen medidas cautelares para el ejercicio de la profesión en condiciones de riesgo y continúan siendo decisivos los pronunciamientos de la Relatoría especial sobre Libertad de Expresión de este sistema.

DAÑO COLECTIVO EN LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Hace unos años, una ciudad de Colombia amaneció sin periodistas, sin noticias. No quedó nadie que contara las historias. De allí salió un avión hacia Bogotá el 31 de marzo de 2003. Al aterrizar pareció una de tantas aeronaves que encuentran tierra en la capital todos los días y que traen los cientos de viajeros que la visitan o que regresan a ella. En realidad allí viajaba una infamia, la prueba de que las y los periodistas también huyen de la violencia en los aviones.

Ángel María León y Narda Guerrero, periodistas de la emisora Radio DIC, dejaron a sus familiares en la ciudad de Arauca sin tener mucho tiempo para despedidas. Los hijos de León le pidieron que regresara pronto y que si tenía que volver por ellos los dejara al menos terminar el año en el colegio. Guerrero le había prometido a su madre que saldría cuanto antes, y allí iba. Por su parte, el corresponsal de RCN, Carlos Pérez, horas antes había abrazado a su esposa diciéndole que todo mejoraría pronto; la dejaba con ocho meses de embarazo. Cinco periodistas más formaban parte del grupo. Venían huyendo después de que tres días antes se conocieran dos listados con los que los grupos armados declaraban objetivo militar a 16 personas en ejercicio del periodismo, que eran la mayoría de comunicadores activos del departamento de Arauca.

La primera lista, atribuida a las FARC, señalaba como objetivo militar a Carmen Rosa Pabón, periodista de La Voz de Cinaruco; a Liz Neira Roncancio, de Radio DIC; Jineth Pinilla, quien trabaja en comunicaciones con el Ejército Nacional; Carlos Pérez, corresponsal de RCN Televisión; Hernán Morales, periodista de Canal 4; Henry Colmenares, periodista de *Nueva Frontera*; William Reyes Cadena y José Antonio Hurtado, jefe de prensa de la Gobernación.

La segunda lista, atribuida a paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca, contenía los nombres de Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso (periodistas asesinados con anterioridad), Emiro Goyeneche, de Sarare Estéreo en Saravena; Álvaro Augusto Báez; Narda Guerrero, gerente de Radio DIC; Ángel María León, periodista de Radio DIC y del periódico *El Corredor*; Miguel Ángel Rojas, de Meridiano 70; Zoraida Ariza, quien trabajaba desde Saravena para Caracol Radio y Luis Guedes (Comunicado RsF, 2003).

La de los paramilitares salió en una hoja de cuaderno a mano. A mí me llegaron a mi casa como a la 1:15 a decirme que yo aparecía en ese panfleto, de los paramilitares que tuviera mucho cuidado (...) Yo no entendía nada (...) pero ya después cuando empezaron a citarnos a reuniones y llegó el DAS que me tenía que ir (...) Entonces después nosotros estando en Bogotá nosotros hacíamos averiguaciones pero todo era muy incipiente y cualquiera nos podía confundir entonces ya nadie creía en la versión de este ni de nadie y hay gente que llamaba para saber cómo estábamos que si íbamos a regresar, nosotros nunca decíamos nada... (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento de Arauca).

Las listas las dio a conocer Rodrigo Ávila, entonces corresponsal del Canal Caracol. Dicen que se las entregó un miliciano de las FARC. Lo que no se pudo esclarecer es por qué, en una misma hoja, aparecía una lista de amenazados por el grupo guerrillero en un lado y otra por el bloque paramilitar Vencedores en el otro. Tampoco se aclaró por qué las listas supuestamente estaban escritas a mano, tal como contaron algunos amenazados que nunca las vieron. Aun así, los periodistas no se tomaron el tiempo para

preguntar por la autenticidad de la amenaza y salieron de la ciudad con la ayuda del Ministerio de Defensa. Sabían que el riesgo, así como el miedo, se había intensificado después de la muerte del periodista Luis Eduardo Alfonso, 18 de marzo, menos de 15 días antes de la aparición de las listas.

El día siguiente, el 1º de abril, llegaron ocho periodistas más que estaban en las listas; entre ellos, dos del municipio de Saravena. Así, en Bogotá terminaron personas muy reconocidas del periodismo de Arauca, como Carmen Rosa Pabón, Henry Colmenares y Luis Enrique Guedes Gámez.

La situación de la región no les dejó más opciones. El 28 de junio de 2002, el bloque Vencedores había secuestrado y asesinado a Efraín Varela, socio y director de la emisora Meridiano 70, y el 18 de marzo de 2003 —menos de 15 días antes de la aparición de las listas— un sicario le quitó la vida a quien había sido la mano derecha de Varela, Luis Eduardo Alfonso.

La muerte de Varela ya había transformado el periodismo de Arauca. Pocos continuaron cuestionando la administración pública o los grupos armados legales e ilegales.

Él nos formó, él formó una generación muy grande aquí en Arauca, yo estaba recién graduada cuando llegué a trabajar con él pero pues aprendí muchísimo, un gran maestro. Y en ese entonces el grupo de periodistas era muy selecto: el que es hoy subdirector político de *El Tiempo*, Jorge Enrique Meléndez, y con quien también trabajaba, Pinino (Luis Eduardo Alfonso). Eran los coequiperos en el noticiero y era gente pues muy buena, lo que pasa es que ellos sí salieron de acá pero a ellos no los amenazaron, ellos se fueron antes de que esto se pusiera más caliente (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento de Arauca).

Los medios informativos evitaron salir de los cascos urbanos e informar acerca de las actividades de las organizaciones sociales locales. En la misión que emprendió Reporteros sin Fronteras de conocer a fondo la situación de la época se denunciaba con preocupación que las emisoras comunitarias no salieran al aire. Entre

ellas Radio DIC, que cubría los municipios de Saravena, Arauquita, Tame y Fortul, por presiones del Ejército. Además, el Ministerio de Comunicaciones investigó a la emisora Meridiano 70 por recibir unas quejas del General Carlos Lemus, comandante de la zona, después de haber transmitido una entrevista a un jefe del ELN hecha por Efraín Varela un tiempo antes de ser asesinado y Rodrigo Ávila (Reporteros sin Fronteras, 2002).

Después de que Arauca fuera declarada zona de rehabilitación, al inicio del gobierno de Álvaro Uribe en 2002, la fuerza pública presionó con mayor fuerza a periodistas que denunciaban sus actuaciones. A cada denuncia correspondían declaraciones e insinuaciones sobre la colaboración de periodistas con el terrorismo, dándoles el trato de terroristas.

Con la llegada a Bogotá de todas las personas amenazadas, comenzó la historia de desarraigo. De hotel en hotel, contando los días, de organización en organización, contando las semanas, de entidad en entidad, contando los meses, cada vez con menos dinero, en la casa de un amigo primero, en la casa de otro amigo después. Haciendo trucos para sostenerse cuando no hubo más recursos del Estado. Vender hayacas o lo que se pudiera, pedir prestado, decir que les mandaran algo, ofrecerse en cualquier oficio. Inventarse algo para sacar a la familia de la frontera.

Yo creo que fue uno de los viajes más horribles que yo he tenido en toda mi vida. Sin embargo, cuando llegamos a Bogotá fue un impacto grande porque estaban todos los medios de comunicación, esperándonos. Empezamos a escuchar la palabra desplazados, periodistas desplazados de Arauca y cuando íbamos a hablar con el vicepresidente ‘sigan los desplazados de Arauca’. Esa vaina a mí me marcó. Yo sí entiendo a la gente cuando dice que es desplazada, porque uno, que medianamente vive bien, pues no puede permitir que lo traten de esa manera y que lo traten con lástima cuando realmente no conocen la realidad de lo que uno está viviendo (CNMH, 2013, Trabajo de campo, entrevista departamento de Arauca).

Pero otra historia comenzaba al tiempo, la de la ciudad sin periodistas. Melba Varela era la gerente de la emisora Meridiano 70 cuando su padre Efraín fue asesinado. Ella se quedó y fue testigo de ese día, nueve meses después, en el que la ciudad de Arauca amaneció sin periodistas al aire. No estaban quienes conformaban los equipos periodísticos de las principales emisoras de la ciudad, La Voz del Cinaruco, Radio DIC y Meridiano 70. También faltaba el alma de los periódicos pequeños que se encontraban en circulación. Dieciséis personas amenazadas tuvieron que salir corriendo en dos aviones, Algunos periodistas amenazados no quisieron dejar la ciudad pero se escondieron, como Hernán Morales, que se encerró en la casa de sus suegros sin salir por semanas. Otros periodistas, que no aparecieron en las listas, simplemente redujeron sus labores y callaron todo aquello que pudiera ser incómodo.

Pasaron entre tres y nueve meses para que quienes se desplazaron comenzaran a regresar a Arauca. Las emisoras solo pasaban programas de entretenimiento, celebraban los cumpleaños de los oyentes y programaban música la mayor parte del día. Ingenieros y técnicos tuvieron que ponerse en el papel de directores y programadores. Las audiencias no tuvieron noticias de su región, apenas las que se podían enlazar con las cadenas nacionales, en las que difícilmente salían al aire periodistas o temas araucanos. Al regresar al municipio, hubo periodistas que perdieron su trabajo. El rechazo obedecía al riesgo de su presencia en cualquier medio de comunicación.

Aun con el regreso, la dinámica del cubrimiento de noticias cambió. Como señaló Jorge Meléndez en el periódico *El Tiempo*, “En Arauca se acabaron las chivas” (2004, febrero 9). Ocho periodistas adquirieron un esquema de protección colectivo. El Ministerio del Interior les dio dos camionetas, cuatro escoltas y debieron conformar dos grupos y horarios para cubrir las noticias. En suma, debieron ponerse de acuerdo para todo, incluso para los cubrimientos, hecho que acabó con las “primicias” informativas.

Carmen Rosa Pabón quizás ha sido la que más amenazas ha recibido ejerciendo su labor como periodista, antes y después de ser

desplazada. Para ella, el impacto del desplazamiento forzado y las amenazas a periodistas de esta región cambió el cubrimiento periodístico, la relación con las fuentes y la rigurosidad investigativa.

A veces hablamos de la autocensura como un problema, pero otra cosa es sentirla. Reconocer que está siendo censurado, para un periodista es, yo diría, castrante. Es reconocer que tiene que dejar de hacer su oficio para vivir. La autocensura duele, duele muchísimo porque se nos formó para decir la verdad y entonces llega un momento en que la coyuntura la impone. Si digo la verdad, pierdo la vida, y yo tengo una responsabilidad con mi familia y con un proyecto de vida. Si no la digo, no estoy cumpliendo la misión, yo no estoy haciendo bien el trabajo. Entonces viene un problema ético, interno, para el periodista. ¿Hay autocensura? ¿No hay autocensura? ¿La reconocemos? Es muy fácil cuestionar y decir, pero sentirlo es muy duro. Es muy duro porque viene un conflicto muy personal del periodista, los cuestionamientos: ¿vale la pena morir por una noticia? ¿Qué tanta responsabilidad tengo con mi vida con mis hijos con mi familia? (Pabón, 2013, entrevista CNMH, 2013, Trabajo de campo, departamento de Arauca).

Después de esta historia, cuando se quiere hablar de daño colectivo a la comunicación aparece la pregunta sobre cuáles fueron los grupos sociales perjudicados. ¿Es el grupo de 16 periodistas desplazados? ¿Son quienes se quedaron en medio de la zozobra? ¿La familia de Varela? ¿La de Carmen Rosa? ¿Son los ingenieros y técnicos? En este caso, cabe preguntarse si la ciudad que se quedó sin periodistas sufrió un daño colectivo a la comunicación. ¿Sufren daño las audiencias por las agresiones a periodistas?

LA NECESIDAD DE PENSAR EL DAÑO COLECTIVO EN LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

Al pensar en el daño colectivo estamos al borde de la reparación colectiva. Responder esas preguntas para el caso de las y los

periodistas de Arauca y para otros, significa reflexionar cuál ha sido la pérdida que ha sufrido el colectivo y quiénes, de verdad, la han tenido que soportar. Es la posibilidad de pensarse en serio qué es lo que se tiene que reparar y tomándose el tiempo para pensar el daño colectivo se puede llegar a reparaciones ajustadas a las pérdidas. Es decir que se garantiza que las medidas de restitución, satisfacción o rehabilitación no terminen reintegrando algún aspecto de la vida social que no corresponde a los perjuicios en la violencia.

Esto suele suceder cuando el Estado hace pasar por reparación las medidas de política pública general o los reajustes a las deficiencias previas en sus metas sociales. En un universo como el del periodismo, en el que se ven tantas deficiencias en materia de derechos sociales, de garantías laborales, de procesos de licenciamiento, de educación y capacitación, es posible que las medidas de reparación terminen cubriendo realidades que no necesariamente son consecuencia de los procesos de violencia o que son efecto de los hechos violentos de manera muy indirecta.

Unas medidas de reparación colectiva bien pensadas, coherentes con los daños colectivos, no solo son una reivindicación de justicia y de re-dignificación del grupo víctima, son también la base para que no vuelvan a presentarse los mismos hechos de violencia, pero sobre todo para que se transformen los modelos sociales que perpetúan las realidades violentas. En otras palabras, son el punto de partida para las garantías de no repetición. En esa medida, es necesario recordar una y otra vez que las medidas de reparación ajustadas solo son posibles cuando se ha encontrado la naturaleza y la dimensión real del daño colectivo.

Ahora bien, para reflexionar sobre el daño colectivo en la violencia contra periodistas, este Informe propone tres primeras delimitaciones o precisiones que servirán para enrutar la reflexión: 1) diferenciar el daño del hecho de violencia; 2) diferenciar el daño colectivo del daño individual; 3) diferenciar el daño colectivo a la comunicación (o de la expresión) del daño colectivo frente a otros bienes o derechos.

El daño vivido, impacto que generan los hechos de violencia

A las víctimas de la violencia les cuesta hablar de la pérdida que sufrieron. Mucho más cuando se les pregunta por el daño que sufrieron como grupo. Para los y las periodistas parece ser más fácil reconstruir los hechos que soportaron que las cosas que se perdieron en su vida o en la cotidianidad de su oficio. De alguna forma los duelos no desarrollados han hecho que como víctimas se queden hablando de lo sucedido una y otra vez, y que al tiempo les cause tanta dificultad determinar cuál fue el daño que vivieron. En general, reducen la demanda de reparación al enjuiciamiento y castigo de los victimarios, que si bien no es tema menor, suele funcionar como un relato que, sumado a la impunidad, frustra las capacidades de reconstruir los verdaderos impactos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de revisar algunos fallos de la Corte Interamericana, ha logrado proponer un listado de hechos que lesionan la libertad de expresión, especialmente la labor de las y los periodistas. Estos hechos son los siguientes:

1. Censura previa.
2. Intimidación o amenaza en el marco del oficio de periodistas.
3. Actos contra la integridad física en el marco del oficio de periodistas.
4. La pérdida o cancelación de otros derechos necesarios para el oficio.
5. Detención arbitraria y condena ilegal o injusta.
6. Denegación de acceso a la información pública.
7. Falta de protección en el oficio.
8. Asesinato.

Este catálogo pretende reunir el conjunto de hechos violentos que atentan contra periodistas por razones de su oficio. Se trata de un listado que permite reconocer las acciones que generan daños, pero que no son un daño en sí mismas.

Como se ha visto, determinar los hechos de violencia es indispensable para los derechos a la verdad y la justicia. Sin embargo, cuando se habla de reparación, es necesario retomar los hechos

en función del impacto que generan, del daño, pues es a partir de su definición que podemos saber cuál ha sido la dimensión del perjuicio y cuál es la forma de solucionarlo y recomponer las cosas. Los hechos, explicados por sí solos, no logran explicar las pérdidas que causan; es más, un mismo hecho puede causar diferentes daños, dependiendo del tiempo, del lugar, del contexto. Una forma de verlo es la manera en la que el asesinato de un periodista puede generar diferentes impactos, como puede apreciarse al retomar el caso de Efraín Varela, sucedido en Arauca.

Proveniente del Caribe, Valera se estableció en la ciudad fronteriza al tiempo que conformaba su empresa radial. A lo largo de los años 80, se destacó por consolidar el oficio periodístico en la región pero, sobre todo, por acompañar el proceso de nuevos periodistas de la ciudad. Fue jefe, asesor y mentor de quienes hoy en día lideran el periodismo araucano. Como se dijo, el 28 de junio de 2002 fue asesinado por el bloque paramilitar Vencedores. El homicidio (el hecho) generó un daño que incluso trascendió al núcleo familiar, justamente gran parte del móvil de los victimarios. Entre las y los periodistas de Arauca, especialmente aquellas personas que habían aprendido sobre periodismo bajo su batuta, el impacto fue evidente. Se trataba de alguien que, además de periodista, era maestro y ejemplo para la mayoría, algo que es más relevante cuando se sabe que el periodismo es un oficio que se aprende, en gran parte, por imitación y transmisión de técnicas.

No importó el medio en el que trabajaran, para la gran mayoría su muerte significó una pérdida en materia de libertad de expresión. Podría hablarse de daños si se piensa en el temor, la autocensura, la disminución de confianza, la ruptura en los lazos gremiales ante la pérdida de un referente vital. Sin duda fue la razón por la que, meses después, se desplazaron con tan poca resistencia ante las amenazas. En el fondo el mensaje estaba claro: si habían terminado con la vida del maestro de todos, era fácil que cualquiera cayera.

Un asesinato similar, pero en otras circunstancias y de un periodista de otras características, puede llevar a otro tipo de daños. Alirio Mora Beltrán, director del periódico *El Caleño*, fue asesinado en

Cali el 19 de septiembre de 1983. Cuando se reflexiona sobre el daño que causó su muerte, se piensa más en la información que no alcanzó a publicar sobre los actos de corrupción de la Policía regional. Al quitarle la vida la opinión pública perdió la posibilidad de conocer información determinante para el desarrollo de la vida política de la región. En esa medida, aunque sea una muerte similar sobre un periodista, el perjuicio en este caso está más referido a la información que debía conocer una comunidad y menos al impacto generado en el grupo de periodistas de la región.

Por supuesto, el daño en el caso de Varela como en el de Mora debe ser revisado con los demás elementos que se van presentando en este capítulo. Por ahora basta para poner de presente la importancia de diferenciar el daño del hecho.

El daño colectivo a la comunicación

En el marco de la investigación se ha comprobado que la violencia contra periodistas y medios de comunicación produce un daño colectivo, es decir una vulneración injusta que debe soportar una pluralidad de sujetos o, en otras palabras, un sujeto colectivo. Ahora bien, se ha encontrado que ese daño debe ser analizado con cuidado porque no necesariamente resulta homogéneo o generalizable dadas las maneras en las que se presentan los hechos de violencia a lo largo del periodo estudiado.

Las demandas de reparación varían de región a región, lo que dificulta un tratamiento universal, sin contar con que es difícil enfocarlos hacia otros daños distintos a los individuales. Visto lo anterior, a continuación se propone una ruta de análisis que puede llevarnos a descubrir las nociones de impacto colectivo que se presentan cuando uno o varios medios, así como sus periodistas, son afectados por los actores armados e ilegales.

Un hecho violento puede llegar a producir daños de diferente índole, afectando personalmente a periodistas, a sus familias y a sus comunidades, afectando los derechos a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la locomoción, entre otros. Sin embargo, la pretensión

de este informe es indagar sobre la existencia de daños colectivos particulares referidos a la función social del ejercicio del periodismo y a las agendas que persiguen los victimarios al ejercer violencia contra el periodismo. Se trata de encontrar las condiciones que permitan precisar un daño colectivo al periodismo o a la comunicación, esto es hechos que impactan las capacidades de comunicación y de expresión con las que cuentan este tipo de víctimas.

Por ahora es necesario y justo construir un marco de análisis desde las disciplinas de la comunicación y el periodismo, de tal forma que complemente y guíe las consideraciones jurídicas. En este sentido apostamos porque la definición de daño a la comunicación o la libertad de prensa que se edifique, sobre todo desde el campo de los primeramente afectados, termine por encontrar su lugar dentro de las categorías jurídicas de daño y reparación que anteriormente se han expuesto —tanto del orden nacional como interamericano—.

Esta exploración sobre el daño a la comunicación o a la expresión debe ser uno que se apoye en el derecho, pero que no necesariamente dependa de él. De esa forma podrán confrontarse las herramientas jurídicas: ayudando a redefinirlas para lograr alcances más adecuados, denunciándolas en su propia insuficiencia o anacronía para el caso de lo afectado en concreto, o armonizándolas con el oficio particular y los derechos precisos que se pretenden proteger o reanimar.

Vistos los hechos que se analizan en el Informe de Memoria, una lectura exclusivamente jurídica se enfrenta a que no se está hablando de la vulneración sobre una libertad de expresión cualquiera que pueda predicarse de toda persona. Más bien ha apuntado a reconstruir lo que ha sucedido con una expresión que se enmarca dentro de un oficio, el periodístico, o dentro de un acto político general de expresar para redefinir los significados y símbolos sociales. Por lo mismo se evidencian particularidades en esta expresión, bien en términos de periodicidad, técnica, tecnología, contenidos, manejo de información y en especial audiencias —las cuales cuentan igualmente con derechos—, como es el caso de la

expresión de periodistas y medios, o bien en términos de desarrollo político y democrático.

Se destaca que tanto la Corte Constitucional colombiana como la Relatoría para Libertad de Expresión de la CIDH, siguiendo otras posturas de orden mundial, han venido definiendo lo que debe ser la protección concreta de periodistas y de medios de comunicación, al margen de lo que podría entenderse como la libertad de expresión genérica. En búsqueda de nuevos enfoques se propone una construcción de un daño a la comunicación como daño colectivo.

No obstante, los contextos y los tiempos que se han estudiado dentro del informe nos incitan a pensar que sí existe un “daño colectivo a la comunicación”. Aun así, este no puede ser generalizado o abstraído de las particularidades de tiempo y lugar. En este sentido hemos elaborado una propuesta que parte de la lectura de la comunicación —o de la expresión— desde las múltiples cualidades que se esperarían de ella en una vida en libertad y democracia. Consideramos que cada cualidad de la comunicación puede ser dañada separadamente de las otras, en distintas medidas y en aspectos diferentes. Teniendo presente las múltiples cualidades, puede encontrarse una multiplicidad de daños que afectan cada una de ellas.

MARCO CONCEPTUAL DEL DAÑO COLECTIVO A LA COMUNICACIÓN

Mucho se ha hablado de la influencia de los medios. Desde las primeras teorías de la comunicación hasta las más recientes, siempre aparece en su caracterización la influencia que su funcionamiento tiene en las personas, los grupos y las sociedades. Una vasta literatura se ha dedicado a tratar de demostrar esta influencia que abarca un espectro relativamente amplio y diverso: desde la que señala que la influencia es directa sobre actitudes, valores y comportamientos, hasta la que le resta poder a la influencia directa y le concede importancia a la actividad de lectores, espectadores o audiencias. Desde la que centra la influencia en la propia naturaleza de los medios hasta aquella, que sin negar la especifici-

dad de los medios enfatiza en las relaciones sociales, el contexto y las determinantes culturales y simbólicas de la comunicación.

En términos generales las teorías de la influencia de los medios fluctúan entre la pasividad y la actividad, entre los procesos y los efectos. Hay quienes le conceden una relevancia determinante a quienes construyen los mensajes (que en el pasado se llamaban los emisores) y otros que por el contrario se apartan de este enfoque y tornan mucho más complejo el proceso comunicativo. El consenso parece orientarse hacia teorías menos apocalípticas e ingenuas. Uno de los primeros trabajos en Colombia fue el Informe presentado al Ministro de Comunicaciones por la Comisión de Estudios sobre Televisión y Violencia y titulado “Medios de Comunicación y Violencia” con la participación de Patricia Anzola, Carlos H. Gómez, Carlos Eduardo Jaramillo, Hernando Martínez, Patricia Pinzón de Lewin, María Cristina Villegas de Posada, Jaime Arocha y Germán Rey. El Ministro de Comunicaciones era Fernando Cepeda Ulloa y el Presidente Virgilio Barco. Fue publicado por Colciencias en 1988 (Cepeda, F. y otros, 1988). La influencia en las personas es real aunque se discute su intensidad, pero depende de muchos factores como la edad, la presencia de figuras adultas en el acompañamiento, la intensidad de la exposición, la relación entre dimensiones del desarrollo y el uso de medios, o la posibilidad de combinar los vínculos mediáticos con otros, sociales, motivacionales y afectivos.

La influencia sobre las sociedades también se ha estudiado. Los medios de comunicación y sus periodistas han sido entendidos como poderes fácticos frente a los poderes institucionales y son una de las fuentes más importantes en la conformación de la opinión y la vida pública de una sociedad. Los medios generan agenda, seleccionan los temas que le plantean a una sociedad, priorizan y valoran esos temas, resaltan la existencia o la invisibilidad de determinados actores sociales, facilitan o inhiben las posibilidades deliberativas de la democracia y construyen relatos a partir de determinadas fuentes y a través de determinados géneros.

En “Comunicación y poder” (2009), Manuel Castells sostiene:

Dado que los medios son la principal fuente de la comunicación socializada, que es una comunicación con el potencial de alcanzar a la sociedad en su conjunto, el enmarcado de la opinión pública se realiza mediante procesos que se producen principalmente en los medios de comunicación. La investigación sobre la comunicación ha identificado tres grandes procesos que intervienen en la relación entre los medios y las personas durante la emisión y recepción de noticias sobre las que los ciudadanos se perciben en relación con el mundo: el establecimiento de la agenda (agenda setting), la priorización (priming) y el enmarcado (framing) (Castells, 2009).

Esta presencia de los medios y la potencia de su participación en la vida pública no son homogéneas. Dependen de numerosos factores. Del tejido comunicativo de las comunidades, del número y fortaleza de los medios, de su tradición, de la confianza y credibilidad que inspiren, de su legitimidad. Como también del significado social del oficio de periodista, de la capacidad de contraste que tiene la población sobre la información que recibe, de los alcances de la información tanto en las comunidades de proximidad como en las regionales y nacionales e incluso en las internacionales, y de la ubicación y articulación de los procesos informativos con otros procesos sociales.

Esta caracterización de la comunicación y de los medios es fundamental para estudiar el daño colectivo producido por las violencias ejercidas contra medios y periodistas de sociedades locales, regionales y nacionales. Por eso hablamos de “regiones comunicativas”, como el conjunto de las condiciones comunicativas que caracterizan a una determinada comunidad en un periodo histórico específico. Condiciones que tienen que ver con la existencia de medios, su historia, su diversidad, su alcance, la conformación de su propiedad, su relación con sistemas mediáticos locales, regionales o nacionales, su posibilidad de convergencia e integración, los nexos que se han construido con la comunidad, su orientación política, los temas más frecuentes y prioritarios de su agenda, los modelos de encuadre o de “frame” generalmente utilizados, la construcción de los actores, entre otros asuntos.

Todo ello compone la cartografía mediática, como parte de las cartografías sociales y políticas, dentro de las cuales se dan los fenómenos de violencia contra periodistas y medios. Solo la composición de estos mapas puede explicar los asesinatos, amenazas, censuras y demás delitos contra periodistas que ha vivido el país entre 1977 y 2015. El entrelazado de las cartografías es fundamental para esta explicación. Las hegemonías de ciertos políticos interactúan con el periodismo local, ya sea porque ellos mismos son los dueños de los medios y consecuentemente dominan la agenda informativa o porque son sometidos al escrutinio público por parte de medios y periodistas que no son funcionales a sus causas ni a sus comportamientos políticos.

Constituidos en enemigos de los grupos armados ilegales, las personas y medios que ejercen el periodismo independiente son sometidos a estigmatizaciones —por ejemplo alinderándolos con las contrapartes de la confrontación—. Esta colisión lleva a los grupos armados a cometer delitos contra ellos, desde el asesinato hasta la tortura, la amenaza, el trato inhumano o degradante, la obstrucción de su trabajo periodístico, el secuestro, el exilio o el desplazamiento forzado, entre otras formas de violencia y violación de la libertad de expresión. En junio de 2001, un periodista tolimese, dueño de la Emisora Radio Planadas Stereo, fue asesinado por hombres armados. Como escribe María Teresa Ronderos:

[L]e dejaron en su cuerpo el humillante y manido letrero de ‘por sapo’. Las autoridades culparon a las FARC del homicidio, pues dijeron que estas lo habían señalado de ser informante del ejército. Sin embargo en el batallón militar no lo conocían. Se calcula que a su entierro fueron unas tres mil personas, en duelo por la vida valiosa que truncaron los hombres armados (Ronderos, 2012, página 67).

Una primera figura de la libertad de expresión es la diversificación del paisaje mediático y expresivo de nuestras sociedades. En comparación con el pasado, el panorama mediático es mucho más diverso y accesible, aunque es verdad que en algunas regiones del

país no lo es. Esta situación de aislamiento genera condiciones de indefensión, de focalización de la violencia y de enorme debilidad de la opinión pública local. De esta manera, paisajes comunicativos más diversos, disminuyen las posibilidades de focalización de la violencia mientras que paisajes más aislados la facilitan. Esta afirmación, sin embargo, no es un axioma. En Bogotá, donde hay la mayor variedad mediática del país han sido asesinados 8 periodistas (Cuadro 24), siendo la cuarta región del país después de Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

La diversidad del paisaje mediático no es siempre la misma a lo largo del país. En algunas zonas son frecuentes las radios comunitarias y en otras los corresponsales locales de grandes medios regionales o nacionales. Hay áreas del país en que el encadenamiento de emisoras es una realidad, lo que supone que las noticias locales pueden aparecer nacionalmente, generando otro tipo de relaciones entre grupos violentos y periodistas. Hay ciudades y municipios que reciben la señal de los canales públicos regionales, además de una oferta televisiva nacional e inclusive internacional, zonas en que hay periódicos, revistas y pequeñas publicaciones escritas, ciudades o municipios en que existe organización gremial de periodistas de medios, etc.

Todos estos perfiles mediáticos son claves, tanto por la capacidad de afrenta de los grupos violentos como por la posibilidad de defensa y ejercicio de medios y periodistas agredidos. Una definición y valoración del daño colectivo que produce esta violencia tiene que ver con la conformación de las realidades comunicativas y mediáticas en las diferentes comunidades. Una sola persona de los medios periodísticos asesinada en una determinada región del país puede producir una hecatombe de la producción y distribución de la información independiente y una cooptación de ella por parte de los grupos violentos. Unas determinadas prácticas de medios nacionales sobre sus corresponsales locales puede generar una arremetida más fuerte en una región que en otra y las amenazas concertadas con medios y periodistas en una determinada zona del país puede generar la autocensura, el silenciamiento y el miedo. Por eso, aunque pueden existir algunos elementos gene-

rales y comunes para caracterizar el daño colectivo, siempre hay que consultar las realidades comunicativas, sociales y políticas locales para diagnosticar la amplitud, los alcances y la naturaleza del daño en las comunidades de referencia.

La diversidad mediática no es solo cuántos medios existen, sino que tipo de medios hay, sus historias, su naturaleza, su conexión con los procesos y los actores locales. La arremetida contra un medio humorístico puede cercenar la capacidad crítica a que tiene derecho una comunidad, así como la violencia contra un caricaturista o un humorista es una grave pérdida para el sentido público de una comunidad. El asesinato de Jaime Garzón, por ejemplo, ocasionó un daño social hacia adelante. Silenciaron una voz crítica —y necesaria para un país acartonado y formalista— que tenía la virtud adicional de llegar a la audiencia a través de personajes, temas, lenguajes de enorme arraigo popular y con quien se habían creados lazos de identificación muy fuertes.

El asesinato de periodistas de investigación o de periodistas críticos, además de amedrentar a sus colegas y en general a toda la población, impone su silenciamiento y en muchos casos tiende un manto de secreto que les permite a los violentos o a los corruptos actuar con mayor eficacia y cinismo. De esta manera, la violencia contra medios y periodistas comporta un claro mensaje a la sociedad, influye sobre ella y genera condiciones directamente relacionadas con el ejercicio social de la violencia.

La variedad de métodos de crueldad parece interminables —señala María Teresa Ronderos—, pero un objetivo común se repite: silenciar, acallar, amordazar, tapar, esconder, darle un merecido al que habla por fuera de lo permitido. Agazapada detrás de cada ataque está la convicción de los violentos de quien imponga su versión de la guerra la ganará. Los medios son las ideas donde se combaten las ideas. Y cuando estas han quedado en casi nada, aplastadas por la barbarie, los actores del conflicto insisten en convertir a medios y periodistas en cómplices, que los ayuden a justificar su insensata guerra (Ronderos, 2012, página 58).

Como se ha reiterado a través del Informe una de las amenazas más terribles que tiene la libertad de expresión es la que proviene de las redes del crimen organizado, sean del narcotráfico, de la delincuencia urbana o de los laberintos multiformes de la corrupción. Por varias décadas, Colombia ha sufrido el azote del narcotráfico y sabemos lo que significa su influencia nefasta en la vida social, política y económica de una sociedad.

El devastamiento que producen las grandes organizaciones criminales se replica en la mayoría de las áreas de la vida social; tiene la capacidad de desestabilizar a los Estados e introduce, hasta las fibras más recónditas e íntimas de una sociedad, una escala de valores en que el dinero está por encima de la vida. Se irrespeta, agrede y ultima si no se ajusta la realidad a los intereses mafiosos.

La emergencia del narco —escribió Carlos Monsiváis— no es ni la causa ni la consecuencia de la pérdida de valores; es, hasta hoy, el episodio más grave de la criminalidad neoliberal. Si allí está el gran negocio, las víctimas vienen por añadidura. Y con ellas la protección de las mafias del poder (Monsiváis, 2004).

En el colmo del cinismo, Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, dijo en una entrevista que le gustaría ser periodista. No es extraño: si la criminalidad pretende poner las agendas informativas o influir sobre decisiones editoriales de publicación y emisión, es de suponerse que el criminal tenga como alta aspiración transformarse en el redactor mismo. La información es una de las bases sobre las que se construye el poder mafioso, pero también uno de los instrumentos para combatirlo; porque las redes del narcotráfico están construidas sobre la importancia del secreto, sobre la construcción de verdaderas telarañas estructurales del crimen, la mimesis entre lealtades y silencio y la infiltración de todos los mecanismos informativos de los estados y la sociedad. Desde los que manejan los gobiernos, la policía o las instituciones de seguridad, hasta los que entretejen las relaciones sociales en barrios y comunas y los que se producen al interior de los medios de comunicación. Por ello recurren al emborronamiento de toda posibilidad

de visibilidad, a la promoción de tramas con hilos sueltos, a la interiorización del miedo, a la amenaza y al asesinato.

Los narcos volaron la sede de un periódico centenario en Bogotá, han acribillado periodistas, fomentan la autocensura dando muestras de un poder irrefrenable, envían mensajes públicos y privados llenos de un simbolismo aterrador y han tenido la capacidad de infiltrarse hasta alguna sala de redacción. Son maestros en el uso de la desinformación y en orquestar campañas para demoler moralmente las imágenes de aquellos que no pueden reducir con sus mecanismos de amenaza y chantaje. Una de las leyes mafiosas es domesticar la expresión y convertirla en motivación de identidad y de pertenencia incondicional a la tribu delincuencial. Quien habla es un sapo y “los sapos mueren espichados”, se oye decir en las series de la ficción que recrean con realismo los comportamientos de la mafia. El narcotráfico utiliza diferentes estrategias comunicativas: la filtración de información, la contra-información, el travestismo jurídico a través de sus abogados, el lavado de imagen, campañas de desprestigio promovidas hacia autoridades gubernamentales y judiciales, y la promoción grupal de iniciativas que les favorecen, como por ejemplo, la oposición a la extradición.

Hace años, en un seminario promovido por la SIP sobre periodismo económico, Daniel Kauffmann (s.f.) mostró las conclusiones de su estudio sobre la significativa influencia de la corrupción en el desarrollo de los países. Desde esa época hasta ahora, la corrupción se ha diversificado como una hidra a la que después de cortada la cabeza le aparecen otras más. De una época en que la corrupción medraba en la oscuridad apartándose de cualquier intento de visibilidad, se ha pasado a una en que aparece en los medios con desfachatez calculada, tratando de desprestigiar a quienes buscan frenar sus acciones o volviendo legal y transparente lo que es ilegal y sombrío. Del repliegue se ha pasado al cinismo, de la permanencia en la sombra se ha transitado a la orgía mediática. No se trata de una inocente retórica, sino de una estrategia del cálculo. Intentan sembrar la duda, desviar la atención e inculpar a otros para tratar de convertirse en inocentes de última hora.

En una entrevista, la periodista mexicana Alma Guillermoprieto decía que

[E]n América Latina, desgraciadamente, hay una larga tradición de corrupción. En México y en otros países —anotaba— se tiene que luchar contra el chayote famoso, el dinero que se le reparte cada mes al reportero de la fuente. Y si el narcotráfico es capaz de corromper a la Interpol en México, ¿cómo no va a corromper a un pobre periodista que gana ocho mil pesos al mes? ¿Cómo sobreviven los periodistas en el oficio? Esa es la pregunta realmente preocupante en América Latina. Una vez que tú puedes garantizarle la supervivencia económica a un periodista, puedes empezar a pedirle que arriesgue su supervivencia física (Guillermoprieto en Cruz, 2009).

El paisaje expresivo desborda el mediático, es decir, existen muchas modalidades comunicativas de expresión de la sociedad que el repertorio de sus medios no puede contener. Y esas modalidades inclusive cuestionan la concentración y exclusión que hacen las agendas informativas de las demandas y necesidades expresivas de la sociedad. La diversificación de la oferta mediática no siempre significa mayor pluralismo, ni más competencia entre los puntos de vista que circulan socialmente. Los nuevos medios están aumentando las posibilidades de los sectores sociales para que construyan lugares y modos de expresión a través de medios ciudadanos, blogs, sitios en la *web*, telefonía móvil, redes sociales. Esta diversificación de los instrumentos está acompañada del surgimiento de géneros emergentes, híbridos y de narrativas nuevas, mientras crecen las posibilidades de interacción entre grupos y personas e ingresan otros actores comunicativos a la escena expresiva de la sociedad. Esta aclaración es clave para estudiar el daño colectivo.

Si bien hay un oficio periodístico que encuentra su sustento en la expresión y la comunicación, ni la una ni la otra se agotan en el sistema de medios de una sociedad. Son mucho más. Tiene que ver con las posibilidades de expresión de todos los ciudadanos y ciu-

dadanas, no solo de periodistas, con la atmósfera de conversación y diálogo social democrático que exista en una comunidad, con las formas expresivas de esa comunidad manifestada en sus fiestas, sus modos de celebración, sus formas del humor y sus creencias. Es decir, con el clima de libertad y de expresividad social que reine en una comunidad.

En un estudio sobre la violencia en los Montes de María se pudo constatar que la amenaza a periodistas y comunicadores populares había hecho que la información sobre el conflicto se desplazara hacia los festivales populares de décimas (Bayuelo y otros, en Rodríguez, 2008, páginas 53-63). Sobre el conflicto no se informaba, el conflicto se cantaba. Es posible que las comunidades más amenazadas comunicativamente hayan tenido que desplazar su libertad de expresión y su derecho a la comunicación hacia otros lugares sociales. Algunas comunidades, aterrorizadas no han tenido ni siquiera esa posibilidad y posiblemente en ellas el daño colectivo ha sido aún mayor. El impacto de la violencia en el paisaje comunicativo de una vereda o una población siempre tiene características temporales particulares. Algunas comunidades han podido restablecer su tejido comunicativo más rápido que otras, las cuales por el contrario, aun después del retorno y custodiadas por las autoridades, siguen sufriendo los efectos violentos contra su expresión, su palabra y sus opiniones.

Los problemas de la libertad de expresión se han deslocalizado. Sin embargo la libertad de expresión debe romper con el fantasma que la encierra en el territorio de medios y periodistas, para convertirse en algo que atañe a la sociedad. Y este tránsito ha sido difícil porque las críticas a los medios desde la comunidad en vez de disminuir se acrecientan. Aun en las mediciones de confianza en las instituciones los medios salen bien librados, pero a medida que aumenta la participación de la sociedad en la comunicación, que la información se diversifica y que las audiencias se hacen más activas, las críticas a los medios se incrementan. Las razones quizás se deben buscar en los errores de los medios, en la soberbia que los resalta como un poder entre los poderes y en el hecho de que la libertad de expresión sea comprendida más como un asun-

to de medios y periodistas, que como una cuestión fundamental para la sociedad.

Ha sido tan fuerte el papel de la intermediación mediática, que obliga a la ciudadanía a hacerse a un lado. Los medios ocupan instancias de la gestión pública que no le corresponden, afianzándose además con una identidad gremial generalmente defensiva. Esta confrontación en medios y ciudadanos se da por los problemas que circundan al ejercicio del periodismo, como la falta de rigor y precisión, el olvido intencional de determinados asuntos públicos, los intereses de los medios, el manejo de la agenda, las distorsiones o desfiguraciones en la representación de los acontecimientos, entre otros factores.

Sin embargo, la idea de un derecho a la información como de doble vía va calando en la sociedad y el territorio de la libertad de expresión se va expandiendo a medida que aparecen otras opciones de comunicación y mecanismos mucho más activos de interacción de lectores y audiencias con los medios. Este movimiento tiene manifestaciones diferentes, como los observatorios de medios y las veedurías, los comentarios de lectores, los programas de calidad periodística y la acción de organizaciones netamente periodísticas. El daño colectivo no siempre está precedido por una colectivización de la libertad de información, ni por una apropiación social de este derecho. Inclusive es posible que sectores de la sociedad no consideren como daño colectivo aquello que no les pertenece.

La opinión pública no puede confundirse con la agenda informativa, puesto que ni siquiera ella está construida hoy únicamente desde los medios. El balance sobre el poder real de los medios de comunicación debe hacerse de nuevo contrastándolo con sociedades que son mucho más heterogéneas, más complejas y menos monolíticas que en el pasado. La percepción sobre quién tiene el poder en nuestros países, analizada por el Latinobarómetro durante años, le da la primacía al gobierno seguido por las grandes empresas, los bancos, el congreso y los militares que su-

peran todos a los medios. Lo interesante es que la sociedad se está involucrando mucho más en conocer qué tipo de información se le ofrece, cuáles son sus fuentes, cuáles las orientaciones de sus dueños y accionistas (Corporación Latinobarómetro, 2013).

Esta percepción puede estar un poco más arraigada en los centros urbanos —y posiblemente entre sectores medios y altos de su población— que en zonas rurales o en pueblos donde las percepciones y las realidades del poder están más marcadas por gamonales, actores armados ilegales y sujetos del poder económico local. En esas zonas los medios pueden ser un poder más identificado como tal, sobre todo cuando los medios se relacionan con ellos a través de un lenguaje y unos temas cercanos. Lenguaje y temas que de inmediato los ponen en medio del huracán del conflicto.

Por todo el continente y también en Colombia hay experiencias que buscan aumentar las garantías de calidad de la información a través de defensorías del lector, consejos de lectores, procesos de calidad periodística, códigos éticos, comentarios on-line, editores públicos, manuales de redacción o programas de protección de periodistas. Más adelante se estudian los diferentes procesos que, desde la sociedad, los medios de comunicación, las organizaciones periodísticas y el propio Estado, se han generado para enfrentar la avalancha de las violencias contra el periodismo (Corporación Latinobarómetro, 2000-2013).

ALCANCES Y EXPRESIONES DEL DAÑO COLECTIVO A LA COMUNICACIÓN

Si se observa desde la comunicación, el daño ocasionado por la violencia contra medios y periodistas en Colombia tiene varias expresiones.

Una primera, es **la generación del miedo y el amedrentamiento**. Sobre este tema se ha desarrollado en el presente Informe la relación entre la estrategia de los violentos y el miedo, focalizándola especialmente en las acciones de grupos paramilitares, las gue-

rrillas y el narcotráfico. Los diferentes hitos de la violencia contra periodistas muestran la intención de sembrar el miedo entre periodistas, otros actores sociales y la propia comunidad. La historia de los asesinatos demuestra un carácter selectivo por parte de las bandas criminales que buscan consolidar su hegemonía. Al atacar a periodistas se conseguían varios objetivos estratégicos: eliminaban a una fuente informativa que chocaba contra sus intereses, mandaban un mensaje de terror a otras personas comunicadoras locales o de la región, facilitaban la imposición del punto de vista que les era favorable y ocasionaban un daño a los medios en que participaban (en su dirección o como periodistas) las víctimas, personas reconocidas y respetadas por la comunidad. Refiriéndose a Lides Renato Batalla, asesinado frente a su casa de El Piñal en Buenaventura, Jorge Cardona escribió:

El periódico *La Batalla* murió con su dueño. Los intereses de la comunidad, razón de ser de este periodista oriundo de Tumaco, perdieron un defensor infatigable. Hasta los amantes de la música antillana sufrieron la ausencia de este difusor documentado. Solo quedó la remembranza de sus hilados relatos sobre los orígenes de los ritmos del Caribe, que lo hicieron célebre en su programa en las ondas de radio Cascajal Stereo. Lo demás, hasta sus denuncias, lo fue arremolinando el tiempo, hasta perderse en la memoria de estos días difíciles (Cardona, 2009, página 30).

Una segunda, es **la ruptura o fractura del tejido comunicativo local** o de la región. En algunos casos el asesinato está precedido de amenazas, secuestros y otras formas delincuenciales; en otros es un acto de una gran intensidad que ocasiona una inmensa conmoción en la familia y la comunidad de proximidad. Una parte de los asesinatos de periodistas, personalidades públicas que cuentan con el reconocimiento de la población, se comete a plena luz del día, en sitios públicos e inclusive en la casa delante de su familia o en el lugar de trabajo. Esto lesiona la realidad comunicativa local o regional. A la actividad periodística sucede el silencio, a la información la ruptura de la comunicación. Los delitos contra la

infraestructura, como los sucedidos con periódicos como *El Espectador* o emisoras como las de las comunidades indígenas del Cauca y la destrucción de ediciones completas para sacar de circulación a medios, son acciones que buscan destrozarse la cohesión comunicativa de medios que critican a los violentos, ponen en evidencia la corrupción o se oponen a las manifestaciones del crimen organizado. Refiriéndose a los asesinatos de Eduardo Estrada en San Pablo (Bolívar) a manos de paramilitares y de José Duber Tello, María Teresa Ronderos escribe:

En el 2000 mataron a Duber, y en el 2001, a Estrada, quebrando así el exitoso proceso de comunicación comunitaria que se venía dando en esa región. Los autores fueron probablemente paramilitares, que desde hacía dos años se habían metido en esa región del Sur de Bolívar, asolada por el ELN (Ronderos, 2012, página 67).

Una tercera es **perturbar y desintegrar a la opinión pública**, sembrando la confusión o produciendo deterioro en el conocimiento ciudadano de los acontecimientos que influyen sobre su vida en comunidad. La ciudadanía sufre un daño colectivo puesto que en medio de situaciones muy conflictivas se generan distorsiones, estigmatizaciones o falsas atribuciones.

Entonces, como ahora, la libertad de prensa tuvo sus detractores, reaccionarios serviles que veían en ella una de las bestias negras destinadas a destruir el orden constituido y a favorecer la penetración de ideología y concepciones desviadas respecto a la ortodoxia oficial. La Historia demuestra que la libertad es siempre un bien escaso y frágil, en cuya defensa cualquier vigilancia es poca y cualquier empeño insuficiente. Cuando desde instancias corporativas, sean jurídicas, legislativas, del poder constituido o de la oposición rampante se nos llueven protestas por las presiones que se ejercen sobre ellos con la publicación de noticias u opiniones que afectan a la respetabilidad de su función, es preciso recordar, una y otra vez, que la función de las autoridades democráticas no es defenderse de las críticas adversas sino amparar y

proteger por todos los medios legales posibles su existencia. El poder tiende a ver conspiraciones donde solo hay disenso, y la capacidad recuperada de los ciudadanos de hacer oír su voz frente a lo que consideran injusto (Cebrián, 2010).

Una cuarta expresión del daño colectivo ocasionado por la acción de los grupos violentos es **la perturbación de los lazos de afiliación**, ya sea entre periodistas o en su interrelación con la ciudadanía. Muchas acciones violentas buscan perjudicar la credibilidad de medios y de periodistas o instaurar desconfianzas mediante acusaciones o imputaciones sin fundamento.

Una quinta manifestación del daño colectivo es la **generación de desinformación** como un mecanismo estratégico para estimular la confusión e incrementar los niveles de violencia dentro de la comunidad, inculpar a otros sectores de la sociedad e inclusive dañar la reputación de personas inocentes. En el mismo artículo que venimos citando, María Teresa Ronderos resalta esta expresión del daño colectivo:

Si hay algo que ha socavado la libertad de prensa y, sobre todo, el derecho de los colombianos a saber lo que está pasando en su país, ha sido la arremetida de los violentos, paramilitares y guerrilleros contra medios locales que no se doblegan a su poder. Muchas veces son estos medios, y los emprendedores que los han creado o promovido, los únicos que informan sobre lo que está pasando en un poblado o en todo un departamento. Al perseguir al medio crítico, al que no comparte la política o los métodos del grupo armado dominante, los violentos buscan desinformar e impedir que se sepa lo que pasa (Ronderos, 2012, página 75).

Una sexta manifestación del daño colectivo es **la ampliación de la corrupción**, el dominio territorial y en general, la hegemonía y control de los grupos al margen de la ley. Uno de los mayores obstáculos que encuentran los corruptos es precisamente la investigación y la información oportuna sobre sus acciones delictivas. Atacar a la libertad de expresión es garantizar la persistencia de

ellas y fortalecer sus intereses criminales. Sin embargo, son numerosos los casos en que a los asesinatos de periodistas que investigan y denuncian la corrupción les siguen nuevos asesinatos para tratar de acallar las voces que tratan de develar los propósitos asesinos. Sucedió, por ejemplo, en el caso de Alirio Mora Beltrán. Alejandro Barbosa, su sucesor en la dirección de *El Caleño*, fue blanco de un atentado “por su persistencia en aclarar la muerte de su colega” (Cardona, 2012, página 44).

Una séptima expresión del daño colectivo ocasionado por la violencia contra medios y periodistas, y de las más graves, es **el deterioro de la calidad de la democracia**, puesto que se vulneran principios fundamentales de ella como el pluralismo, la rendición de cuentas o la confrontación de los puntos de vista que deben circular en una sociedad frente a las imposiciones del pensamiento único. En su libro “Disonancias. Críticas democráticas a la democracia” (2007), Guillermo O’Donell se refiere a las teorías de la democracia, desde las supuestamente minimalistas hasta las realistas y comprueba que en todas se unen las elecciones limpias con las libertades y garantías civiles, como las de asociación, expresión e información según Dahl, o las de expresión, prensa, y libertad para crear organizaciones y afiliarse a ellas, según Diamond, Linz y Lipset. Seyla Benhabib resalta el procedimiento de deliberación libre y racional entre individuos considerados moral y políticamente iguales entre sí y Habermas, la existencia de una esfera deliberativa no impedida, dándole así una importancia destacada a las libertades referidas precisamente a la comunicación y la expresión (O’Donell, 2007). O’Donell, por su parte, escribe que la opinión pública consiste en un “sistema de reconocimientos mutuos basados en la asignación universalista de ciertos derechos y obligaciones” y que “la ciudadanía política consiste en la asignación legal y el goce efectivo de los derechos y obligaciones implicados por la apuesta democrática: participación en elecciones limpias e institucionalizadas y libertades políticas concomitantes” (O’Donell, 2007). La dimensión de democracia también incluye contar con un espacio mediático y periodístico de pluralidad, con voces y posturas divergentes que puedan encontrarse.

EL COLECTIVO QUE SUFRE EL DAÑO

Sigue entonces responder a la diferenciación entre daño colectivo y daño individual. Las pérdidas individuales que han sufrido las personas en ejercicio del periodismo suelen estar referidas a las violaciones contra su vida y su integridad, sobre todo a las restricciones indebidas a su libertad de expresión y de locomoción. Incluso han debido soportar perjuicios frente a su libertad de empresa y sus derechos laborales. Sin embargo, este Informe busca indagar por las pérdidas colectivas que han generado los mismos hechos de violencia.

Sin duda alguna, los daños individuales sufridos por periodistas deben ser resueltos por el Estado, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. Sin embargo, son perjuicios que pueden irse esclareciendo en la medida en que los hechos de violencia sean reconocidos por las autoridades y la opinión pública, y en esa medida activen los procesos pertinentes de reparación individual. Se tratan de daños que, si el Estado superara los escenarios de impunidad y perplejidad, no deberían presentar mayor dificultad para su determinación.

Algo distinto sucede con el daño colectivo por la violencia contra periodistas. Como se verá a continuación, se trata de una noción que no se ha estudiado ni se ha definido integralmente por la legislación. Aun así es un término que el Estado viene usando dentro del proceso que ha adelantado la Unidad de Víctimas para la reparación colectiva. En esa medida se trata de una noción que requiere con urgencia una discusión conceptual que dé alguna luz sobre el alcance o las limitaciones de lo que es o no es daño colectivo. Es esencial definir cuál es el sujeto de reparación colectiva; saber si es posible o deseable la agrupación de todas las personas que ejercen el oficio del periodismo sin tener noción de tiempo o de lugar; esclarecer si aquellas personas que no fueron víctimas directas tienen derecho a reparación colectiva por ser parte del mismo colectivo; decidir si las audiencias, en la vulneración a su derecho de ser informadas, pueden hacer parte del colectivo a reparar.

Lo colectivo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Revisar las posiciones de los escenarios internacionales de derechos humanos, es una forma de buscar la definición del colectivo de reparación por la violencia contra periodistas y medios de comunicación. Revisar cómo han sido tratadas las violaciones a la libertad de expresión y cómo han sido reparadas las víctimas, permite analizar si, desde la naturaleza de los daños o de las características de las reparaciones, existen elementos que puedan conducir al reconocimiento de un colectivo cuando se atenta contra la prensa.

Se ha decidido observar los desarrollos del SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos), entendiendo que han sido bastantes las decisiones que han salido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha tenido un compromiso importante al momento de recoger las posiciones y reflexionar sobre ellas. En últimas, al tratarse del sistema regional de derechos que rige para Colombia, permite que en el análisis y en las propuestas no se tomen caminos ajenos al ordenamiento que soportaría una eventual reparación.

Para consolidar lo que podría ser un universo jurisprudencial para la protección de la libertad de expresión, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha identificado los siguientes fallos:

1. Caso Gomes Lund Vs. Brasil (2010).
2. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia (2010).
3. Caso Usón Ramírez y otros Vs. Venezuela (2009).
4. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela (2009).
5. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela (2009).
6. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá (2009).
7. Caso Kimel Vs. Argentina (2008).
8. Caso Claude Reyes Vs. Chile (2006).
9. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile (2005).
10. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay (2004).
11. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (2004).
12. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú (2001).
13. Caso Olmedo Bustos y otros Vs. Chile (2001).

Revisando estos casos, se puede ver que la Corte IDH se ha aproximado a las violaciones al derecho de libertad de expresión desde la dimensión netamente individual. Esto se debe a que la motivación que impulsa las demandas internacionales obedece al interés singular de reparación de la víctima en concreto. No obstante, podría pensarse que algunos de estos daños destacados podrían tener incidencia colectiva bajo el entendido, como se ha explicado atrás, de que la violación a la libertad de expresión implica un daño a la comunicación de la sociedad.

Una lectura colectiva de este derecho no resulta impropia, por más que en el ámbito de los juicios interamericanos no se haya dado respuesta definitiva. El artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que trata el derecho de libertad de expresión, es claro en advertir que una de las esferas de protección debe ser también la de “buscar” y “recibir” información.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

- a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
- b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional (subrayado fuera del texto original) (CIDH, 2013, artículo 13).

Ahora bien, pareciera que hasta ahora este plano de poder buscar y recibir información, en el marco del derecho a libertad de expresión, únicamente se ha analizado como una conducta individual que generalmente se traduce en la posibilidad de usar instrumentos nacionales como el derecho de petición o los demás recursos de acceso a información pública. De ninguna manera parece haberse pensado un derecho de recepción de información o de acceso, desde un ámbito colectivo, que bien puede pensarse en el caso en el que una comunidad, como se dijo, cuenta con la posibilidad de recibir la información que provee determinado medio o, al menos, con la garantía del tener una libertad más amplia de elegir su fuente gracias al oficio periodístico. En ese sentido, podría llegar a construirse una noción de sujeto colectivo que puede verse afectado por el menoscabo en la actividad periodística local o nacional. Así como en otros derechos se ha logrado consolidar una garantía colectiva, también puede pensarse, con la vulneración a periodistas y medios, en la necesidad de una colectividad víctima (ciudad, barrio, región) por la falta de recibir o buscar información por el medio que se elija.

También en términos de difundir expresiones podría hablarse de un menoscabo colectivo, en la medida en que la afectación de un medio o periodista puede llevar a la construcción de una atmósfera de intimidación y miedo, que en cierta forma imposibilita la potencia expresiva de las demás personas que componen

el colectivo, en tanto tendrán que verse disuadidas de participar comunicativamente en su comunidad.

Esta imposibilidad de que una comunidad reciba o busque información de igual forma, cuando es objeto de violencia un medio o periodista, puede ligarse con algunas de las expresiones de daño colectivo que en el acápite anterior se han descrito, como 1) “la generación de desinformación en la sociedad” o 2) “la ruptura o desintegración de la opinión pública”. Por su parte, el ambiente de intimidación y temor que sobreviene a la afectación también encuentra una lectura desde estas expresiones de daño colectivo, en términos de comunicación o expresión, como es el caso de la “generación de miedo o amedrentamiento”. En otras palabras, si a estas dimensiones de buscar, recibir información o de difundirla —que en la Convención se han establecido parte integral de la libertad de expresión— se les hiciera una lectura desde los efectos que se generan en la comunidad general en los que se encuentran inmersos el medio o periodista violentados, podría llegar a definirse una naturaleza colectiva de las afectaciones, que trascienden la realidad de la víctima particular, lo que permite que se haga una lectura de los daños y de las reparaciones en una dimensión más cierta y amplia en términos de garantía, protección y restablecimiento de derechos.

A pesar de todo lo anterior, se sabe que los rasgos del proceso ante la CIDH y la Corte IDH corresponden a la búsqueda por proteger y reparar derechos de un sujeto individual, o de varios individualmente identificados; en ese sentido, tanto la reconstrucción del daño como la definición de la reparación giran siempre sobre esta característica procesal que en principio no admite el tratamiento sobre la situación de derechos de grupos indeterminados. Sin embargo, teniendo en cuenta la dimensión de ciertos hechos y daños, el SIDH ha tratado reparaciones colectivas sobre agrupaciones abstractas de individuos de manera accesoria o complementaria a los procesos individuales.

Si se retoman algunas consideraciones de esta práctica de los órganos del Sistema, podrán encontrarse algunas pistas para resolver la necesidad de identificación de daños colectivos, de sujetos colectivos de reparación y, en consecuencia, de reparaciones

colectivas. Aquello que hoy parece reclamar la atención a las y los periodistas violentados.

Hay que advertir que, hasta el momento, en el Sistema Interamericano no se han encontrado posiciones concluyentes sobre el daño colectivo generado con la vulneración de derechos de libertad de expresión o de prensa, y mucho menos se han tenido referencias puntuales sobre experiencias de reparación colectiva. En ese sentido se propone un estudio general del tratamiento a la victimización de sujetos colectivos, de tal forma que más adelante se tengan elementos de juicio que permitan hablar de daños colectivos y reparaciones colectivas para el caso de periodistas que han sido sujeto de violencia en Colombia.

La comunidad más o menos reducida

Un primer estudio debe centrarse sobre los argumentos que han llevado la CIDH y a la Corte IDH para proteger colectividades o sectores sociales que se destacan entre la sociedad en general; es decir, grupos concretos de personas no identificadas, diferentes a lo que se entiende como la sociedad o la comunidad “en general”. Para hacerlo es necesario dividir las consideraciones entre las referidas al campo de las medidas provisionales y las del campo de los casos contenciosos.

Esta diferenciación es necesaria en la medida en que “se han aceptado comunidades con víctimas indeterminadas pero determinables en casos de medidas provisionales; mientras que la Comisión y la Corte han sido reacias a aceptar este tipo de víctimas en materia de comunicaciones individuales y casos contenciosos ante la Corte” (Acosta, 2005).

Protección colectiva en medidas provisionales

Las medidas provisionales apuntan a proteger ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en un estado de violación inmi-

nente y de daño irreparable sobre sus derechos. Por lo mismo, requieren de una protección urgente de tal forma que el Sistema Interamericano debe movilizarse para su atención, incluso antes de un proceso y una decisión de fondo sobre el caso. En un principio, la Corte IDH se resistió a aceptar estas medidas para víctimas no determinadas.

En el caso que se conoció como “Haitianos y dominicanos de origen haitiano contra República Dominicana”, en el año 2000, la Corte declaró que era necesario “individualizar las personas que corren peligro de sufrir daños irreparables, razón por la cual no es factible ordenar medidas provisionales de manera innominada (...) Es posible proteger a los miembros individualizados de una comunidad” (Corte IDH, Resolución 18/08/2000). Siguiendo lo anterior se concluye que un sujeto colectivo puede ser reconocido por las medidas cautelares como posible víctima de una situación de vulneración, siempre que se pueda identificar a la totalidad de sus miembros.

No obstante, en esa misma ocasión el juez Cançado Trindade manifestó en su voto concurrente que, si bien en el caso mencionado la Corte estaba actuando de manera prudente, era necesario avanzar hacia la protección de colectividades de individuos no individualizados, como consecuencia de las obligaciones generales de protección que permiten no tener que probar un perjuicio o un interés individual distinto al del interés general (Corte IDH, Resolución 18/08/2000).

Un cambio de posición vino a aparecer con mayor contundencia en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Colombia, con la Resolución de la Corte del 18 de junio de 2002. En esa oportunidad se decidió proteger no solo a las personas que habían aparecido individualizadas dentro del procedimiento sino también a aquellas que se encontraban en el mismo riesgo, a pesar de no identificarse. Se expresó en esa ocasión:

En las circunstancias actuales del presente caso, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó hay personas que prestan diferentes servicios a la Comunidad cuya vida e integridad personal están en la misma situación de riesgo, quienes no están determina-

das, pero que pueden ser identificadas e individualizadas por este vínculo de servicio que tienen con dicha Comunidad. Por ello, esta Corte considera necesario mantener las medidas provisionales en favor de las personas ya protegidas (...), como también, (...) ampliarlas a todas las personas que tengan un vínculo de servicio con dicha Comunidad de Paz (Corte IDH, Resolución 18/06/2002).

Se evidencia que la Corte no abandona del todo la posibilidad de individualizar al conjunto de personas que se cobijan por la medida, porque aspira a que puedan ser identificadas después de la declaración de las medidas. En últimas, las medidas siguen sin establecerse sobre grupos realmente indeterminados e indeterminables, lo cual, en el caso de periodistas agredidos, implica que se deban rastrear la totalidad de víctimas, incluso aquellas que no fueron directamente afectadas por el hecho violento. Algo que parece espinoso y que de plano descartaría la posibilidad de incluir a las audiencias como parte del grupo a proteger o reparar, dada la imposibilidad de identificar a todas las personas que la componen.

En la Resolución del 6 de marzo de 2003 se reforzó esta posición cuando se abordaron las medidas solicitadas para las comunidades del Jiguamiandó y Curbaradó de Colombia. Incluso en sus votos concurrentes los jueces Sergio García y Alirio Abreu expusieron cuatro criterios objetivos para otorgar este tipo de protección colectiva para un grupo de individuos no identificados, los cuales, según ellos, se desprenden de lo decidido por la Corte:

- a) Que se trate de una comunidad organizada;
- b) Localizada en un lugar geográfico determinado;
- c) Cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados, y que
- d) Todos se encuentren en una situación igual de riesgo (Corte IDH, Resolución 06/03/2003).

Sin embargo desde la academia se han planteado interrogantes alrededor de estos criterios objetivos. En sí mismos parecen encerrar ciertas deficiencias, sobre todo porque los requisitos dis-

tinguidos por los literales a y b no pueden asumirse como indispensables para cualquier caso.

En primer lugar, porque la víctima no siempre estará constituida por comunidades que puedan ser determinadas geográficamente, y en segundo lugar porque la posibilidad que presenta la Corte es, en general, que las víctimas puedan ser determinables en algún momento; específicamente en el momento de producirse el daño, momento en el cual el caso puede subir a instancias de la Corte Interamericana. Es decir, grupos de individuos pueden encontrarse en una situación igual de riesgo sin necesidad de constituir comunidades geográficamente asentadas en un mismo lugar. Por ende, se considera que los requisitos distinguidos por los literales c y d son los que, según la Corte, deben estar presentes en todos los casos (Acosta, 2005, página 22).

Como se ve, en todo caso se mantiene la condición de que las víctimas sean individualizables. “Es interesante analizar las implicaciones de esta limitación ¿Significa que en algún momento tendrían que ser individualizadas por su nombre? ¿O más bien significa que potencialmente puedan ser determinadas por la situación en la que se encuentran?” (Acosta, 2005, página 22).

Ahora bien, surge la pregunta de cuándo deben ser individualizados los individuos no determinados que se benefician con la medida: (1) ¿deben ser determinables al momento del daño? (2) ¿deben ser determinables a través de los efectos de las reparaciones? Por otra parte, detrás de este desarrollo siempre queda una última pregunta: (3) ¿pueden mantenerse indeterminables durante todas las instancias del proceso?

Lo que finalmente debe quedar claro, al menos en el marco de las medidas provisionales, es que la Corte ha reiterado que, al atender grupos, en todos los casos lo que intenta proteger son las personas individualmente consideradas que lo conforman. Esto quiere decir que no se está atendiendo a la comunidad como un único sujeto colectivo titular de derechos, algo que dificulta el daño sobre elementos abstractos compartidos —como la comunicación—, sobre afectaciones grupales de vulneraciones individuales o sobre individuos que aún no pertenecen o que aún no se vinculan al grupo.

Protección colectiva en casos contenciosos

En este escenario del juzgamiento de los casos, tanto la CIDH como la Corte IDH en principio no aceptan la inclusión de víctimas que no estén previamente determinadas e individualizadas. Además de ser una postura teórica y jurisprudencial, puede deberse también a que la Corte no se ve generalmente en la obligación de decidir sobre casos sin víctimas determinadas. Las características procesales y las prácticas jurídicas normales siempre tienden a demandar con nombres propios y con intereses de reparación particulares, además de que las normas procesales lo incentivan dentro de la naturaleza adversarial del juicio.

Sin embargo, existió un caso paradigmático que fue el de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingini contra Nicaragua. En él se demandó sin víctimas individualizadas y aun así la Corte condenó. Se dice que eso fue posible porque el Estado demandado no se opuso alegando preliminarmente la falta del sujeto de la demanda y que todo habría sido diferente si lo hubiera hecho, pues en ese caso la Corte habría tenido que pronunciarse frente a esa defensa. En ese momento los jueces prefirieron continuar con el procedimiento y no tratar el tema por iniciativa propia.

Lo llamativo del caso es que dentro del procedimiento logró probarse un daño tan solo reconociendo la existencia de una comunidad, sin necesidad de individualizar a cada una de las víctimas, y también se pudo definir las reparaciones consiguientes. Por supuesto se trató de medidas que se acercaban a nociones colectivas de reparación: 1) Adoptar medidas de derecho interno para la no repetición, 2) de compensación por daños inmateriales, 3) de satisfacción por reconocimiento de la sentencia misma. Podría pensarse que la falta de individualización dificultó procesalmente la comprobación de daños materiales que llevarían a otro tipo de medidas, pero facilitó la interpretación de realidades colectivas. Lo relevante para la discusión es que la Corte, bien o mal, sí ha tenido cómo cumplir sus funciones en escenarios colectivos de violación de derecho y de reparación integral, incluso sin acudir una determinación particular de víctimas.

Sin embargo, la postura general de la Corte, incluso posterior al caso mencionado, es que en contextos de violación masiva o general de derechos, las primeras personas llamadas a ser reparadas son las individualizadas dentro del proceso. Ha reconocido que pueden existir reparaciones a favor de todas las personas miembros de la comunidad afectadas con los hechos, pero no ha considerado que la comunidad como tal fuera afectada y lesionada por los hechos y, por lo mismo, merecedora de reparación. Esto para algunos sectores resulta paradójico y contradictorio, teniendo en cuenta que la Corte sí ha aceptado que la comunidad en su totalidad resulta vulnerada, y es dentro de ese orden que llega a ordenar medidas simbólicas de reparación, particularmente de satisfacción.

El análisis debe dirigirse a establecer por qué sería razonable conceder medidas provisionales a una víctima indeterminada pero individualizable, pero negar la responsabilidad del Estado en el caso en que se concretara el daño y aun las víctimas no estuvieran individualizadas. Si la exigencia consiste en que el momento de determinar las víctimas es necesariamente el de la producción efectiva del daño, tenemos que no existe cuestionamiento alguno: si no se produce el daño es porque nos encontramos ante un caso en el cual no existe responsabilidad del Estado. Sin embargo, sin esa circunstancia, la teoría se encuentra en contradicción del principio *pro homine*, pues es posible que, aun concretándose el daño, no se hayan individualizado las víctimas (Acosta, 2005, página 23).

Este escenario de doble cara, entre víctimas identificadas y grupo de no individualizados, parece favorable para una reparación de periodistas, porque no excluye las demandas individuales (de afectación directa) de las colectivas (afectación de una comunidad periodística, afectación de los medios o afectación de las audiencias). De esta forma deja un espacio para pensar una reparación de mayor abstracción que intente recomponer una realidad más allá de la vida por la persona directamente violentada.

El conglomerado social. En su concepción inicial no parecía razonable hablar del conglomerado social, es decir la población de todo un Estado, como víctima dentro del Sistema Interamericano.

Sin embargo, existen ciertos elementos que permiten ver que este —en especial la Corte IDH en sus fallos— sí ha otorgado protección al conglomerado en general en algunas ocasiones, aunque a veces no la haya tratado como víctima.

Están los casos en los que se han condenado estados por políticas o normas promulgadas para toda la población. En ese caso se ha terminado resaltando una violación evidente para la totalidad de la población. También están las consideraciones que la Corte IDH ha ideado para desarrollar el derecho a la verdad en los contextos de violación generalizada de derechos.

Este derecho a la verdad ha sido construido a partir del desarrollo jurisprudencial interamericano porque no existe explícitamente en la Convención. En ese desarrollo se le han otorgado dos dimensiones para su garantía, una individual y otra colectiva. La individual se refiere al derecho que las víctimas directas e individualizadas tienen de conocer los hechos que han vulnerado sus derechos; la colectiva tiene que ver con el derecho que tiene la sociedad en general —el conglomerado social— de saber sobre lo sucedido con fines de justicia, memoria, pero sobre todo de no repetición (Najar, 2009, página 15).

Sin embargo, al hablar del verdadero alcance de la condición de víctima del conglomerado social, se ha detectado una constante en el tratamiento de las dos dimensiones de este derecho a la verdad.

Por supuesto el marcado individualismo [del Sistema Interamericano de Derechos Humanos] ha dejado un desarrollo prolífico desde el plano individual de la verdad, y unas declaraciones tímidas respecto del plano colectivo. Generalmente en las sentencias de la Corte Interamericana, mientras se efectúa un amplio desarrollo de lo que debe ser el derecho a la verdad para las víctimas, como elemento de su reparación, frente a la sociedad [el conglomerado social] es tratada de paso, por encima, e inclusive muchas veces se dice estar resuelta por la misma sentencia y su difusión. Ejemplo de esto, es la recurrente obligación del Estado culpable de investigar y efectuar juicios ordinarios que esclarez-

can la verdad y no a establecer escenarios verdaderamente públicos de construcción de verdad donde pueda participar la sociedad en general (Ballesteros y Vallejo, 2011).

Esta observación sirve además para resaltar el hecho de que en términos de victimización sigue existiendo amplia preponderancia de las situaciones individuales o, en términos colectivos, las individualizables.

Lo colectivo en la ley de Víctimas

La ley 1448 de 2011 —conocida como la ley de víctimas— hizo algunas definiciones sobre la reparación colectiva. Vistas las realidades y particularidades de la violencia contra periodistas es acertado hacer algunas reflexiones sobre la pertinencia y el alcance de la norma, pues con ello se pueden sacar conclusiones que muestren el recorrido que podrían seguir los procesos de detección de los daños colectivos y de reparación colectiva a comunicadores, comunicadoras y medios de comunicación.

La ley no da una definición precisa de daño colectivo. No obstante, al definir la “reparación colectiva” como elemento de reparación integral, reconoce, de paso, que son posibles los daños colectivos en el marco del conflicto armado, los cuales pueden recibir respuestas del Estado en un contexto de paz y reconciliación.

El artículo 151 de la ley mencionada es el siguiente:

Artículo 151. REPARACIÓN COLECTIVA. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá implementar un Programa de Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos:

a) El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos;

b) La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos;

c) El impacto colectivo de la violación de derechos individuales (subrayado fuera del texto original) (Colombia, Ley 1448/2011).

Vista así, la norma sí da pistas de lo que se entiende por daño colectivo. En cada uno de los escenarios descritos en el texto está implícita una forma de definir lo que es o no es un daño colectivo.

Cuando se vulneran derechos colectivos

Se asume que el daño adquiere una dimensión colectiva en el momento en el que determinado hecho de violencia vulnera un derecho de carácter colectivo, es decir, un derecho cuyo titular es la comunidad en general o un grupo determinado de la misma. En principio, estos derechos son los contenidos en el Capítulo II del Título II de la Constitución Política de 1991: ambiente sano, espacio público, derechos de consumidores, de recursos naturales, entre otros. De esta forma, cuando se vea amenazado o vulnerado un derecho de esta índole, podrá entrar a reconocerse un daño colectivo en la medida en que se está afectando a un titular colectivo: la comunidad en general.

En este caso hay que hacer la siguiente pregunta: cuando se violenta a una o varias personas en ejercicio del periodismo, ¿cuál es el derecho colectivo que se vulnera?

Como se dijo, los estudios constitucionales toman como derechos colectivos únicamente a los que se encuentran contenidos en el Capítulo II del Título II de la Constitución. Se trata de los derechos de consumo, de ambiente sano, de protección de recursos naturales, de defensa del espacio público, de garantía en el manejo de armas o residuos químicos, biológicos o nucleares (Colombia, Constitución Política, 1991, artículos 78 al 82).

En ese caso, se advierte que no existe ningún derecho colectivo que pueda verse afectado directamente por las acciones violentas contra el ejercicio del periodismo.

Ahora bien, podría suceder que un hecho de violencia contra periodistas afecte alguno de estos derechos. Puede ser el caso de que las personas afectadas se encuentren desarrollando investigaciones o denuncias en esos temas, de tal forma que su silenciamiento o la obstrucción a su trabajo generan un perjuicio contra alguno de esos derechos. Una de estas situaciones es la información periodística sobre afectaciones al ambiente de las empresas mineras o agroindustriales, o cuando se denuncian defectos de productos comerciales en circulación.

Aun así, se trata de una lectura que no logra agrupar el universo de casos de violencia contra periodistas. Además se termina enfatizando en un daño que se aleja del quehacer periodístico de la comunicación como un bien, en sí mismo, que puede ser dañado también. Por consiguiente, una salida a esta situación exige construir y reconocer un derecho colectivo a la comunicación, en el que las comunidades tienen garantías para mantener un tejido comunicativo y de información que les permite generar opinión pública. En ese caso podría activarse el artículo 94 de la Constitución en el que se señala que, por fuera del listado expreso, existen derechos innominados que pueden ser admitidos por las normas.

Cuando se violan derechos individuales de miembros de un colectivo

En este caso la dimensión colectiva del daño no sale de la naturaleza del derecho ni de los bienes afectados, sino de la identificación previa de un grupo específico. De esta forma, al saber cuáles son las personas miembros del colectivo, y al determinar los daños individuales que estas han sufrido, podría pasar a pensarse en un daño colectivo. Este nace de una especie de sumatoria de las vulneraciones sobre cada persona del grupo, pero aparece como un daño autónomo y distinto de los daños individuales.

Revisando la naturaleza de la reparación colectiva, la cual es complementaria e independiente de la reparación individual, cabría hacer dos salvedades que en algún momento podrían ser tema de discusión: 1) el daño colectivo no debe ser solo una figura de economía procesal que busca sumar el conjunto de reparaciones individuales, como podrían pensarse los daños de grupo que generan las acciones constitucionales de grupo; por el contrario, se asume como un daño abstracto que se le ha producido al grupo determinado en vista de la violación plural de derechos individuales de sus miembros; 2) existe la posibilidad de que el grupo solo pueda ser definido por haber compartido un daño sufrido, esto podría debilitar las reivindicaciones colectivas que tienen grupos con previo reconocimiento jurídico por condiciones sociales, culturales o étnicas; en otras palabras, reduce la fuerza de las características autóctonas como generadoras de efectos jurídicos para la reparación.

Vale reconocer que esta última discusión no es el caso de las personas periodistas afectadas por la violencia, pues no conforman un grupo de esta naturaleza. Por consiguiente, hay que preguntar: ¿cuál es el grupo o comunidad que sufre el daño colectivo cuando se ejerce violencia sobre una o varias personas que ejercen el oficio de periodistas?

¿El grupo de periodistas violentados de Arauca en 2003 podría ser entendido como parte de un colectivo? Quizás sí, si por ejemplo se usan herramientas administrativas para decir que hacían parte del grupo de comunicadores y comunicadoras de un departamento o municipio específico. En ese caso habría que definir cuál fue el daño colectivo a ese grupo llamado “periodistas de Arauca”, a partir de las vulneraciones individuales que sufrió cada persona por las amenazas, los desplazamientos y los asesinatos.

Sin embargo, en la mayoría de casos es difícil establecer una colectividad de periodistas, pues las víctimas generalmente no pueden ser incluidas en un colectivo específico. Cualquier intento por definir un grupo concreto de periodistas es complejo y difuso, aunque no imposible. Podría decirse que son tres las razones:

1. El periodismo es un oficio, no una profesión. En esa medida, periodista no es aquel que estudia periodismo, sino aquel que

simplemente lo practica. Así, una persona puede ser periodista por cierto tiempo al día o la semana, o por temporadas; puede mezclar su profesión con otras labores o puede desempeñar labores periodísticas sin tener conciencia de su función de periodista (escribiendo en un blog en internet, por ejemplo). Allí se complejiza la definición de los individuos que podrían conformar un grupo de periodistas para reparar.

2. Los procesos de victimización de periodistas varían en el tiempo, profundizado además por la variedad de objetivos y métodos de los diversos victimarios. Allí se complejiza la posibilidad de tratar como un grupo sólido a periodistas de diferentes épocas.
3. Los procesos de victimización de periodistas varían de acuerdo al territorio, profundizado además por la variedad de objetivos y métodos de los diversos victimarios. Allí se complejiza la posibilidad de tratar como un grupo sólido a periodistas de distintas regiones.

Es un modelo de análisis que no resulta oportuno, porque pierde de vista que la violencia contra periodistas es un fenómeno extendido a lo largo del territorio y constante durante diversas épocas. Por lo mismo, tratar a medios y a periodistas víctimas como un solo sujeto puede traer problemas, tanto de estudio como de manejo práctico al momento de las reparaciones, sobre todo por las diferencias temporales y geográficas de los sucesos presentados, la diversidad de contextos y de victimarios, así como los bajos niveles de identificación que suelen tener las y los periodistas como grupo o colectividad de intereses comunes (toda vez que los parámetros de competencia priman sobre los valores de asociación).

En consecuencia, no es una labor fácil el tratamiento como colectivo de quienes tienen el oficio de periodistas, así se usen categorizaciones administrativas o profesionales. Quizás en el caso de Arauca se pueda lanzar una definición de lo colectivo, pero en ámbitos como el que persigue este informe, donde los tiempos y los espacios son múltiples y variados, es titánico. Tratar a las y los periodistas de Colombia como un grupo universalizable de cualquier época y de cualquier lugar genera rupturas considerables

con la noción de colectivo, además de que invisibiliza realidades y sujetos particulares de contextos precisos.

La misma ley 1448 de 2011 ha pretendido salir de este escollo al definir cuáles son los sujetos colectivos que pueden ser reparados colectivamente. En ese sentido trajo el artículo 152:

Artículo 152. SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA. Para efectos de la presente ley, serán sujetos de la reparación colectiva de que trata el artículo anterior:

1. Grupos y organizaciones sociales y políticos;
2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común (Colombia, Ley 1448/2011).

Podría asegurarse entonces que quienes tienen el oficio de periodistas pueden ser sujeto de reparación colectiva en la medida en que son un grupo social o político (numeral 1), una fórmula amplia que ha dejado la norma para incluir gran cantidad de colectivos con necesidades de reparación. Sin embargo, en este punto vale destacar un nuevo interrogante de discusión: Si se define el sujeto colectivo desde la norma y si se define la reparación del daño solo a partir de las vulneraciones individuales de ese grupo, ¿cómo se va a determinar la dimensión y naturaleza del daño colectivo? ¿Cómo se repara colectivamente un daño colectivo que no se ha definido? Ante el caso de Arauca podría repararse por los daños que sufrió cada periodista, pero difícilmente se sabrá cuál es el tipo de reparación que requiere el conjunto de periodistas o la región misma, ¿o no?

En otras palabras, las dificultades de este escenario de reparación están en la dificultad de determinar como grupo a las y los periodistas, sobre todo si se pretende agrupar a quienes son de diferentes épocas de violencia o de diversos lugares. Pero, además, se encuentra en que es un escenario que desecha una indagación concreta por el daño colectivo, pues lo toma como una abstracción

sin nombre y sin forma que casi surge como presunción ante los daños individuales.

El impacto colectivo de violación de derechos individuales

Aunque hay cierta relación con lo que se acaba de describir, podría afirmarse que existe una diferencia que, en la práctica, para la reparación, puede traer efectos determinantes. En este caso, el daño colectivo no se asume en abstracto a partir de una sumatoria de afectaciones individuales de las personas miembros, sino que estas vulneraciones agregadas generan un impacto concreto que sufre el grupo, especialmente contra uno de sus bienes o valores compartidos.

Usar en este caso la palabra “impacto” conduce a que los bienes o valores afectados se encuentran más allá de lo que constitucionalmente se ha reconocido como derechos colectivos, tal como se vio en el primer escenario propuesto por la ley. Incluso, hasta cierto punto, sale del escollo de tener que definir previamente un grupo, un colectivo, para poder hablar de pérdidas colectivas. De esta forma se abren otras posibilidades para entender un daño colectivo. En primer lugar, pueden tomarse como objetos dañados otro tipo de bienes, como aquellos que pueden estar vinculados a derechos de otra índole, como los fundamentales individuales, o a muchos simultáneamente o a ninguno. En segundo lugar, flexibiliza la definición de los grupos sujeto de reparación colectiva, pues no la supedita a un reconocimiento legal previo. En tercer lugar, abre escenarios en los que una o dos vulneraciones individuales pueden generar un impacto colectivo considerable.

Estas tres posibilidades que ofrece este escenario legal parecen ajustarse de mejor manera a lo que se ha definido como daño a la comunicación. Los hechos de violencia, en su mayor parte, generan un daño respecto del derecho a la libertad de expresión de una o varias personas periodistas. A su vez, esta vulneración individual genera un daño de ámbito mayor que hemos denominado contra la comunicación. Allí se aplica la posibilidad de que los daños indivi-

duales generen un impacto respecto de un bien o derecho diferente de interés colectivo. Por otra parte, el grupo que debe ser reparado, de periodistas y de miembros de las audiencias, no necesita una existencia legal previa, se puede ir conformando a partir de la relación con el daño específico que se determine. A diferencia de los grupos étnicos o culturales, en este caso resulta una definición del grupo a partir de la definición de las pérdidas, pues al no tratarse de un colectivo determinable por sí mismo, se evitan las agrupaciones arbitrarias que dejan de ver las complejidades de tiempo, lugar y oficio. De esta manera, por los daños a la comunicación pueden resultar distintos grupos para reparar colectivamente.

Eso exige un trabajo que vuelva a los casos en los que se logre determinar en concreto las pérdidas y el grupo que estas afectan. Exige el estudio de los contextos en los que surgieron los hechos de violencia, de tal forma que se puedan definir criterios para agrupar o desagrupar agresiones, de tal forma que se descubra si el grupo fue afectado por una o por varias situaciones. En últimas, exige que se evite caer en abstracciones para forzar la delimitación de los grupos sujetos de reparación.

De esta manera, al momento de la definición del daño se requiere un esquema de análisis que permita cruzar las expresiones de la comunicación afectada con los ámbitos de impacto. Según las nociones que ha recogido este Informe, se han propuesto que las expresiones o alcance del daño a la comunicación son: 1) Generación de miedo y amedrentamiento; 2) ruptura o fractura del tejido comunicativo local; 3) perturbación y desintegración de la opinión pública; 4) perturbación de los lazos de afiliación; 5) generación de desinformación; 6) ampliación de la corrupción; y 7) deterioro a la democracia. Por otra parte se ha encontrado que el impacto del daño colectivo puede presentarse en diversos ámbitos: 1) en la familia; 2) en el medio; 3) entre los colegas; 4) en las organizaciones (cuando la persona periodista en su labor representa o es vocera de organizaciones sociales); 5) en el municipio; 6) en la región comunicativa; 7) en el país.

Cada hecho de violencia —que puede ser parte del listado propuesto por la RELE que se referenció antes— debe ser analizado

a lo largo de los criterios, de tal forma que se pueda encontrar la expresión o alcance del daño con relación a los ámbitos de impacto. Esto no quiere decir que los elementos que componen cada categoría puedan ser revisados en los procesos de reparación. No se puede perder de vista que estos elementos son apenas una propuesta que parte de lo observado durante el desarrollo de este estudio.

Este entrecruzamiento puede representarse con la matriz del cuadro 37, la cual servirá para hacer el análisis de cada hecho de violencia que se registre.

Pensando en una eventual reparación colectiva por los hechos de violencia sucedidos en el departamento de Arauca, la matriz podría servir para hacer el análisis de algunos casos.

A modo de ejemplo, para facilitar la comprensión de la matriz, en el cuadro 38 se analiza el hecho de violencia “Caso desplazamiento forzado de periodistas en 2003, Arauca, Colombia”; y en el cuadro 39 el hecho de violencia “Asesinato del periodista Efraín Varela en el año 2002” (se debe recordar que un hecho de violencia sobre una sola persona que ejerza el periodismo genera también daños colectivos).

Cuadro 37. Criterios de daño colectivo al periodismo en Colombia, según población afectada.

Criterio	Afectación					
	Familia	Medio de comunicación	Colegas	Organizaciones	Municipio	Región comunicativa
Generación de miedo y amedrentamiento						
Ruptura del tejido comunicativo local						
Desintegración de la opinión pública						
Perturbación de lazos de afiliación						
Generación de desinformación						
Ampliación de la corrupción						
Deterioro de la democracia						

Fuente: CNMH, 2014.

Cuadro 38. Criterios para reparación colectiva. Hecho de violencia: “Caso desplazamiento forzado de periodistas en 2003, Arauca, Colombia”

Criterio	Afectación					
	Familia	Medio de comunicación	Colegas	Organizaciones	Municipio	Región comunicativa
Generación de miedo y amedrentamiento	X		X		X	X
Ruptura del tejido comunicativo local		X			X	X
Desintegración de la opinión pública					X	X
Perturbación de lazos de afiliación		X	X			
Generación de desinformación					X	X
Ampliación de la corrupción					X	X
Deterioro de la democracia						

Fuente: CNMH, 2014.

Cuadro 39. Criterios para reparación colectiva. Hecho de violencia: “Asesinato del periodista Efraín Varela en el año 2002, Arauca, Colombia”.

Criterio	Afectación					
	Familia	Medio de comunicación	Colegas	Organizaciones	Municipio	Región comunicativa
Generación de miedo y amedrentamiento	X		X		X	X
Ruptura del tejido comunicativo local						
Desintegración de la opinión pública						
Perturbación de lazos de afiliación		X	X			
Generación de desinformación						
Ampliación de la corrupción					X	X
Deterioro de la democracia		X	X		X	X

Fuente: CNMH, 2014.

Otros análisis pueden arrojar resultados diferentes. En el caso hipotético de una reparación colectiva en el departamento de Arauca, ambas matrices deberán servir para reconocer los diferentes segmentos de afectación y, por lo tanto, facilitarán para construir propuestas de reparación focalizadas.

LA REPARACIÓN COLECTIVA

La reparación en el Sistema Interamericano

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el universo de reparaciones a las violaciones de derechos generalmente se han discriminado en medidas de distinto tipo, buscando la integridad: 1) de restitución, 2) de compensación, 3) de satisfacción, 4) de rehabilitación y 5) de no repetición. Todas estas se pueden observar en las distintas sentencias referidas a la libertad de expresión, por supuesto cada una guardando identidad y proporción con el daño particular que se le haya causado a la víctima. Visto esto vale revisar las distintas medidas de tal forma que se pueda determinar cuáles de ellas se acercan a una noción de reparación colectiva o no, es decir, cuáles trascienden la esfera de reparar únicamente a quien directamente se le afectaron sus derechos.

a. Medidas de restitución

La Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la CIDH, en su informe “Reparaciones por la violación de la libertad de expresión en el Sistema Interamericano”, ha afirmado:

En la jurisprudencia interamericana las medidas de restitución se han otorgado para ordenar: i) la restitución directa del derecho a la libertad de expresión; ii) la restitución de otros derechos

convencionales vulnerados para ejercer una restricción indirecta a la libertad de expresión, como es el caso de los derechos a la propiedad, la ciudadanía o el trabajo; y iii) para ordenar el acceso a información pública (CIDH, 2012, página 24).

Frente a la restitución directa, la Corte IDH se ha detenido a ordenar la supresión, revocación o discontinuación de los actos que han generado la vulneración o el daño a libertad de expresión. Esto indica que le han apostado a dejar sin efectos las actuaciones estatales, bien sean administrativas, legislativas o judiciales (en los casos de condenas injustas), que impiden el ejercicio del derecho. No obstante, también en términos de restitución se ha ordenado la devolución del material incautado, el acceso definitivo a la información cuando se trata de la negación del Estado a permitirlo, la autorización de la publicación cuando se trata de material documental o cinematográfico que se ha censurado, o restablecimiento de derechos suspendidos o extinguidos injustamente (como el de nacionalidad, el de propiedad, el de tránsito).

Vale la pena enfatizar, que en algunos casos como el de “Olmedo y otros Vs. Chile” que se refiere a una situación de censura previa, se ha establecido como medida de restitución la modificación y derogación de leyes o marcos normativos que hacen posible la afectación, con miras a que los ordenamientos internos cumplan con los parámetros interamericanos. Finalmente, la Corte IDH también ha ordenado a los Estados a que diseñen (o fortalezcan) las instituciones o procedimientos que permitan cumplir con las solicitudes de acceso a la información, garantizando eficiencia y claridad en los procesos, y articulación entre las distintas autoridades y funcionarios.

b. Medidas de compensación

Son medidas que no se han ordenado en todos los casos, que en realidad hacen referencia a las indemnizaciones económicas

a las que la víctima en particular tiene derecho en razón de los daños materiales (daño emergente y lucro cesante) e inmateriales que sufre con ocasión de la vulneración de su derecho. Por su naturaleza son medidas que surgen a partir de la solicitud que hace el o la demandante y de la posterior comprobación de los daños en el marco del juicio.

En este sentido vale resaltar que, para proceder a la compensación por daños inmateriales, la Corte ha tenido en cuenta las situaciones de angustia, temor y sufrimiento que la víctima sufre por algunos de los tipos de daño —no todos— que se presentan contra la libertad de expresión. Los casos de intimidación, actos contra la integridad física, detención arbitraria o condenas injustas, son las que mayor atención reciben en estos términos, puesto que se asume, y en algunos se presume, la ocurrencia del daño inmaterial.

c. Medidas de satisfacción

La Corte IDH ha considerado que para los casos de violación de la libertad de expresión, por parte de los Estados, su sentencia constituye en sí misma una medida de satisfacción, en el entendido de que las víctimas por fin pueden ver resuelta la situación de impunidad frente a los responsables y de falta de claridad de lo sucedido. Como complementario a esto, siguiendo la línea de satisfacción, la Corte IDH suele ordenar la publicación de su decisión, o de parte de esta, en algún medio con acceso para el público, generalmente oficial o de amplia circulación.

También en estos términos se ha ordenado a los Estados, o bien la realización de actos públicos en los que se haga un reconocimiento de su responsabilidad, o bien la investigación y judicialización de los actores presuntamente responsables, tanto las personas al servicio del Estado implicadas como aquellos actores no estatales. Vale advertir que los actos públicos de reconocimiento generalmente han sido ordenados dentro de los casos en los

que se vio comprometida la vida o la integridad personal de los directamente implicados, como son el de “Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia” y “Gomes Lund Vs. Brasil”, aunque ha habido excepciones como el “Caso Kimel Vs. Argentina”. En algunos casos la Corte IDH limita y define los contenidos que deben componer el acto público, en otros no lo hace.

Una medida extraordinaria de satisfacción, que se ha destacado, fue la constitución de una beca, decidida para el “Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia”. Así lo describe la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en el informe que atrás se ha citado:

Otras medidas de satisfacción frente a las violaciones a la libertad de expresión están constituidas por aquellos actos de alto contenido simbólico que tienen la capacidad de revalorizar y dignificar la posición de las víctimas en el ámbito social. Ejemplos de este tipo lo constituyen las medidas de reparación adoptadas por la Corte en el “caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia”, una de ellas consistente en el otorgamiento de una beca con el nombre del senador asesinado para adelantar estudios universitarios en ciencias de la comunicación o periodismo en una universidad pública de Colombia, y la otra en la realización y publicación de un documental sobre la vida periodística y política del mismo (CIDH, 2012, página 39).

d. Medidas de rehabilitación

Las medidas de rehabilitación han sido inusuales dentro del grupo de decisiones que han analizado las violaciones a la libertad de expresión. Solo para los casos de “Gomes Lund Vs. Brasil” y “Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia” se han decretado medidas de rehabilitación en favor de las víctimas, lo que permite inferir que se suelen tener en cuenta para los casos de periodistas en que la libertad de expresión se vulnera a través de la pérdida de la vida

o de la afectación de la integridad personal. En otras palabras, son medidas que se decretan cuando la víctima tiene una afectación compleja de derechos, es decir, cuando son varios los derechos violados.

Para el caso seguido contra el Estado colombiano, la Corte IDH señaló [que es] “preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos psicológicos e in-materiales sufridos por las víctimas en virtud de las violaciones declaradas (...)”. Por otra parte, para el “Caso Gomes Lund Vs. Brasil”, se habló de la necesidad de “una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas”. En este sentido se terminó ordenando a los estados que prestaran atenciones médicas y psicológicas a las víctimas, siempre de forma gratuita y rápida, por el tiempo necesario.

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en los casos donde no se presentan violaciones complejas en las que se afectan distintos derechos, en los que particularmente se afecta el de libertad de expresión, podrían llegar a decretarse medidas de rehabilitación, dadas las afectaciones anímicas y psicológicas que podrían generar situaciones como la detención o la condena injusta. Sin embargo, a este tipo de daños se ha respondido desde las medidas de compensación que atienden los daños inmateriales, a través de indemnizaciones (CIDH, 2012, página 40). Este caso fue analizado en el “Caso Kimel Vs. Argentina”, en donde la Corte IDH, para las afectaciones inmateriales causadas por la detención ilegal, optó por medidas de compensación y no de rehabilitación.

e. Medidas de no repetición

En los casos de violaciones a la libertad de expresión, las medidas de no repetición han sido tanto solicitadas ante la Corte IDH como ordenadas por esta. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el tipo de medidas que se han presentado de este tipo pueden clasificarse de la siguiente manera:

Las garantías de no repetición usualmente dispuestas en la jurisprudencia interamericana se pueden clasificar en tres categorías: a) adecuación del ordenamiento jurídico interno de conformidad con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión; b) capacitación a funcionarios públicos sobre el derecho a libertad de expresión y c) adopción de medidas orientadas a garantizar la protección efectiva del derecho conculcado (CIDH, 2012, página 40).

La primera categoría, referida a la adecuación del ordenamiento jurídico, también ha sido reconocida como medida de restitución. No obstante, en el ámbito de la no repetición ha tenido su lugar como medida cuando la vulneración es posible gracias al permiso de disposiciones legales; en ese caso se asume que reformular normas de carácter restrictivo de la libertad de expresión podrá garantizar que no vuelvan a presentarse violaciones. Generalmente se trata de solicitudes que apuntan a modificar el sistema o la normatividad penal, buscando que estos inserten los estándares promovidos por el Sistema Interamericano sobre libertad de expresión.

En el caso de “La última tentación vs. Chile” la Corte IDH determinó que ese país debía “modificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir la censura previa”. Ya en el ámbito de lo penal, se ha ordenado que se corrijan las imprecisiones del marco normativo que sanciona los delitos de calumnia e injuria, con el fin de no afectar desmedidamente la expresión de los ciudadanos (caso “Kimel vs. Argentina”); también que se eviten las tipificaciones o descripciones delictuales de manera vaga o ambigua (caso “Usón Ramírez vs. Venezuela”).

Otra medida de no repetición es la capacitación de funcionarios. Se ha dicho que posibilita la superación de fallas institucionales que llevan a que se concrete una vulneración a la libertad de expresión. Sin embargo, como no en todas las causas de la violación atienden a un problema institucional, es una medida que no siempre es ordenada por la Corte IDH. Un ejemplo se ve en el caso “Claude Reyes vs. Chile”: en su momento se decidió que el país debía capacitar a sus órganos y funcionarios para atender las

solicitudes de acceso a la información, de acuerdo a las normas que se tuvieran o se crearan, siempre siguiendo los estándares propuestos en el marco interamericano.

La tercera categoría para la no repetición es la adopción de medidas que garanticen la protección efectiva del derecho. Con esto la Corte IDH quiso contar con una medida de carácter genérico con la cual se pudieran concretar órdenes específicas de acuerdo a las circunstancias. Esto se vio en el mismo caso de “Claude Reyes vs. Chile”, en el cual, bajo el nombre de esta medida, se exigió que el país implementara “un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados”.

No obstante, en otras oportunidades se ha optado por ordenar la medida de manera general y de esta forma dejar un margen de decisión y acción para los estados sancionados. Es el caso de “Ríos y otros vs. Venezuela” o el de “Perozo y otros vs. Venezuela”, en los cuales se decidía sobre agresiones contra periodistas efectuadas por particulares. En ambas ocasiones se dispuso que el Estado venezolano debía adoptar “las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundir información de las presuntas víctimas”. Allí se nota que el fallo interamericano ordenó el objetivo pero no las acciones necesarias para realizarlo; estas quedaron a juicio del país.

Propuestas de reparación colectiva: La reparación a periodistas desde su memoria

Al existir daño colectivo en los sucesos violentos contra medios y periodistas, debe haber, de acuerdo con la ley, un proceso de reparación colectiva. Y este proceso se deberá enfocar fundamentalmente hacia una reparación colectiva comunicativa, es decir, que se proponga construir, reconstruir, fortalecer y desarrollar el

tejido comunicativo que fue destruido, damnificado, obstruido, distorsionado o debilitado especialmente en aquellas zonas y regiones en que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos contra medios y contra personas que ejercen el periodismo.

El tejido comunicativo de una comunidad se entiende como el conjunto de su infraestructura comunicativa o mediática, las actividades de los actores comunicativos-periodísticos que lo conforman, las relaciones de estos con otras personas del ámbito comunicativo y social, así como los procesos comunicativos de diverso tipo que tienen lugar en dicha comunidad de referencia.

La ruptura del tejido comunicativo ocasionado por la violencia se manifiesta en hechos como el asesinato, el amedrentamiento generado por los grupos violentos —que se puede expresar en exilio, autocensura, bloqueo del oficio periodístico, debilitamiento, distorsión o claramente eliminación de las posibilidades de información de la comunidad, así como de otras manifestaciones sociales—, pero también en la ruptura de la continuidad de la tarea informativa, la fractura de la confianza social y la destrucción de los lazos de sentido colectivos que cohesionan y sedimentan la historia social, cultural y comunicativa de una comunidad.

El proceso de reparación colectiva deberá enfocarse entonces a esta reconstrucción del tejido comunicativo a través de acciones que lo logren y lo afiancen. Se pueden proponer medidas de reparación, según las necesidades que se han visto durante el desarrollo de este Informe. No obstante, no se puede perder de vista que el listado que se presenta a continuación no es más que una especie de catálogo de propuestas cuya idoneidad reparativa debe sustentarse, en cada caso, con el análisis del daño que se haga. Esto quiere decir que no es recomendable que las propuestas de reparación que se proponen se apliquen indistintamente; por el contrario deben responder a un adecuada medición del daño. Entre ellas se proponen las siguientes:

Valoración social de la libertad de expresión, del periodismo y de las personas periodistas

Un asunto imprescindible para los procesos de reparación colectiva en el campo de la violencia contra medios y periodistas es el fortalecimiento de la valoración que la sociedad tiene de la libertad de expresión, el derecho de información y en general del oficio periodístico. Solo la interiorización de todo ello permitirá una adecuada reparación. La sociedad debe comprender que la libertad de expresión no es solamente cuestión de medios y periodistas, sino un compromiso vital de toda ella, que la democracia necesita que ciudadanos y ciudadanas sin excepción puedan expresarse libremente y sin censuras y que la convivencia requiere de la producción, circulación y apropiación de información oportuna y de calidad por parte de toda la comunidad. Cada vez que sucede un hecho de violencia contra la libertad de expresión, es la sociedad entera la que se ve vulnerada y la que sale damnificada.

La valoración social debe ser un empeño de las organizaciones sociales y ciudadanas, las instituciones del Estado, los organismos internacionales, pero también de la educación y de los propios medios de comunicación. Para ello es necesario promover campañas de valoración de la libertad de expresión y el oficio periodístico; incentivar dentro de los niños, las niñas y los jóvenes la importancia de la libertad de expresión y el significado social de las personas que ejercen el periodismo; movilizar a la sociedad frente a todos los atentados contra la libertad de expresión resaltando siempre el daño que se hace a la sociedad. La valoración también se afianzará promoviendo la calidad periodística, dignificando colectivamente el ejercicio del periodismo e involucrando a la sociedad en los diferentes procesos de creación y circulación de la información.

Promoción de medios independientes sostenibles en aquellas zonas del país en que la acción de los violentos buscó su debilitamiento, amedrentamiento o desaparición

Estos medios se proponen resarcir tanto la actividad informativa de las víctimas directas, como el derecho de toda la comunidad a recibir la información de la que fue despojada o vulnerada. Es fundamental garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de dichos medios así como su independencia, continuidad, pluralismo y relación con la comunidad. Lograr la sostenibilidad de medios independientes requiere también de estrategias exitosas de administración y mercadeo, de prácticas de formación permanentes, de solidaridad de las comunidades locales y de una inquebrantable autonomía y vocación ética.

Recuperación de las posibilidades críticas e investigativas frente a todos los poderes

Uno de los principales daños ocasionados por la violencia en la sociedad es la vulneración de las posibilidades de crítica y fiscalización de los diferentes poderes, especialmente de aquellos que son hegemónicos en un país, región o localidad. Tal como se observa en este Informe, la violencia contra medios y periodistas ha sido producida por poderes ilegales o legales, visibles o invisibles. También se han podido detectar diversos momentos de estas violencias con un marcado predominio de poderes o de alianzas entre ellos. La información y la fiscalización produce en estos poderes reacciones que van desde el chantaje hasta el asesinato porque revelan públicamente sus estrategias de poder, su cooptación de lo público, sus alianzas con sectores poderosos de la sociedad incluidos agencias del propio Estado y en general la amplitud y variedad de sus crímenes y delitos.

Construcción de relaciones más simétricas y justas entre medios locales y medios de comunicación regionales y nacionales

Uno de los problemas que se han detectado en diferentes estudios sobre la situación del periodismo en el conflicto interno es el de las relaciones del periodismo local y quienes lo ejercen con los medios regionales y nacionales, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones laborales, el reconocimiento de su labor informativa, las exigencias impuestas por los medios de los que son corresponsales, los tiempos y procedimientos para la elaboración de la información, las condiciones de seguridad y los mecanismos de protección, entre otros factores. En los grandes medios, es importante una labor de conocimiento y sensibilización de la situación de los medios y periodistas locales, así como una reformulación de las prácticas que habitualmente determinan sus relaciones. Es necesario hacer un seguimiento de estas relaciones para constatar si se han producido cambios positivos y detectar transformaciones necesarias.

Promoción de memoria social desde las víctimas de lo acontecido

La reparación solo es posible si existe memoria de lo sucedido. Y la existencia de la memoria no es solo un proceso de conservación, sino sobre todo de proyección de sus enseñanzas al presente y al futuro. Por tanto la reparación comunicativa debe estar ligada con un proyecto de memoria que recoja la mayor y mejor información sobre los acontecimientos de violencia vividos por medios y periodistas colombianos durante este periodo, que sistematice la información que existe sobre el tema, que investigue y organice toda la documentación necesaria sobre los aspectos menos conocidos e invisibles de la violencia contra periodistas y que facilite el acceso de ciudadanos y ciudadanas a todo este acervo patrimonial.

Junto a estas actividades de construcción de memoria, deben promoverse actividades de divulgación y reconocimiento público,

así como iniciativas educativas que contribuyan desde la memoria a un aprendizaje social alrededor de la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información. El uso de nuevas tecnologías es fundamental para hacer de la memoria no tanto un repositorio como un programa activo de acción y no repetición. Los espacios virtuales, como portales o plataformas digitales pueden convertirse en los nuevos monumentos (memoriales) que le cuenten a la sociedad lo sucedido, pero que a la vez se conviertan en lugares de formación, debate, defensa y promoción del periodismo de calidad. El periodismo por el que han muerto y han sido violentados muchos colombianos y colombianas.

Apoyo a las diversas formas de asociación-organización regionales y locales

Es indudable que en Colombia han existido diversas organizaciones de periodistas con evoluciones también muy diversas. En los últimos años, y muy relacionadas con el conflicto interno, han aparecido organizaciones que inclusive surgieron proponiéndose contribuir a la paz, a la protección de las y los periodistas, a la promoción de la investigación o la formación. La reparación comunicativa solo es completa si lleva al fortalecimiento de la organización de las personas que ejercen la comunicación y el periodismo. Parte de la violencia fue posible por el aislamiento, la indefensión y la soledad vivida y por la ausencia de gremios fuertes y activos que se movilaran en defensa y protección de los y las periodistas. Como ya se observó, todos estos temas no son solamente un asunto gremial sino una cuestión de toda la sociedad. Por eso la reparación se hace realidad en el apoyo de las iniciativas organizativas, las que ya existen y las que sean necesarias, con la condición de ser iniciativas que provengan fundamentalmente de periodistas y comunicadores con estructura y funcionamiento de carácter democrático, participativo y pluralista.

Generación de redes de periodistas y comunicadores que afiancen las relaciones entre periodistas locales y regionales

Una de las enseñanzas de este periodo de la historia del periodismo colombiano es que la asociación y solidaridad es fundamental para afrontar la violencia de los diversos tipos de victimarios. La agresión contra periodistas individuales resulta más fácil para los actores armados ilegales y en general para los criminales. En el país se incrementaron las experiencias alrededor de la construcción de organizaciones periodísticas que tenían como propósito la formación, asociación, alerta, defensa y promoción de periodistas en condiciones de riesgo. Así como la publicación colectiva de informes periodísticos sobre la violencia contra periodistas que hubieran sido peligrosos si se divulgan individualmente en regiones en donde incluso persiste hoy el poder de los grupos asesinos. Por eso es fundamental estimular la organización desde abajo, es decir, desde sus propios contextos, necesidades y objetivos comunes.

Promoción de procesos de formación y actualización periodística estables y participativos

Una forma de reparar es formar. Una parte de los problemas que ha vivido el periodismo se debe precisamente a deficiencias en la formación. La formación para la reparación puede entenderse en dos sentidos. Uno primero es el de la actualización. El periodismo es un oficio que requiere de la formación permanente, dado su dinamismo y su estrecha relación con una realidad que es cambiante. Pero también, por la exigencia y las posibilidades que día a día ofrecen las tecnologías, que resaltan la importancia de la producción de contenido y la elaboración creativa de narrativas. El segundo es la relación entre reparación y formación de nuevas personas en las disciplinas del periodismo y la comunicación, así como la promoción de públicos.

Fondo de promoción de la creatividad periodística y comunicativa de jóvenes en zonas caracterizadas por la violencia contra periodistas

Sería importante crear un fondo económico administrado por una organización periodística reconocida, para promover la creatividad comunicativa de jóvenes de medios y zonas afectadas por la violencia contra periodistas. Este fondo, que debería operar con un consejo con participación activa de las víctimas, debería centrar su acción en el estímulo a la formación periodística de jóvenes y, sobre todo, en la promoción de experiencias periodísticas socialmente relevantes, creativas y que se propongan un periodismo de calidad en lo local y en las regiones.

Promover en las zonas más afectadas experiencias participativas de periodismo digital

El periodismo en soporte digital ya es un hecho. Crece la infraestructura de computadores, aumenta el acceso a banda ancha y se incrementa la participación en internet inclusive en zonas rurales. Lo que ahora es una promesa muy pronto será una realidad. Según estudios de Consejo de Redacción y el Centro ÁTICO de la Pontificia Universidad Javeriana, los medios digitales informativos tienden a crecer, estar en diferentes regiones del país y un porcentaje importante ya no son medios migrantes sino nativos digitales. Debe aprovecharse este cambio para promover experiencias de periodismo digital que puedan ser sostenibles.

Establecer una instancia de seguimiento especialmente del problema de la impunidad (revelar la impunidad)

La impunidad es un asunto central de la violencia contra las y los periodistas en Colombia. Es preciso conformar un grupo de seguimiento de los casos, buscar que no prescriban a partir de

acciones jurídicas y presión de la opinión pública, realizar informes sobre los procesos en curso, su estado y sus posibilidades de aplicar justicia, divulgar la memoria e historias de periodistas que han sido asesinados, analizar y divulgar el estado de las amenazas y otros delitos contra periodistas buscando su sanción por parte de las autoridades competentes.

Fortalecer mecanismos de alerta y de protección

Un mecanismo que ha mostrado su bondad es el que permite la alerta y la protección de periodistas. Hay que fortalecer su acción, ya sea desde la orilla del Estado como de las organizaciones sociales y periodísticas, promover aquellas prácticas que han mostrado ser eficientes y buscar el respaldo de organizaciones internacionales.

Construcción de experiencias e instancias comunicativas de verdad y de reconciliación

La posible creación de una Comisión de la Verdad, así como la atención de la Unidad de contexto de la Fiscalía al tema de periodistas son dos vehículos muy importantes para afianzar y desarrollar los procesos de verdad, justicia y reparación. Hay que establecer una interlocución con estas instancias, resaltar la problemática de reparación de periodistas y tener un mecanismo de seguimiento de sus realizaciones en este campo.

Al momento de emprender una reparación de periodistas es recomendable mantener presentes dos situaciones que condicionan y potencian las medidas. En primer lugar, hay que asumir que de la efectiva reparación dependen las estrategias restauradoras para otras poblaciones víctimas. Esto porque, en general, las medidas de satisfacción o simbólicas para las comunidades afectadas por el conflicto dependen de tejidos comunicativos restablecidos y medios de comunicación fortalecidos. En segundo lugar, la repa-

ración de periodistas de ninguna manera puede quedar satisfecha con volver a las condiciones anteriores al hecho violento. Como se ha visto a lo largo del Informe, son precisamente las situaciones previas las que suelen generar o facilitar el surgimiento de la violencia en contra de determinada persona que ejerce el periodismo. En esa medida la reparación debe buscar, además de la respuesta al daño, una transformación de realidades que restituya pero que además garantice que el terror no vuelva a aparecer.

IMPUNIDAD Y NEGACIÓN DE JUSTICIA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

En Colombia seguimos sin saber quién manda silenciar a nuestras y nuestros periodistas. De quien da la orden, paga y saca provecho por estos asesinatos, nunca se sabe, solo quedan silencios. Se sabe más de los sicarios, de los mandaderos que llevan y traen las amenazas, aunque son pocas las veces en que son condenados. Así es como la justicia vive en deuda, no solo con las víctimas directas, sino con las cientos de audiencias que vieron cómo les arrebataban a quienes las mantenían al tanto de la realidad, ya sea mediante el asesinato o mediante el miedo hasta el punto de obligarlos a que se fueran muy lejos, donde no tuvieran de qué hablar. La justicia no dice qué pasó, no se fijan las causas y mucho menos las consecuencias del daño, No hay responsables ni explicaciones.

En los últimos 35 años, apenas en cuatro casos se ha logrado condenar al determinador, o autor intelectual, del homicidio de un periodista. En el año 2004 se condenó a Carlos Castaño por la muerte de Jaime Garzón, pero la condena no solo apareció cuando el jefe paramilitar estaba por desaparecer y por ser asesinado, sino que el fallo quedó en deuda frente a otros que participaron del crimen. En el año 2009 se condenó al exalcalde de Barranquermeja Julio César Ardila Torres, y a los exfuncionarios municipales Fabio Pajón Lizcano y Abelardo Rueda Tobón, por la muerte

del periodista José Emeterio Rivas en 2003. En este caso también se condenó en 2013 al jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias *Julián Bolívar*, pero este fallo sorprendió por su deficiente reconstrucción de los hechos que provocaron la muerte del periodista. La condena se dio dentro de su proceso de Justicia y Paz, en el cual no se requirió mayor investigación más allá de la confesión del cabecilla paramilitar. Además, dada la acumulación de 102 delitos confesados, la sentencia no pudo desarrollar un aporte significativo en materia de verdad y de esclarecimiento de los hechos. El tercer caso de condena a un autor intelectual, o determinante, se dio el 31 de diciembre de 2014 contra el exalcalde de Magangué (Bolívar), Jorge Luis Alfonso López (hijo de Enilse López, alias *La Gata*), por el asesinato de Rafael Prins Velásquez en 2005.

Finalmente, el 24 de junio de 2015, el Tribunal Superior de Manizales revocó la sentencia de primera instancia que absolvía al excongresista Ferney Tapasco González y en su lugar decidió condenarlo a 36 años de prisión por el asesinato de Orlando Sierra Hernández. Junto a él fueron condenados también sus colaboradores, Fabio López Escobar y Jorge Hernando López Escobar. Esta fue una sentencia que se dio después de 13 años del asesinato del periodista, en una muestra de que en Colombia la justicia continúa llegando tarde. En otras palabras, se trata de un fallo para celebrar pero que al tiempo debe mirarse con crítica, pues no deja de ser producto de una demora injustificada que trajo consecuencias para el proceso y para los derechos de las víctimas. Hay que advertir que en este caso los autores materiales sí fueron condenados en el año 2005.

De alguna forma, la demora en el caso Sierra comparte circunstancias con la mayoría de casos que no han tenido sentencia. Si bien la impunidad es el hábito de que lo malo siga su curso, Colombia lo hizo parte de su forma de vivir. El Estado no investiga, no condena, no reafirma los límites de lo que debe ser y lo que no, y así lo indeseable, como la violencia, nunca queda atrás: o se entroniza o reaparece cuando le viene en gana. Criminales y victimarios consiguen licencia para continuar, pues entienden que nadie nunca los responsabilizará por lo que hacen, e incluso con-

fían en que las circunstancias y los motivos que los llevan a atentar contra la vida o la dignidad de otras personas difícilmente serán definidas como algo públicamente reprochable. En ese momento ven que pueden justificarse o proponer estrategias de olvido que tienen éxito sin la mayor resistencia.

Así es como la impunidad no solo deja a los criminales en la calle y a las víctimas en medio de una pérdida sin resolver, sino que termina por modelarnos como una sociedad que no sabe muy bien si lo que vive está bien o no. Si el asesinato fue necesario o no, fue justificable o no, fue mejor o no, es algo que se duda, que se deja a medias entre un montón de interpretaciones que no encuentran cómo cerrarse alrededor de una condena común. Esto es algo en lo que una función correcta del derecho y la administración de justicia debería ser transformadora y no permitir que siga sucediendo.

Durante la construcción del presente Informe se pudo constatar que, a diferencia de lo que sucede con otros grupos sociales o gremios victimizados del país, la impunidad en el caso de la violencia contra periodistas y medios de comunicación es fenómeno que se encuentra bien rastreado y consignado por organizaciones civiles como la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa),

la Fecolper (Federación Colombiana de Periodistas) y la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa). También existe una gran labor de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que saca informes periódicos que dan cuenta de las carencias de justicia. A su vez, los diversos medios de comunicación, nacionales y regionales, procuran llevar registros de la inactividad judicial, especialmente en los casos de periodistas víctimas que hicieron parte de sus redacciones.

Según las cifras brindadas por los informes de la FLIP para el año 2012, de los 140 periodistas que esta organización consideraba asesinados por razones de su oficio desde 1977, se encontraba lo siguiente:

- Apenas 91 procesos pudieron ser ubicados por la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura, es decir que el Estado, solo en esos casos, podía dar cuenta de ante qué autoridad se estaba surtiendo la investigación.

- 56 de esos procesos ubicados se encontraban activos, es decir a la espera de que se continuara con alguna actuación judicial.
- 53 se encontraban en etapas preliminares de la Fiscalía. Es decir que solo 3 se hallan en el escenario de los jueces.

Entre todo eso, en el informe del año 2015 de la misma Fundación se encontró que el 47 por ciento de los casos habían prescrito, es decir que por el paso del tiempo se había vencido la potestad del Estado para continuar las investigaciones.

La FLIP cuenta con una base de datos importante sobre el número de agresiones contra periodistas y el estado de las investigaciones o juicios. Por supuesto, es un sistema que en parte depende de la capacidad que tiene el Estado de proveer información judicial o de otro tipo. La organización se la juega complementando la información con su propio seguimiento y acompañamiento a víctimas.

Tras sus veinte años de decantación, la información de esta fundación es quizás la de mayor rigor y valor en materia de impunidad frente a la violencia contra el periodismo. En consecuencia, el gremio periodístico ha logrado que las cifras de inactividad judicial y los casos particulares que han sufrido de desidia investigativa tengan una visibilización aceptable frente a la opinión pública. O bien por la misma gestión de la FLIP, o bien porque los mismos medios de comunicación, con espectros de influencia considerables, se acercan a las bases de datos de aquella para generar sus propios informes.

También los medios de comunicación han establecido sus estrategias de visibilización de la impunidad. Por diferentes medios, *La Patria* de Manizales llamó la atención sobre la inactividad judicial en el caso de Orlando Sierra. No solo editorializaba o publicaba notas que ponían de presente la situación, sino que dentro de su medio impreso, en los aniversarios de su muerte, en los días 30 de cada mes, o en días donde se reactiva el tema, solían poner recuadros de una página, media página o un poco menos, en el que recordaba el tiempo que el caso se había mantenido sin dar con los responsables. Con esto llevaban una cuenta de años, meses y

días que compartían con sus audiencias para informar y generar reacciones.

Otros medios hacen lo mismo. *El Espectador* informa constantemente sobre la pasividad en el proceso de su director asesinado Guillermo Cano y de otras y otros periodistas que pasaron por allí, al igual que otros medios regionales que sostienen una posición de denuncia por la impunidad que se mantiene en las investigaciones sobre asesinatos y amenazas contra sus periodistas.

Este capítulo pretende hacer unas consideraciones más de corte cualitativo que cuantitativo. En parte porque las cifras de impunidad vienen siendo consolidadas con rigor desde tiempo atrás, aunque persistan algunos vacíos, y en parte porque estas son difundidas con éxito gracias a las posibilidades de difusión con las que cuenta el gremio periodístico. Lo que se necesita contar son las situaciones y tensiones que se ven cuando hay un acercamiento a los procesos penales que buscan esclarecer la muerte o las amenazas de periodistas.

Aunque hay estudios que han buscado encontrar las causas de impunidad en general, y aunque existen investigaciones sobre lo que lleva a que no se investigue un caso de violencia, el país necesita que en este tema de violencia contra medios y periodistas se dé un paso hacia los diagnósticos institucionales y sociales que permitan desactivar incentivos precisos o desbarajustes que llevan a la no provisión de justicia.

El 31 de diciembre de 2013, la RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) publicó el informe que servirá como columna vertebral del presente capítulo, denominado “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios. Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de justicia”. En este, entre otros temas, se puede apreciar una sección que trata la situación en la que se encuentra hoy la obligación de procurar justicia en los Estados de América frente a los casos de violencia contra periodistas. Como se verá, este deber de los Estados está dividido en diferentes obligaciones que ameritan un estudio separado.

Con miras a que el cumplimiento de estos estándares sea una realidad en el país, este capítulo tendrá en este documento su principal guía para abordar el Informe en materia de impunidad.

¿HAY UN MARCO AJUSTADO PARA LA INVESTIGACIÓN, EL JUICIO Y LA SANCIÓN?

Independencia

“Ese proceso se lo tienen que llevar de aquí”—le dijo un fiscal reconocido de Manizales a Fernando Alonso Ramírez, periodista de La Patria—. Fue un día después de que le dispararan a Orlando Sierra entrando al periódico. Las razones que dio se referían a las estructuras políticas que controlaban la rama judicial en la región.

Esa es una de las dudas que siempre persisten cuando se habla sobre la impunidad en la violencia contra periodistas. ¿Qué tan entrometidos están los partidos y los políticos en la rama judicial? ¿Qué tan independiente puede ser una rama judicial íntimamente ligada con los políticos? Parece que no ha sido fácil rastrear eso en términos generales para el país, pero en casos concretos sí ha sido un tema que las víctimas de las agresiones y los demás interesados ven con desconfianza.

No podría ser de otra forma. Si se sabe que la mayoría de periodistas se exponen a peligros cuando el contenido de sus notas son sobre corrupción de los gobiernos o sobre relación de personas que se dedican a la política con actores armados, si se asume que por tal razón la principal sospecha recae sobre la misma dirigencia local, es lógico que haya percepción negativa frente a la justicia cuando se piensa en una indebida presión sobre esta por parte de las personas implicadas. Ahora bien, los resultados de plena impunidad parecen demostrar que se puede pasar de la percepción a la realidad.

Para la RELE, el primer factor que determina la obligación de contar con un marco ajustado para el proceso penal, es la defensa de la independencia de las autoridades responsables de la investigación y del juicio.

Los Estados deben asegurar no solamente la independencia jerárquica e institucional de las autoridades responsables de adelantar las investigaciones y los procesos judiciales, sino también que dicha independencia se pueda verificar de manera práctica en el caso concreto (CIDH, 2013, página 113).

En la Fiscalía General de la Nación se ha privilegiado el libre nombramiento y remoción de los cargos con más influencia sobre la investigación, especialmente los cargos directivos, que de alguna forma controlan otras instancias de investigación como la policía judicial, la medicina legal o simplemente otras fiscalías⁶. En ese sentido, no es posible conocer en concreto cuáles son las dinámicas políticas que se surten al momento de proponer las personas que se eligen en esos cargos, especialmente a nivel regional donde los partidos políticos pueden lograr una mayor cooptación. Justo en ello se fundaba el escenario que planteaba el fiscal que previno a Fernando Alonso Ramírez en el caso de Orlando Sierra, en cierto grado de certeza de que unas autoridades de investigación cooptadas o presionadas no dejarían avanzar la verdad y la justicia.

Institucionalmente, el Estado está en deuda de dar a conocer si los nombramientos regionales que se dan dentro de la Fiscalía General de la Nación obedecen a dinámicas partidistas o clientelistas que permiten que autoridades de los entes territoriales queden protegidas contra las acciones penales. Actualmente, no es extraño encontrarse en los cargos de libre nombramiento de la Fiscalía a familiares de políticos reconocidos o a personas cercanas. En el caso del departamento de Caldas, siempre se ha visto con desconfianza que una hija del político conservador Omar Yepes Alzate (denunciado muchas veces en la columna de Orlando Sierra), haya estado ejerciendo, desde tiempo atrás, cargos en la Fiscalía General en diversas seccionales.

Para estos casos, de influencia indebida, la RELE ha recordado la posibilidad de que las investigaciones puedan trasladarse a otras autoridades que garanticen independencia (CIDH, 2013, página

6 Pueden verse las normas que regulan la estructura y el personal de la Fiscalía General, especialmente la ley 938 de 2004 y el Decreto 020 de 2014.

114). En Colombia, el Código de Procedimiento Penal (artículos 46 a 49 en el código actual) ha previsto esta situación y ha facilitado que los procesos puedan ser trasladados de lugar cuando se vean comprometidas las garantías procesales. Así ha sucedido con muchos casos en Colombia, los cuales han sido transferidos por la Fiscalía General a fiscales en Bogotá. Esto se profundizó mucho más cuando, tras la muerte de Jaime Garzón en 1999, se creó la sub-unidad de libertad de prensa en la Unidad de Derechos Humanos en la capital, la cual asumió algunos de los casos más emblemáticos. Hasta allá llegó el caso de Orlando Sierra en el 2002, año en el que aumentaron la sub-unidad en 11 fiscales.

Sin embargo, desde el periódico *La Patria* siempre se vio con inquietud que las fiscalías de Manizales fueran las comisionadas para surtir las diligencias procesales. Un fenómeno que se replica en diferentes casos. Así, aunque la dirección de la investigación, desde Bogotá, puede mantenerse al margen de las presiones, la práctica de algunas instancias delicadas, como la recolección de pruebas, se confían a funcionarios y funcionarias locales, que están sometidos a las eventuales amenazas a la independencia.

Protección

En Colombia, la violencia ha sometido a tal nivel la independencia judicial, que ha llegado a terminar con la vida de las mismas personas al servicio del Estado, de las más resistentes. En esa perspectiva, juezas, jueces y fiscales se han visto en situaciones que requieren de la protección del Estado. Leído así se entiende que su vida no solo es un bien en sí mismo, sino que de su garantía depende la posibilidad de una justicia y de una justicia independiente. Es el cuerpo y la voluntad de esas personas, resistentes en su autonomía, lo que hace realidad que la justicia no solo exista sino que se mantenga al margen de lo que otras voluntades legales e ilegales pretenden.

Un caso paradigmático en Colombia ha sido el de jueces, juezas y fiscales en Antioquia en la época de los carteles, es decir, en la

década de los ochenta y principios de los años noventa. Solo en Medellín se cometieron asesinatos contra 13 periodistas y trabajadores de medios. Si bien no se puede constatar que la investigación de algún caso de asesinato de periodistas haya tenido como consecuencia el asesinato del juez o jueza a cargo, como sí sucedió con investigaciones frente a asesinatos de otras personas, sí se pudo recolectar información que demuestra que el temor frente a la muerte de compañeros y colegas, y sobre todo a la certeza de que el Estado no contaba con la posibilidad de brindarles protección, ocasionaba la desidia de ciertos funcionarios.

Hasta las víctimas y personas interesadas evitaban acercarse a preguntar sobre la situación de esos procesos de investigación, de tal forma que en general terminaban sin seguimiento por parte de alguien de la sociedad civil. Estos procesos, los de esta época en Medellín, hacen parte del conjunto de procesos extraviados que a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura hoy se les dificulta encontrar.

De alguna forma existe la percepción de que la protección de la vida de funcionarios judiciales ha mejorado, se han fortalecido y organizado las entidades que cumplen estas funciones. No obstante, existen fuertes posturas entre el movimiento de víctimas y otras organizaciones que infieren que de alguna manera la inactividad judicial es tanta que no es posible determinar si los jueces, juezas y fiscales se están poniendo en peligro por el estudio de violencia contra periodistas. No hay razones para pensar que un funcionario o una funcionaria judicial que no asume actuaciones contundentes se ponga en riesgo respecto de personas interesadas en que las investigaciones no prosperen. Por otro lado, cuando han logrado asumir su función, las decisiones han sido tan inconducentes o débiles que difícilmente se puede pensar en una situación de hostilidad en su contra por ese motivo.

La otra cara de esta realidad, distinta aunque constante, es la protección de testigos. Obedece a la dinámica general que encarna la operación criminal contra periodistas. Muchas personas en ejercicio del periodismo son asesinadas al pie de una puerta, o de la casa como Clodomiro Castilla, o del periódico como Orlando

Sierra. Se les ha disparado, casi siempre en el pecho o la cabeza, a veces por la espalda, y detrás de las armas empleadas hay siempre una figura trascendental en esta historia: un sicario.

Sobre el sicariato es mucho lo que se ha escrito y supone una cantidad de dinámicas criminales que exceden las posibilidades de este capítulo. En los casos de periodistas cobra relevancia esta figura en la medida en que las personas al servicio del sicariato rápidamente pasan a convertirse en testigos dentro de los procesos. Lo anterior ocurre porque los organismos judiciales enfilan sus esfuerzos contra las personas responsables de la autoría material de los crímenes contra medios y periodistas, con el objetivo de encontrar logros rápidos que acosen la investigación o que puedan servir como respuesta ante la opinión pública. Como ejemplo, la condena contra Jorge Luis Alfonso López, por la muerte de Rafael Prins, se debió al testimonio de una integrante del grupo de sicarios.

La identificación, delación y captura de las personas de estas organizaciones criminales las convierte, en esa medida, en las piezas que primero se suben a los estrados, en condiciones de alta vulnerabilidad. Han demostrado ser testigos sumamente desprotegidos. Para empezar, su colaboración puede no ser contundente ni rápida, lo que implica cierto transcurso de tiempo que prolonga su riesgo y que se suma al tiempo de inactividad de la justicia en el que se profundizará más adelante. Las organizaciones han demostrado tener anillos de verdad o barreras de información, conformados por múltiples intermediarios que no permiten que toda la estructura esté enterada de lo que sucede; es decir, que sus integrantes pocas veces conocen los pormenores de quienes los contratan o de quienes deben asesinar. En segundo lugar, por estar dentro de una estructura violenta, no es fácil persuadir a las personas sicarias para que digan lo que saben. Por una parte temen de las represalias y por otra, quizás menor, se mantienen en comportamientos de lealtad.

La desprotección de las personas sicarias que participan en los procesos como testigos se profundiza con la incapacidad que tienen las autoridades de investigación de desmontar la organi-

zación criminal. Como se vio, no encuentran otras vías que les permitan ir atacando a las personas que contrataron los servicios y les dieron órdenes al testigo-sicario, supeditando su actividad a su testimonio lento y difuso. De esa forma, al percibir el riesgo por la delación, la organización criminal o encuentra cómo acabar con la vida de estas personas (adentro o afuera de los centros carcelarios), o descubre la forma de traerlas nuevamente hasta la organización para blindarlas contra las autoridades (cuando no son condenadas o cuando son liberadas).

En el caso de Jaime Garzón los sicarios fueron asesinados por su propia banda, la de La Terraza de Medellín, porque que de alguna forma podían cumplir un rol de testigo delator dentro de las investigaciones contra los autores intelectuales. En el caso de Orlando Sierra, los sicarios que en un principio hablaron y fueron condenados ya estaban muertos para el momento del juicio contra Ferney Tapasco y los otros, así que no pudieron corroborar sus versiones dentro de la investigación del autor intelectual. Esto, como se dijo, obedece a que el exagerado paso del tiempo juega en contra de la protección de testigos. En esto se profundizará más adelante.

Creación de una unidad especializada de investigación

Parte de un marco institucional adecuado, según la RELE, es la creación de una unidad especializada de investigación. De alguna forma, Colombia ha estado abierta a esta posibilidad, sobre todo por la creación de la Fiscalía General después de la Constitución de 1991, pero eso no se ha visto reflejado en los resultados de justicia. Un buen recuento está consignado en un estudio realizado en la Universidad Nacional por Pedro Vaca Villarreal (2012), hoy director de la FLIP.

Allí se constata que estas apuestas institucionales han sido el resultado de momentos de crisis en materia de libertad de expresión. Dice Vaca: “A las mayores crisis institucionales se responde con cambios institucionales” (2014, noviembre, entrevista CNMH, Trabajo

de campo). Basta recapitular los hechos para comprobarlo. En los años 90, la situación de las y los periodistas logró incluirse en la política nacional de derechos humanos gracias a la campaña contra la impunidad que se gestó después de que la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) hiciera un recuento del lamentable estado de los procesos (Ronderos, 2015, enero, entrevista CNMH, Trabajo de campo). En ese momento, cuando transcurría el año 1994, la Fiscalía General creó la Unidad Nacional de Derechos Humanos en Bogotá que se encargaría de la investigación de delitos graves en esa materia, entre ellos los que afectaban a periodistas.

Más tarde, en 1999, se creó la denominada sub-unidad de periodistas, o de libertad de prensa, dentro de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Esta política surgió como consecuencia del asesinato de Jaime Garzón y con ella se planteaba la posibilidad de que los casos de periodistas se investigaran de manera especial y casi prioritaria. No solo se trataba de responder a la muerte de un comunicador de reconocimiento nacional, sino que para ese momento ya se reportaban 90 asesinatos desde 1977. En esa ocasión los casos contra libertad de prensa más reconocidos como Jaime Garzón, Guillermo Cano, Julio Daniel Chaparro, entre otros, se reunieron en las fiscalías 6, 9 y 11.

La concordancia de fechas entre el asesinato de Garzón y el anuncio de creación de la dependencia permiten concluir que la propuesta estructural fue una respuesta institucional a ese hecho concreto, que, se conoce, despertó un alto grado de indignación nacional... (Vaca, 2012, página 44).

La historia vuelve a tener un hito en el año 2002. En ese entonces la Fiscalía General expidió la resolución 0444 del 24 de septiembre de 2002, y con ella destinó 11 fiscales más para reforzar la investigación de crímenes contra periodistas. Ahora bien, en enero de ese año había sido el asesinato de Orlando Sierra, y en junio había muerto Efraín Varela en Arauca, dos referentes trascendentales para el periodismo regional. Además, entre 1999 y 2002, que como se ha visto fue uno de los picos en materia de

agresiones, habían muerto 31 periodistas a manos de los grupos violentos. Este hecho refuerza la tesis de que parte de la estrategia estatal de investigación era reaccionar a la coyuntura.

En el año 2005, en su informe “Impunidad, autocensura y conflicto armado interno: Análisis de la situación de la libertad de expresión en Colombia”, la RELE encontró que la sub-unidad carecía de fiscales específicamente asignados a la libertad de expresión y dejó presente su preocupación por la cantidad de casos de violencia contra periodistas todavía pendientes (CIDH, 2005, Documento 51, párrafo 6).

En este punto, el recuento de Vaca Villarreal contiene un hecho curioso que fue confirmado con las entrevistas que se le hicieron. Aunque en el año 2011 la Fiscalía General publicó un comunicado de prensa en el que constaba la existencia de la sub-unidad (Colombia, Fiscalía General de la Nación, 2011), en 2012, en la respuesta de un derecho de petición, formulado para esa investigación, afirmó que no existía ninguna sub-unidad de periodistas al interior de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y que esa figura institucional de sub-unidad solo aplicaba para crímenes referidos a la Unión Patriótica y sindicalistas (Vaca, 2012, página 45). De esta forma ha quedado la sensación de que la sub-unidad de periodistas no existió en realidad como institución sino, por un lado, como una construcción mediática que servía para responder a las demandas de justicia y, por el otro, como un simple criterio de reparto y asignación de casos al interior de la Fiscalía General.

Hasta aquí deben destacarse dos aspectos. En primer lugar, la falta de real especialización dentro de la llamada sub-unidad. Estas fiscalías nunca asumieron de manera exclusiva los casos de periodistas, sino que debieron trabajar en paralelo con otras investigaciones de derechos humanos que estaban a su cargo: masacres, muertes de sindicalistas, etc. “De esta forma se terminó respondiendo a un ruido mediático pero no se generó una capacidad institucional que de verdad se focalice en el tema”, explica Vaca (2014, noviembre, entrevista CNMH, Trabajo de campo).

Por otra parte, esta recurrencia en los cambios institucionales —de manera más coyuntural que planificada— ha implicado se-

rios problemas en la gestión en la información. Sobre todo porque se han provocado cualquier cantidad de traslados de expedientes entre seccionales, entre la Unidad de Derechos Humanos y su “sub-unidad”, y entre las y los fiscales que la componían. No es gratuito que hoy ni la Fiscalía ni el Consejo Superior de la Judicatura puedan dar información sobre la autoridad que está a cargo de muchos de los casos.

Podemos extraer unas conclusiones a partir del anterior análisis:

1. El Estado colombiano, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, toma decisiones institucionales sobre la coyuntura de los picos de más altos de violencia contra periodistas. Esta es la tesis que ya se viene demostrando. “La justicia colombiana en casos de graves violaciones a los derechos humanos es reactiva y no se planifica” (Vaca, 2012, página 46).
2. En realidad, dentro de la intención de crear unidades especializadas de investigación, difícilmente se puede demostrar una real especialización o una efectiva exclusividad de fiscales a cargo de los procesos de agresiones contra periodistas.
3. De las dos anteriores, es clave reconocer que las decisiones institucionales que han buscado especialización no solo se han tomado en coyunturas, sino que se han generado con pretensión de responder mediáticamente.

Hoy la Fiscalía General de la Nación le ha apostado a crear la Unidad de Análisis y Contexto, dentro de la cual se ha creado un grupo para los casos de periodistas. Esta es una apuesta que además de una novedad institucional representa una innovación metodológica en materia de investigación. De alguna forma se espera retomar el universo de crímenes contra periodistas para buscar entre ellos relaciones, características comunes, diferencias, contextos compartidos, etc. En un principio se destinaron dos fiscales que estarían apoyados por un grupo interdisciplinar de investigación.

La primera labor de este grupo fue identificar los casos de violencia contra periodistas que estaban siendo consolidados por la sociedad civil. De esa forma ha ido decantando los casos de un universo mucho mayor de homicidios. Sucede que el ente de investigación, para saber si el caso es de su competencia, debe comen-

zar por resolver la duda de si el hecho criminal es cometido por razón de su oficio o no. Así que casos discutibles, como las muertes de Álvaro Gómez Hurtado, Héctor Abad Gómez o Elsa Alvarado, que eran periodistas pero los asesinatos se cometieron por su rol de protección de derechos o por pugnas políticas, han entrado a la Unidad como potenciales casos de homicidios de periodistas. Estos deben ser aceptados o descartados como tales.

De alguna manera esta nueva estrategia permite soñar con una nueva forma de investigar los casos, que traerá resultados. Sin embargo, hasta ahora no se han podido encontrar circunstancias que evidencien una especialización concreta para el caso de periodistas. En el caso de la Unidad de Contexto y Análisis, la especialidad está dada frente a la capacidad de investigar judicialmente en materia de derechos humanos y conflicto, lo que de alguna forma se acerca a las realidades que se viven en la violencia contra periodistas. Sin embargo parece no haber una especialización en las realidades precisas que determinan las agresiones contra comunicadores dentro de todo este universo de violaciones graves.

El grupo para periodistas de la Unidad todavía se encuentra en etapas de decantación de casos y de ubicación de expedientes. Por lo mismo, es posible que aún no puedan ser examinadas a fondo las conductas de investigación especializadas frente a la violación de la libertad de expresión.

¿LAS INVESTIGACIONES SE ADELANTAN CON DEBIDA DILIGENCIA?

Según la RELE, para los estados existe una obligación de debida diligencia para afrontar las investigaciones:

[L]a obligación de debida diligencia implica que las investigaciones penales agoten todas las líneas lógicas de investigación. En particular, la “debida diligencia” exige que las investigaciones impulsadas por el Estado tomen en cuenta “la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión”, asegurando que no haya “omisiones en la recabación de prueba y

en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. Este aspecto es crucial para que los Estados cumplan con su deber, indicado previamente, de investigar, perseguir penalmente y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales (CIDH, 2013, página 131).

De lo anterior se desprende que la debida diligencia se cumple cuando los esquemas de investigación logran evitar dos situaciones que a continuación se analizan:

1. Omisión en la recabación de pruebas.
2. Omisión en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.

Omisión en la recabación de pruebas

El 11 de septiembre de 2013, fue asesinado el periodista Edinson Molina en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Después de las siete de la noche, dos sicarios le propinaron cinco disparos cuando caminaba hasta su casa. El director de la FLIP, Pedro Vaca, cuenta que en julio de 2014 visitó la Fiscalía en la ciudad de Medellín y averiguó por el estado de la investigación. Tenía conocimiento de que a uno de los asesinos se le había caído una riñonera en el momento de la huida. Así que preguntó sobre el reporte y el dictamen del CTI que había llegado hasta el lugar de los hechos. La fiscal con la que habló le respondió que no había llegado (Vaca, 2014, entrevista CNMH, Trabajo de campo). Habían pasado nueve meses desde el asesinato.

Este tipo de omisión, que recuerda la RELE, se refiere a las negligencias que acontecen en el manejo de las pruebas dentro de los procesos. Una situación que es generalizada en las investigaciones contra periodistas y que es generada por múltiples causas que podrían exceder el objetivo de este Informe de llegar a ser enumeradas. Además, que son realidades de la administración de justicia y de la gestión dentro de la Fiscalía General que no son exclusivas de las pesquisas de violencia contra la prensa.

Sin embargo, volviendo a la exploración que se hizo en el desarrollo del presente Informe, se pueden retomar algunas situacio-

nes que dan cuenta de las realidades que se viven en los procesos de periodistas. Un primer ejemplo, muy simbólico además, es lo sucedido dentro del caso de los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, periodista y fotógrafo de *El Espectador* asesinados en el municipio de Segovia, Antioquia, en 1991.

Se cuenta que los cuerpos fueron levantados cuatro horas después de haber sucedido los asesinatos, al parecer por miembros de las fuerzas militares. De esta forma nunca se tuvo registro del cuidado de la escena del crimen o de si se respetaron los protocolos para el manejo de pruebas y para la garantía de la cadena de custodia. Carlos Mario Correa, encargado de *El Espectador* en Medellín, fue quien tuvo que viajar a reconocer los cuerpos cuando ya estaban en la morgue municipal. En la versión que cuenta en su libro “Las llaves del periódico”, se pueden notar algunas posturas institucionales que de entrada marcaban omisiones en materia probatoria.

La actitud de la policía era de hostilidad completa y de un recelo impresionante; nadie decía nada. Tras firmar unos papeles nos entregaron los cuerpos en cuestión de minutos como para deshacerse de ellos. Como veníamos en helicóptero de la Gobernación, con el piloto y un funcionario oficial, se nos pusieron a la orden pero con un gran mutismo, sin darnos explicaciones de qué pudo haber pasado, ni dónde estaban, ni donde los habían recogido, ni cómo murieron (Correa y Mejía, 2008, página 74).

Esta realidad de las escenas del crimen abandonadas y mal manipuladas se puede apreciar en múltiples versiones que se recogieron sobre los asesinatos. Especialmente en los sucesos que ocurren en municipios con graves situaciones de orden público, donde la Fiscalía y la Policía funcionan con limitaciones y con fuertes influencias o presiones de los grupos armados.

En 1993, dos años después, en el caso de Chaparro y Torres fueron capturados dos presuntos culpables, al parecer miembros del grupo guerrillero de las FARC. Estos fueron rápidamente declarados inocentes, justo por la imposibilidad de una certeza probatoria.

Además, los testimonios que decían fundamentar la culpabilidad al parecer resultaron ser débiles para generar una condena.

Otro ejemplo es el de las pruebas dentro del caso de las interceptaciones ilegales del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) a periodistas y otros, durante el gobierno de Álvaro Uribe. En el año 2010, el exsubdirector de Fuentes Humanas de la entidad, William Romero, entregó 16 terabytes de información correspondientes a 80 millones de archivos digitales. Ante la captura de la exdirectora María del Pilar Hurtado, el periódico *El Espectador* denunció el 5 de febrero de 2015 que dentro de esa información se podían constatar, por ejemplo, las órdenes para interceptar los teléfonos de magistrados y magistradas de la Corte Suprema, así como los mandatos a las direcciones regionales de la entidad para establecer seguimientos a los mismos. El medio llamaba la atención sobre cómo esta prueba fundamental seguía siendo ignorada en las investigaciones contra los que ordenaron estas medidas ilegales.

Aun con esta prueba en poder del Estado, en el año 2013 se estableció la primera prescripción de la investigación, dentro del proceso que se le seguía a Jorge Noguera, director del DAS entre 2002 y 2005. Según se pudo averiguar, en esa información aportada por Romero podía haber documentos digitales que comprometían la responsabilidad de Noguera, pero aun así no fueron usados. En ello parece haber algo de omisión, de desidia o de incapacidad técnica para afrontar ese universo probatorio. Cualquiera de las tres razones que se encuentre, deja en entredicho el cumplimiento estatal de la debida diligencia.

En el año 2014, la organización Dejusticia publicó su estudio “Esfuerzos irracionales. Investigación penal del homicidio y otros delitos complejos” (La Rota y Bernal, 2014). En él se pudo constatar que, dentro la investigación criminal, el actual esquema de distribución de actividades tiene una cantidad de falencias. En el desarrollo de este informe se ha podido corroborar, a través de las entrevistas con víctimas y organizaciones, que las omisiones probatorias detectadas en los casos de violencia contra periodistas se deben en parte a estas desarticulaciones institucionales.

Como primera falencia, los distintos niveles (de policía, del CTI, de Medicina Legal, de fiscalía) están desconectados entre ellos. Las personas al servicio no dialogan durante las diversas etapas del proceso, ni siquiera cuando ejecutan la misma función —como recolectar información siguiendo órdenes de diferentes instancias, bien sea el laboratorio, la fiscalía URI o la fiscalía que está a cargo del caso—. Según el estudio “esta es una disgregación evidente del flujo de información que incrementa las posibilidades de pérdida o desaprovechamiento de datos, ya sea de funcionario a funcionario, o de etapa a etapa” (La Rota y Bernal, 2014, página 89). De igual forma se generan actividades duplicadas que entorpecen la práctica o que engruesan un universo probatorio ya extenso generalmente.

La segunda falencia es la desarticulación en las funciones de investigación. Quiere decir que las pesquisas van transcurriendo a muchas manos sin que exista una única persona o funcionario responsable del caso desde el inicio. Cada persona trabaja en la indagación con una actividad específica sin que ninguna pueda encargarse de la coordinación del conjunto de las tareas. Investigadores que buscan pruebas adicionales para los fiscales “reciben usualmente órdenes de diligencias específicas, sin tener información integral del caso, lo que les impide asumir la responsabilidad por el éxito o fracaso del mismo”, según Dejusticia (La Rota y Bernal, 2014, página 91).

Esta falencia puede constatarse en la versión que el periodista Fernando Ramírez ofrece sobre lo que fue la investigación del caso de Orlando Sierra. Él afirma que gran parte de la recolección de pruebas en Manizales se realizó por distintos funcionarios que recibieron órdenes desde Bogotá. Eso no solo implicó un problema de independencia, como se vio atrás, sino que además llevaba a que cada funcionario practicara una prueba tan delicada como una declaración sin tener un conocimiento completo de lo desarrollado. Según la posición del periodista, este problema se profundiza con la extensión del tiempo de investigación (Ramírez, 2014, octubre, entrevista CNMH, Trabajo de campo).

Una tercera falencia es que se generan incentivos perversos para los funcionarios y funcionarias. Esto se debe a que “no existe

una relación suficientemente clara entre los resultados de la investigación (...), con (sic) las actividades que cotidianamente realizan los investigadores y algunos de los fiscales” (La Rota y Bernal, 2014, página 91). Esto de alguna forma pretende describir que no existe una conciencia en el funcionario o funcionaria que les permita vincularse con lo bueno o lo malo de las averiguaciones. Podría decirse que se conforman con el resultado de la actividad particular que se les ha encomendado.

Para recordar la muerte de Julio Daniel Chaparro y de Jorge Enrique Torres, pero sobre todo para poner de presente la impunidad en el caso, la FLIP produjo un especial multimedia, “Lo que la violencia se llevó” (2011), en el que se revisaban los pormenores del proceso. Allí se recordó la frase que Vivian Morales, la entonces Fiscal General, expresó para justificar el cierre de la investigación en el año 2011, pocos días antes de la fecha de prescripción: “La Fiscalía sí actuó, sino que encontró una causal que le impedía continuar con la investigación como lo es la muerte de las personas sobre las cuales podría recaer la responsabilidad de esos homicidios”. De esta forma, la cabeza del ente investigador puso de presente que un resultado puede destacarse sin necesidad de evaluar los esfuerzos de los funcionarios y las funcionarias. En otras palabras, resaltó una actuación de la Fiscalía, la de cierre de investigación, dejando de lado que la muerte de los sospechosos obedece a su propia negligencia, por el excesivo paso del tiempo y por la precariedad probatoria.

Omisión en el seguimiento de líneas lógicas de investigación

Se omiten las líneas lógicas de investigación cuando quien investiga no tiene en cuenta las hipótesis del crimen que surgen de los contextos, las complejidades o los patrones. En la violencia contra periodistas la línea lógica está determinada no solo por el contexto de corrupción o violencia en el que la víctima cumple con su oficio de comunicador, sino que además está alimentada por lo que produce, escribe o dice en su rutina.

Cuando en la investigación se omiten estos contextos o los productos se tiende a privilegiar, dentro del proceso, discursos que racionalizan o justifican las agresiones. De alguna forma, en los contextos de terror siempre aparecen mensajes que buscan que la violencia no parezca lo que es, de tal forma que se aminoren sus significados, que se normalice o que se haga invisible. Generalmente son discursos que crean y difunden quienes más beneficios consiguen con los actos violentos o quienes intentan sobrevivir en medio de estos.

En Colombia, para cada población victimizada se ha usado un discurso de racionalización. Supuestamente la población campesina es agredida por ser colaboradora de la guerrilla; las asociaciones sindicalistas, por comunistas; y las defensoras y defensores de derechos humanos, por querer atentar contra el Estado y sus fuerzas militares. De esa manera se logran justificar los hechos violentos ante la opinión pública. Así, las fuerzas violentas difunden una razón engañosa, el gobierno puede aminorar su responsabilidad al generar cierto descrédito de la víctima y la sociedad en general cree entender un terror que es más difícil y complejo de lo que parece.

Ahora bien, en los casos de periodistas víctimas de hechos violentos han operado diferentes racionalizaciones. De acuerdo a lo encontrado en este informe, hay dos que se pueden resaltar. La primera es aquella en la que se les vincula con alguno de los actores armados, especialmente con las guerrillas. Suele suceder en casos en los que trabajan en temas de conflicto y derechos humanos. De esa forma, por ejemplo, operaron las interceptaciones ilegales durante el gobierno de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. Se construían relaciones entre la guerrilla y periodistas como Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, y de esa forma se justificaba la agresión a la intimidad y al trabajo, entrando en el terreno de la tortura psicológica. Del mismo modo se han perpetuado las amenazas en regiones de alta presencia del conflicto, como Arauca. Al vincular personas que ejercen el periodismo con algunos de los grupos armados, automáticamente se justifica la agresión por parte del otro bando.

Además de ser una agresión en sí misma, la estigmatización es una fórmula que prepara el terreno para otro tipo de agresiones.

Pero existe otra racionalización recurrente en el caso de periodistas víctimas: su vinculación con conflictos afectivos, o comúnmente llamados pasionales. Para el grupo investigador que preparó este Informe ha sido llamativo que, en el medio de las agresiones a periodistas, siempre se pongan las situaciones afectivas y sentimentales de las víctimas. Por enumerar algunos casos se puede hablar de cómo la defensa de excongresista Ferney Tapasco, en el caso de la muerte de Orlando Sierra, se valió de la relación sentimental del periodista con la viuda de unos de los dueños del periódico *La Patria* para explicar unos móviles del homicidio extraños al político. Vale advertir que esa versión estaba ya difundida entre la comunidad manizaleña, como un secreto a voces, y al abogado defensor le bastó con retomarla y amplificarla.

Otro caso se pudo constatar en la ciudad de Cali, sobre todo en lo que se refiere a los periodistas asesinados entre fines de los años ochenta e inicios de los noventa, la época de mayor auge del narcotráfico en la región. Para muchos de los comunicadores asesinados en esa época existe una versión en la que se vincula su muerte con algún tipo de acercamiento a las novias y esposas de los narcotraficantes (CNMH, 2014, junio, entrevista, Trabajo de campo, Cali).

Finalmente está el caso de Jineth Bedoya Lima, periodista de *El Tiempo*, víctima de secuestro, tortura y delitos sexuales a manos de paramilitares. Se podría decir que en ella confluyen los dos tipos de racionalizaciones que se han descrito, pues en el comienzo de la investigación se llegó a insinuar que las agresiones que sufrió se debieron no solo a una relación sentimental, sino que además la sostenía con un miembro de la guerrilla (Vaca, 2014, noviembre, entrevista CNMH, Trabajo de campo).

Con todo lo anterior, se resalta la importancia de volver, durante la etapa de indagación y de juicio de hechos de violencia contra periodistas, a las líneas lógicas de investigación dadas por los contextos y los productos de las víctimas. De esta forma se evita que racionalizaciones como las descritas sean las que, desde

el comienzo, determinen el desarrollo y el resultado del proceso. Al respecto la RELE recupera una afirmación hecha en la “Declaración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión”, firmada el 25 de junio de 2012 por los relatores de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Comisión Africana.

[C]uando existan evidencias de que un delito consumado pueda ser un delito contra la libertad de expresión, la investigación debería avanzar dando por supuesto que se trata de un delito de tal naturaleza hasta tanto se demuestre lo contrario, y deberían agotarse todas las vías de investigación relevantes vinculadas con los actos de expresión de las víctimas (...). [A su vez, las investigaciones deberían] facilitar la identificación y el juzgamiento de los responsables de los delitos contra la libertad de expresión, incluidos sus autores directos y autores intelectuales, así como de quienes actúan en connivencia en carácter de autores, colaboradores, cómplices o encubridores de tales delitos (CIDH, 2013, página 136).

Esto significa que la Fiscalía y los jueces y juezas, al momento de investigar crímenes contra periodistas, deben tener en cuenta las hipótesis del crimen que se desprenden de lo que hacía, escribía o decía la víctima en el ejercicio de su oficio. Al menos hasta que logren demostrarla o desvirtuarla, pero de ninguna manera pueden renunciar a ella. Pero, según Pedro Vaca, se han mantenido en la omisión de las líneas lógicas de investigación, abriéndole así el paso a otras versiones como las que racionalizan o justifican la violencia. Lo que el director de la FLIP pide no es que se privilegien las hipótesis que se desprenden de lo que denunciaba la víctima, sino que al menos se tengan en paridad con las otras. Sin embargo, dice, eso no pasa a veces.

Lo que se ha podido analizar es que esto se debe al menos a tres conductas de las entidades y personas que investigan. Primero, existe una razón de conveniencia que está generada por la falta de independencia de la administración de justicia o por el temor a

las represalias por parte de las personas investigadas. Los hechos de violencia contra periodistas generan una rápida indignación social y ante esto el ente investigador debe reaccionar para dar respuestas. De esa forma, en el caso de tener que llegar a vincular a personas que controlan la entidad a nivel regional o que podrían llegar a hacer daño, es mejor tender hacia una versión por fuera de las líneas lógicas, que aleja el foco de las personas verdaderamente responsables y, de paso, da alguna respuesta a la sociedad indignada que la está pidiendo.

Otra conducta, ligada a la desarticulación en la investigación que se explicó en el acápite anterior, es la falta de incentivos para mantenerse en la línea lógica. Las hipótesis del crimen que se pueden construir a partir de las denuncias y los trabajos de periodistas víctimas exigen una agenda compleja de indagación. Generalmente apuntan a estructuras criminales que son grandes, organizadas, con capacidad de evasión y con influencia política o económica. Por su parte, las versiones que racionalizan la violencia y que se alejan de las líneas lógicas de investigación son, por definición, más fáciles de resolver en términos de una agenda de indagación. Por eso mismo son versiones que calan fácil en el imaginario general, pues no requieren de un gran complejo probatorio para dar una apariencia de verdad.

Si a lo anterior se le suma que parece haber en las personas a cargo de la investigación más motivos para interesarse en el buen resultado de la actuación inmediata que les corresponde (en la práctica de una prueba, en la realización de un informe) que en el buen resultado de la investigación en general, se tiene que siempre estarán más tentadas por resolver sus actuaciones partiendo de las versiones menos complejas y evitando aquellas que se fundan en las líneas lógicas de investigación.

Existe una tercera conducta que busca alejarse de las versiones que se basan en las líneas lógicas de investigación. En ella está de acuerdo el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, pero aun así es una hipótesis que requiere ser profundizada. Se trata de cierta animadversión entre funcionarios y comunicadores. Por una parte no se puede desconocer que quienes ejercen el periodismo cumplen una función de control y denuncia sobre

los poderes públicos, incluso sobre el judicial, construyendo así una relación de tensión frente a estos. Por otra parte, existe una constante pugna por la información que dé veracidad, bien en la investigación periodística o en la judicial. Se establece entonces una relación problemática. Mientras el trabajo periodístico es buscar la verdad y difundirla, acudiendo muchas veces a documentos reservados o información muy delicada aportada por diversas fuentes, la persona a cargo del trabajo judicial debe garantizar la presunción de inocencia y utilizar mecanismos que no entorpezcan su trabajo. De esta forma medios y fiscalías se mantienen en competencia, lo que podría influir en la actitud de quienes investigan crímenes cometidos contra periodistas. Se corre el riesgo de encontrar fiscales que presumen la imprudencia o hasta la mala fe de la víctima, porque parten de las malas experiencias propias con personas en ejercicio del periodismo. No obstante, como se dijo, esta es una conducta que requiere de más exploración para arrojar conclusiones más sólidas.

La RELE cuenta que escogió 157 casos de asesinatos de periodistas de todo el continente americano y encontró que en la mayoría no se habían seguido todas las líneas lógicas de investigación que podrían ayudar a identificar a las personas verdaderamente responsables.

El informe señaló que el móvil del homicidio —en particular, si estuvo vinculado con la actividad periodística de la víctima— solamente había sido establecido en número reducido de casos. Asimismo, la Relatoría observó que la omisión de líneas lógicas de investigación o la falta de diligencia en la recolección de pruebas tuvieron repercusiones delicadas en el desarrollo de los procesos cuando estos han entrado en las etapas de acusación o de juicio. No haber agotado en forma completa las líneas lógicas de investigación ha incidido, sobre todo, en que en general no se haya identificado a los autores intelectuales (CIDH, 2013, página 132).

De alguna forma esto dimensiona el grado de importancia que este objetivo tiene para la obligación de debida diligencia. Cuantitativamente faltaría por definir, en los casos de crímenes contra periodistas cometidos en Colombia, el grado de despreocupación

frente a las líneas lógicas de investigación, una labor que se dificulta dadas las deficiencias de gestión de la información en la rama judicial y en la Fiscalía. Aun así ya se ve que en muchos casos, sobre todo en las etapas iniciales del proceso, las hipótesis fundadas en versiones lejanas a la actividad periodística impulsan la investigación, lo que entorpece desde el inicio el derecho a la verdad y a la justicia o hace perder tiempo valioso hasta que se recompone una hipótesis acorde a las líneas lógicas.

En el caso de Orlando Sierra, para llegar a establecer la responsabilidad de Ferney Tapasco, el Tribunal aceptó la línea lógica de investigación de la Fiscalía. Ya la decisión de primera instancia, aunque había absuelto al político, había reconocido aspectos que entendían que el periodista había sido asesinado por lo que hacía en el marco de su oficio.

[L]a tesis de que el atentado obedeció a su condición de periodista ofrece mayor respaldo, pues dentro del plenario obra prueba de que este había recibido amenazas por lo que escribía, sus amigos y colaboradores dan fe de ello, y de las constantes llamadas que se le hacían en orden a que bajara el tono de sus columnas y comentarios de prensa, amén de que obra una declaración proveniente de una ciudadana, la señora Luz Ángela Díaz Orozco, la cual no ha sido tachada de falsa por los defensores, y que sirvió de base para la condena de Luis Miguel Tabares Hernández [el autor intelectual], en la que de manera puntual indica que la muerte fue ordenada por una persona a la que identifica como Picado, quien advirtió que supuestamente el periodista tenía evidencias contra él (Colombia, Rama Judicial, Juzgado Único del Circuito Especializado de Pereira, Sentencia 24/12/2013, página 50).

Como puede verse, en este caso se superaron otro tipo de versiones que racionalizan o justifican la violencia contra la libertad de expresión. Continúa la sentencia de primera instancia:

Siendo esa la situación que observa el Despacho, se estima que le asiste razón al ente acusador cuando contempla como una de

las causales de agravación de homicidio del señor Sierra Hernández, la descrita por el numeral 10 del artículo 104 del código de penal, pues la prueba recogida muestra que su crimen fue perpetrado con el conocimiento de que se trataba de un periodista y que su muerte era para acallar su voz (Colombia, Rama Judicial, Juzgado Único del Circuito Especializado de Pereira, Sentencia 24/12/2013, página 50).

La sentencia del Tribunal Superior de Manizales, que falló en segunda instancia, reconoció también esta línea lógica de investigación, con la diferencia de que sí terminó llegando a la condena.

Lo que viene de decirse se explica porque la prueba que se trajo a la actuación da cuenta que la razón de su muerte fue precisamente porque en su columna —“Punto de Encuentro”—, criticaba a la dirigencia política, como puede inferirse del testimonio que dio el médico Flavio Restrepo —quien también escribía para “La Patria”— al señalar que días anteriores a la muerte violenta de Sierra Hernández, este le aconsejó prudencia en lo que escribía porque a él un político ya lo había amenazado con matarlo; en una de las columnas que el inmolado publicó titulada “Cogito ergo pum”, deja ver el temor que sentía por ejercer el derecho de expresión, como fue advertido por Nicolás Restrepo Escobar al decir: “hay una columna suya que es muy diciente escrita a finales del año pasado titulada “Cogito Ergo Pum” en la que manifiesta directamente que él le tiene miedo a que le disparen”. En otro escenario, Luis Miguel Tabares Hernández —alias “Tilín”, uno de los partícipes de este homicidio— le comentó a Néstor Iván Arboleda Franco —conocido como “El Flaco”— que: “la lengua es el peor enemigo de uno que porque ‘ese guevón del periodista se puso hacer comentarios del señor... y vea lo que se buscó, una quebrada, es decir, la muerte”.

De ahí que negar esa situación ensayando otras hipótesis como el supuesto interés de las directivas de “La Patria” de evitar que Orlando Sierra se apoderara del diario, o presuntas desavenencias que existían con su exesposa, son simples especulaciones que

no están respaldadas dentro de la actuación (Colombia, Rama Judicial, Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal., Sentencia 24/06/2015, páginas 21 y 22).

Estas afirmaciones que se destacan en ambos fallos permiten dejar clara la importancia que tiene el seguimiento de una línea lógica de investigación en este tipo de casos. Hacerlo o no hacerlo hace una diferencia trascendental en el esclarecimiento de los hechos, mucho más cuando las hipótesis que surgen de ella, gracias a los trabajos del periodista en ejercicio, no logran ser desvirtuadas en juicio.

EL PASO DEL TIEMPO

Una de las últimas observaciones de la RELE se refiere a cómo los procesos penales se perpetúan sin resultados. Sucede que las investigaciones correspondientes al asesinato de periodistas tienen una pelea con el tiempo y en ella es este el que suele ganar; porque pasa sin que las investigaciones se muevan junto a él. Así es como las pesquisas duran años, décadas, hasta que se encuentran con su archivo o su prescripción. Esta es una realidad ampliamente estudiada por las organizaciones civiles enfocadas en la materia de libertad de prensa. Cada una de ellas le endilga nuevas causas a esta demora de resultados, las cuales serían imposibles de recapitular en este espacio. Basta advertir que muchas se refieren a las dificultades en investigación que se han descrito en este capítulo. Es decir que sin duda esta es una expresión de la impunidad que a su vez es generada por deficiencias en los métodos de investigación y en las instituciones encargadas.

El exagerado paso del tiempo en los procesos, sin resultados, tiene efectos nocivos que van más allá de la sola falta contra el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. Primero, la demora hace que se pierda material probatorio fundamental para la solución de los casos. El juez o la jueza pierden proximidad y cercanía con las pruebas porque algunas se desgastan o son sus-

ceptibles de ser extraviadas. También está visto que el paso del tiempo aumenta el riesgo de sean asesinadas las personas que son testigos, o amenazadas para que cambien sus versiones. Al ritmo de los años de parálisis investigativa, el asesinato de testigos en el caso de Orlando Sierra ocasionó que no pudieran corroborarse sus posiciones dentro de etapas procesales relevantes como el juicio, algo que pudo haber ahorrado tiempo para llegar a la condena. En segundo lugar, sobre todo en los casos de las amenazas a periodistas que no se investigan, el tiempo de impunidad obliga a que deban seguir en su labor de comunicación con esquemas de seguridad que dificultan su trabajo. Si no se da con el responsable de la amenaza, es difícil determinar si está desactivada o no, así que las garantías de protección deben mantenerse y, como consecuencia, las fuentes se cohiben ante la presencia de escoltas y se hacen imposibles los encuentros confidenciales con informantes. En otras palabras, la impunidad perpetuada en el tiempo no deja resolver los factores de riesgo de una amenaza y los esquemas de protección terminan por volverse rutinarios y permanentes, lo que conlleva como costo la obstaculización del oficio (Vaca, 2015, enero, entrevista CNMH, Trabajo de campo).

Frente al paso del tiempo el Estado colombiano ha establecido dos estrategias que intentan atacar directamente el problema. Por un lado, declarar de lesa humanidad algunos de los asesinatos para impedir cualquier tipo de prescripción; entre estos está el caso del asesinato de Guillermo Cano, y el de secuestro, tortura y delitos sexuales contra Jineth Bedoya. La otra estrategia fue aprobar y sancionar una ley (la ley 1429 de 2010) para que los homicidios sobre periodistas, de esa fecha en adelante, no prescriban en 20 sino en 30 años después de ocurridos los hechos. Ambas apuestas de alguna forma también obedecieron a una respuesta coyuntural. Desde el año 2008 venía posicionándose una demanda social y mediática que reclamaba sobre la inminente prescripción de los casos de asesinato de finales de los años ochenta y principios de los noventa, la mayoría de ellos perpetrados por los grupos de narcotráfico. También fue una respuesta a las peticiones que distintas organizaciones como la RELE y la SIP aun hoy continúan hacien-

do para que la prescripción no se aplique en las investigaciones de violencia contra periodistas por razones de su oficio.

Ahora bien, si no se transforman las demás dificultades en la indagación y el juicio, estas estrategias pueden devolverse como políticas contrarias a lo deseado, pues terminarían legitimando aún más el amplio paso del tiempo, quitándole de encima al Estado la responsabilidad de no dejar prescribir los procesos. Existen problemas institucionales y normativos en el manejo de la justicia que generan un paso del tiempo sin resultados y por lo tanto deben removerse si se quiere dar sentido a la política de no prescripción o de prescripción ampliada. Uno de los problemas jurídicos con el paso del tiempo, que impacta directamente sobre la impunidad, tiene que ver con el uso abusivo de la figura de suspensión que reglamenta el artículo 152 de la ley 600 de 2000 (el antiguo Código de Procedimiento Penal que rige para crímenes anteriores al 2004). Bajo esta posibilidad procesal, que es permisiva, que parece contener unos límites muy débiles, que permite que el funcionario o funcionaria judicial no tengan que avanzar ni declarar la inhibición o la preclusión, muchos de los casos se han estancado viendo pasar el tiempo. Son estas el tipo de actuaciones que, entre otras cosas, hacen inocuas las propuestas de extensión de los plazos de prescripción.

LA IMPUNIDAD Y LA MEMORIA

La impunidad en los casos de asesinato o amenaza contra periodistas no solo se convierte en la imposibilidad de conocer quiénes fueron las personas responsables o cuáles fueron las circunstancias del acto violento como tal, sino que además enturbia el mensaje que la víctima de asesinato o de amenaza estaba intentando construir y difundir en función de su oficio. La veracidad de sus columnas, sus notas de radio, televisión o prensa quedan suspendidas muchas veces porque el terror que se impone en la opinión pública, en las audiencias, llega incluso a sembrar la duda, con mayor razón cuando proliferan las versiones de justificación.

También la impunidad es una pérdida para la construcción de memoria. Un proceso penal exitoso identifica y condena a las personas responsables en cada una de sus escalas —autoras y determinadoras— y describe con puntualidad las conductas que requieren una condena pública, permite que la historia de esa violencia tenga cierto grado de fijeza, que no quede a la deriva de una interpretación cualquiera. La memoria requiere instancias que ayuden a fijarla, a que no caiga en relativizaciones que indiquen que cualquier interpretación de los hechos es válida.

Tolerar la impunidad en una sociedad es debilitar dramáticamente la garantía de no repetición. Si no hay verdad, justicia y reparación, se enviará el terrible mensaje de que matar periodistas no cuesta nada. Y entonces los criminales repetirán sus acciones.

9

LOS SIGNOS DE LA RESISTENCIA

Si la acción de los grupos violentos contra medios y periodistas fue tan grave como pertinaz en este periodo histórico, la acción de las organizaciones sociales y los colectivos periodísticos fue ejemplar y proactiva. Buena parte de esta violencia se explica por su estado de indefensión, la debilidad de sus organizaciones, la apatía de la sociedad y la fragilidad del apoyo colectivo a libertades civiles, como la libertad de expresión. Esa indefensión era explicable: estaban en lugares alejados pero en el centro de los acontecimientos violentos, no gozaban de condiciones laborales estables y seguras, sufrían de estigmatizaciones de unos y otros de los grupos victimarios y no tenían más defensa que la inestabilidad de su propio oficio. El gran grupo de periodistas regionales y locales estuvo y sigue expuesto a una diversidad de agresiones, que tampoco fueron ajenas a periodistas de grandes medios con reconocimiento y respaldo, quienes sufrieron las repercusiones directas de la violencia. Son frecuentes las opiniones sobre este estado de indefensión en las entrevistas que se hicieron a periodistas en las regiones para la elaboración del presente Informe, quienes destacan también las prácticas que generó. Relata una fuente del Caquetá:

Eso era impresionante, una vida llena de temores, de preocupaciones, con una impotencia grande. Como que toda esa situa-

ción lo amordazaba a uno y lo obligaba a mantener en silencio todo ese dolor y toda esa angustia para poder sobrevivir y para proteger la integridad de nuestra hija. Eso ha sido fuerte aunque uno ha intentado sanar. Yo no guardo rencor y superar ese dolor del todo ha sido complejo (CNMH, 2013, entrevista, Trabajo de campo, departamento del Caquetá).

Anota uno de ellos en Medellín:

Los mismos actores ya tienen una clasificación para los periodistas, cuando uno sube a las comunas ellos dicen “este medio son unos lambones, estos son un medio serio”, este es el nombre que ellos le dan, serio (CNMH, 2013, entrevista, Trabajo de campo, departamento de Antioquia).

Señala un entrevistado en Antioquia:

Otra de las estrategias de supervivencia es identificar muy bien cuáles son los actores del conflicto y no enfocarse específicamente en uno, sino como decimos aquí darle palo a todos por igual, porque si no uno empieza a correr peligro de que lo asocien con un bando u otro (CNMH, 2013, entrevista, Trabajo de campo, departamento de Antioquia).

“¿Cómo se portó la emisora con ustedes? —Hicieron el acompañamiento en el entierro, hasta ahí” —afirmó una víctima del Cauca—. Pero la indefensión se acentuaba con la indiferencia social frente al trabajo periodístico.

La imagen del periodista hace que la gente nos vea como ‘si se va este no importa o si lo echaron mal echado no importa’, no hay solidaridad del mismo gremio con nosotros mismos, imagínese la sociedad civil, menos (CNMH, 2013, entrevista, Trabajo de campo, departamento del Caquetá).

Este es uno de los temas centrales en la violencia contra periodistas: la posición de la sociedad frente a las agresiones. Si bien no existe una indiferencia absoluta, la verdad es que el periodismo o despierta algunas reticencias sociales o inclusive moviliza algunas indisposiciones. La libertad de expresión, como otras libertades civiles, no está interiorizada sólidamente en el comportamiento democrático de la sociedad colombiana y las resistencias frente al periodismo tienen que ver con la soberbia, la falta de rigor y los sesgos de algunos medios y de algunas de las personas que ejercen este oficio. Son vistos más como un poder, como otros poderes de la sociedad, que como proyectos de servicio público. Infortunadamente, la idea de que la violencia contra periodistas causa daño no solo a los medios sino a la sociedad toda, no es una idea generalizada dentro de los diferentes sectores de la sociedad colombiana.

LA SOLIDARIDAD FRENTE A LA AMENAZA

Junto a los actos de los grupos violentos empezaron a aparecer gestos de diferentes organizaciones sobre todo periodísticas que respondían a las necesidades del contexto de un oficio agredido. Las formas de actuar y las estrategias adoptadas por estos grupos son un observatorio invaluable para analizar la violencia que sucedió en el país durante este periodo, pero sobre todo para resaltar las formas de la solidaridad que genera una sociedad cuando se ve amenazada. Su estudio permite sacar conclusiones pedagógicas que pueden ser útiles —con los ajustes convenientes— en otros contextos en que la libertad de expresión y el derecho a la información estén en peligro.

Una primera característica de estas experiencias fue que nacieron dentro del mundo periodístico, cuando precisamente las formas de organización del sector habían declinado o estaban en franco deterioro. Y más que iniciativas de los propios medios se trató de iniciativas de organizaciones que emergieron de la asociación de comunicadores y periodistas de base y de las regiones, de organismos internacionales de cooperación y de alianzas en-

tre entidades periodísticas y organizaciones de la sociedad civil. Fecolper, por ejemplo, es una agremiación nacional de periodistas, mientras que el proyecto Antonio Nariño fue la conjunción de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, Andiaros, la Fundación Friederich Ebert, la Fundación Social (en un primer momento) y la Fundación para la Libertad de Prensa. Las instituciones internacionales como el PNUD o la Unión Europea, para citar solamente dos de su naturaleza, entendieron que la situación de la información y de la libertad de expresión era importante dentro del conjunto del conflicto colombiano y apoyaron diversas iniciativas que se explorarán en esta parte del texto.

En su Informe “Aproximación al apoyo a medios y a periodistas en Colombia (2000-2006) y aportes para la construcción de una estrategia conjunta 2006-2015”, realizado por Marisol Cano Busquets y Thora Gehl (2006), se describe con acierto el desarrollo de las iniciativas de apoyo a medios y periodistas en Colombia:

La década comprendida entre los años 1996 y 2006 —escriben— supuso para Colombia un importante periodo en la creación y desarrollo de organizaciones especializadas en el apoyo a medios de comunicación, defensa de la libertad de expresión y reflexión sobre la formación de los periodistas (Cano y Gehl, 2006, página 5).

Emergen organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, la Corporación Medios para la Paz y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano —hoy Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo Iberoamericano— que, sin lugar a dudas, han dinamizado el debate y contribuido a entender la prioridad y la urgencia del tema en el contexto colombiano.

En el periodo 2000-2006 es posible identificar una gran cantidad de acciones en este campo y en procesos de comunicación para el desarrollo, que comprende actividades entre las que se encuentran talleres de capacitación en el marco del conflicto armado, desarrollo y fortalecimiento de emisoras comunitarias e indígenas, apoyo a mecanismos de alertas tempranas frente a amenazas a la libertad de expresión, diseño e implementación de es-

trategias de comunicación que involucran medios en proyectos de desarrollo social, programas para incidir en la agenda temática de los medios vinculados a determinadas proyectos de instituciones nacionales o internacionales, estudios sobre cubrimiento informativo de medios por materias, creación y desarrollo de incipientes sistemas institucionales estatales de protección de periodistas.

La presencia de actores internacionales también ha sido múltiple y diversa. Se han vinculado a proyectos puntuales, en procesos de más largo aliento, o en apoyo material, técnico y profesional a las organizaciones nacionales de defensa y promoción de la libertad de prensa. Entre las organizaciones, gobiernos y empresas nacionales e internacionales que han estado implicadas se encuentran: Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Internacional Media Support, National Endowment for Democracy, IFEX, Knight Foundation, Sociedad Interamericana de Prensa, Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF, PNUD, UNESCO, ACNUR, Fondo de Paz de la Organización de Estados Americanos, Fundación Konrad Adenauer, Fundación Broederlijk Denle, Fundación Friedrich Ebert Colombia, embajadas Británica, de los Países Bajos, de Suecia, de Alemania y de Canadá en Colombia, entre otras, la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), Fondo de Canadá para las Iniciativas Locales, Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo, CEMEX, Programa por la Paz, y las colombianas Fundación Éxito, Fundación Social y Fundación Suramericana de Seguros.

Los medios de comunicación, unos con mayor énfasis y permanencia que otros, han hecho sus propios aportes, vinculándose a proyectos como dinamizadores del debate o difusores de información, han abierto sus puertas a estudios de análisis de contenido, han estimulado y financiado foros y seminarios, han permitido que sus periodistas participen como talleristas en acciones impulsadas por organizaciones nacionales; se han asociado para adelantar campañas contra la impunidad y han desarrollado alianzas para el cubrimiento de determinados temas problemáticos para el país.

Además, esta historia reciente de la actividad de apoyo a medios y a periodistas en Colombia ofrece un acervo importante de reflexiones, testimonios y análisis sobre lo que significa hoy informar en Colombia. Se trata de la voz colectiva de los periodistas reflexionando sobre el ejercicio de su profesión y buscando cómo mejorar la calidad de la información que entregan a la sociedad. En este aspecto es posible encontrar documentos, informes de investigación, libros y memorias de encuentros y de talleres de formación, que resultan un valioso material de trabajo para identificar necesidades y proyectar la labor en el campo del apoyo a los medios y a los periodistas (Cano y Gehl, 2006, página 5).

Una segunda característica es que la acción de estas entidades se fue especializando en algunos campos estratégicos. Por ejemplo, en la protección de periodistas, lo que significó la creación de redes de alerta, mecanismos de apoyo a personas amenazadas, denuncia pública de cada uno de los actos que significaban una afrenta a un periodista, cualquiera que fuera, y formas de coordinación y articulación con las instituciones del Estado que también estaban preocupadas por el tema.

La Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que hace seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la protección de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que ejercen la libertad de expresión sobre asuntos de interés público en Colombia. Además promueve la libertad de expresión y el acceso a la información.

La FLIP brinda asesoría y acompañamiento a periodistas con el fin de que la libertad de expresión sea garantizada por el Estado y reconocida por la ciudadanía como un valor importante en la sociedad. Esto se desarrolla promoviendo el fortalecimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión desde una perspectiva amplia en entornos análogos y digitales. Cuenta con una red de 30 corresponsales distribuidos en todo el país, quienes trabajan de manera voluntaria y reportan casos de violaciones a la libertad de prensa en diferentes regiones.

Junto a la documentación y denuncia, la FLIP presta asesoría jurídica a periodistas agredidos, da capacitación en autoprotección, libertad de expresión y acceso a la información pública, ofrece apoyo psicosocial a periodistas víctimas y activa mecanismos de protección para periodistas en riesgo.

Son muy importantes los pronunciamientos que la Fundación hace frente a las diferentes violencias contra periodistas, así como los informes y las estadísticas sobre este tema que desde hace años viene realizando diaria, mensual y anualmente y que han permitido que haya una observación crítica permanente de las situaciones de violencia que afectan a periodistas en el país, además de su repercusión en el escenario internacional. Su labor ha sido fundamental para la memoria activa de lo que ha pasado y pasa con periodistas y medios de comunicación en Colombia.

La tarea de protección ha sido uno de los grandes aportes de la Fundación. Ya sea por la consolidación de una red de alerta, la promoción de medidas de autoprotección, su permanente interlocución con las autoridades regionales y nacionales, por la investigación sobre la realidad de la libertad de expresión en zonas del país en las que se presentan serias dificultades y por el acompañamiento, hasta donde es posible, de casos de periodistas amenazados, desplazados o exilados. El monitoreo, departamento por departamento, sobre el estado de la libertad de prensa es una labor fundamental que permite conocer públicamente su situación, así como analizar de manera particular e integral las realidades que se viven en el país. Se trata de una información básica para las acciones de seguimiento y que además se puede contrastar con la producida por las diferentes entidades del Estado.

Una de las primeras reacciones para la resistencia fue la de encontrar mecanismos que permitieran la protección de periodistas ya sea a través de procedimientos que alertaran frente a amenazas o acciones en su contra o que tuvieran una capacidad de movilización social ante el peligro o la realización de actos de violencia.

También el promover, junto con otras organizaciones periodísticas, la responsabilidad del Estado en la protección efectiva e inmediata de periodistas víctimas de amenazas a través de la

Unidad Nacional de Protección (UNP) adscrita al Ministerio del Interior y creada en el 2011, encargada de liderar la política de prevención y protección de los derechos humanos en el país, entre ellos la libertad de expresión y que coordina el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de medidas (CERREM). La UNP se encarga de analizar la situación de riesgo de periodistas en condiciones de vulnerabilidad e implementa las medidas de protección aprobadas por el CERREM. Esta institucionalidad, con la presencia de diferentes agentes del Estado (Ministerio del Interior, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Unidad administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y Defensoría del Pueblo), organizaciones internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Los Refugiados (ACNUR) y delegados de cada una de las poblaciones objeto del programa.

La FLIP ha llevado a cabo otras tareas muy importantes ligadas al desarrollo del conflicto interno. El seguimiento, análisis y crítica de la situación de impunidad que rodea los asesinatos y otras expresiones de violencia contra periodistas, su contribución con la de otras organizaciones y medios de comunicación a la declaratoria de crímenes de lesa humanidad de algunos de ellos, el análisis de casos como también de realidades de violencia ligadas con el oficio periodístico, la promoción del acceso a la información y la lucha contra todas las formas de censura, sean directas o indirectas.

El Proyecto Antonio Nariño es una alianza interinstitucional creada en el 2001 por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Fescol, la FLIP, Andiaros y la Fundación Social. Desde entonces ha estimulado proyectos para promover la libertad de expresión e información, el respeto y protección del oficio periodístico y el acceso a la información como un bien público. Son reconocidos sus aportes al monitoreo de información del conflicto, la generación de pautas para elevar la calidad del periodismo, la generación de debates y foros públicos y más recientemente por la elaboración de un índice sistemático sobre la libertad de

expresión y el acceso a la información en Colombia a partir de una encuesta nacional a varios centenares de periodistas del país. La segunda de ellas (2012-2013) produjo como resultado que un 21 por ciento del grupo de encuestados afirmó haber sido agredido por miembros de la fuerza pública y un 14 por ciento por grupos al margen de la ley; un 72 por ciento asegura que la pauta publicitaria no se distribuye de manera transparente; un 57 por ciento dijo que había mejorado el acceso a la información pública, un 29 por ciento ha tenido restricciones por parte de las autoridades para su libre movilidad, un 23 por ciento cree que ha sido vigilado ilegalmente por parte del Estado y un 47 por ciento ha evitado publicar contenidos por temor de ser víctimas de ataques contra la integridad de su vida. Es muy preocupante que, si bien se han disminuido los índices de asesinatos de periodistas en Colombia, aún se mantienen unas condiciones muy desfavorables para el ejercicio libre del periodismo en el país.

La FNPI (Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano), creada hace 20 años por Gabriel García Márquez, ha sido una entidad decisiva para el desarrollo del periodismo tanto en Colombia como en general, en Iberoamérica. Y lo ha sido por su filosofía abierta y flexible, su concepto de formación desde la experiencia de los maestros y las maestras del periodismo, su capacidad de generar proyectos que fortalecen la libertad de expresión y el acceso a la información y su conversión en una gran plataforma para el intercambio entre periodistas y su diversidad de redes. La Fundación ha sido muy activa en el tema de las relaciones entre el periodismo y el conflicto: ha participado en la creación y actualización de proyectos de periodismo y conflicto interno —la propia FLIP, el PAN—. Ha apoyado redes de periodistas nacionales y regionales tanto en su asociación y protección como en sus procesos de mejoramiento de la calidad de su oficio, ha promovido foros, seminarios y estudios sobre el papel de los medios de comunicación en la representación del conflicto interno, ha mantenido vínculos muy cercanos con organizaciones internacionales para denunciar los atentados contra la libertad de expresión, ha promovido el surgimiento de medios independien-

tes y ha participado en actividades de formación, especialmente en las regiones, dentro de las iniciativas informativas durante la negociación con la guerrilla de las FARC en La Habana.

La Corporación Medios para la Paz es un buen ejemplo de cómo contribuir a los procesos de paz. Durante los años de su funcionamiento organizó seminarios de formación en las regiones, monitoreos y publicaciones sobre la cobertura informativa, actividades de debate público sobre el papel del periodismo, seguimiento de casos de periodistas amenazados y tareas de asociación particularmente en las regiones. En su misión buscaba propender porque periodistas, fuentes, audiencias y empresarios de medios “ejercen su derecho a la información, con el fin de contribuir a la consecución de la paz y la consolidación de la democracia”. Y entre sus principios fundacionales Medios para la Paz señalaba: “Propiciar en los medios de comunicación el ejercicio ético y responsable del oficio. Desarmar el lenguaje a través de los medios de comunicación; despejar la ignorancia de las causas del conflicto, estimular la sensibilidad frente a sus consecuencias y posibles soluciones”.

Fue muy destacado el trabajo de formación que hizo a través del Diplomado de Periodismo responsable en el conflicto armado, realizado conjuntamente con la Pontificia Universidad Javeriana y su guía “Para desarmar la palabra: diccionario de términos de conflicto y paz (1999)”.

La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) se define como una federación de organizaciones y entidades de periodistas que busca “lograr condiciones laborales, económicas, sociales y políticas propicias a los profesionales y trabajadores directos de la comunicación en Colombia que garanticen su calidad de vida y libre ejercicio de la profesión desarrollando programas de bienestar social, formación, iniciativas legales y de seguridad”. Fecolper ha desarrollado un persistente trabajo de asociación, de manera directa, en las regiones, realiza pronunciamientos cuando se presentan casos contra la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión periodística y participa en las instancias de articulación entre entidades y de estas con el Estado.

Mucho más reciente es el trabajo de Consejo de Redacción, una organización de periodistas de investigación que en pocos años ha construido una presencia consistente y activa en el campo periodístico, a través de sus actividades de formación, estudios, bases de datos y congresos. Una de sus iniciativas más destacadas, apoyada entre otras entidades por la DW (Deutsche Welle), es la plataforma de comunicación orientada a proponer acciones en las que el periodismo se vincula con el conflicto y el postconflicto en temas como la violencia sexual, la libertad de expresión e internet, las narrativas de la guerra y las condiciones de vulnerabilidad del ejercicio del periodismo en el país.

Hay temas transversales a la acción de las organizaciones mencionadas: todas ellas están focalizadas en los problemas del periodismo, se han preocupado por la generación de información en contextos de conflicto, resaltan la importancia de las regiones y encuentran en la formación un lugar estratégico de su acción. También tienen una vocería en la opinión pública, estimulan la asociatividad y las redes de alerta, construyen guías para fortalecer la calidad de la labor periodística y promueven debates públicos sobre las realidades del periodismo.

Aunque en algunas de ellas el periodismo del conflicto es el tema central, en otras la diversidad temática es mayor puesto que el objetivo fundamental es la formación de periodistas, desbordando de esa manera el tema específico del conflicto.

Las coincidencias en cuanto a la formación en contextos de guerra son muchas: en general estas organizaciones han promovido, desde diplomados formales y sistemáticos hasta talleres y foros en los que el centro es la información en el conflicto y la labor periodística. Con ello se entiende el análisis de la situación de medios y periodistas en zonas de guerra, los procedimientos de alerta y los mecanismos de autoprotección a los que pueden acudir, como también los aprendizajes básicos del oficio, el desarrollo de las técnicas y los géneros periodísticos y las cuestiones más directamente referidas a la ética y la responsabilidad periodística. Este último punto ha sido clave y su aproximación se ha hecho a través de consultorios éticos y análisis de casos, pero también de iniciativas

de los medios como defensorías del lector y editores públicos o de la comunidad como ligas de televidentes y veedurías. En “Prensa, conflicto armado y región”, se hizo un seguimiento documentado del Diplomado de Periodismo responsable en el conflicto armado (Medios para la Paz y Pontificia Universidad Javeriana, 2006), inclusive recurriendo a indicadores de construcción, exactitud y coherencia informativa, de contexto, de pluralidad y manejo de fuentes de información, de investigación periodística, de tematización informativa y de impacto de la información.

Los problemas que se han detectado en el periodismo del conflicto no se reducen solamente a un déficit de formación. Lo que se tiene es una realidad más integral y compleja en la que intervienen otros factores que ya se han mencionado a través del Informe, como las diversas estrategias de los actores del conflicto, la susceptibilidad que genera en los grupos violentos el impacto de medios y periodistas, el peso de la información en la conformación de la opinión pública nacional pero sobre todo regional y local y la capacidad de movilización que tienen los medios de las comunidades locales, entre otros asuntos.

Una tarea importante de estas organizaciones ha sido la construcción de una opinión pública tanto sectorial (es decir, del mundo de la información y del oficio del periodismo) como global, en el que las preocupaciones sobre el periodismo en el conflicto han entrado a formar parte de la agenda pública.

Las actividades de las organizaciones que han participado de esta resistencia activa durante los años del conflicto interno colombiano, han sido posibles sobre todo por las ayudas de las agencias de cooperación, los organismos internacionales y las representaciones diplomáticas. Hay, por una parte, instituciones internacionales que tienen líneas de actuación específicas en el periodismo como la NED (National Endowment for Democracy), la Knight Foundation, la Fundación Konrad Adenauer o la Fundación Friedrich Ebert, entre otras, pero la gran mayoría son organizaciones que se preocupan por el desarrollo, la democracia, la justicia o el medio ambiente y que apoyan en algunos casos programas que tienen que ver con el periodismo y la paz.

Se debe resaltar la actividad durante estos años de entidades internacionales del campo periodístico. La SIP ha estado atenta a los problemas de la libertad de expresión en Colombia e inclusive le dedicó esfuerzos particulares a la situación de impunidad, documentando casos de asesinatos de periodistas y haciendo un seguimiento crítico a los fenómenos persistentes de impunidad. En el escenario internacional han sido relevantes los pronunciamientos y denuncias de la SIP.

El IPYS (Instituto de Prensa y Sociedad) siendo una iniciativa nacida en el Perú, también se ha interesado por la situación de la violencia contra medios y periodistas en Colombia. Reporteros sin Fronteras se ha acercado sistemáticamente a las realidades del periodismo colombiano, ha hecho informes especiales y denuncia los casos que se presentan en el país. El Comité para la protección de los Periodistas (CPJ) publica información sobre violación de derechos de periodistas en Colombia como lo hace de otros países del mundo, ofrece al público estadísticas sobre asesinatos de periodistas y produce informes sobre amenazas y otros actos de agresión contra periodistas. Estas organizaciones le han dado visibilidad a lo que ocurre en Colombia y han sido decisivas para ubicar la problemática colombiana en el escenario internacional.

Por ejemplo las continuas publicaciones que hacen medios y periodistas de las columnas y editoriales de Guillermo Cano y Orlando Sierra (“Tinta indeleble” o los dos libros, uno de columnas y otro de entrevistas, de *La Patria* sobre Orlando Sierra), también la reemisión conmemorativa de intervenciones periodísticas, como el caso de Jaime Garzón (hoy hay un segmento llamado “El garzonazo” en el programa “En la Jugada” de RCN radio). También existen relatos y publicaciones, bien en libros o en notas de prensa, que dan cuenta de la vida y obra de periodistas asesinados (por ejemplo las publicaciones sobre Luis Eduardo Gómez). También son relatos que cuentan los pormenores del asesinato y las dificultades en el proceso de investigación y condena de responsables. En este punto hay que resaltar la capacidad narrativa y de publicación que en general tiene el grupo de periodistas, lo cual les facilita este tipo de iniciativas de visibilización y memoria. Sin

embargo, sigue siendo una resistencia poco articulada que avanza de acuerdo a iniciativas casi individuales.

Este mapa de la resistencia demuestra que a los ataques, el periodismo colombiano ha respondido con valentía e imaginación. Lo ha hecho tanto en su tarea de representar y contar lo que le ha sucedido a millares de habitantes de Colombia durante estos años aciagos, como con su forma de responder a la agresión, las amenazas y las violencias de que ha sido objeto.

Ha sido una resistencia activa que no se ha dejado conducir a la venganza o al derrotismo. Por el contrario, las lecciones que puede ofrecer la comunidad periodística colombiana, cercada por la violencia, son muchas e importantes. Han partido de la valoración del significado que tiene el periodismo para la convivencia y la democracia de una sociedad y de la responsabilidad de su tarea en medio de un conflicto pertinaz y degradado.

Se ha tenido en cuenta la propia naturaleza del oficio para fundamentar su resistencia. Por eso se ha insistido en la formación, en la defensa de todas las modalidades de comunicación, en el valor de la asociación y en el reconocimiento de la importancia del periodismo regional y local.

La creación de institucionalidad periodística y el afianzamiento de la solidaridad (con sus fisuras y problemas), son lecciones aprendidas por el periodismo colombiano, valiosas para los tiempos de guerra como también para los tiempos de paz. Si los grupos violentos buscan disgregar, romper las relaciones y llenar de miedo, lo que hizo el periodismo colombiano fue asociarse, generar proyectos, intervenir desde sus realidades. Mucho de este trabajo ha sido trabajo voluntario y se han podido tejer redes para estar alerta y para movilizarse cuando es necesario proteger.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. EL FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA

El camino de la memoria es difícil y complejo. Y lo es mucho más cuando se trata de un centenar y medio de asesinatos de periodistas por razón de su oficio, en un periodo de tiempo que se acerca a los cuarenta años de la historia reciente del país y a través de toda la geografía nacional. Se han realizado esfuerzos de memoria especialmente provenientes de organizaciones periodísticas, algunas publicaciones que ayudan a conservar la memoria y documentos que dejan testimonio de lo ocurrido en algunos años de este periodo. Este Informe es solo un momento en el proceso de conocimiento de la realidad vivida por las y los periodistas en este periodo y de ninguna manera es totalizante ni mucho menos concluyente. Solo es un momento en el camino y sus hipótesis e interpretaciones están expuestas al debate público y a su contradicción por parte de organizaciones y personas que han sido víctimas, o que han realizado las investigaciones, o que han juzgado, entre otros integrantes de la sociedad. Es necesario continuar la exploración de la memoria, buscando una mayor documentación de cada uno de los casos, sistematizando la información que pueda provenir de las investigaciones judiciales a los victimarios e incentivando los estudios que profundicen en el contexto, las cau-

sas, los procedimientos y consecuencias de este ataque criminal contra la sociedad y el periodismo. Se debe respaldar la acción que llevan a cabo instituciones especialmente periodísticas, como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fecolper, Andiaros, entre otras, y hacer un frente común de organizaciones en favor de la memoria de la violencia contra periodistas. La conservación de la memoria va más allá de la documentación y requiere de su profundización, divulgación y apropiación. Las nuevas tecnologías permiten hoy que la memoria habite en plataformas virtuales, abiertas e interactivas, que permitan el acceso de numerosos usuarios y que hagan que la memoria sea activa y aplicable. También contribuyen a la generación de redes de la memoria que se pongan en contacto con las redes de periodistas y de otros actores sociales. Varias de las recomendaciones posteriores pueden ayudar a fortalecer la memoria de lo sucedido. Es conveniente que el tema forme parte del nuevo Museo Nacional de la Memoria Histórica que está siendo promovido por el CNMH.

2. LA IMPORTANCIA DE LAS REGIONES

Como se observa a través de todo el Informe, las regiones han tenido un gran protagonismo en la violencia contra medios y periodistas. En ellas han sucedido los hechos, se han incrementado las amenazas y han campeado con impunidad sus victimarios. En unas más que en otras. Por eso es muy importante considerar el papel de la comunicación en las regiones, rastrear los procesos de construcción de la información a través de las estructuras comunicativas existentes en ellas, tener en cuenta el potencial de desarrollo de medios locales y regionales independientes y de un periodismo riguroso y de servicio a la sociedad. Es preciso tener en cuenta las debilidades que tiene el periodismo en las regiones y sobre todo aquellas condiciones económicas, sociales y políticas que lo hacen más vulnerable y expuesto a los intereses de la delincuencia, en zonas en que pueden ser sometidos por la indefensión. La organización periodística en las regiones es una tarea fundamental, ya

que protege el ejercicio del periodismo, fortalece colectivamente a quienes ejercen el periodismo y permite reacciones más solidarias frente a las acciones criminales. La expresión de lo regional a través de sus propios medios y en los medios nacionales es un objetivo social que aún no se alcanza; es necesario pensar el significado de lo regional para los medios de comunicación, las formas habituales de su representación y en particular sus restricciones y limitaciones. La idea de región comunicativa, que se ha expuesto en este Informe, subraya la importancia que la comunicación y la información tienen para las comunidades locales y regionales. Ellas tendrán más cohesión y serán más democráticas en la medida en que logren construir sistemas de comunicación más serios y pluralistas y afirmen comunidades de información que posibiliten el conocimiento y debate públicos.

3. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA CONTRA LA IMPUNIDAD

La impunidad es uno de los núcleos centrales de la violencia contra periodistas y en general de la violencia en Colombia. El 47 por ciento de los casos de asesinatos de periodistas han prescrito, según lo recuerda la Fundación para la libertad de prensa en su Informe de 2014. Como se lee en el documento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia” (2013): “La impunidad genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves” (CIDH, 2013, página 2). Además, la impunidad no permite resolver situaciones como las generadas por amenazas, no procesa ni disuade a quienes amenazan, así se obliga a que muchas personas en ejercicio del periodismo deban permanecer por largo tiempo

bajo esquemas de protección que dificultan su trabajo. Los medios de comunicación que han aportado al conocimiento de los problemas de la justicia en el país no deben ceder en este propósito y por el contrario deben contribuir a toda iniciativa que favorezca el combate contra la impunidad. La revisión de los enfoques y modos de trabajo de las secciones periodísticas de justicia de los medios de comunicación colombianos es una tarea fundamental, así como lo es el seguimiento específico del estado de los procesos relacionados con los asesinatos y amenazas contra periodistas que en estos años han favorecido entidades como la SIP, el CPJ, la FLIP, el proyecto Antonio Nariño, ANDIARIOS, entre otras.

La Comisión Interamericana ha insistido en la necesidad de la debida diligencia en la investigación de todas las líneas lógicas de indagación, especialmente en las referidas a periodistas ya que “reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas, dado que una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto, como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados y probablemente despertará cuestionamientos sobre la voluntad de las autoridades de resolver el crimen” (CIDH, 2013, página 132). Lo que queda patente en este Informe es precisamente lo contrario a esta recomendación, ya sea porque quienes cometen los crímenes destruyen todas las posibilidades de posterior indagación o porque quienes tienen a su cargo la investigación judicial (jueces, juezas y demás sujetos del sistema judicial) no hacen mucho por su esclarecimiento y sentencia, y suelen dar respuestas débiles o inocuas a exigencias mediáticas coyunturales. Como lo dice el estudio de la Relatora especial “Las autoridades responsables de la investigación deben conducir las actuaciones en forma expedita, evitando dilaciones o entorpecimientos injustificados de los procesos que conduzcan a la impunidad y vulneren la debida protección judicial del derecho”. Al respecto, la CIDH ha indicado que “como regla general, una investigación penal, debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa”

(CIDH, 2013, página137). Son muy importantes las estrategias de declarar algunos de estos asesinatos como crímenes de lesa humanidad, y la de incrementar los tiempos de prescripción de los homicidios —como se hizo con la ley 1429 de 2010—, pero a su vez pueden ser contraproducentes si de la mano no se estimula la acción real y efectiva de la justicia. Ambas pueden terminar siendo formas de disimular o aminorar el impacto de la no investigación y sanción de responsables, y puede llevar a que se extienda durante más tiempo la falta de respuesta a los derechos de justicia y verdad de las víctimas. La estrategia de declarar algunos de estos crímenes como de lesa humanidad es muy importante, siempre y cuando estimule la acción real y efectiva de la justicia y no sirva para diluir aún más los procesos. Se sugiere hacer un seguimiento persistente y constante de los procesos referidos a los crímenes contra periodistas y su divulgación para el conocimiento oportuno de la opinión pública. Un aliciente para la delincuencia es esta situación de impunidad, tal como lo señaló en entrevista para este Informe el amenazado periodista colombiano Ignacio Gómez.

4. PROFUNDIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

En el Informe se ha constatado el papel que tiene la formación en los hechos analizados. A mayor formación es posible un mejor periodismo, sin que sea este el único factor que interviene en las situaciones de violencia que se viven en el día a día del oficio. Las deficiencias formativas suelen poner en mayor peligro a las personas que ejercen el periodismo. La ausencia de rigor, la recurrencia a posturas emocionales, la mezcla de la información con obligaciones comerciales o la debilidad de la independencia suelen aumentar el peligro, como muchos periodistas testimoniaron directamente en las entrevistas de campo del presente Informe. Por eso el país debe renovar su esfuerzo de formación, mediante diferentes estrategias como diplomados, talleres, encuentros, elaboración de guías prácticas para el oficio, formación en las salas de redacción, etc.

5. CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS Y REDES DE ALERTA

Según expertos, Colombia ha construido uno de los sistemas más eficientes de alerta y protección de periodistas. Proteger periodistas es una tarea ineludible del estado y la sociedad. Pero debe tenerse en cuenta que es una situación que demuestra la existencia de una realidad irregular y peligrosa para el ejercicio de las libertades y los derechos civiles, entre ellos, el de la libertad de expresión. El periodismo debe ejercerse sin cortapisas y sin interferencias, y una sociedad que tiene que proteger a cualquiera de sus ciudadanos y ciudadanas con programas especiales es una sociedad amenazada. Más de un centenar de periodistas con medidas estatales de protección es un indicador de la profundidad del problema que tiene cercada a la sociedad colombiana. La transformación del sistema de protección debe evaluarse para una mejor articulación entre todas las entidades que participan en su gestión, pero sobre todo para superar problemas como por ejemplo la inequidad en el tratamiento de los casos. Como se lee en el Informe de la FLIP de 2014, los criterios de protección para periodistas en Bogotá son más flexibles que los dispuestos para proteger a periodistas de las regiones, quienes viven constantes y graves amenazas.

6. MAYOR Y MEJOR INTERRELACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE RESPALDAN LA LABOR PERIODÍSTICA

Uno de las grandes enseñanzas en estos tiempos de dificultades ha sido el surgimiento de instituciones y proyectos de apoyo al periodismo en medio del conflicto. Muchos han aparecido como resultado de la integración de esfuerzos y han demostrado su efectividad y sobre todo su permanencia en el tiempo. Estas asociaciones deben fortalecerse aún más y encontrar nuevos campos de acción en el postconflicto.

7. EL PERIODISMO EN EL POSCONFLICTO

La firma de acuerdos no garantiza per se la desaparición de las asechanzas contra el periodismo. Como se ha demostrado en otros países y en otros conflictos bélicos, los acuerdos dan lugar a la desaparición de algunos temas difíciles para quienes desarrollan labores periodísticas, pero también a la consolidación de una agenda de nuevos problemas a los que hay que estar atentos. Como se desprende del presente Informe, durante estos años una parte importante de los asesinatos y amenazas contra medios y periodistas provino directamente de las estrategias guerreras de los actores armados. Sin embargo ha habido otras que han permanecido latentes durante los 40 años estudiados y que eventualmente pueden seguir activas en la realidad colombiana, especialmente, la intervención del crimen organizado que se expresa sobre todo en la acción de las mafias del narcotráfico y en las bandas de delincuentes, algunas de ellas alimentadas por antiguos miembros de los grupos paramilitares, y hacia el futuro, posiblemente de algunos integrantes de las guerrillas. La corrupción es uno de los ejes centrales de la violencia contra periodistas y es muy probable que su acción continúe si no se emprende una lucha mucho más frontal y decidida del Estado y la sociedad contra ella. La participación comprobada de personas corruptas dedicadas a la política en el asesinato y amenazas contra periodistas puede continuar en alianza con delincuentes, como ha sido su proceder en el pasado. Si la democracia local y regional no se fortalece, la indefensión de las y los periodistas en las regiones puede ser un caldo de cultivo para la comisión de delitos en su contra.

8. APOYO A LAS ENTIDADES PERIODÍSTICAS

Las instituciones periodísticas no siempre se desarrollan en las mejores condiciones. En Colombia se debe resaltar el trabajo voluntario y la solidaridad para hacer posible las causas de los y las periodistas. Lo que es difícil de lograr en otros países, ha sido

posible en Colombia, gracias a la tenacidad y la integración de esfuerzos de las entidades que trabajan en el sector. Una buena parte de ellas han recibido la ayuda de organismos internacionales, no solo en la parte financiera sino también en la de planificación, gestión y visibilidad internacional. Es preciso que la sociedad y el Estado, dentro de un clima de total independencia, encuentren caminos para apoyar su sostenibilidad y la realización de sus proyectos, programas y acciones.

9. MÁS COMPRENSIÓN DE LOS MEDIOS DE LAS REALIDADES VIVIDAS

Aunque los medios de comunicación no componen la totalidad del panorama comunicativo de una sociedad, que está también conformado por mediaciones comunicativas de la ciudadanía y de las instituciones de la sociedad y del Estado, redes de información, circuitos no mediáticos de circulación de información, prácticas civiles de resistencia y crítica comunicativa, entre otros, son una parte clave de dicho panorama. Como se mostró en uno de los capítulos del presente Informe, el periodo en que Colombia vivió el momento más grave de violencia en la historia reciente, fue el mismo en que se produjeron cambios más profundos en la situación de los medios en el país y en el mundo. La democracia requiere de medios menos concentrados y más abiertos, más pluralistas y diversos, más extendidos por toda la geografía nacional y más independientes y analíticos. También más vinculados con la participación de las audiencias, más creativos narrativamente, más fortalecidos económicamente y con mayores grados de responsabilidad social. La realidad que vive el periodismo en Colombia debe interesar a toda la sociedad, pero es indudable que debe interpelar al sistema de medios de una sociedad, lo que significa que están en la obligación de promover condiciones laborales más justas, prácticas que garanticen la calidad periodística y contextos en los que sea factible un periodismo independiente y pluralista. La situación en las regiones para las personas que desarrollan corresponsalías y particularmente el periodismo local debe ser un

tema de interés para toda la comunidad periodística. Su realidad es compleja, como se ha visto en este Informe, a ello se suman precarios ingresos y prácticas que aumentan su situación de indefensión y riesgo. Esto debe transformarse. Un punto particularmente delicado es el de la pauta oficial, así como las dificultades de profesionalización del oficio que les permita no hacer tránsitos que contaminan seriamente su trabajo en el campo de la información como compromisos con personas de la política, labores con entidades del Estado, obligaciones informativas con los proveedores de pauta, etc.

10. FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS LOCALES

Una de las constataciones de este Informe fue mostrar, a través de comprobaciones geográficas y temporales, el impacto que la violencia ha tenido sobre medios y periodistas locales, especialmente de la radio y las publicaciones escritas. Periodistas de los pequeños medios de comunicación han sufrido la mayoría de los golpes de los grupos violentos en este periodo. Fueron también estos pequeños medios los que más crecieron en los últimos años, a pesar de las dificultades administrativas e inclusive de regulación. Frente a la historia de las emisoras de radio ciudadanas y comunitarias y de los canales locales de televisión, surgen ahora los medios digitales informativos que empiezan a poblar de otra manera y a través de otros soportes tecnológicos el paisaje comunicativo colombiano. Es fundamental la expansión y fortalecimiento de estos medios y periodistas locales, tan vulnerables a la agresión de los grupos violentos.

11. ESTÍMULO DE MEDIOS INDEPENDIENTES

Una de las formas más eficientes de oponerse a la violencia es precisamente promoviendo la creación de medios independientes. Las modificaciones radicales de la vida de los medios no han

sido suficientemente discutidas por la sociedad colombiana, para constatar sus implicaciones sobre la calidad de la vida democrática de la sociedad. La existencia de medios no es un simple problema que debe dejarse al mercado. Finalmente lo que debe garantizar una sociedad es la existencia de medios de comunicación independientes, que puedan ejercer libremente su tarea de fiscalización de todos los poderes y de seguimiento riguroso de todos los procesos que vive una sociedad. Ante la crisis de los medios, sociedades más conscientes están buscando alternativas viables, que no generen dependencias nocivas y que por el contrario estimulen su desarrollo y sostenibilidad.

12. PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LAS REALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

La perspectiva internacional del desarrollo de los medios de comunicación y de la realidad de la violencia contra medios y periodistas en Colombia es fundamental. La comunidad internacional, como ya se ha expresado en este Informe, ha estado presente apoyando las iniciativas de protección, de defensa del oficio, de formación y de fortalecimiento de la asociación como también se ha manifestado de distinta manera en todos estos años denunciando y haciendo evidente la gravedad de los acontecimientos derivados de la violencia y que han colocado al país en los primeros lugares de los crímenes y amenazas contra periodistas en el mundo. Muchos periodistas nacionales han salido al exilio, en el que han sido apoyados por grupos e instituciones internacionales comprometidos con la causa colombiana. El hecho que Colombia haya pasado a otros niveles de la cooperación internacional dado sus avances en los indicadores económicos y sociales no debe hacer olvidar este campo estratégico del periodismo y la comunicación. Son aun frágiles los avances que se han hecho a partir del talento, la solidaridad y el compromiso de las instituciones periodísticas colombianas. Necesitan del apoyo por supuesto nacional, así como de la colaboración internacional sobre objetivos, planes y acciones concretas y evaluables.

13. APROPIACIÓN SOCIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO UN ASUNTO DE INTERÉS NACIONAL

El día en que la libertad de expresión haya sido interiorizada como un valor fundamental que toda la ciudadanía debe proteger y desarrollar, estará ganada buena parte de la lucha contra la violencia ejercida contra medios de comunicación, comunicadores y periodistas. Aun no parece existir un convencimiento generalizado sobre la importancia de la información de calidad para la vida de la sociedad y su democracia, ni una consecuente valoración y reconocimiento del papel del periodismo en la sociedad. Ya se han expuesto razones para ello en este Informe que van desde las prácticas nocivas de cierto periodismo, su desvinculación de los grandes temas de la sociedad, su parcialidad y falta de rigor, cuando no su soberbia y la cooptación de lugares y funciones que no les corresponden. Pero a través de los años el periodismo colombiano ha manifestado también su gran valentía y compromiso con la sociedad. Sin su acción, que ha dejado tantas vidas valiosas cegadas por la barbarie, serían impensables las denuncias contra el poder corrupto del narcotráfico, la cooptación de los actores armados ilegales de numerosas instancias de los estados nacional, regional y local, los desastres de una guerra que se ha ensañado contra cientos de miles de pobladores, el maridaje entre personas de la política y grupos paramilitares, la investigación de la corrupción en diversas áreas de la vida social, entre otros asuntos que afectan a todo el país. Es importante promover el trabajo de formación social para la valoración de la libertad de expresión, las campañas de posicionamiento de la libertad de expresión y el derecho a la información dentro de las agendas públicas del país, el fomento de los estudios sobre los desarrollos jurídicos de la libertad de expresión, la formación en derecho a la información y promoción de la libertad de expresión de las autoridades nacionales de todas las ramas del poder público, entre otras las encargadas de la justicia, la protección, la educación y la vida pacífica de sus pobladores.

Consecuentes con la importancia que en este Informe se le dedicó al reconocimiento del daño colectivo que ocasionan todas las formas de violencia contra periodistas, es preciso promover todas las acciones que permitan la reparación social de las víctimas de la violencia, así como la consolidación de la verdad y la justicia que han sido tan huidizas y golpeadas en el caso de los hechos de violencia sufridos por periodistas colombianos durante estos años. Este Informe que entregamos a la sociedad tendrá validez y sentido solo si ello se produce.

Los retos del posconflicto, sobre todo en materia de reparación a las víctimas, exige que en el estudio de la violencia contra el periodismo se profundice el análisis y la construcción conceptual de lo que puede ser un daño colectivo a periodistas y medios. En este campo se dificulta la aplicación jurídica, pues se trata de agrupar a un conjunto de personas que no parecen contar con elementos de cohesión e identidad que permitan hablar de un sujeto colectivo. Aun así la reparación colectiva es necesaria, más cuando medios y periodistas son indispensables en las reparaciones simbólicas de otro tipo de grupos y comunidades. A su vez, una adecuada construcción del daño colectivo a la comunicación garantiza que las medidas de reparación al conjunto de periodistas respondan de verdad a la realidad afectada por la violencia y, yendo más allá, se transformen las condiciones que la provocaron.

REFERENCIAS

- Abad-Faciolince, H., (2006), *El olvido que seremos*, España, Planeta.
- Acosta, J.I., (2005), *La protección de víctimas indeterminadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, [Trabajo de grado para optar al título de abogada], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Alternativa*, (1975, noviembre 17), “El atentado contra Alternativa: Blanco es y gallina lo pone...”, *Alternativa*, número 60.
- Alternativa*, (1975, octubre 6), “Cuando oigo hablar de libertad de prensa saco mi revólver”, [caricatura], *Alternativa*, s.n.
- Alternativa*, (1978, 19 de marzo), número 230.
- Alvarado, H., (1994, enero 15), “Conversando con Antonio Caballero”, en *Revista Arquitrave*.
- Ángel, D., (1998, febrero), “Diagnóstico nacional de televisión local y comunitaria”, En: *Panorama de la televisión local y comunitaria en Colombia*, Año1, No.1, febrero de 1998, Bogotá, Fundación Social (Vicepresidencia de Desarrollo), CINEP, Fundación HablaScribe y Ministerio de Comunicaciones.
- Arenas W.; Rey, G. y Cajiao, F., (2003), *El conflicto armado en las páginas del El Tiempo*, Bogotá: Casa Editorial El Tiempo, Dirección de Responsabilidad Social.
- Ballesteros, E., (2014), “Entrevista realizada por el CNMH a Edwin Ballesteros en el Tolima”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

- Ballesteros, J. y Vallejo, C., (2011), *Fantasmas de Valdelomar: Narración, verdad y democracia*. [Trabajo de grado para optar al título de abogados], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Bayuelo, S., Cadavid, A., Durán, O., González, A., Tamayo, C. y Vega, J., (2008), *Lo que le vamos quitando a la guerra: Medios ciudadanos en contextos de conflicto armado en Colombia*, editora Clemencia Rodríguez, Bogotá, Friedrich Ebert Stiftung, disponible en: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/c3-comunicacion/o7330.pdf>.
- Bedoya, J. (2014, junio 12), En: *El Universal*, Cartagena, 12/06/2014
- Beltrán, M., (2014), *Medios comunitarios en Colombia*, Bogotá, AMARC.
- Bonilla, J. y García, E., (1988), *Los discursos del conflicto: Espacio público, prensa y protesta social en Colombia*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Bonilla, J. y Tamayo, C., (2007), *Las violencias en los medios, los medios en la violencia*, Bogotá, CINEP, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, EAFIT.
- Botero, C., Jaramillo, J. y Uprimny, R., (2006), *Libertad de prensa y derechos fundamentales: Análisis de la Jurisprudencia en Colombia (1992-2005)*, Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung.
- Cadavid, A., García, M., González, A., Martínez, M., Ramírez, N. y Saffon, M., (2007), “Ya no es posible el silencio: Textos, experiencias y procesos de comunicación ciudadana”, En: *Centro de competencia en comunicación para América Latina* (editor), Bogotá, Friedrich Ebert Stiftung.
- Cano, G., (1984, 5 de mayo), “Editorial”, En: *El Espectador*, 05/05/1984.
- Cano, M. y Gehl, T., (2006), *Aproximación al apoyo a medios y periodistas en Colombia (2000-2006)*, Bogotá, Proyecto Antonio Nariño (PAN), International Media Support, Reporteros sin Fronteras Suecia.
- Cardona, J., (2009), *Días de memoria*, Bogotá, Aguilar.
- Cardona, J., (2012), “La hora de los violentos”, En: FLIP (compilador), *Entre el silencio y el coraje: Dos décadas de la libertad de prensa en Colombia*, Bogotá, Planeta.

- Castells, M., (2009), *Comunicación y poder*, Madrid, Alianza.
- Castillo, F., (2014), Entrevista de María Isabel Naranjo a Fabio Castillo, En *Reportero sin rostro*, Universo Centro, Número 54.
- Cebrián, J.L., (2010), “En defensa de una libertad frágil”, En: Círculo de Bellas Artes de Madrid, España (editor-compilador), *XXVII Premios Ortega y Gasset de periodismo (26 edición, 2010)*, Madrid.
- Centro Nacional de Memoria Histórica y VerdadAbierta.com, (2014, noviembre 5), “Cifras del conflicto”, En: *Rutas del conflicto* [base de datos], Consultado el 5 de noviembre de 2014 en: <http://rutasdelconflicto.com>
- Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevista en Medellín”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas a periodistas en el departamento de Antioquia”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas a periodistas en el departamento de Arauca”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas a periodistas en el departamento del Caquetá”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas a periodistas en el departamento del Cauca”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas a periodistas en el departamento del Huila”, En: CNMH,

Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas a periodistas en el departamento del Quindío”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas en el departamento de Antioquia”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas en el departamento de Arauca”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas en el departamento de Arauca”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas en el departamento de Nariño”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas en el departamento del Caquetá”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2013), “Entrevistas en el departamento del Cauca”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2014), “Entrevistas vía Skype”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

- Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2014, junio), “Entrevista en Cali”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Cepeda Ulloa, F., Arocha, J., Anzola, P., Martínez, H., Gómez, C., Jaramillo, C., Pinzón, P., Villegas, M., y Rey, G., (1988), *Medios de comunicación y violencia*, Bogotá, Ministerio de Comunicaciones.
- Colombia, (1991), “Constitución Política de Colombia 1991”, Asamblea Nacional Constituyente.
- Colombia, (1995), Ley 199 de 1995, (julio 22), “Por la cual se cambia la denominación del Ministerio de Gobierno y se fijan los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el Gobierno Nacional modificará su estructura orgánica y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, (2000), Decreto 1592 de 2000, (agosto 18), “Por el cual se reglamenta el artículo 6° de la Ley 199 de 1995”.
- Colombia, (2000), Ley 600 de 2000 (julio 24), “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
- Colombia, (2003), Decreto 2788 de 2003, (octubre 2), “Por el cual se unifica y reglamenta el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos de los Programas de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia”.
- Colombia, (2004), Ley 938 de 2004 (diciembre 30), “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”.
- Colombia, (2010), Ley 1429 de 2010 (diciembre 29), “por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo”.
- Colombia, (2011), Decreto Ley 4065 de 2011 (octubre 31), “Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección - UNP, se establecen su objetivo y estructura”.
- Colombia, (2011), Ley 1448 de 2011 (junio 10), “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

- Colombia, (2014), Decreto 020 de 2014 (enero 9), “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”.
- Colombia, CNRR, Grupo de Memoria Histórica, (GMH, 2013), *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*, Bogotá, Imprenta Nacional.
- Colombia, Fiscalía General de la Nación, (2011), “La Fiscal General anuncia fortalecimiento investigativo por amenazas a periodistas”, [Comunicado de prensa], En: <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/la-fiscal-general-anuncia-fortalecimiento-investigativo-por-amenazas-a-periodistas/>
- Colombia, Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, Proceso ley 600 de 2000. radicado 66001-31-07-001-2012-00012, acusados Francisco Ferney Tapasco González, Fabio López Escobar, Jorge Hernando López Escobar y Henry Calle Obando. Sentencia penal ordinaria, 24 de diciembre de 2013.
- Colombia, Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, (2014), Proceso radicado 11 001 22 52 000 2014 00027, acusados Salvatore Mancuso, Edgar Ignacio Fierro Flores, Jorge Iván Laverde Zapata, Uber Enrique Banquéz Martínez, José Gregorio Mangones Lugo, José Bernardo Lozada Ortiz, Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, Sergio Manuel Córdoba Ávila, Miguel Ramón Posada Castillo, Julio Manuel Argumedo García, Oscar José Ospino Pacheco, Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez).
- Colombia, Justicia y Paz (2014), Sentencia de primera instancia Justicia y Paz, postulado: Salvatore Mancuso Gómez y otros, 20 de noviembre de 2014. Magistrada Ponente: Léster M. González.
- Colombia, Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal, (2015), Proceso Ley 600 de 2000. Radicado 2012-00012-02, acusados Francisco Ferney Tapasco González, Fabio López Escobar, Jorge Hernando López Escobar y Henry Calle Obando. Sentencia de segunda instancia, 24 de junio de 2015. Magistrado Ponente: Antonio Toro Ruíz.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH, 2005), *Impunidad, autocensura y conflicto armado interno: Análisis de la situación de la libertad de expresión en Colombia*, Washington, OEA.

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH, 2012), *Reparaciones por la violación de la libertad de expresión en el Sistema Interamericano*, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Washington, OEA. Recuperado en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/REPARACIONES%20abril%2018.pdf>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH, 2013), *Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia*, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Washington, OEA, Asdi, Open Society Foundation.
- Consejo de Redacción y Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, (2013), *Medios digitales en Colombia 2012*, Segundo corte (año 2012) del Estudio de Medios Digitales, iniciativa del Centro Ático, la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana y Consejo de Redacción, Germán Rey y José Luis Novoa, directores, Bogotá, disponible en: http://consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2012.pdf
- Consejo de Redacción, (2015, compilador), [Informes regionales para el informe sobre violencia contra el periodismo 1977-2015 del CNMH].
- Coronell, D., (2011, enero 15), [“No le temo al señor expresidente Uribe”], [entrevista], publicada el 15 de enero de 2011, en el blog <http://libretaencontravia.blogspot.com/2011/01/no-le-temo-al-senor-ex-presidente-uribe.html?m=1>
- Corporación Latinobarómetro. (2000). Informe de banco de datos 2000. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2001). Informe de banco de datos 2001. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2002). Informe de banco de datos 2002. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>

- Corporación Latinobarómetro. (2003). Informe de banco de datos 2003. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2004). Informe de banco de datos 2004. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2005). Informe de banco de datos 2005. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2006). Informe de banco de datos 2006. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2007). Informe de banco de datos 2007. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2008). Informe de banco de datos 2008. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2009). Informe de banco de datos 2009. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2010). Informe de banco de datos 2010. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2011). Informe de banco de datos 2011. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Corporación Latinobarómetro. (2013). Informe de banco de datos 2013. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Recuperado en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>
- Correa, C. y Mejía, M., (2008), *Las llaves del periódico*, Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 2003, marzo 6), *Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6 de marzo de 2003*, [medidas solicitadas para las co-

- munidades del Jiguamiandó y Curbaradó de Colombia, jueces Sergio García y Alirio Abreu].
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH, 2000, agosto 18), “Voto concurrente del juez Cançado Trindade”, En: *Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de agosto de 2000, dentro del caso Haitianos y dominicanos de origen haitiano contra República Dominicana*.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH, 2000, junio 18), *Caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó*
- Donadío, A., (2013), “Entrevista realizada por el CNMH a Alberto Donadío en Bucaramanga”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Duque, C.J., (2012, enero 14), “¿Por qué el DAS se ensañó contra mí?”, [entrevista de Cecilia Orozco], En: *El Espectador*, 14/01/2012, consultado en <http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/el-das-se-ensano-contra-mi-claudia-julieta-duque-articulo-320915>
- El Colombiano*, (2013), Declarado delito de lesa humanidad el asesinato del director de La Opinión. 11 de marzo de 2013. Consultado en http://www.elcolombiano.com/declarado_delito_de_lesa_humanidad_el_asesinato_del_director_de_la_opinion-PEEC_232863
- El Espectador*, (2013), [Información de prensa sobre hechos de violencia contra periodistas 1975-1985], Revisión documental realizada por el CNMH.
- El Tiempo*, (2013), [Información de prensa sobre hechos de violencia contra periodistas 1975-1985], Revisión documental realizada por el CNMH.
- Fals, O. y Borja, M., (1999), “Guía práctica del Ordenamiento Territorial en Colombia”, En: *Revista Foro*, Número. 36, abril de 1999, p. 74-92, Consultado el 25 de junio de 2015 en .Mamacoca.org [e-book].
- Federación Colombiana de Periodistas, (Fecolper, 2014, junio), “Informe indica que periodismo sigue siendo blanco de agresiones en Colombia”, Consultado en junio de 2014 en: [381](http://america-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- latina.ifj.org/es/articles/fecolper-informe-indica-que-periodismo-sigue-siendo-blanco-de-agresiones-en-colombia.print
- Frazer, N., (1997), *Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”*, Bogotá, Siglo del Hombre, Universidad de los Andes. Facultad de Derecho, PDF disponible en <http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/fraser-iustitia-interrupta-reflexiones-criticas-desde-la-posicion-postsocialista.pdf>
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2002), *Análisis de la libertad de prensa en Colombia 1995-2001*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2003), *Informe 2002 sobre violaciones a la libertad de prensa en Colombia*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, 2005). *Violaciones a la Libertad de Prensa en 2004*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2006), *Menos información y más amenazas: la FLIP presenta el informe preliminar sobre violaciones a la libertad de prensa en Colombia durante el 2005*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2007), *La prensa informó en medio de un clima de zozobra: Informe sobre violaciones a la libertad de prensa en Colombia durante 2006*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2009), *La amenaza y la estigmatización, intimidaciones invisibles contra la prensa: Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia, 2008*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2010), *Intercepciones y seguimientos ilegales: grave intimidación al periodismo colombiano, informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia en 2009*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2011), *Lo que la violencia se llevó*, [especial multimedia], Bogotá, FLIP, Recuperado el 25 de febrero de 2015, Disponible en: <http://daytoendimpunity.org/flip/>
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2012), *Urabá, miedo latente y temas vedados para el periodismo*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2012, compilador), *Entre el silencio y el coraje: Dos décadas de la libertad de prensa en Colombia*, Bogotá, Planeta.

- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2013), *Las noticias se extinguen en el Bajo Cauca*, [Informe], Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2014), *Protestas sin garantías para cubrir: Informe sobre la situación en Colombia 2013*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2015), *Sistema de Protección a Periodistas 2015*. Consultado en: <http://journalistprotection.wikispaces.com/>
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2015), *60 años de espionaje a periodistas en Colombia: Informe sobre el estado de la libertad de prensa en 2014*, Bogotá, FLIP.
- Galvis, A., (2013), “Entrevista realizada por el CNMH a Alejandro Galvis Ramírez en Bucaramanga”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Gómez, I., (2006), “Crónica de un periodismo amenazado”, En: Gómez, I. y Rey, G., *1986-2006: Crónica de dos décadas de periodismo bajo presión*, Bogotá, Fundación Guillermo Cano.
- Gómez, P., (2004), *La guerra: una amenaza para la prensa*, Bogotá, Medios para la Paz.
- Gómez-Hurtado, A., (1975, diciembre 4), en *El Tiempo*.
- González, B., (2013), *Manual del arte del siglo XIX en Colombia*, Bogotá: Universidad de los Andes.
- González, F. (2014), *Poder y violencia*, Bogotá, CINEP.
- González, F. (2014), “Entrevista realizada por el CNMH a Felipe González en el Huila”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- González, F. (2014), “Entrevista realizada por el CNMH a Fernando González en el Tolima”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Gossain, J., (2011, 15 de diciembre), “Juan Gossain recuerda a Guillermo Cano”, En: *El Tiempo*.
- Guerrero, A., (2010), *País lejano y silenciado*, Bogotá, FLIP y Medios para la Paz.

- Guillermoprieto, A., (2009, febrero 1), “Entrevista realizada por Juan Cruz, En: *El País*, Madrid. Recuperado de http://elpais.com/diario/2009/02/01/domingo/1233463955_850215.html
- Kaufman, Daniel. (SF). *Gobernabilidad y Corrupción. Avances empíricos a nivel internacional para el diseño de políticas*. Consultado en www.oas.org/juridico/spanish/foro/Daniel%20Kaufmann.doc
- Kundera, M., (1985), *La risa de Dios*, [Discurso de Jerusalén], Disponible en http://elpais.com/diario/1985/07/27/cultura/491263203_850215.html
- La Rota, M. y Bernal, C., (2014), *Esfuerzos irracionales. Investigación penal del homicidio y otros delitos complejos*, Bogotá, Dejusticia.
- Leal-Buitrago, F., (2003), “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la guerra fría en América del Sur”, En: *Revista de Estudios Sociales*, Número 15, Universidad de los Andes-Fundación Social.
- López, C., (2010), *Y refundaron la patria: De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*, Bogotá, Random House Mondadori.
- Lozano, J. y González, J., (2004), *La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia*, Bogotá, Intermedio.
- Medios para la paz, (1999), *Para desarmar la palabra: diccionario de términos de conflicto y paz*, Bogotá.
- Medios para la paz, (MPP, 1998), *Principios fundacionales*, En: <http://mediosparalapaz.blogspot.com.co/p/organizacion.html>
- Medios para la paz y Pontificia Universidad Javeriana, (2006), *Prensa, conflicto armado y región*, Bogotá, Medios para la paz y Pontificia Universidad Javeriana.
- Meléndez, J., (2004, febrero 9), “En Arauca se acabaron las chivas”, En: eltiempo.com, Sección Otros.
- Mesa, M., (2014), “Entrevista realizada por el CNMH a Marisol Mesa en el Tolima”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”.
- Molina, G., (2014), “Entrevista realizada por el CNMH a Gustavo Molina”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia con-

- tra periodistas en Colombia (1977-2015), Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”.
- Monsiváis, C., (2004), “El narcotráfico y sus legiones”, En: Monsiváis, C. (editor), *Viento rojo: Diez historias del narco en México*, Barcelona, Plaza & Janés / Random House Mondadori.
- Morales, A., (2012), “La impunidad, siempre la impunidad”, En: FLIP (compilador), *Entre el silencio y el coraje*, Bogotá, Planeta.
- Najar, E., (2009), *Derecho a la verdad y justicia transicional en el marco de la aplicación de la ley de Justicia y Paz*, Bogotá, Editorial Ibáñez.
- O'Donnell, G., (2007), *Disonancias: Críticas democráticas*, Buenos Aires, Prometeo Libros.
- Pabón, C.R., (2013), “Entrevista realizada por el CNMH a Carmen Rosa Pabón en el departamento de Arauca”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Pécaut, D., (2006), *Crónica de cuatro décadas de política colombiana*, Bogotá, Norma.
- Pereira, J.M., (2000), *Comunicación y ciudadanía: Apuntes para comprender los procesos de las radios y televisiones locales y comunitarias en Colombia*, Santiago de Chile, ALAIC.
- Posada, F. (2014), “Entrevista realizada por el CNMH a Fabio Posada en Cali”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Posada-Carbó, E., (s.f.), *Prensa y democracia en la historia de Colombia*, [en línea], Bogotá, Biblioteca Virtual del Banco de la República, Recuperado en <http://www.banrepcultural.org/un-papel-a-toda-prueba/prensa-y-democracia>
- Proyecto Antonio Nariño, (PAN, 2005), La Infancia y la calidad periodística en el cubrimiento informativo del conflicto armado en Colombia, Bogotá, FESCOL, recuperado en http://www.pan.org.co/sites/default/files/pdf/La_infancia_y_la_calidad_period%C3%ADstica_-_PAN.pdf, [informe].

- Proyecto Antonio Nariño, (PAN, 2005), Segunda encuesta nacional (2012-2013) [base de datos].
- Ramírez, F.A., (2014, octubre), “Entrevista realizada por el CNMH a Fernando Alonso Ramírez”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Reporteros sin Fronteras, (2002, diciembre 20), *Arauca: la información en riesgo*, [en línea], Recuperado de <http://es.rsf.org/colombia-arauca-la-informacion-en-riesgo-20-12-2002,04587.html>
- Restrepo, J.D., (2014), “Prólogo”, En: López de la Roche, F., *Las ficciones del poder: Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez*, Bogotá, IEPRI, Debate.
- Rey, G., (2006), “Dos décadas de periodismo en Colombia (1986-2006)”, En Gómez, I. y Rey, G. (compiladores), *1986-2006. Crónica de dos décadas de periodismo bajo presión*, Bogotá, Fundación Guillermo Cano.
- Rey, G., (compilador), (1998), *Balsas y medusas: Visibilidad comunicativa y narrativas políticas*, Bogotá, Fundación Social, FESCOL y CEREC.
- Ricoeur, P., (1999), *La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido*, Madrid, Arrecife / Universidad Autónoma de Madrid.
- Rodríguez, A., (2012), *Lucha y pensamiento: la revista Alternativa en los años 70*, [en línea], Recuperado en http://www.metaskopia.com/blog/archivos/lucha_y_pensamiento.pdf
- Rodríguez, C., (2006), *Tres lecciones aprendidas de los medios ciudadanos y comunitarios en Colombia*, Bogotá, Encuentro Nacional de medios ciudadanos, Ministerio de Cultura.
- Ronderos, M.T., (2012), “Los patriotas”, En: FLIP (compilador), *Entre el silencio y el coraje: Dos décadas de la libertad de prensa en Colombia*, Bogotá, Planeta.
- Ronderos, M.T., (2014), *Guerras recicladas*, Bogotá, Aguilar.
- Ronderos, M.T., (2015, enero), “Entrevista realizada por el CNMH a María Teresa Ronderos”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

- Ruiz, M. y Bertoni, E., (2003, compiladores), *La verdad herida: una radiografía de los riesgos y problemas de los periodistas colombianos para cubrir el conflicto armado*, Bogotá, Proyecto Antonio Nariño.
- Semana*, (1982, mayo 1), número 11.
- Taussig, M., (1995), *Un gigante en convulsiones: el mundo humano como sistema nervioso en emergencia permanente*, Barcelona, Gedisa.
- Uprimny, R. y Puyana, G., (2008), *Injusticia premiada: Un análisis de la impunidad de los crímenes contra periodistas en Colombia vinculada a la justicia premial, a partir del estudio del proceso contra el autor material del homicidio de Orlando Sierra*, Bogotá: Andiaros y SIP.
- Vaca, P., (2012), *Acceso a la información y transparencia judicial en graves violaciones a los DDHH: Análisis del derecho de acceso a la información a partir de un diagnóstico de casos de asesinatos a periodistas en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Vaca, P., (2014, noviembre), “Entrevista realizada por el CNMH a Pedro Vaca”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.
- Vaca, P., (2015, enero), “Entrevista realizada por el CNMH a Pedro Vaca”, En: CNMH, Grupo de Investigación La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), *Trabajo de campo para el Informe “La palabra y el silencio”*.

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

- Abad-Faciolince, H., Sáenz, M., Vladdo, Ronderos, M.T., Samper-Ospina, D., León, J., Gómez-Buendía, H., Guerrero, R., Arias, E., García, C., Hoyos, J.F., y Santos-Rubino, A., (2004), *Poder y medio*, Bogotá, Aguilar.
- Abello, J., (2001), “El conflicto armado como espectáculo del infotretenimiento”, En: Bonilla, J. y Patiño, G., *Comunicación y política: Viejos conflictos, nuevos desafíos*, páginas 412-420, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Acosta, C.E., (2003), “La palabra en la construcción de la nacionalidad”, En: Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado (Bogotá: 7), *Medios y nación: Historia de los medios de comunicación en Colombia*, Bogotá, Ministerio de Cultura / Convenio Andrés Bello / Aguilar / Cerlalc.
- Acosta, L.F. y Castellanos, N., (2003), *Historia social de la comunicación en Colombia*, [Informe de investigación], Bogotá, Universidad Nacional de Colombia / Colciencias.
- Albarrán, G., (1999), “Colombia, Perú, Brasil, México... Latinoamérica: periodismo y muerte”, En: *Sala de Prensa* (enero), Bogotá, Disponible en www.saladeprensa.org
- Arenas W., Rey, G y Cajiao, F., (2003), *El conflicto armado en las páginas de El Tiempo*, Bogotá, Casa Editorial El Tiempo, 2003.
- Arias, R. y Ramírez, C., (1990), “Violencia y valor social en los noticieros de televisión”, En: Conferencia de Facultades y Escue-

- las de Periodismo y Comunicación Social de América Latina (Bogotá: 1), *Memorias de la 1ª Conferencia de Facultades y Escuelas de Periodismo y Comunicación Social de América Latina*, páginas 175-207, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional.
- Barabino, G., (2003), “La violencia y los medios masivos de comunicación: ¿oferta o demanda?”, En: *Razón y Palabra*, número 33 (junio-julio), México.
- Barón, L.F. y Valencia, M., (2001), “Medios, audiencias y conflicto armado: Representaciones sociales en comunidades de interpretación y medios informativos”, En: *Controversia*, número 178 (mayo), páginas 43-81, Bogotá, CINEP
- Barón, L.F., Valencia, M., Bedoya, A., Rodríguez, E., y Díaz, O., (2004), *Estado de alerta continua: noticieros y guerra en Colombia*, Bogotá/Cali, CINEP, Colciencias, Universidad ICESI, Pontificia Universidad Javeriana.
- Beck, U., (1999), *La invención de lo político*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Bedoya, J. y Velásquez, C.M., (2004), *Información, violencia y terrorismo: La prensa ¿un obstáculo para la paz?*, Bogotá, Universidad de la Sabana.
- Bedoya, J., (2005), *Diario de un combate*, Bogotá, Intermedio.
- , (2008), *En las trincheras del Plan Patriota*, Bogotá, Intermedio.
- , J., (2010), *Te hablo desde la prisión*, Bogotá, Intermedio.
- , J., (2010), *Vida y muerte del “Mono Jojoy”*, Bogotá, Intermedio.
- Beltrán, L.R., (1998), “Comunicadores y derechos humanos: ¿de malos amigos a ángeles guardianes?”, En: *Chasqui*, número 64 (diciembre), páginas 24-28, Quito.
- Benavides, J., (2006), “Historias de la televisión en región: ¿qué es esa joda?”, En: *Signo y Pensamiento*, volumen 25, número 48, páginas 77-89. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Bonilla J. y García, E., (1988), *Los discursos del conflicto: Espacio público, prensa y protesta social en Colombia*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Bonilla, J. y García, M.E., (1996), *Espacio público y representaciones del conflicto: El discurso editorial sobre los paros cívicos: El Tiempo 1987-1995*, [Tesis de grado], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.

- , (1998), “Espacio público y conflicto en Colombia. El discurso de prensa sobre la protesta social: El Tiempo 1987-1995”, En: Restrepo, G., Jaramillo, J. y Arango, L. (editores), *Cultura, política y modernidad*, páginas 276-309, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Bonilla, J. y Patiño, G., (2001, editores), *Comunicación y política: Viejos conflictos, nuevos desafíos*, Bogotá, AFACOM, Pontificia Universidad Javeriana.
- Bonilla, J., (1995), *Violencia, medios y comunicación: Otras pistas en la investigación*, México, Trillas.
- , (2002), “Periodismo, guerra y paz: Campo intelectual periodístico y agendas de la información en Colombia”, En: *Signo y Pensamiento*, volumen 21, número 40, páginas 53-71, Bogotá.
- Cadavid, A., (1985), *La prensa católica en Colombia*, Bogotá, CINEP, ACICS, Pontificia Universidad Javeriana.
- , (1989), “Comunicación y violencia: Hacia la construcción de un terreno para el debate”, En: *Controversia*, número 153-154, Bogotá, CINEP.
- Castaño, L., (2002), *La prensa y el periodismo en Colombia hasta 1888: una visión liberal y romántica de la comunicación*, Medellín, Academia Antioqueña de Historia.
- Cohen, S., (2014), “Conferencia”, En: Congreso de Consejo de Redacción (Bogotá: 7: 2014), [*Memorias*].
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH, 2000), *Informe anual del relator especial para la libertad de expresión 2000*, Washington, OEA.
- Corporación Latinobarómetro, (2014), Informe de 2000, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro.
- Correa, C.M., (2004), *Préstame tus ojos*, Colombia, El Propio Bolsillo.
- Delgado, F., (1998), “Comunicación, inseguridad ciudadana y control social”, En: *Comunicación: Estudios venezolanos de Comunicación*, número 103 (agosto), Caracas.
- Donadío, A., (2004), *Los farsantes: Banco Andino: el fraude que nunca existió*, Bogotá, Hombre Nuevo Editores.
- , (2010), *Que cese el fuego: Homenaje a Alfonso Reyes Echandía*, Bogotá, Sílabas Editores.

- , (2011), *El periodista y su libreta*, Bogotá, Hombre Nuevo Editores.
- , (2012), *La llave de la transparencia: El periodismo contra el secreto oficial*, Bogotá, Sílabas Editores.
- Duzán, M.J., (1994), *Crónicas que matan*, Bogotá, Aguilar.
- , (2004), *Así gobierna Uribe*, Bogotá, Planeta.
- , (2010), *Mi viaje al infierno*, Bogotá, Norma.
- Esteinou, J., (1999), “Medios de comunicación y violencia”, En: *Razón y Palabra*, año 4, número 13 (enero-marzo), México D.F.
- Fisas, V., (1987), *Introducción al estudio de la paz y los conflictos*, Barcelona, Lerna.
- Flores, P. y Crawford, L., (2001), “El papel de los relatos noticiosos en la construcción de un proyecto comunicativo para la paz en Colombia”, En: *Diálogos de la Comunicación*, número 61 (marzo), páginas 46-55, Lima.
- Fowks, J., (2003), “Periodismo: emociones durante la cobertura de la guerra”, En: *Diálogos de la Comunicación*, número 66 (junio), Lima.
- Fundación Guillermo Cano Isaza, (2012), *Tinta indeleble: Guillermo Cano: vida y obra*, Bogotá, Aguilar.
- Fundación para la Libertad de Prensa y Federación Colombiana de Periodistas, (FLIP y Fecolper, 2012), *Libertad de prensa en Colombia: situación general*, Bogotá, FLIP.
- Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP, 2004), *Los corruptos, principales agresores de los periodistas Colombianos: Informe anual sobre libertad de prensa en Colombia, 2003*, Bogotá, FLIP.
- , (FLIP, 2008), *El desafío de informar en Colombia: Libertad de prensa en Colombia en 2007*, Bogotá, FLIP.
- , (FLIP, 2011), *El olvido de la justicia, informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 2010*, Bogotá, FLIP.
- , (FLIP, 2013), *De las balas a los expedientes, informes sobre la libertad de prensa 2012*, Bogotá, FLIP.
- , (FLIP, 2013), Revisión documental realizada por el CNMH, *Informes sobre libertad de Expresión 1995-2012*, Bogotá.
- , (FLIP, 2014), [Casos expuestos en la página web], Consultado en junio de 2014 en <http://flip.org.co/cifras-indicadores/periodistas-asesinados>

- , (FLIP, 2014), “Arauca, la resistencia del periodismo herido”, En: Fundación para la Libertad de Prensa, *Informe sobre el estado de la libertad de prensa, 2014*, Bogotá, FLIP.
- García, M.E. y Pereira, J.M., (2000), “Comunicación, universidad y cultura de paz”, En: *Diálogos de la Comunicación*, número 59-60 (octubre), páginas 66-73, Lima.
- García, M.E. y Romero, E., (2001), “Las trampas de la aparición: Medios de comunicación y conflicto armado en Colombia”, En: Bonilla, J. y Patiño, G. (editores), *Comunicación y política: Viejos conflictos, nuevos desafíos*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- García, M.E., (2000), *El mito del bien común: Información y conflictos armados*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Giraldo, D., Roldán, I. y Flórez, M.A., (2003), *Periodistas, guerra y terrorismo*, Bogotá, Planeta, Colección Primera Plana.
- Gómez, J., (2005), *Medios de comunicación y conflicto urbano: Análisis de contenido de los medios de comunicación regionales en el conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín*, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana.
- Guerrero, A., (1981), *La manipulación de la información*, Bogotá, CINEP.
- , (1982), *Nuevos vientos sobre el Caribe*, Bogotá, CINEP.
- , (1999), *El amor bravío*, Bogotá, Ediciones Aurora.
- , (2001), “Análisis de contenido de prensa: Entre líneas”. En: Guerrero, A. y otros, “Las trampas de la guerra”, En: Corporación Medios para la Paz, *Periodismo y conflicto*, Bogotá, Medios para la Paz, páginas 17-48.
- Gutiérrez, M.L., (2003), “Lecciones para aprender del cubrimiento de hechos violentos”, En: *Palabra-Clave*, número 8 (junio), páginas 51-73, Bogotá.
- Habermas, J., (1981), *Historia y crítica de la opinión pública: La transformación estructural de la vida pública*, Barcelona, Gustavo Gili.
- Instituto Prensa y Sociedad, (2003, 3 de abril), *Prensa de Arauca en mira de grupos armados*, Recuperado en https://www.ifex.org/colombia/2003/04/03/ipys_protests_armed_groups_threat/es/

- López de la Roche, F., (2000), “Periodismo y comunicación del conflicto armado y del proceso de paz en Colombia: consideraciones teóricas”, En: *Diálogos de la Comunicación*, número 59-60 (octubre), páginas 293-305, Lima.
- , (2006), “La historia de los noticieros de televisión en Colombia entre 1954 y 2004”, En: Garcés, Á. y Lombana, P. (editoras), *Pensar la comunicación: Reflexiones y avances en investigación*, Medellín, Universidad de Medellín.
- , (2014), *Las ficciones del poder: Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez*, Bogotá, IEPRI, Debate.
- Martín-Barbero, J., (1997), *La investigación de comunicación en Colombia: balance y prospectiva*, Bogotá, Colciencias.
- Mata, M.C., (2000), “De la presencia a la exclusión: La obliteración del conflicto y el poder en la escena mediática”, En: *Diálogos de la Comunicación*, número 59-60 (octubre), páginas 167-174, Lima.
- Nieto, P., (1997), “La banalidad del horror: desplazamiento forzado y medios de comunicación”, En: *Revista Estudios Políticos*, número 11, páginas 154-164, Medellín, Universidad de Antioquia.
- , (2006), *Jamás olvidaré tu nombre*, Medellín, Alcaldía de Medellín, Secretaría de Gobierno, Programa Víctimas del Conflicto Armado.
- , (2007), *El cielo no me abandona*, Medellín, Alcaldía de Medellín, Secretaría de Gobierno, Programa Víctimas del Conflicto Armado.
- , (2010), *Donde pisé aun crece la hierba*, Medellín, Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Secretaría de Gobierno, Programa Víctimas del Conflicto Armado.
- , (2012), *Los escogidos*, Medellín, Sílabas editores.
- Noche y Niebla, (2004), *Barrancabermeja, la otra versión*, Bogotá, CINEP.
- Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana, Colombia, (2002), “La libertad de prensa y la ética profesional en el

- cubrimiento del conflicto”, En: *Sala de Prensa* (abril), Bogotá, Disponible en www.saladeprensa.org
- Ortega, F. y Humanes, M.L., (2000), *Algo más que periodistas: Sociología de una profesión*, Barcelona, Ariel.
- Pareja, R., (1984), *Historia de la radio en Colombia: 1929-1980*, Bogotá, Servicio Colombiano de Comunicación social.
- Pécaut, D., (2000), “Opinión pública, violencia y memoria histórica”, En: *El Espectador*, separata La Revista, número 8 (septiembre).
- Peralta, V., (1998), “Violencia política y medios de comunicación en América Latina”, En: *Revista de Occidente*, número 209, páginas 79-90, Madrid.
- Reguillo, R., (1996), “Ensayo(s) sobre la(s) violencia (s): Breve agenda para la discusión”, En: *Signo y Pensamiento*, número 29, Bogotá, Departamento de Comunicación, Pontificia Universidad Javeriana.
- , (1998, diciembre), “Un malestar invisible: derechos humanos y comunicación”, En: *Chasqui*, número 64, páginas 18-23, Quito.
- Réniz, D., (2002), “La información en tiempos de guerra y terrorismo”, En: *Revista Javeriana*, número 687, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Reporteros sin Fronteras, (2003, abril 1), *RSF está preocupada por el riesgo de una guerra sin periodistas en el Departamento de Arauca*, [en línea], Recuperado en https://www.ifex.org/colombia/2003/04/01/rsf_concerned_that_war_torn_region/es/
- Restrepo, J., (2014), *El guardián del fuego*, Bogotá, Intermedio.
- Rey, G. y otros, (2003), *Calidad informativa y cubrimiento del conflicto: Estándares de calidad periodística en el cubrimiento del conflicto armado en Colombia*, Bogotá, Proyecto Antonio Nariño, Fondo editorial Cerec.
- Rey, G., (1998a), “Los enfrentamientos sin gesto”, En: Rey, G. (compilador), *Balsas y medusas: Visibilidad comunicativa y narrativas políticas*, Bogotá, Fundación Social, FESCOL y CEREC, páginas 207-220.
- , (1998b), “Silencios prudentes, protagonismos activos, Narración y medios de comunicación en el conflicto bélico: El caso de Las Delicias”, En Rey, G. (compilador), *Balsas y*

- medusas: Visibilidad comunicativa y narrativas políticas*, Bogotá, Fundación Social, FESCOL y CEREC.
- , (2000, octubre), “Gritar en sueños: Violencias, comunicación y paz”, En: *Diálogos de la Comunicación*, números 59-60, páginas 317-331, Lima.
- , (2008), *La otra cara de la libertad: La responsabilidad social empresarial en medios de comunicación de América Latina*, Bogotá, FNPI, Fundación Carolina, Avina, PEP PUJ.
- Rincón, O. y Ruíz, M., (2002), “Más allá de la libertad: informar en medio del conflicto”, En: *Signo y Pensamiento*, volumen 21, número 4, páginas 72-860, Bogotá.
- Rodrigo, M., (1991), *Los medios de comunicación ante el terrorismo*, Barcelona, Icaria.
- Rodríguez, C., (2008, editora), *Lo que le vamos quitando a la guerra: Medios ciudadanos en contextos de conflicto armado en Colombia*, Bogotá, FES.
- Rondelli, E., (1998, diciembre), “Medios y violencia: acción testimonial, prácticas discursivas, sentidos sociales y alteridad”, En: *Diálogos de la Comunicación*, número 53, páginas 66-82, Lima.
- Ruíz, M. y Rincón, O., (2002), *Bajo todos los fuegos: Los periodistas en el conflicto colombiano*, Bogotá, Proyecto Antonio Nariño.
- Santos-Calderón, E., (1985), *La guerra por la paz*, Bogotá, Cerec.
- , (2001), *Palabras pendientes*, Bogotá, El Áncora.
- , (2002), *Fiestas y funerales*, Bogotá, Intermedio.
- Santos-Calderón, E. y Pinzón, P., (1988), *Fuego cruzado*, Bogotá. Cerec.
- Sierra, A. y Sanger, C., (2005), *The role of the media in conflict prevention and peace building*, Course Manual, Costa Rica, University for Peace.
- Smeets, M., (1999, agosto), “El periodismo en la etapa de posguerra en Guatemala y el Salvador”, [en línea], En: *Sala de Prensa*, Bogotá, Disponible en www.saladeprensa.org
- Soria, C., (1985), “La ética periodística ante el desafío terrorista. Cuestiones y propuestas profesionales: la función pacificadora de los medios”, En: *Periodismo y Ética*, Chile, PGLA.

- Vallejo, M., (2001), “Los ‘padrecitos’ fundadores de la prensa comunista en Colombia”, En: *Signo y Pensamiento*, volumen 20, número 39, páginas 35-45, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- , (2006), *A plomo herido: una crónica del periodismo en Colombia*, Bogotá, Planeta.
- Velásquez, C.A., (2003, junio), “El estado de la libertad de prensa en Colombia: una mirada con énfasis en las regiones”, En: *Palabra-Clave*, número 8, páginas 11-34, Bogotá.
- Verdad Abierta*, (2011, 20 de septiembre), *Muerte a Secuestradores: orígenes del paramilitarismo*, [en línea], Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/244-la-historia/auc/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo>
- Zuluaga, J., (2000), “Los riesgos del escalamiento de la guerra”, En: *UN periódico*, número 15, Bogotá.

Cuadro 25. Número de asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia, según el tamaño de los medios de comunicación en que laboraban. Periodo Informe CNMH (diciembre 1977 a agosto 2015)

Definición	Tamaño de los medios	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1977-1985	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1986-1995	Periodos 5 años		Periodo 10 años 1996-2005	Periodos 5 años		Periodo 10 años 2006-2015	Total de víctimas de asesinatos por tamaño y cantidad de los medios 1977-2015	Total de víctimas de asesinato por tamaño de los medios 1977-2015	
		1977-1980	1981-1985		1986-1990	1991-1995		1996-2000	2001-2005		2006-2010	2011-2015				
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia nacional e internacional	Gran medio	0	1	1	8	3	11	2	2	4	0	0	0	16	21	Solo en grandes medios
Periodistas que trabajan en varios grandes medios	Varios medios (Solo grandes medios)	1	1	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	5		
Periodistas que trabajan solo en un medio de influencia regional o local	Mediano o pequeño medio	6	3	9	14	21	34	17	25	42	5	6	11	97	112	Solo en pequeños medios
Periodistas que trabajan en medios pequeños o medianos	Varios medios (medios pequeños)	1	1	2	5	0	5	3	3	6	2	0	2	15		
Periodistas que trabajan en uno o varios grandes medios y también en uno o varios pequeños medios	Varios medios (gran medio/pequeño medio)	0	2	2	3	2	5	3	0	3	1	0	1	11	11	En uno o más grandes medios y también en uno o más medios de comunicación pequeños
Periodistas que trabajan en organizaciones no periodísticas	Agremiaciones	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
Periodistas independientes	Freelance	1	0	1	0	2	2	2	0	2	0	0	0	5		
Voceador de venta de prensa escrita	Voceadores	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	Durante este periodo se presenta el único asesinato contra un voceador de prensa escrita (no periodista)	
Total según periodos de tiempo de 5 años		9	9		34	28		27	31		8	6				
Total según periodos de tiempo de 10 años				18			62			58			14			
Total en el periodo del Informe														152		

Fuentes: CNMH, 2015, Elaboración propia con cifras de la FLIP; CNMH, 2013-2015, Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; González y Lozano, 2004, “La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH.

Cuadro 5. Para construir un memorial: asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia (diciembre 1977 a agosto 2015). Informe CNMH.

N°	Apellido	Nombre	Año de asesinato	Mes	Día	Lugar del asesinato	Ciudad	Medio	Tipo de Medio	Labor	Desempeño como periodista y descripción de los hechos del asesinato	Presunto implicado
1	Ramírez París	Carlos	1977	Diciembre	11	Norte de Santander	Cúcuta	Radio Guaymaral	Radio	Director / Gerente	Asesinado por dos miembros de la Policía en las inmediaciones del Departamento de Policía de Santander. El periodista iba en su carro particular, murió tras recibir golpes de culata de revólver.	Fuerza pública
2	Quinóñez	Silvio Emilio	1979	Febrero	nn	Caldas	La Dorada	Diario <i>El Chanchullo</i>	Prensa	Director / Gerente	El periódico, que dedicaba la mayor parte de sus ediciones a la denuncia de hechos de corrupción administrativa, había sacado a la luz pública los malos manejos en el Instituto Nacional Dorada por falta de auditoría. Fue asesinado por Jairo Bohórquez Caldas, auditor de esta última entidad.	Corrupción política
3	López Árias	César Augusto	1979	Marzo	13	Risaralda	Pereira	Caracol Radio / <i>El Tiempo</i>	Radio y prensa	Periodista	Fue cofundador del diario <i>La Tarde</i> de Pereira y se desempeñaba como corresponsal de <i>El Tiempo</i> y director regional de El Reportero Caracol. Por razones humanitarias decidió participar como mediador para buscar la liberación de Martín Castrillón. Fue asesinado por dos miembros de la banda de secuestradores que tenían al empresario. Inicialmente se creyó que había sido víctima de las mafias traficantes de drogas.	Banda criminal
4	Castillo Monterrosa	Carlos Ernesto	1979	Junio	30	Atlántico	Barranquilla	Radio revista deportiva Olímpica	Radio	Director / Gerente	Su área de trabajo era la farándula, razón por la cual muchos de sus artículos publicados lo llevaron a relacionarse con personas influyentes de los departamentos del Atlántico y La Guajira. Fue asesinado por dos sicarios. Tomó partido en una guerra familiar entre incipientes narcotraficantes o productores de marihuana (la guerra entre Valdeblánquez y Cárdenas).	Narcotráfico
5	Ríos Tamayo	Uriel	1979	Agosto	30	Quindío	Armenia	Cadena Super	Radio	Periodista	Fue asesinado por desconocidos. Se desconocen los motivos del crimen.	Desconocidos
6	Soto Pineda	Álvaro	1979	Septiembre	9	Valle del Cauca	Caicedonia	Freelance	Otros/Varios	Periodista	Fue asesinado en su ciudad de residencia por desconocidos. Se desconocen los motivos del crimen.	Desconocidos
7	Valencia Castro	Jesús José "Pepe"	1980	Mayo	10	Caldas	Manizales	Radio Manizales / <i>La Patria</i>	Radio y prensa	Periodista	Dirigía el programa "Cuando suena el clarín" en la emisora Radio Manizales y era corresponsal de <i>La Patria</i> . Fue asesinado por un desconocido en la capital caldense. El periodista se había envuelto en polémicas del Festival Taurino de Manizales, al tomar una posición a favor de los damnificados del terremoto que por esos días había afectado el eje cafetero. Al parecer, esto lo puso en contra de un sector de la política local que decidió tomar represalias.	Corrupción política
8	Palacio Iragorri	Luis	1980	Septiembre	11	Valle del Cauca	Cali	<i>Diario de Occidente</i>	Prensa	Director / Gerente	En la década de los setenta fundó, junto al industrial Álvaro Caicedo, el <i>Diario de Occidente</i> de Cali. Escribía en la sección de opinión de dicho medio. Fue asesinado por guerrilleros del comando Pedro León Arboleda del EPL (Ejército Popular de Liberación).	Guerrilla EPL
9	Gil Ceballos	Libardo	1980	Octubre	14	Guajira	Maicao	Revista Milla Deportiva	Prensa	Director / Gerente	Fue asesinado por sicarios. Estaba realizando una investigación acerca del tráfico de estupefacientes en la región.	Narcotráfico
10	Gómez Zuluaga	Carlos Ancizar	1982	Enero	11	Valle del Cauca	Cartago	Radioperiódico Ondas del Valle	Radio	Director / Gerente	Era director del Radio Periódico Ondas del Valle y corresponsal del periódico <i>El País</i> de Cali. Investigaba sobre el incremento de homicidios en el norte del Valle que, para aquella época, era incipiente. Fue asesinado por desconocidos.	Desconocidos
11	Ariza Villamil	Ramiro	1983	Agosto	16	Valle del Cauca	Buenaventura	<i>El Caleño</i>	Prensa	Periodista	Era corresponsal del diario <i>El Caleño</i> . Fue asesinado por un sicario de la banda Los Cinco. Publicó varias fotografías de Campiño con su esposa, en las cuales se les reseñaba como atracadores con un largo prontuario.	Banda criminal
12	Mora Beltrán	Alirio	1983	Septiembre	19	Valle del Cauca	Cali	<i>El Caleño</i> / RCN Radio Valle	Radio y prensa	Director / Gerente	La semana en que mataron a Alirio Mora Beltrán, él estaba promoviendo, en su programa de Radio Sucesos RCN y en las páginas de <i>El Caleño</i> , la campaña "Niño sin rostro", en la que buscaba recolectar dinero para ayudar a Jesús Éibar Muñoz, un menor de escasos recursos que había sido quemado en un barrio pobre de Cali. Algunos años atrás, gracias a sus colectas y denuncias, Mora Beltrán también fue uno de los que ayudó a conseguir el alcantarillado para la Unión de Vivienda Popular, un asentamiento subnormal al oriente de esa ciudad. Pero a Alirio lo mataron, y con él se fue la iniciativa de conseguir la plata para reconstruirle la cara al niño quemado. A Alirio, que combinaba ese periodismo comprometido y social con las crónicas judiciales, no lo mataron por algo publicado sino por algo que iba a publicar. En Cali todo el mundo sabe, menos la justicia, que lo mataron porque tenía datos y cifras sobre la corrupción de la Policía en el Valle, y sus oscuros nexos con el narcotráfico.	Corrupción política
13	Anaya Barreto	Nelson	1983	Septiembre	26	Antioquia	Medellín	<i>El Colombiano</i> / <i>El Espectador</i>	Prensa	Columnista	Columnista de los periódicos <i>El Colombiano</i> y <i>El Espectador</i> . Un sicario abordó al periodista y le disparó. Había dedicado sus últimas columnas al tráfico de drogas y sus repercusiones en la economía y la política de la región. Además, señaló a algunos funcionarios públicos de tener vínculos con bandas de narcotraficantes.	Narcotráfico
14	Pineda Pineda	Mario	1983	Noviembre	4	Valle del Cauca	Sevilla	Semanario <i>La Razón</i>	Prensa	Director	Fue abordado por un individuo que le hizo tres disparos por la espalda y luego se alejó caminando, en pleno centro de la ciudad, frente a un buen número de testigos que nunca denunciaron al sujeto por miedo a represalias. Denunciaba fuertemente peculados e irregularidades en ese municipio vallecaucano. <i>La Razón</i> era un ejemplo de lo que debe ser la función fiscalizadora de la prensa. Denunciaba frontalmente las irregularidades en la administración municipal: peculados en la Tesorería, despilfarro del presupuesto y abusos en los servicios públicos eran ventilados con nombres propios en sus páginas. En su último número, que salió a la luz al día siguiente de la muerte de Pineda, se denunciaban acuerdos clientelistas en el Concejo Municipal. Según algunas investigaciones periodísticas, un mes antes del crimen de Pineda, el comunicador fue amenazado de muerte por el comandante de la Policía local si lo llegaba a denunciar en "ese H.P. pasquín".	Corrupción política
15	Dumet Acevedo	José Antonio	1984	Abril	9	Sucre	Sincelejo	Círculo de Periodistas de Sucre	Agrupiación	Periodista	Fue asesinado por desconocidos que se le acercaron y lo mataron. Realizaba denuncias de corrupción administrativa.	Corrupción política
16	Batalla	Lides Renato	1984	Septiembre	7	Valle del Cauca	Buenaventura	Diario <i>La Batalla</i> - Radio Buenaventura	Prensa/ Radio	Director / Gerente	Fue asesinado por desconocidos en frente de su casa. Realizaba investigaciones sobre corrupción administrativa y tráfico de drogas en el puerto bonaerense. También expuso varios casos de corrupción por parte de Jesús Jori Valencia en ese momento comandante del Departamento de Bomberos de la ciudad. Su asesinato se dio aproximadamente dos meses antes de que ocupara el escaño que había adquirido como concejal del municipio. Se adjuntaron al proceso a Carlos Arturo Velásquez Perea, alias <i>El Cholo</i> y a Alfonso Bedón alias <i>El Calvo</i> , como autores materiales, pero nunca se consiguió la captura de los autores intelectuales.	Autor material
17	Navia González	Rodrigo María	1984	Septiembre	8	Risaralda	Pereira	Caracol Radio	Radio	Locutor	Fue asesinado por Jairo Muñoz Montoya, quien fue condenado a dos años de cárcel por homicidio culposo. Nunca se logró establecer cuál fue el autor intelectual o los móviles del crimen (aun falta la verificación por fuentes oficiales).	Autor material
18	Martínez Sarria	Cristian	1984	Octubre	27	Bogotá	Bogotá	<i>El País</i> / <i>El Liberal</i> / Agencia de noticias CIEP	Prensa	Periodista	Pasó por el periódico <i>El Liberal</i> de Popayán, <i>El País</i> de Cali y la agencia de noticias CIEP. Cubría temas sobre actividades de las Fuerzas Armadas. Se interesaba en aquellos relacionados con el narcotráfico. Fue asesinado en Bogotá mientras realizaba una investigación sobre el cartel de la droga del occidente colombiano.	Desconocidos
19	Lebrún Múnera	Alberto	1986	Enero	11	Antioquia	Medellín	<i>El Colombiano</i> / <i>El Espectador</i>	Prensa	Periodista	Hace parte de la persecución del Cartel de Medellín a periodistas y personal administrativo de <i>El Espectador</i> .	Narcotráfico
20	León Rengifo	Adolfo	1986	Enero	30	Valle del Cauca	Palmira	Radio Luna de Todelar	Radio	Jefe de redacción	Murió a tiros luego de ser interceptado por sicarios motorizados cuando llegaba a la Casa de la Cultura de Palmira, la cual dirigía.	Desconocidos
21	Camacho Prada	Luis Roberto	1986	Julio	16	Amazonas	Leticia	<i>El Espectador</i> / <i>Ecos del Amazonas</i>	Prensa	Periodista	Fue asesinado en el Parque Central de Leticia junto a dos niños voceadores de prensa que resultaron víctimas de las balas perdidas. Denunció el soborno que había sido pagado a un ex comisario del Amazonas que denunció unas avionetas capturadas por el ejército, presuntamente por sospechas de ser usadas como medio de transporte de estupefacientes. Amenazado de muerte en 1984 luego de una publicación de <i>El Espectador</i> en la que se denunció que capos de la mafia comenzaban a tomarse Leticia, denunciando las actividades de Evaristo Portras Ardila. Hace parte de la persecución del Cartel de Medellín a periodistas y personal administrativo de <i>El Espectador</i> .	Narcotráfico
22	Echavarría Barrientos	Raúl	1986	Octubre	17	Valle del Cauca	Cali	<i>Diario de Occidente</i>	Prensa	Subdirector	Fue asesinado por sicarios motorizados cuando se dirigía a su residencia en una camioneta del medio, en compañía del chofer y un camarógrafo. Por sus posiciones favorables a la extradición y sus críticas a la infiltración de narcotraficantes en la política; al parecer del Cartel de Cali. Subdirector del <i>Diario de Occidente</i> . Este crimen está relacionado con el narcotráfico, más exactamente con el Cartel de Cali. Su labor periodística fue caracterizada por su fuerte apoyo a la extradición de los narcotraficantes. Fue asesinado justamente dos días después de haber escrito la columna "Molinos de papel" en el <i>Diario de Occidente</i> de Cali, en la que propugnaba por la pena de muerte para los mafiosos. La impunidad de este crimen permitió un importante golpe simbólico por parte de los narcotraficantes, pues Echavarría era el más acérrimo crítico de estos y al no mostrarse justicia en este caso, ni siquiera avance alguno en la investigación, se logró acallar a los críticos directos de los narcotraficantes.	Narcotráfico
23	Falla Tamayo	Álvaro	1986	Noviembre	4	Tolima	Ibagué	Periódico <i>El Cronista</i> / Radioperiódico Doctrina	Radio y prensa	Director / Gerente	El hecho se produjo cuando un sicario lo abordó en la calle y le disparó. Su labor principalmente se limitaba a temas agropecuarios, aunque eventualmente se encargaba de otros tipos de temas. Los autores y móviles del crimen nunca se conocieron.	Desconocidos
24	Muñoz Cifuentes	Luis Eduardo	1986	Noviembre	9	Caldas	Aguadas	<i>La Patria</i> / <i>El Colombiano</i>	Prensa	Periodista	Fue asesinado por dos hombres que a las diez de la noche lo raptaron y posteriormente lo ejecutaron. Realizaba el cubrimiento sobre el aumento de la criminalidad en la zona.	Banda criminal
25	Cano Isaza	Guillermo	1986	Diciembre	17	Bogotá	Bogotá	<i>El Espectador</i>	Prensa	Director / Gerente	Salió del periódico poco después de las siete de la noche. Subió a su camioneta Subaru vinotinto, estacionada en las instalaciones del periódico. Al llegar a la Avenida de El Espectador, una amplia calle frente a las oficinas del periódico, Cano entró a la avenida rumbo al sur y pasó al carril izquierdo para dar vuelta en U y pasar al otro carril hacia el norte. Al reducir la velocidad del auto para efectuar el giro, uno de los dos jóvenes que esperaban en una motocicleta estacionada en lugar prohibido, en medio de la avenida, se acercó furtivamente a pie. Cuando estuvo cerca, el joven abrió un estuche negro, sacó una ametralladora pequeña, una MAC-10, arma favorita de los sicarios del Cartel de Medellín, según reconoce la policía. Rápidamente disparó ocho tiros al pecho de Cano. Al tratar de escapar, herido de muerte, pisó el acelerador, se lanzó directamente en sentido contrario y se estrelló contra un poste de luz (nota del diario <i>El Espectador</i> publicada el 12 de diciembre de 2011) http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-316291-el-magnicidio-de-guillermo-cano-isaza-un-crimen-sigue-impune	Narcotráfico
26	Ruiz Castañeda	Mariam	1987	Abril	nn	Antioquia	Turbo	Emisora Ondas del Darién	Radio	Director / Gerente	Fue asesinada a tiros en el puerto caribeño de Turbo. Realizaba trabajos periodísticos sobre la aparición de escuadrones de la muerte en la zona de Urabá.	Banda criminal
27	Bahamón Molina	Fernando	1987	Julio	16	Caquetá	Florencia	<i>El Espectador</i> / Noticiero 24 Horas / RCN Radio	Radio, TV y prensa	Periodista	Los hechos tuvieron lugar en frente del edificio de la Gobernación de Caquetá, en Florencia, cuando dos desconocidos lo abordaron y le dispararon. Realizaba denuncias sobre la mafia de la cocaína en el departamento. Hace parte de la persecución del Cartel de Medellín a periodistas y personal administrativo de <i>El Espectador</i> . El periodista Norberto Antonio Castaño, director del noticiero El Imparcial de la emisora HJ Doble K, manifestó haber conocido de la reciente incautación de un cargamento de droga al Frente 61 de las FARC en el Huila. Lo llamativo es que el nombre de ese frente es Fernando Bahamón Molina. Era líder del Partido Unión Patriótica, razón por la cual posteriormente se crearía el Frente 61 de las FARC que funciona en el Huila, con el nombre de este periodista asesinado.	Narcotráfico
28	Abad Gómez	Héctor	1987	Agosto	25	Antioquia	Medellín	<i>El Mundo</i>	Prensa	Periodista	Su homicidio fue ejecutado por un sicario desconocido. Por su labor como activista de derechos humanos y sus constantes columnas en <i>El Mundo</i> en pro de los mismos, fue incluido en una "lista negra" de los naciesntes grupos paramilitares de la época. Aunque médico de profesión, también se dedicó al periodismo y a la política, oficios a través de los cuales exigió y gestionó mayores recursos para la salud pública y la educación, en vez de que estos fueran invertidos en la guerra.	Paramilitares
29	Gavini Alzate	Nelson	1987	Noviembre	11	Antioquia	Medellín	Periódico <i>Revolución</i>	Prensa	Director / Gerente	Fue asesinado por desconocidos. Al parecer el periodista había sido amenazado de muerte en varias oportunidades por su militancia política en la izquierda y la orientación comunista del periódico.	Desconocidos
30	Zambrano Roa	Belisario	1988	Febrero	21	Valle del Cauca	Buga	RCN Radio	Radio	Periodista	Se desempeñaba como jefe judicial de RCN Cali.Fue asesinado por una ráfaga de ametralladora disparada por dos hombres que lo interceptaron. Viajaba entre Buga y Cali con su compañera y su bebé enferma. En su paso por Buga, Zambrano fue interceptado por desconocidos que le propinaron varios tiros de bala y falleció dentro de su carro. "Nunca se supo qué pasó y hasta el momento se desconoce quiénes fueron los responsables", dice Jair Lenis, director regional de RCN. Los casos de Mora Beltrán, Echavarría y Zambrano fueron relacionados con acciones del narcotráfico. No obstante, no han sido esclarecidos. Su camioneta fue interceptada por otra de la que descendieron los sujetos que descargaron sus armas contra él y su familia. A raíz de su asesinato se creó la medalla "Belisario Zambrano" al mérito periodístico.	Narcotráfico
31	Rojas Bustamante	Álvaro	1988	Marzo	4	Magdalena	Santa Marta	<i>El Informador</i> / <i>El Siglo</i>	Prensa	Periodista	Fue asesinado por desconocidos en motocicleta.	Desconocidos
32	Vélez Toscano	Rodrigo	1988	Junio	1	Valle del Cauca	Caicedonia	<i>El Caleño</i>	Prensa	Periodista	Cubría temas de orden público. Murió como consecuencia de las heridas recibidas luego de ser víctima de un atentado diez años atrás por dos hombres que escondieron sus armas debajo de sus ruanas. En ese mismo hecho murió un vendedor de carne, Albeiro de Jesús Quintero.	Desconocidos
33	Pérez	Oswaldo Regino	1988	Noviembre	11	Córdoba	Montería	<i>El Universal</i>	Prensa	Periodista	El crimen aparentemente se debió al despliegue informativo que le dio a las masacres 'El Tomate' y 'La Mejor Esquina', atribuidas a los paramilitares en su región. Al parecer, miembros del Ejército se aliaron con paramilitares para asesinarlo, luego de señalarlo como "colaborador de la guerrilla". Según algunos periodistas locales, el asesinato de Oswaldo Regino Pérez y el de William Bendeck son casos emblemáticos del comienzo de la filtración del paramilitarismo en la política y fuerza pública en Córdoba y su arremetida para silenciar la prensa.	Paramilitares
34	Giraldo Gálvez	Héctor	1989	Marzo	29	Bogotá	Bogotá	<i>El Espectador</i>	Prensa	Columnista y abogado del medio	Cuando se dirigía en su vehículo a uno de los juzgados de la capital, para atender la representación de los familiares de Guillermo Cano en la investigación por su asesinato, dos jóvenes a bordo de una motocicleta le dispararon seis balazos y luego, uno de ellos descendió para terminar la munición de su pistola contra el periodista. Hace parte de la persecución del Cartel de Medellín a periodistas y personal administrativo de <i>El Espectador</i> .	Narcotráfico
35	Vera López	Luis Daniel	1989	Abril	22	Santander	Bucaramanga	Radio Metropolitana	Radio	Periodista	Fue asesinado por dos hombres y una mujer desconocidos. Realizaba reportes sobre las masacres en su región, atribuidas al grupo paramilitar Los Masetos.	Desconocidos
36	Pérez Arosemena	Adolfo	1989	Mayo	21	Valle del Cauca	Cali	Cruz Roja	Jefe de prensa	Comunicador	Fue asesinado y encontrado con signos de tortura junto con Carlos Enrique Morales. Trabajaba como jefe de prensa de la Cruz Roja y era socio de la empresa Trigo Comunicadores. Se desconoce quienes fueron los posibles asesinos.	Desconocidos
37	Morales Hernández	Carlos Enrique	1989	Mayo	21	Valle del Cauca	Cali	<i>Radar Colombiano</i>	Prensa	Subdirector	Recibió la subdirección del periódico luego de no seguir trabajando para el Grupo Radial Colombiano, pues tenía nexos con los hermanos Rodríguez Orejuela. Desapareció un sábado a las tres de la tarde luego de recibir una llamada de unos posibles anunciantes para pautar en el periódico. Fue encontrado al otro día junto con su colega y amigo Adolfo Pérez con signos de tortura.	Narcotráfico
38	Vallejo Rendón	Jorge León	1989	Junio	16	Antioquia	Medellín	Programadora Pasado Meridiano - Teleantioquia	Programador TV	Director / Gerente	Fundador de la programadora Pasado Meridiano del Canal regional Teleantioquia. Fue encontrado muerto de un disparo en un bosque cercano a Envisgado, Antioquia. El día anterior tres hombres le habían sacado a la fuerza de su compañía programadora de TV en Medellín y le habían introducido en un vehículo que les esperaba. Formado como periodista en Roma, trabajaba como corresponsal y hacía parte de la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Estaba de visita familiar en Bello, Antioquia, aprovechando para escribir reportajes sobre la situación colombiana y tenía planes de viajar a Centroamérica para escribir una novela.	Desconocidos
39	Caro Montoya	Juan Gabriel	1989	Junio	17	Antioquia	Medellín	Agencia Slide Comunicación / <i>El Siglo</i>	Prensa	Periodista	Fue asesinado por dos desconocidos en motocicleta que le dispararon cerca de la casa de sus familiares.	Desconocidos
40	Gómez Murillo	Guillermo	1989	Septiembre	16	Valle del Cauca	Buenaventura	<i>El Espectador</i> / <i>El País</i> / RCN Radio	Radio y prensa	Periodista	Periodista de <i>El Espectador</i> , <i>El País</i> y RCN Radio, asesinado en 1989. Se encontraba mirando televisión en la casa de sus padres cuando fue baleado. Había realizado investigaciones sobre la corrupción del gobierno local y se considera que su crimen está relacionado con la arremetida del Cartel de Medellín en contra del diario <i>El Espectador</i> . Su labor se caracterizaba por hacer constante fiscalización de la administración local, presentaba constantemente pruebas sobre las irregularidades cometidas por la administración, además y quizás más importante, cultivó la cultura de la denuncia y motivaba a las personas a que denunciaran las irregularidades que veían. Gómez denunció en varias ocasiones las amenazas contra su vida, pero no recibió tratamiento alguno ni protección por parte de las autoridades. Fue asesinado por tres individuos contratados que se desplazaron hasta su casa.	Narcotráfico
41	Sarasty Obregón	Roberto	1989	Octubre	10	Antioquia	Medellín	Caracol Radio / <i>El Cronista Democrata</i>	Radio y prensa	Periodista	Fue asesinado a tiros en el centro de Medellín. Ex jefe de prensa del Senado de la Republica.	Desconocidos
42	López López	Martha Luz	1989	Octubre	10	Antioquia	Medellín	<i>El Espectador</i>	Prensa	Administradora	Hace parte de la persecución del Cartel de Medellín a periodistas y personal administrativo de <i>El Espectador</i> . El grupo de jefes del Cartel de Medellín autodenominado Los Extraditables, había realizado una amenaza generalizada a todos los empleados del periódico, obligándolos a abandonar la ciudad. El asesinato de López se debió a represalias por su negativa de renunciar. Ese mismo día fue asesinado Miguel Soler.	Narcotráfico

N°	Apellido	Nombre	Año de asesinato	Mes	Día	Lugar del asesinato	Ciudad	Medio	Tipo de Medio	Labor	Desempeño como periodista y descripción de los hechos del asesinato	Presunto implicado
43	Soler Leal	Miguel Arturo	1989	Octubre	10	Antioquia	Medellín	<i>El Espectador</i>	Prensa	Jefe de circulación	Hace parte de la persecución del Cartel de Medellín a periodistas y personal administrativo de <i>El Espectador</i> . El grupo de jefes del Cartel de Medellín autodenominado Los Extraditables, había realizado una amenaza generalizada a todos los empleados del periódico, obligándolos a abandonar la ciudad. El asesinato de Soler se debió a represalias por su negativa de renunciar. Ese mismo día fue asesinada la gerente de publicidad del diario en esa ciudad, Martha Luz López.	Narcotráfico
44	Bendeck Olivella	William	1989	Octubre	13	Córdoba	Montería	Emisora La Voz de Montería	Radio	Periodista	Dos pistoleros le dispararon varias veces en las puertas de su casa en la capital cordobesa. El periodista había denunciado la implicación del narcotráfico en el asesinato de Luis Carlos Galán. Era considerado un vehemente fugitivo de los traficantes de droga y grupos guerrilleros. Según algunos periodistas locales, el asesinato de William Bendeck y el de Oswaldo Regino Pérez son casos emblemáticos del comienzo de la filtración del paramilitarismo en la política y fuerza pública en Córdoba y su arremetida para silenciar la prensa.	Paramilitares
45	Vargas Escobar	Diego	1989	Octubre	17	Antioquia	Medellín	RCN Radio Medellín	Radio	Periodista	Fue asesinado por dos hombres y una mujer desconocidos. Realizaba reportes que el periodista hizo sobre las masacres en su región, atribuidas al grupo paramilitar Los Masetos.	Banda Criminal
46	Pulido	Jorge Enrique	1989	Noviembre	8	Bogotá	Bogotá	Noticiero Mundo Visión	Televisión	Director / Gerente	Fue asesinado en el centro de Bogotá como consecuencia de un atentado el 29 de octubre. Los hechos tuvieron lugar cuando desconocidos lo abordaron saliendo de las instalaciones de su productora Jorge Enrique Pulido Televisión y lo balearon. Falleció diez días después. Había realizado varios programas con posturas fuertes en contra del narcotráfico y recientemente había realizado una entrevista a la señora madre de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia quien fue asesinado por denunciar a Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. De origen humilde, inició como mensajero en la Cadena Todelar, donde se enamoraría del periodismo y empezaría a ascender hasta llegar a convertirse en el director de la sección de noticias, incluso llegaría a ser profesor de las universidades Tadeo y Javeriana. Su labor se caracterizó por fijar una posición vertical contra el narcotráfico desde la editorial. Emitió una serie de programas dedicada a los miembros de los carteles de Medellín y de Cali. Además dio gran resonancia a todas las peticiones de extradición por parte de los Estados Unidos. Las amenazas se empezaron a materializar desde el 16 de mayo de 1989, cuando ubicaron una bomba en la sede de la programadora que llevaba su nombre, la cual quedó prácticamente destruida, pero él no resultó herido. Posteriormente, el 29 de octubre del mismo año, fue baleado cuando se movía en su carro junto a su colega Jimena Godoy, hecho por el cual diez días después perdería la vida.	Narcotráfico
47	Espejo	José Wenceslao	1989	Diciembre	1	Valle del Cauca	Tuluá	Periódico regional <i>El Tabloide</i>	Prensa	Director / Gerente	Fue asesinado por desconocidos que lo acibillaron en un restaurante, en presencia de su familia. El periodista había publicado algunas informaciones donde denunciaba a traficantes de drogas en la región.	Narcotráfico
48	Domínguez	Cayetano	1990	Febrero	3	Santander	Barrancabermeja	Radio Barrancabermeja	Radio	Director / Gerente	Fue baleado por un hombre que lo esperaba a la salida de la emisora, a las siete de la noche. Había estado investigando actividades violentas en la región. La policía señaló a organizaciones guerrilleras como supuestos responsables del crimen. Era también vicepresidente de la Asociación Colombiana de Periodistas de Barrancabermeja. Se caracterizaba por defender los intereses del gremio de los periodistas. Con recursos propios había fundado la estación de Radio de Barrancabermeja, que posteriormente pasaría a ser una filial de Caracol Radio. Al momento de su muerte venía investigando ciertas acciones violentas en la región, fue baleado mientras visitaba a los equipos de transmisiones de su estación radial.	Desconocidos
49	Duzán Sáenz	Silvia Margarita	1990	Febrero	26	Santander	Cimitarra	Canal BBC	Televisión	Periodista	El crimen se presentó junto con otras tres personas más de un proyecto de desarrollo y paz en la zona del Cararé Opón. Cuando los cuatro estaban reunidos en el restaurante La Tata, hacia las 9:30 de la noche, fueron sorprendidos por tres hombres armados que los acibillaron. Estaba trabajando para el Canal 4 como freelance, haciendo un documental. El informe hablaba sobre la situación de los campesinos de la región, luego de años de violencia a manos de grupos paramilitares financiados por narcotraficantes.	Paramilitares
50	Carrillo	Rubén Dario	1990	Abril	19	Antioquia	Medellín	Caracol Radio / <i>El Espectador</i>	Radio y prensa	Periodista	Fue asesinado dos meses después de recibir amenazas de muerte. Realizaba investigación sobre tráfico de drogas. Hace parte de la persecución del Cartel de Medellín contra el diario <i>El Espectador</i> .	Narcotráfico
51	Tavera	Hernando	1990	Abril	20	Antioquia	Medellín	<i>El Espectador</i>	Prensa	Transportador	Fue asesinado en momentos que conducía un camión con las ediciones del periódico. Hace parte de la persecución del Cartel de Medellín a periodistas y personal administrativo de <i>El Espectador</i> .	Narcotráfico
52	Piedrahita Cardona	Duvardo	1990	Diciembre	4	Bogotá	Bogotá	<i>El Siglo</i>	Prensa	Columnista	Fue asesinado en Bogotá por dos hombres que se movilizaban en un automóvil. Había denunciado amenazas de narcotraficantes que operaban en el norte del Valle. Al parecer, su homicidio está relacionado con la reciente publicación de su libro “Colombia, entre guerra sucia y extradición”. Había recibido amenazas anteriormente. En ese año, fue víctima de cinco atentados.	Narcotráfico
53	Burbano Muñoz	Miguel	1991	Enero	15	Cauca	Bolívar	Caracol Radio	Radio	Periodista	Fue asesinado por guerrilleros en un acto público en el Barrio Obrero del municipio de Cauca.	Guerrilla ELN
54	Turbay Quintero	Diana	1991	Enero	25	Bogotá	Bogotá	Revista <i>Hoy por Hoy</i>	Prensa	Director / Gerente	Había sido secuestrada con los periodistas Juan Vitta, Azucena Liévano, Richard Becerra, Orlando Acevedo, Hero Buss. Solo ella falleció en el operativo de rescate. Cuatro oficiales de la Policía fueron destituidos por errores en la operación. Su muerte y el hallazgo del cadáver de Marina Montoya, hermana del ex secretario de la Presidencia del gobierno de Virgilio Barco, Germán Montoya Vélez, no dieron más alternativa al gobierno que firmar la ley anti extradición. Directora de la Revista <i>Hoy por Hoy</i> , asesinada en 1991. Fue secuestrada por hombres de Pablo Escobar, quienes la engañaron haciéndole creer que iba a encontrarse con Manuel Pérez, sacerdote español que se desempeñaba como líder del ELN, quien nunca se había entrevistado con ningún medio. Turbay murió en el intento de rescate por parte de la Policía, en la finca La Bola en Copacabana, Antioquia. Dada su importancia, por ser la hija del ex Presidente Julio César Turbay Ayala, hizo parte de una serie de secuestros por parte del Cartel de Medellín con el fin de forzar la firma de la ley anti extradición.	Narcotráfico
55	Ortiz Gómez	Antonio María	1991	Abril	22	Norte de Santander	Cúcuta	<i>La Opinión</i>	Prensa	Reportero gráfico	Fue baleado por desconocidos, al parecer por denuncias de corrupción. Su periódico solía denunciar la corrupción local y la mala gestión del gobierno local.	Corrupción política
56	Chaparro	Julio Daniel	1991	Abril	24	Antioquia	Segovia	<i>El Espectador</i>	Prensa	Periodista	Cuando caminaban por la calle de 'La Reina', cuatro hombres les abrieron fuego con armas automáticas. Estaban investigando sobre la masacre de Segovia. Asesinado junto con el fotógrafo Jorge Enrique Torres (http://www.elespectador.com/impresso/judicial/articulo-260749-veinte-anos-sin-prescripcion http://www.reiniciar.org/node/343).	Desconocidos
57	Torres Navas	Jorge Enrique	1991	Abril	24	Antioquia	Segovia	<i>El Espectador</i>	Prensa	Reportero gráfico	Cuando caminaban por la calle de 'La Reina', cuatro hombres les abrieron fuego con armas automáticas. Estaban investigando sobre la masacre de Segovia. Asesinado junto con el periodista Julio Daniel Chaparro.	Desconocidos
58	Rodríguez	Carlos Julio	1991	Mayo	20	Caquetá	Florencia	Emisora La Voz de la Selva	Radio	Periodista	Fueron asesinados por desconocidos. Mientras él y José Libardo Méndez se desplazaban en un vehículo, fueron interceptados por sujetos que les dispararon en múltiples ocasiones. Realizaban fuertes críticas contra funcionarios, dirigentes políticos, e incluso, la iglesia regional. Asesinado junto con su colega José Libardo Méndez. Resultó herida la locutora Judith Aristizabal.	Guerrilla FARC
59	Méndez	José Libardo	1991	Mayo	20	Caquetá	Florencia	Emisora La Voz de la Selva	Radio	Periodista	Fueron asesinados por desconocidos. Mientras él y Carlos Julio Rodríguez se desplazaban en un vehículo, fueron interceptados por sujetos que les dispararon en múltiples ocasiones. Realizaban fuertes críticas contra funcionarios, dirigentes políticos, e incluso, la iglesia regional. Asesinado junto con su colega Carlos Julio Rodríguez. Resultó herida la locutora Judith Aristizabal, esposa de Méndez.	Guerrilla FARC
60	Hoyos Lozano	Arsenio	1991	Septiembre	13	Meta	Granada	Emisora La Voz del Ariari	Radio	Director / Gerente	Fue abordado por un sicario cuando se disponía a ingresar a las instalaciones de la emisora a trabajar. Se desempeñaba como líder cívico y era ex alcalde del municipio de Granada. Hoyos era periodista y director de la emisora La Voz del Ariari de Granada (Meta), donde realizaba un magazín diario, de 7:30 a 8:00 de la mañana. Además de su trabajo como periodista, Hoyos era un líder cívico y militante del liberalismo santofimista, liderado en el Meta por Berley Patiño. Gracias a esa militancia, Hoyos había sido alcalde de Granada. Patiño fue asesinado en 2000 cuando había sido elegido alcalde de Granada, presumamente por el grupo paramilitar que entonces se denominaba Autodefensas del Ariari. Aunque tres años antes, en 1988, había sido asesinado Alfonso Meneses, director del noticiero de la misma emisora, miembro de la Unión Patriótica, el crimen hasta ahora sigue en la impunidad.	Paramilitares
61	Ahumada Bado	Rodrigo	1991	Octubre	8	Magdalena	Santa Marta	Radio Galeón	Radio	Director	Dirigía la emisora de su propiedad Radio Galeón, la cual recibió un atentado contra la estación de equipos en 1989. En su espacio habitual “Notas y micronotas de Ahumada B.”, ventilaba los entuertos de la administración de la ciudad y el departamento, los pecados de la clase política y los grupos de extrema en la ciudad. La noche del 26 de septiembre de 1991 presidió una concentración popular en el sector de El Pando, en Santa Marta. Al terminar el acto, un hombre que lo esperaba cerca de la tarima le disparó varias veces y se perdió entre la multitud. El periodista junto a su familia buscaron atención especializada por clínicas y hospitales en busca de atención especializada. Murió el 8 de octubre después de estar en coma profundo. La policía judicial formuló varia hipótesis, ligadas en primer lugar a su ejercicio como periodista y otras a intereses ocultos de sus detractores políticos. Según declaraciones de testigos fue capturado el sospechoso Ricardo Marriaga, <i>El Indio</i> , un miembro del hampa samaria, quien fue liberado por razones desconocidas en 1997.	Autor material
62	Solano Brochero	Rafael Antonio	1991	Octubre	30	Magdalena	Fundación	Freelance	Prensa	Director / Gerente	Fue asesinado por varios desconocidos que lo abordaron frente a su residencia. Periodista de Santa Marta, asesinado de cuatro balazos por dos pistoleros que lo atacaron delante de su casa, en Las Tablitas, de Santa Marta. Fue corresponsal de <i>El Tiempo</i> y era propietario de una agencia de prensa y publicidad en Fundación, Magdalena. Los asesinos se dieron a la fuga y el móvil del crimen se desconoce.	Desconocidos
63	Rojas Monje	Nestor Henry	1991	Diciembre	28	Arauca	Arauca	<i>El Tiempo / Concordia Fronteriza</i>	Prensa	Director / Gerente	Fue asesinado por dos sicarios en moto cuando llegaba a su casa en Arauca. Había escrito un reportaje para el diario <i>El Tiempo</i> , en el que informaba sobre los pactos secretos que el dirigente político Marcos Ayala, aspirante a la gobernación del departamento, sostenía con jefes guerrilleros. El agresor fue identificado como Wilson Eduardo Daza Rozo, guerrillero de las FARC.	Guerrilla FARC
64	Jaimes	Ismael	1992	Mayo	6	Santander	Barrancabermeja	Diario <i>La Opinión del Magdalena Medio</i>	Prensa	Director	Miembro de la UP. En el momento de su asesinato estaba ejerciendo el periodismo pero tenía antecedentes como dirigente político. Militó en el Partido Comunista y en la Unión Patriótica. En días anteriores a su muerte, las FARC habían circulado un panfleto donde advertían la muerte de “un juez, un periodista y un dirigente político”.	Fuerzas Militares
65	Tirado Castañeda	John Félix	1992	Agosto	5	Valle del Cauca	Cartago	<i>Diario del Otún</i>	Prensa	Periodista	Fue asesinado en Cartago por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. Los sujetos dispararon contra Tirado cuando pasaba frente a la Iglesia de Guadalupe. En los hechos también murió el niño Ferney Orozco, de ocho años.	Desconocidos
66	Cortés Soto	José Domingo	1992	Noviembre	15	Córdoba	Valencia	Emisora Ondas de Urrá	Radio	Periodista	Fue asesinado cerca al municipio de Valencia, por cuatro presuntos guerrilleros que ingresaron a la finca del periodista en la que él se encontraba con su compañera, Cecilia Domínguez Barrios. Los sujetos dispararon contra los dos, causándoles la muerte.	Guerrilla
67	Gómez	Gerardo Didier	1993	Febrero	11	Valle del Cauca	Cali	Freelance	Radio	Periodista	Fue asesinado mientras conducía su automóvil en la carretera que comunica a Cali con Buga. Al parecer, los responsables del crimen serían personas inconformes por la evaluación que el periodista había hecho del festival taurino.	Desconocidos
68	Colmenares Baptista	José Eustorgio	1993	Marzo	12	Norte de Santander	Cúcuta	<i>La Opinión</i>	Prensa	Director / Gerente	Fue asesinado por hombres que le dispararon desde una camioneta a las 7:30 de la noche cuando se encontraba con su esposa descansando en el solar de su casa, ubicada en el barrio Los Caobos. Dos días después, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, el ELN se atribuyó el crimen. El mensaje calificó el homicidio como una “alerta roja” para que se “rectifique la práctica del periodismo, se retome la ética profesional y los medios cumplan su función social e imparcial”. Dos años después, en el marco de un proceso de diálogo, la guerrilla le presentó sus excusas al periódico.	Guerrilla ELN
69	Lajud Catalán	Carlos	1993	Marzo	19	Atlántico	Barranquilla	Emisoras ABC	Radio	Periodista	Realizaba denuncias de corrupción. Hubo serios indicios de que el crimen fue ordenado por el alcalde Bernardo Hoyos, pero nunca fue vinculado a la investigación. El viernes antes de su asesinato, en su programa radial, dijo que el lunes llevaría pruebas para demostrar sobornos a funcionarios de la alcaldía. Se supone que lo mataron para evitar la difusión de tales pruebas. Existen sospechas de encubrimiento por parte de funcionarios públicos.	Corrupción política
70	De la Rosa Toscano	Nelson	1993	Agosto	3	Bolívar	Cartagena	<i>El Universal</i>	Prensa	Reportero gráfico	Fue asesinado por desconocidos que le dispararon a dos cuadras de su casa. Sus compañeros de trabajo aseguraron que había recibido amenazas por la publicación de fotografías de una banda criminal.	Desconocidos
71	Martínez Espinosa	Manuel José	1993	Septiembre	28	Cauca	Popayán	Radio Super	Radio	Periodista	Fue asesinado por sicarios en la puerta de su casa cuando el periodista esperaba que su esposa le abriera la puerta del garaje. La mujer también resultó herida cuando salió a auxiliar a su marido. Realizaba denuncias en un programa radial comunitario. Su hijo, el también periodista Fernán Martínez Mahecha, logró una condena a la Nación por la participación de un coronel del Ejército en el plan, nunca hubo cargos criminales.	Corrupción política
72	Baquero Sarmiento	Danilo Alfonso	1993	Diciembre	26	Arauca	Tame	Emisora Bolivariana	Radio	Periodista	El periodista, que venía recibiendo amenazas, fue secuestrado en el balneario Macaguana, en esa ciudad araucana. Posteriormente fue encontrado muerto de varios disparos por miembros del Frente Domingo Laín del ELN.	Guerrilla ELN
73	Medina Parra	Jesús Antonio	1994	Enero	28	Norte de Santander	Cúcuta	Emisora Radio Punto	Radio	Periodista	El comunicador fue abatido de seis balazos cuando se disponía a ingresar a la emisora para dar inicio a su programa, en el cual criticaba fuertemente la corrupción local y la dirigencia política del departamento. En sus últimos programas venía criticando la mala prestación de servicios por parte de las entidades estatales, así como la inoperancia de la Policía frente a la delincuencia y algunas actuaciones irregulares del ex gobernador Assaf Elcure. El manejo de estos temas le había generado amenazas contra su vida.	Corrupción política
74	Yepes Lozano	Horacio	1994	Mayo	25	Valle del Cauca	Cali	Semanario <i>El Tabloide</i>	Prensa	Columnista y locutor	Yepes se movilizaba en el Renault 9 de placa WS-9918 y fue atacado a tiros por dos hombres en moto cuando transitaba por el sitio La curva de las feas, en las afueras de Tuluá. En el hecho resultó herido Daniel Alberto Ortiz, que acompañaba al locutor. Alternaba sus labores de locutor y colaborador de semanarios con el cargo de supervisor en una multinacional.	Desconocidos
75	Marín Pinzón	Abelardo	1994	Mayo	27	Valle del Cauca	Cali	Canal Telepacífico	Televisión	Camarógrafo	Unos sicarios dispararon contra el comunicador de 26 años en momentos en que este salía de su apartamento, al sur de la ciudad. El crimen obedeció a represalias de bandas de narcotraficantes por imágenes que Marín había grabado donde se veían varios de sus integrantes.	Narcotráfico
76	Múnera	Martín Eduardo	1994	Septiembre	7	Antioquia	Medellín	Radio Reloj	Radio	Locutor	Fue asesinado por un sujeto sin identificar que le inyectó cianuro en el cuello, en momentos en que viajaba en un bus. No son claros los motivos del crimen, pero no se descarta que sea por razones del oficio periodístico. Múnera también se desempeñaba como vicepresidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Caracol.	Desconocidos
77	Ariza Olarte	Gildardo	1995	Abril	19	Santander	Vélez	Emisora Ondas del Carare	Radio	Director / Gerente	Varios hombres llegaron a su lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el periodista. Realizaba informaciones que defendían los derechos de los campesinos. Denunció atropellos de los frentes 11 y 23 de las FARC contra los campesinos de la región.	Guerrilla FARC
78	Pelayo	Iván Darío	1995	Agosto	17	Arauca	Puerto Rondón	Llanorámica Estéreo FM 102.3	Radio	Director / Gerente	Un comando de la guerrilla del ELN entró a los estudios de radio y lo asesinó. Los guerrilleros dejaron volantes en los que acusaban a Pelayo de ser amigo de los paramilitares. Intentaron obligar a los locutores a leer al aire un comunicado en el que lo acusaban de ser “enemigo del pueblo y amigo de los paramilitares”.	Guerrilla ELN
79	Cruz Díaz	Gabriel	1995	Noviembre	11	Córdoba	Chinú	<i>El Heraldo</i>	Prensa	Periodista	Asesinado con arma blanca por parte de varios desconocidos. Se encontraba trabajando en un libro sobre las actividades de los militares en contra de militantes de izquierda de la región.	Desconocidos
80	Acero Cadena	Ernesto	1995	Diciembre	12	Quindío	Armenia	<i>El Informador Socioeconómico / Todelar / Super</i>	Radio y prensa	Director / Gerente	Fue asesinado de tres balazos por un desconocido que huyó. Acero denunciaba por narcotráfico al ex congresista Carlos Alberto Oviedo. Una declaración ante la Fiscalía de Alfonso José Jiménez, funcionario de la unidad de investigaciones secretas de la policía, explicó que, días antes del asesinato, el agente de la policía Edgar Gamboa le contó que se preparaba un asesinato por el que se pagarían cuarenta millones de pesos. Gamboa fue expulsado de la institución y posteriormente fue asesinado en una discoteca de Bogotá. Existe otra prueba contundente, el mismo sicario le habría dicho al fiscal que “si usted me saca de esto, yo le cuento cómo se nos ordenaron los asesinatos de Acero Cadena y Jairo Elías Márquez”. Con la investigación concluida, el juez dejó en libertad al sicario y de esta forma se impidió comprobar la participación de Oviedo como supuesto autor intelectual del crimen.	Narcotráfico
81	Matiz Espinosa	Alfredo Antonio	1996	Enero	5	Arauca	Tame	La Voz del Cinaruco	Radio	Director / Gerente	En el momento de su asesinato combinaba sus actividades de político y copropietario de medio de comunicación con la política. Acusado de ser parte de la guerrilla.	Desconocidos
82	Díaz Cardona	Norvey	1996	Octubre	18	Cundinamarca	Girardot	<i>Rondando Los Barrios</i>	Prensa	Director y locutor	Cubría temas de orden público, denunciaba las desapariciones y asesinatos de indigentes y drogadictos que presuntamente eran obra de un grupo que se identificaba con una “mano negra”. Fue encontrado muerto en la vía que conduce de Ricaurte a Girardot.	Desconocidos
83	Rodríguez Villalba	Santiago	1997	Febrero	2	Sucre	Sincelejo	Radio Costanera	Radio	Periodista	Al parecer por equivocación.	Desconocido
84	Ahumada	Freddy Elles	1997	Marzo	18	Bolívar	Cartagena	Varios periodicos.	Prensa	Reportero gráfico	Manejaba un taxi y fue secuestrado por tres sujetos el 17 de marzo. Su cadáver apareció con huellas de tortura y varios disparos. Fue amenazado por parte de la clase política de Bolívar.	Corrupción política
85	Bedoya Borrero	Gerardo	1997	Marzo	20	Valle del Cauca	Cali	<i>El País</i>	Prensa	Periodista	Se dirigía a su vehículo tras una visita en un complejo de apartamentos, un sujeto se le acercó y le disparó. Denuncias de vínculos entre Fuerzas Armadas, clase dirigente del Valle del Cauca y narcotráfico. Realizaba críticas al gobierno de Ernesto Samper por financiamientos del narcotráfico.	Corrupción política
86	Jaramillo Barbosa	Alejandro	1997	Octubre	24	Nariño	Pasto	<i>El Caleño</i>	Prensa	Director / Gerente	Acribillado a balazos por desconocidos cuando recién regresaba a Colombia. Su existencia de periodista de crónica roja siempre estuvo marcado por el peligro. Sufrió dos atentados, uno de los cuales casi le cuesta la vida, lo que lo obligó a salir de Colombia y buscar refugio en Costa Rica. Según llegó a comentar al diario <i>La Hora</i> , Jaramillo cubrió información que tenía que ver con el narcotráfico y la guerrilla. Los periodistas de Pasto organizaron una enérgica protesta por su homicidio.	Narcotráfico

N°	Apellido	Nombre	Año de asesinato	Mes	Día	Lugar del asesinato	Ciudad	Medio	Tipo de Medio	Labor	Desempeño como periodista y descripción de los hechos del asesinato	Presunto implicado
87	Castro Menco	Francisco	1997	Noviembre	8	Sucre	Majagual	Radio Majagual	Radio	Periodista	Baleado en su casa por desconocidos. Realizaba actividades comunitarias o cívicas en defensa de los campesinos. Había sido amenazado por paramilitares, advirtiéndole que cesara en la defensa de los campesinos en la región.	Paramilitares
88	Márquez Gallego	Jairo Elias	1997	Noviembre	20	Quindío	Armenia	<i>El Marqués</i>	Prensa	Director / Gerente	Salió de la revista y se disponía a abordar su auto cuando fue interceptado por dos motociclistas armados que le dispararon. Realizaba denuncias por narcotráfico al ex senador Carlos Alberto Oviedo. Oviedo también ordenó el asesinato del periodista Ernesto Acero Cadena en 1995.	Narcotráfico
89	García Calderón	Oscar	1998	Febrero	22	Bogotá	Bogotá	<i>El Espectador</i>	Prensa	Periodista	Forzado por desconocidos a subir en un taxi cuando estaba saliendo del periódico. Realizaba denuncias de narcotráfico. Periodista que se encargaba de investigar la “fiesta brava” y sus relaciones con el crimen y el narcotráfico. Poco antes de su muerte había encontrado pistas claras sobre cómo el toreo estaba contaminado por el narcotráfico, razón por la cual le había pedido a sus colegas que le ayudaran con contactos para poder entrevistarse con el Fiscal General de la Nación para entregarles estas pruebas. Finalmente fue asesinado cuando esperaba un taxi a la salida de <i>El Espectador</i> , con lo que se logró acallar sus futuras denuncias.	Narcotráfico
90	Carvajal Carvajal	Nelson	1998	Abril	16	Huila	Pitalito	Radio Sur	Radio	Periodista	Cuando montaba en su moto, luego de salir de una escuela que dirigía y en la que impartía clases, un sicario le disparó. Realizaba denuncias sobre irregularidades en la administración. También realizaba acusaciones contra un constructor por irregularidades. El caso tuvo prescripción de la acción disciplinaria a favor del fiscal 22 seccional de Pitalito y de José Luis Ossa Barrios, Juez Único Penal Especializado, por las irregularidades en el proceso penal del caso Carvajal.	Corrupción política
91	Cortés	Bernabé	1998	Mayo	19	Valle del Cauca	Cali	Noticiero CVN	Televisión	Periodista	Viajaba en un taxi cuando fue baleado junto al conductor del vehículo. Amenazado por parte del ELN y del Cartel de Cali. “Cuando mataron a Bernabé vinieron los investigadores. Se dice que fue asesinado por Julio César Ospina Chaparro, sicario que le dijo a María Ángela Laserna que su muerte fue producto de las noticias publicadas sobre narcotráfico y unos cultivos de droga y yo les dije lo que vi. Ellos dijeron que me llamarían a declarar. Nunca me llamaron”, recuerda Paula González, viuda de Bernabé Cortés, reportero del noticiero CVN, asesinado en Cali en 1998 (Apartes LIBRO 15 AÑOS FLIP por Andrés Morales). Ese 19 de mayo de 1998, Paula, que era consciente de los riesgos que corría su marido por el trabajo que ejercía, vio a dos sujetos extraños rondando en una moto cerca a su casa. “Ese pálpito que uno tiene de que hay algo raro y los detallé –asegura–. Uno estaba en la moto. El otro, estaba al lado, bien puesto, de camisa de seda y mocasín. Ese estaba armado. Se le veía la falda de la camisa suelta y con algo grande metido”. Unos minutos después salió Bernabé de la casa en taxi y fue baleado a pocas cuadras. Paula no pudo contar su versión en la investigación porque nunca la citaron. Se terminó condenando a un tal Julio César Ospina Chaparro como el sicario, aunque no se parecía a ninguno de los sospechosos que Paula vio aquella vez. Si Ospina Chaparro era el culpable, la familia nunca supo por qué lo hizo. ¿Acaso confesó? ¿Lo mató por algo que publicó en el noticiero o por razones personales? ¿Recibió alguna orden? Nada se sabe porque los familiares de Bernabé nunca pudieron ver el expediente. Todavía hay información que sugiere que otras personas, diferentes a Ospina Chaparro, estarían interesadas en la muerte del periodista. Según el libro La censura de Fuego, las amenazas y el asesinato tenían que ver con las FARC y no con el ELN.	Guerrilla
92	Jiménez Pallares	Amparo Leonor	1998	Agosto	11	Cesar	Valledupar	Noticiero QAP / En Vivo	Televisión	Periodista	Luego de llevar a su hijo al colegio, estacionó el automóvil cerca de su vivienda. Allí la esperaba un sicario, quien le disparó. Realizaba actividades comunitarias o cívicas en defensa del desalojo de varias familias. “Vengo a pedir perdón en nombre del Estado a la familia de la periodista Amparo Leonor Jiménez Payares”, dijo el director administrativo del Inpec, Hebert Artunduaga, quien le extendió las palabras a toda la familia de la comunicadora. Lo anterior, según sentencia judicial de última instancia, proferida por el Consejo de Estado, al hallar responsable del vil asesinato de la comunicadora social a Libardo Prado Bayona, un interno de la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ de Santa Marta, quien para la época del asesinato, 11 de agosto del año 1998, debería estar privado de la libertad en el centro carcelario donde cumplía una condena privativa de veinte años y diez meses, pero de manera errónea, fue dejado libre (Comunicado de prensa Alcaldía de Valledupar, febrero de 2012).	Autor material
93	Rangel Moreno	Hernando	1999	Abril	11	Magdalena	Banco	<i>Sur 30 días / Magdalena 30 días / Región</i>	Prensa	Director / Gerente	Se encontraba en la terraza de la casa de un vecino, viendo una pelea de boxeo, cuando un hombre se le acercó por la espalda y le disparó. Realizaba denuncias de la corrupción local y los abusos en la mala administración de los servicios públicos. El asesinato ocurrió el día antes de un paro cívico contra la administración local promovido, entre otros, por Rangel.	Corrupción política
94	Garzón Forero	Jaime Hernando	1999	Agosto	13	Bogotá	Bogotá	Radionet - Caracol	Radio	Periodista / Humorista	En la madrugada, se dirigía en su camioneta a la emisora de radio, cuando dos sicarios a bordo de una moto lo ultimaron a tiros. Realizaba acciones humanitarias para liberar secuestrados. También hacía denuncias de narcotráfico y corrupción político-militar.	Paramilitares
95	Quintero Torres	Guzmán	1999	Septiembre	16	Cesar	Valledupar	<i>El Pilón</i>	Prensa	Periodista	Jefe de Redacción del periódico <i>El Pílon</i> . Se encontraba en el bar del hotel Los Cardones con dos colegas, cuando un sicario entró al lugar y le disparó en cuatro oportunidades. Realizaba denuncias sobre acciones de la fuerza pública. Había recibido amenazas de muerte desde 1995, cuando publicó en <i>El Heraldo</i> un artículo titulado “Los hijos de La Sierra”, sobre los grupos armados en la Serranía del Perijá. Al parecer hay dos personas condenadas como autores materiales, que realmente no son, y nunca se ha dicho la verdad ni de los autores materiales e intelectuales. Su homicidio se ha relacionado con miembros del Ejército y paramilitares. Su labor se caracterizaba por defender sin reserva alguna los derechos humanos, cuestionando por igual a guerrilleros, paramilitares y actores estatales. Meses antes de su asesinato, documentó dos casos de errores militares, en uno resultaron dos mujeres asesinadas, una de ellas embarazada y en el segundo, durante una prueba de polígono, resultó muerto un niño al interior de una casa. La madre del niño fue a la oficina de Quintero, quien además de publicar el caso le aconsejó que demandara al Ejército. Días después la madre apareció muerta y con señales de tortura. Después del asesinato, se vinculó a la investigación a Rodolfo Nelson Rosado Hernández y a Jorge Eliécer Espinel Hernández como autores materiales, quienes después serían absueltos, sentencia apelada por la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), apelación que fue tomada en cuenta por la Fiscalía, con lo que finalmente se llegó a condenar a los asesinos materiales, mientras que los autores intelectuales nunca lograron ser identificados.	Paramilitares
96	Torres	Rodolfo Julio	1999	Octubre	21	Sucre	San Onofre	Estación Fuentes / Radio Caracol / El Meridiano	Radio	Periodista	Desconocidos ingresaron a su residencia, secuestrándolo. El cadáver fue encontrado en el corregimiento Rincón del Mar. Realizaba informaciones sobre el gobierno y la corrupción. Señalado como auxiliador de la guerrilla.	Corrupción política
97	Sánchez Tovar	Alberto	1999	Noviembre	28	Santander	Playón	Canal local de TV	Televisión	Periodista	Su cuerpo fue hallado a la orilla de una carretera en El Playón, al lado de su compañero de medio, Luis Alberto Rincón. Uno de los periodistas tenía un tiro en un ojo, al otro le dispararon diez veces en la cabeza. Grabaron una fiesta de un paramilitar.	Paramilitares
98	Rincón	Luis Alberto	1999	Noviembre	28	Santander	Playón	Producciones Colombia	Televisión	Director / Gerente	Su cuerpo fue hallado a la orilla de una carretera en El Playón, al lado de su compañero de medio, Alberto Sánchez. Uno de los periodistas tenía un tiro en un ojo, al otro le dispararon diez veces en la cabeza. Grabaron una fiesta de un paramilitar.	Paramilitares
99	Medina Motta	Pablo Emilio	1999	Diciembre	3	Huila	Gigante	Telegarzón	Televisión	Camarógrafo	En un retén de la guerrilla, estaba en la parte de atrás de una moto de un policía cuando se dirigía a cubrir la toma del municipio de Gigante.	Guerrilla
100	Restrepo	Fabio Leonardo	2000	Febrero	6	Santander	Girón	Canal local de Barrancabermeja	Televisión	Periodista	Fueron atacados junto a un cabecilla de la guerrilla del EPL mientras cubrían una nota sobre milicianos en Barranca.	Guerrilla EPL
101	Salinas Gallego	Maria Helena	2000	Marzo	5	Antioquia	San Carlos	varias emisoras.	Radio	Periodista / Profesora	Reportada muerta como guerrillera. Se tienen dos hipótesis: Según el Ejército, la comunicadora fue asesinada por el ELN. Por otro lado, murió en un combate entre Ejército y el ELN. La Justicia Penal Militar adelanta investigación por este hecho. Realizaba la docencia e investigaciones.	Guerrilla ELN
102	Restrepo	John Jairo	2000	Marzo	6	Santander	Girón	Canal local de Barrancabermeja	Televisión	Camarógrafo	Fueron atacados junto a un cabecilla de la guerrilla del EPL mientras cubrían una nota sobre milicianos en Barranca.	Guerrilla EPL
103	Restrepo Rocha	Carlos José	2000	Septiembre	7	Tolima	San Luis	<i>El Tangente / El Día / Señal San Luis</i>	Prensa	Periodista	Secuestrado y asesinado por presuntos miembros de fuerzas paramilitares en San Luis. Tenía aspiraciones a ser concejal de esta localidad. Acusado de ser auxiliador de la guerrilla.	Paramilitares
104	Restrepo Guerra	Juan Camilo	2000	Octubre	31	Antioquia	Ebéjico	Galaxia Stereo	Radio	Director	Fue convocado a una reunión por paramilitares derechistas que al parecer estaban furiosos por sus agudas críticas a la administración local. El hermano de Restrepo Guerra lo condujo en moto al lugar del encuentro. Los paramilitares le dispararon mortalmente a Restrepo Guerra frente a su hermano, quien desde entonces se niega a testificar y permanece escondido.	Paramilitarismo
105	Ruiz Cantillo	Gustavo	2000	Noviembre	15	Magdalena	Pivijay	Radio Galeón	Radio	Periodista	Fue asesinado en plena plaza de mercado del pueblo. Amenazado por sus informes periodísticos, en especial aquellos relacionados con el incremento de muertes y asaltos en el área rural de Pivijay, de los que responsabilizaba a grupos armados al margen de la ley.	Desconocidos
106	León Agudelo	Guillermo	2000	Noviembre	30	Caquetá	Florencia	La Voz de la Selva / Caracol	Radio	Periodista	Fue asesinado en su propia casa por tres individuos que se filtraron en la misma, torturándolo para posteriormente degollarlo. Según CPJ, el crimen está relacionado con las FARC. Antes de dedicarse exclusivamente al periodismo, había sido el alcalde de Montañitas, un pueblo a las afueras de Florencia. Además había sido el director de la cárcel de Florencia. Durante su espacio radial había promovido intereses políticos a favor del Partido Conservador, razón por la cual se cree que fue torturado y posteriormente asesinado por las FARC. Según la policía de la región, el crimen no estuvo relacionado con su labor periodística.	Guerrilla FARC
107	Abad López	Alfredo	2000	Diciembre	13	Caquetá	Florencia	La Voz de la Selva	Radio	Director	También era docente. Fue atacado cuando salía de su residencia para iniciar sus trabajos periodísticos en la emisora radial de Florencia. En un espacio emitido los miércoles, en el que se le daba la oportunidad de opinar a la ciudadanía, puso como tema de discusión si el gobierno debía prorrogar o no el plazo sobre las negociaciones en la zona de despeje, consulta en la que se obtuvo más del 90 por ciento de negativa por parte de los participantes en el tema. Fue el segundo periodista asesinado en Florencia en dos semanas.	Guerrilla FARC
108	Bedoya (Tovar) Sarría	Flavio Iván	2001	Abril	27	Nariño	Tumaco	Semanario Voz	Prensa	Periodista	Realizaba denuncias de corrupción y de incapacidad de la policía. Además, sostuvo una entrevista con un comandante de las FARC sobre los enfrentamientos con las Autodefensas Unidas de Colombia en el corregimiento de Llorente.	Desconocidos
109	Marulanda Romero	Yesid	2001	Mayo	3	Valle del Cauca	Cali	Notipacífico	Televisión	Periodista	Fue asesinado por pistoleros motorizados en un barrio del sur de la ciudad de Cali. Realizaba denuncias de robos contra un programa de vivienda popular. Crimen emblemático por darse el mismo día que se celebra el “Día Internacional de la Libertad de Expresión”. La principal acción que lo caracterizó en su trabajo fue la realización de reportajes sobre el tráfico de subsidios y una defraudación masiva a personas humildes, por parte de un programa de vivienda popular que se adelantaba en Cali, razón por la cual decidió estudiar Derecho, con el fin de entender mejor los ropajes jurídicos que salvaguardaron a los que realizaban el ilícito. Aunque nunca comentó recibir alguna amenaza, decidió dedicarse al periodismo deportivo, hecho que llamo la atención de sus compañeros. Su asesinato se dio justo cuando salía de una de sus clases de Derecho en la Universidad Santiago de Cali.	Corrupción política
110	Tavera Gaona	Edgar	2001	Mayo	17	Santander	Guespa	Emisora comunitaria	Radio	Periodista	Un grupo de campesinos dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo en una finca de la vereda de San Lorenzo, zona rural del municipio de Güepsa. Realizaba denuncias de los atropellos de las FARC en la zona de Güepsa.	Guerrilla FARC
111	Parra Castañeda	Pablo Emilio	2001	Junio	27	Tolima	Planadas	Emisora comunitaria Planadas Stereo	Radio	Director / Gerente	Las autoridades municipales encontraron su cuerpo, con dos tiros en la cabeza, en la vía que conduce a la inspección de policía de Gaitania. Sobre su pecho había un letrero que decía “por sapo y torcido”. Fue sacado de su casa por milicianos de las FARC, quienes lo asesinaron. Realizaba actividades comunitarias y cívicas. Era director de la Emisora Comunitaria Planadas Estéreo. El crimen está relacionado con las FARC. Parra siempre se caracterizó por su vocación de servicio, lo cual se ve reflejado en el hecho de que haya sido socorrista voluntario de la Cruz Roja y que haya llegado a ser el coordinador de la Unidad Operativa de la misma entidad. Planadas Estéreo fue el cuerpo que tomó su sueño de darle a ese municipio un canal de expresión. Además en su emisora se impartía un curso de bachillerato a distancia por radio. La emisora funcionaba desde su casa, lugar de donde fue sacado por tres desconocidos. Su cuerpo, horas después, apareció con señales de tortura y asfixia. Existen diversas versiones entre las que se cree que la guerrilla creía que Parra era un auxiliador del Ejército y otra en que los insurgentes creían que lo era de los paramilitares.	Guerrilla FARC
112	Arias Henao	Arquímides	2001	Julio	4	Tolima	Fresno	Armonía FM Stereo / Fresno FM Stereo	Radio	Director / Gerente	Un desconocido ingresó a las instalaciones y le disparó en tres ocasiones. El ex-jefe paramilitar <i>Elkin</i> argumentó que su homicidio ocurrió porque <i>Memo Pequeño</i> se lo ordenó, por ser un supuesto colaborador de la guerrilla y a eso obedecían sus viajes constantes entre Fresno, Palocabildo y Falán. El ex comandante paramilitar negó que esta muerte tuviera relación con el trabajo de Arias Henao como periodista, pero este argumento fue desmentido por el hermano de la víctima, quien dijo que era perseguido por hacer oposición a las autodefensas. Realizaba informaciones sobre corrupción.	Paramilitares
113	Duviel Vásquez	José	2001	Julio	6	Caquetá	Florencia	La Voz de la Selva	Radio	Periodista	Iba en su carro en compañía de su compañero de trabajo, Omar Orlando García, quien narró a la Fiscalía que un hombre se acercó al vehículo y le disparó una vez a Vásquez. Por amenazas contra su vida, en el mismo 2001, García se fue a vivir exiliado a Canadá. Recibió amenazas de los paramilitares luego de haber puesto en evidencia la existencia de un casete en el que la ex alcaldesa de Florencia, Lucrecia Murcia Lozada, aparecía entregándole dinero a los concejales. La alcaldesa acusó a Duviel de terrorista de la información. Luego, lo mataron.	Paramilitares
114	Urbano Sánchez	Jorge ("Jose" según la censura del fuego) Enrique	2001	Julio	8	Valle del Cauca	Buenaventura	Emisora Mar Estereo	Radio	Periodista	Asesinado por dos individuos que huyeron en una motocicleta y dos cómplices que escaparon a bordo de una lancha rápida. El hecho sucedió cuando departía con sus amigos en el parque Néstor Urbano Tenorio del principal puerto en el Pacífico colombiano. Realizaba denuncias contra la delincuencia y el incremento de expendedores de drogas precisamente en el parque donde fue asesinado. Venía realizando constantes denuncias contra la pandilla Los Tambupaertas, quienes, con consentimiento de la policía, se habían tomado el parque principal de Buenaventura para vender drogas y organizar sus actividades delincuenciales. Dicho parque precisamente llevaba el nombre del padre de Urbano, ya que su familia había donado el dinero para su construcción y su mantenimiento. A partir de dichas denuncias las amenazas se hacían cada vez más constantes, así como sus críticas a la pandilla y a la Policía por omitir en este caso. Por la época de la muerte de Urbano, aproximadamente diez periodistas del puerto tuvieron que exiliarse.	Bandas criminales
115	Estrada Gutiérrez	Eduardo	2001	Julio	16	Bolívar	San Pablo	Emisora comunitaria	Radio	Periodista	Fue acribillado a tiros por desconocidos en una calle del municipio de San Pablo, cuando se dirigía a su casa en compañía de su esposa Sara González. Realizaba actividades comunitarias o cívicas. Periodista de la emisora comunitaria La Libertad, asesinado en 2001. Durante una época de su vida se dedicó a la reportería en San Jacinto y el Carmen, hasta que en esta región empezó la irrupción de grupos paramilitares, quienes empezaron a estigmatizar a todos los alcaldes de la región como guerrilleros de las FARC, además insinuando que todos los periodistas que informaran sobre actos del gobierno, eran facilitadores de las FARC. Razón por la cual, Estrada prefirió dedicarse al trabajo social donde se incorporó al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Luego de un tiempo se empeñaría en formar una emisora comunitaria. Según un documento de Reporteros sin Fronteras, por la época de su muerte tenía planeado participar en un diálogo entre el ELN y la sociedad civil.	Paramilitares
116	Escobar	Alvaro Alonso	2001	Diciembre	23	Magdalena	Fundación	<i>Región / El Informador</i>	Prensa	Director / Gerente	Realizaba denuncias de corrupción al interior del sistema de salud del departamento y otras decisiones de la administración local. Escobar reemplazó como director del periódico <i>Región</i> al también asesinado Hernando Rangel Moreno, a quien habían matado el 11 de abril de 1999, dos años y 8 meses antes. Fundador del <i>Semanario Región</i> . En una época de incremento total de violencia y arbitrariedad, Escobar fue el único que mantuvo la independencia de su opinión y con gran valor trató de cubrir las noticias políticas que afectaban a las personas más poderosas de la región, lo más apegado a la realidad posible. Razón que no solo lo llevó a su muerte, sino que le obligó a poner dinero de su capital para mantener vivo el semanario, ya que por temor todos los auspiciadores le quitaron la pauta. Escobar quiso continuar con la función y el estilo incisivo de su cronista político (Hernando Rangel Romero), asesinado dos años antes presuntamente también por cuestionar las actuaciones de los políticos tradicionales de su región. Como autor material de su asesinato se vinculó al ex integrante de autodefensas Édgar Ariel Córdoba Trujillo.	Corrupción política
117	Ayala	Marco Antonio	2002	Enero	23	Valle del Cauca	Cali	<i>El Caleño</i>	Prensa	Reportero gráfico	En el momento en que salía de un estudio de revelado fotográfico, dos personas que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. Ya había sido amenazado por dos casos: unas fotos alusivas a la muerte de cinco personas y por otras fotos de un adulto en compañía de una menor.	Desconocidos
118	Sierra	Orlando	2002	Enero	30	Caldas	Manizales	<i>La Patria</i>	Prensa	Director / Gerente	En presencia de su hija y frente a las instalaciones del periódico, un sicario le disparó dos tiros en la cabeza que le produjeron la muerte cerebral. Estuvo en estado de coma durante 48 horas. El sicario quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. Realizaba denuncias contra la clase política de Caldas. Era Subdirector del diario <i>La Patria</i> . Su labor se caracterizó por criticar a la coalición política de los senadores Omar Yepes Álzate y Víctor Renán Barco, quienes tenían gran preponderancia en el Departamento de Caldas, a quienes Sierra les atribuía la mayor parte de los problemas del departamento y a Ferney Tapasco, quien controló durante veinte años la Asamblea de Caldas. Ese último perdería su investidura por las denuncias de las columnas hechas por Sierra. Posteriormente redactaría una columna con el nombre de “Los delfines de la corrupción”, en la cual lanzaba una crítica a Dixon, hijo de Ferney Tapasco, quien se lanzó a la Cámara de Representantes. Al cruzarse por la calle con Ferney, este lo agredió y lo amenazó de muerte. A raíz de este incidente recibió por parte del Estado dos escoltas y una camioneta, los cuales fueron rechazados por el periodista con el argumento de que “prefería andar libre y en buseta”. Finalmente sería asesinado al frente de las instalaciones de su periódico en presencia de su hija. Al proceso se vinculó formalmente como autores intelectuales a Dixon Ferney Tapasco Triviño y Francisco Ferney Tapasco González, a quienes además se les encontraron vínculos con los paramilitares, mientras la autoría material se vinculó a Luis Fernando Soto Zapata, quien fue liberado en 2007 gracias a rebajas de pena y murió en el 2008 tras un enfrentamiento con la Policía.	Corrupción política
119	López	Walter	2002	Abril	12	Valle del Cauca	Cali	RCN TV	Televisión	Conductor	En zona rural de Cali, fue asesinado durante el cubrimiento de la persecución que realizaban el Ejército y la Policía contra un grupo de guerrilleros de las FARC que secuestró a 12 diputados de la Asamblea del Valle.	Guerrilla FARC
120	Sandoval	Héctor	2002	Abril	12	Valle del Cauca	Cali	RCN TV	Televisión	Camarógrafo	En zona rural de Cali, fue asesinado durante el cubrimiento de la persecución que realizaban el Ejército y la Policía contra un grupo de guerrilleros de las FARC que secuestró a 12 diputados de la Asamblea del Valle.	Guerrilla FARC
121	Acosta	Víctor Omar	2002	Mayo	4	Valle del Cauca	Yumbo	<i>Prgón del Pacífico</i>	Prensa	Periodista	Periodista muerto en Yumbo. En el pasado había denunciado actos de corrupción local y se había retirado de la actividad profesional en 2000. Acosta trabajó para los periódicos <i>El Occidente</i> , <i>El País</i> y la cadena radial Todelar. En los últimos años antes de su muerte, no había trabajado para los medios. Las autoridades todavía están investigando si se trata de un homicidio por razones de la profesión (extraído del informe semestral de la SIP).	Desconocidos

N°	Apellido	Nombre	Año de asesinato	Mes	Día	Lugar del asesinato	Ciudad	Medio	Tipo de Medio	Labor	Desempeño como periodista y descripción de los hechos del asesinato	Presunto implicado
122	Varela Noriega	Efraín	2002	Junio	28	Arauca	Arauca	Meridiano 70	Radio	Director / Gerente	Cuando viajaba en un vehículo por Arauca, fue interceptado con identificación de la radio por un grupo de hombres armados. Lo bajaron del auto y le dispararon. Dos semanas antes su nombre apareció en una lista de personas declaradas "objetivos militares" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En múltiples ocasiones el comunicador denunció haberse convertido en blanco de amenazas de grupos de autodefensas como consecuencia de los contenidos del programa que conducía en la emisora. Realizaba denuncias de atropellos del Ejército y de los paramilitares.	Paramilitares
123	Obando	Elizabeth	2002	Julio	11	Tolima	Roncesvalles	<i>El Nuevo Día</i>	Prensa (Voceador)	Voceadora	En la vía que de Ibagué conduce a Roncesvalles, miembros del Frente 21 de las FARC interceptaron un bus en el que se movilizaban Ángela Yessenia Bríñez Ballesteros, personera de Roncesvalles y Elizabeth Obando Murcia. Los delincentes obligaron a descender del vehículo a las dos mujeres y procedieron a disparar el arma de fuego contra Elizabeth Obando.	Guerrilla FARC
124	Prada Díaz	Mario	2002	Julio	12	Santander	Sabana de Torres	<i>Horizonte Sabanero</i>	Prensa	Director / Gerente	El cuerpo del periodista fue hallado con cuatro impactos de bala en la cabeza. Prada había desaparecido el jueves 11 de junio. Realizaba denuncias de irregularidades de la clase política y de los paramilitares. Era director del diario <i>Horizonte Sabanero</i> . Poco antes de su muerte, en su última columna publicada en el diario, a modo de autobiografía contó cómo todas las desgracias de su región desde que tiene conciencia han sido culpa de los poderosos gamonales que han manejado a su antojo la administración pública. Fue secretario del concejo municipal de la Unión Patriótica, razón por la cual siempre se le tildó de ser aliado de la guerrilla. Con su desaparición física también desapareció el periódico <i>Horizonte Sabanero</i> .	Corrupción política
125	Sánchez Lora	Dennis Segundo	2002	Julio	16	Bolívar	Carmen de Bolívar	95,5 Estéreo	Radio	Periodista / Locutor	Periodista y locutor de 95,5 Estéreo. Era el conductor de un programa de radio de la Secretaría de Salud de Carmen de Bolívar llamado "A su salud", en el cual se buscaba realizar campañas de prevención de enfermedades. Además de este tema y otros de deportes o música, nunca tocó temas políticos ni de conflicto. Dos años antes de su muerte se lanzó al Concejo de Carmen de Bolívar sin éxito alguno y al momento de su muerte se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 12 de Noviembre. Al parecer no había recibido ninguna amenaza en contra de su vida y aun no se ha podido establecer si su asesinato se debe a razones de oficio periodístico o no.	Desconocidos
126	Perdomo Zamora	Gimbler	2002	Diciembre	1	Huila	Neiva	Panorama Estéreo	Radio	Director / Gerente	Era director de la emisora de radio Panorama Estéreo. Se caracterizaba por recoger donaciones para personas de escasos recursos. Aunque era el director de esta emisora, su principal actividad era la política, ya que fue concejal de su municipio durante tres periodos. Además de dedicarse al comercio, tenía contratos con la alcaldía en temas de venta de computadores y materiales de construcción. A su vez era el gerente del hotel "La Casona", lugar de donde salía cuando se dirigía a su casa en el momento en que fue atacado. Según policía y familiares, Perdomo no había recibido amenaza alguna. En el hecho también resultó herida su esposa, quien posteriormente se recuperó de las heridas físicas. La policía tampoco ha logrado determinar móvil alguno sobre este caso (extraído de la página de la FLIP).	Desconocidos
127	Alfonso Prada	Luis Eduardo	2003	Marzo	18	Arauca	Arauca	Meridiano 70	Radio	Periodista	Periodista de Meridiano 70 y corresponsal del periódico <i>El Tiempo</i> . Siempre fue consciente del riesgo que implicaba la labor que estaba desarrollando. Sufrió la pérdida de su colega y amigo Efraín Varela, a quien pasaría a reemplazar en su función como director de noticias de la emisora Meridiano 70. Tras asumir esta responsabilidad, tendría que desplazarse hasta Bogotá persuadido por su familia, la cual estaba ampliamente preocupada por las amenazas que constantemente llegaban vía mail por parte de las AUC. Estando en dicha ciudad, se acogió al programa de protección para periodistas del Ministerio de Interior. El estudio de seguridad arrojó como resultado el status "Nivel Medio Bajo", el cual no le brindó las suficientes medidas de seguridad, tanto que pocos días después, durante la madrugada del 18 de marzo, tres sicarios acabarían con su vida (Tomado de La censura del fuego).	Paramilitares
128	Rivas	José Emeterio	2003	Abril	6	Santander	Barrancabermeja	Calor estéreo	Radio	Periodista	Dirigía el programa Fuerzas Vivas de la emisora Calor Estéreo. Fue asesinado junto con un estudiante universitario en la vía que conduce desde Barrancabermeja a Bucaramanga. Había sido amenazado por paramilitares con los que pretendía entrevistarse. Realizaba denuncias de corrupción administrativa.	Corrupción política
129	Bravo Vega	Guillermo	2003	Abril	28	Huila	Neiva	Canal 2 / Hechos y Cifras	Televisión	Periodista	Fue asesinado en su casa en Neiva. Se encontraba trabajando en su computador cuando un sicario entró hasta la sala de su casa y le propinó tres disparos que acabaron con su vida. Realizaba denuncias de corrupción con relación a la venta de la licorera. Su muerte ha sido asociada a la participación de políticos venales. Realizaba su labor con gran pasión y nunca midió las consecuencias de sus actuaciones. Aunque esto también lo llevó a ganarse el Premio de Periodismo Simón Bolívar. Su labor se caracterizó por hacer periodismo económico enfocado desde las necesidades sociales, estudiar juiciosamente la contratación pública y analizar la venta de la Empresa de Licores del Huila como un caso de enriquecimiento ilícito. Aproximadamente un mes antes de su asesinato, se le acercó un hombre conocido en el bajo mundo para advertirle que su muerte ya había sido ordenada y los sicarios contratados. Bravo avisó a la Policía y al DAS, los cuales no respondieron con ningún esquema de seguridad. Un periodista que asistía a Bravo decidió emigrar de Neiva por estas amenazas (tomado de La censura del fuego).	Corrupción política
130	Rengifo Revero	Jaime	2003	Abril	29	Guajira	Maicao	Olimpica / <i>Guajiro Quincenario</i>	Radio y Prensa Escrita	Periodista / Director	Fue asesinado en un hotel por un hombre que le propinó cinco disparos. Realizaba denuncias contra la delincuencia organizada en La Guajira y la complicidad de las autoridades. Su labor se caracterizaba por no escatimar al momento de denunciar anomalías en la administración pública y solía hacerlo con nombres propios. Quizás su publicación más contundente sobre este tema fue la que realizó en el periódico <i>Guajiro Quincenario</i> en el que mostró los sospechosos entrettejidos de la administración local. Publicación que generaría inmediatamente la aparición en un muro de Maicao, cerca a su casa, de un grafiti con el mensaje "Muerte a Rengifo".	Narcotráfico
131	Benavides Arévalo	Juan Carlos	2003	Agosto	22	Putumayo	La Joya	Manantial Estéreo	Radio	Periodista	Era un comunicador social y periodista recordado por sus aportes a la radio del Valle de Sibundoy y su trabajo constante por fortalecer la comunicación y el periodismo en la región. Fue asesinado en la vereda de La Joya, mientras se dirigía a cubrir el primer Consejo Comunal del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, en Puerto Asís.	Desconocido
132	Muñoz	José Nel	2003	Octubre	6	Putumayo	Teteyé	Latina Stereo	Radio	Locutor	El cadáver fue recogido por cinco periodistas de la región y por su esposa, quienes manifestaron que mostraba señales de tortura y tres impactos de bala. Cubría eventos noticiosos del conflicto armado y noticias políticas. Su labor en Latina Stereo se limitaba a conducir espacios musicales y manejar temas comunitarios. En muy pocas ocasiones se encargaba de manejar temas de conflicto armado. Una noche salió a una vereda vaina a trabajar como locutor y animar una fiesta, junto al encargado del sonido, al otro día no volvieron, por lo que la esposa de Muñoz y un grupo de periodistas se dieron a la labor de búsqueda. Al llegar a la vereda se manejó bastante hermetismo, los habitantes se limitaron a dirigir a la esposa y a los periodistas al lugar donde se encontraban los cuerpos, poco después se hablaba casi como un mito que había sido el Frente 48 de las FARC- EP (tomado de La censura del fuego).	Guerrilla FARC
133	Soto Cheng	William	2003	Diciembre	18	Valle del Cauca	Buenaventura	Telemar	Televisión	Periodista	Dos sujetos que se movilizaban en una moto le dispararon en cuatro ocasiones. Había denunciado la existencia de un fraude electoral en el que habrían participado algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Al momento de su muerte se encontraba empeñado en demostrar que las elecciones regionales de 2003 en Buenaventura habían estado envueltas en un fraude, auspiciado por miembros de la Marina y la Policía. Como resultado recibió exigencia de rectificación por parte del círculo social del alcalde electo, Saulo Quíñones, y los miembros de las Fuerzas Armadas. Inicialmente, Soto se negó a hacerlo, pero poco después tuvo que hacerlo al tiempo que él y su familia recibían amenazas anónimas. Posteriormente perdería la vida a mano de dos sicarios, hecho por el cual casi un año después de la muerte, la policía capturaría a Miguel Contreras y a Miguel Garcés alias <i>La Pantera</i> , dos miembros de las AUC, a quienes se les encontraría la presunta arma y la motocicleta que fue usada para el crimen.	Paramilitares
134	Polanco Herrera	Oscar Alberto	2004	Febrero	4	Valle del Cauca	Cartago	CNC Televisión	Televisión	Periodista	Fue asesinado por un sicario, al medio día, a la salida del canal donde trabajaba. Realizaba opiniones sobre la política local. Denunció masacres en Cartago, Roldanillo y La Unión por parte de paras y narcos.	Narcotráfico
135	La Rotta Duarte	Martín	2004	Febrero	7	Cesar	San Alberto	Las Palmas Estéreo	Radio	Director / Gerente	Fue asesinado el 7 de febrero mientras permanecía en la sala de su casa. Era gerente y propietario de la emisora Las Palmas Estéreo. La Rotta denunciaba los pagos que se realizaban a los paramilitares para el funcionamiento de dicho medio de comunicación. En 2007, Juan Francisco Prada Márquez alias "Juancho Prada" admitió su responsabilidad en el homicidio, bajo segunda versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en Barranquilla. Confesó que: "Estaba cansado de tanta cháchara, le envié la razón de que dejara de criticarnos, no hizo caso y se dio la orden de ejecutarlo".	Paramilitares
136	Madero Muñoz	Jaime Alberto	2004	Septiembre	20	Magdalena	Santa Marta	Todos	Prensa (Voceador)	Voceador de prensa	Fue asesinado por un sicario el 20 de septiembre a las 12:30 de la tarde. El hecho se produjo cerca a la plaza principal de mercado de esa ciudad, donde todos los días vendía los periódicos locales y nacionales. El asesinato estaría relacionado con la publicación que hizo en el periódico local, <i>El Informador</i> , sobre una nota y una fotografía en la que se informaba sobre la captura de unos presuntos miembros de los paramilitares. A pocas horas de publicada la noticia el periódico se agotó. Madero Muñoz decidió sacarle fotocopias al artículo y continuó vendiendo las copias. El diario <i>El Tiempo</i> narró que un desconocido se le acercó y le dijo "deje de vender esa vaina" y se marchó. Madero no hizo caso a la advertencia y siguió vendiendo la noticia. Minutos después fue asesinado.	Desconocido
137	Palacios Sánchez	Julio Hernando	2005	Enero	11	Norte de Santander	Cúcuta	Radio Lemas	Radio	Periodista	Fue asesinado por dos sicarios que le dispararon cuando se dirigía en su vehículo hacia la emisora, a las 5:30 de la mañana. Realizaba fuertes críticas en contra de algunos personajes políticos nortesantandereanos y varias veces fue denunciado por los delitos de injuria y calumnia. Incluso, el 2 de marzo de 2000 fue condenado a 35 meses de prisión, sentencia que fue apelada. Tenía posible relación con el alcalde.	Corrupción política
138	Prins Velasquez	Rafael Enrique	2005	Febrero	19	Bolívar	Magangué	Periódico <i>Apocalipsis</i>	Prensa	Director / Gerente	Prins venía haciendo algunas denuncias sobre el manejo de la administración pública por parte de Jorge Luis Alfonso López, alcalde de Magangué, Bolívar, hijo de Enilce López <i>La Gata</i> . Las denuncias eran tan duras que, sin recibir amenaza alguna, él ya temía por su vida. Poco después de esta publicación, en su periódico <i>El Apocalipsis</i> , Prins fue abordado por un sicario que le propinó varios disparos. Por el hecho fue capturado Alfonso, quien, según una menor de edad que trabajaba para la red de sicarios, la cual fue violada y obligada a abortar, había sido el autor material. Dicha hipótesis fue ratificada por Augusto Guillermo de Hoyos, desmovilizado de las autodefensas quien agregó que <i>El Gatico</i> había dado la orden influnciado por su madre, quien tomó de muy mala manera la publicación de Prins.	Corrupción política
139	Rojas Gabalo	Gustavo	2006	Febrero	4	Córdoba	Montería	Radio Panzenú	Radio	Periodista	Fue herido por dos hombres que, desde una motocicleta, le dispararon en Barranquilla. Había sido dado de alta el 12 de marzo, pero el 17 tuvo una recaída y falleció. Las autoridades creen que su homicidio tuvo que ver con el contenido de su programa. Los últimos trabajos del periodista se refirieron a unas tierras de San Anterito, una denuncia por un dinero que supuestamente se habían robado en la Secretaría de Salud y que era para los discapacitados y cómo algunos desmovilizados se llevaban a la gente en mototaxis y los atracaban. Más conocido como <i>El Gaba</i> , era un muy reconocido y querido locutor de radio, que en sus programas como "El espacio de Gaba", con más de 25 años al aire, acostumbraba presentar música con denuncias sobre corrupción de la clase política de Córdoba. Además era muy conocido por ser el animador de las casetas donde se presentaban los artistas vallenatos (tomado del pronunciamiento de la FLIP y diario <i>El Universal</i>).	Corrupción política
140	Sánchez	Milton Fabián	2006	Agosto	9	Valle del Cauca	Yumbo	Yumbo Estéreo	Radio	Periodista	Fue abordado por dos sicarios que, desde una moto, le propinaron dos disparos. Sánchez laboraba en Yumbo Estéreo desde 2004 y se desempeñaba como conductor de programas institucionales de la emisora, como Notas de Gestión, espacio de la Alcaldía de Yumbo, y La Personería, de la entidad con el mismo nombre. Realizaba denuncias en contra de la proliferación de expendios de droga en Yumbo especialmente asociados al negocio ilícito de la gasolina.	Desconocidos
141	Pérez Barrios	Atilano Segundo	2006	Agosto	22	Bolívar	Cartagena	Radio Vigía Todelar	Radio	Periodista	Fue baleado dos veces en el abdomen mientras veía televisión en la sala de su vivienda, en el barrio Los Alpes. Él, en su último programa del 20 de agosto, afirmó que grupos paramilitares derechistas estaban financiando las campañas para la alcaldía de cinco candidatos. Realizaba denuncias en contra de la administración pública y los problemas de la comunidad.	Corrupción política
142	Murillo Mosquera	Elacio	2007	Enero	10	Chocó	Itsmina	<i>Chocó 7 Días</i> / Canetele Estereo	Radio y prensa	Periodista	Días antes del crimen, la víctima escribió un artículo sobre la presencia de paramilitares en la zona de San Juan del Chocó. Murillo Mosquera también era abogado, ex diputado de la Asamblea Departamental y ex juez de Istmina.	Paramilitares
143	Arroyave	Javier Darío	2007	Septiembre	4	Valle del Cauca	Cartago	Ondas del Valle / <i>El Tiempo</i>	Radio	Director	Ante la inasistencia del periodista a la emisión matutina del noticiero y al ver que no contestaba las múltiples llamadas hechas a su celular, algunos de sus colegas acudieron a su residencia, donde lo encontraron muerto. Realizaba denuncias por irregularidades en el manejo de los contratos de la administración pública.	Corrupción política
144	Aguilar	Jose Everardo	2009	Abril	24	Cauca	Patía	Radio Super / Bolívar Estéreo	Radio	Periodista / Corresponsal	El crimen se produjo hacia las siete de la noche en la propia residencia del periodista. El sicario, de unos 50 años, se presentó como un mensajero que iba a entregarle unas fotografías y documentos, razón por la cual Aguilar lo dejó pasar. Realizaba denuncias constantes de corrupción en la administración municipal y departamental. Además, hacía denuncias en torno a las campañas electorales para gobernación y alcaldías desde el 2003.	Corrupción política
145	Castilla Ospina	Clodimiro Segundo	2010	Marzo	19	Córdoba	Montería	Revista <i>El Pulso del Tiempo</i>	Prensa	Director	Hace varios días le habían retirado su escolta policial. Fue asesinado a las nueve de la noche, por desconocidos que lo ubicaron en la entrada principal de su vivienda en la Urbanización El Puente, en Montería, cerca de un CAM de la Policía. Realizaba denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas y era testigo en algunas investigaciones relacionadas con la parapolítica.	Corrupción política
146	Maya Aricape	Rodolfo Julio	2010	Octubre	14	Cauca	Caloto	Radio Putumat	Radio	Periodista	Dos hombres en moto le dispararon en varias oportunidades al frente de su casa, en frente de su esposa y de su hija de siete años. Maya era el secretario del Cabildo de López Adentro y hacía reportes para la radio Payumat, entre otras labores periodísticas. Maya, de 34 años, era además un líder indígena a quien la gente reconocía por haber encabezado varias movilizaciones para denunciar los abusos de grupos armados en sus territorios y la invasión de sus tierras por personas externas a la comunidad. Así mismo, Maya era promotor de videoforos, espacio donde presentaba documentos que trataban temáticas que los afectaban directamente: cultivos ilícitos, minería ilegal, etc. La primera amenaza que recibió el comunicador se dio unos meses antes de su muerte. En una de las calles apareció un grafiti donde lo señalaban como miembro de las FARC. El letero incluía un número celular y una cifra de 20 millones. Floresmiro Yugué, Gobernador del Resguardo de López Adentro, dijo que en ese momento informaron a las autoridades del Cauca de esta amenaza pero "no dijeron nada".	Paramilitares
147	Gomez	Luis Eduardo	2011	Junio	30	Antioquia	Arboletes	<i>El Heraldo de Urabá / Urabá al día</i>	Prensa	Periodista	Los hechos sucedieron cuando el periodista regresaba a su casa en el barrio El Deportivo en horas de la noche. Las autoridades locales dijeron a la FLIP que dos desconocidos interceptaron al periodista, le dispararon varias veces y huyeron en una moto. Luis Eduardo Gómez era un periodista independiente de 70 años que realizaba trabajos para varias entidades públicas y para diarios como <i>El Heraldo de Urabá</i> y <i>Urabá al día</i> . Gómez cubría últimamente temas relacionados con el turismo y el medio ambiente. La FLIP no tenía reportados casos de amenazas en su contra. El periodista era testigo en la Fiscalía en casos de parapolítica en la región y su hijo y colaborador había sido asesinado dos años antes en circunstancias que las autoridades no han esclarecido. El periodista desde entonces se había apersonado de la investigación por la muerte de su hijo y exigía a las autoridades avances en la investigación.	Paramilitares
148	Quiroz	Guillermo	2012	Noviembre	27	Sucre	Sincelejo	<i>Meridiano de Sucre</i>	Prensa	Periodista	Periodista de <i>El Meridiano de Sucre</i> . Había denunciado la aparición de panfletos amenazantes en el municipio de San Pedro. Murió una semana después de haber estado en cuidados intensivos, luego de las lesiones que recibió en extrañas circunstancias por parte de la Policía.	Fuerza pública
149	Molina	Edinsón Alberto	2013	Septiembre	11	Antioquia	Puerto Berrio	Puerto Berrio Estéreo	Radio	Periodista y Abogado	Abogado y periodista, ex concejal de Puerto Berrio por el Partido Liberal. Lideraba la oposición a Robinson Baena, alcalde del mismo municipio. Hacia las siete de la noche del miércoles 11 de septiembre, fue asesinado cuando iba a ingresar a su residencia poco después de salir de la emisora comunitaria en la que dirigía su programa "Consultorio Jurídico", en el que asesoraba a la comunidad en esta materia y, además, hacía denuncias de corrupción en la administración de Baena.	Corrupción política
150	Arenas	José Darío	2013	Septiembre	28	Valle del Cauca	Caicedonia	<i>Extra del Quindío</i>	Prensa (Voceador)	Voceador de prensa	Era el único voceador de prensa del diario <i>Extra del Quindío</i> en el municipio de Caicedonia. El sábado 28 de septiembre, sobre las ocho de la mañana, fue abordado por sicarios que le dispararon en repetidas oportunidades cuando comenzaba su jornada laboral.	Desconocidos
151	Cervantes Solano	Luis Carlos	2014	Agosto	12	Antioquia	Tarazá	Morena FM / Teleantioquia Noticias	Radio y Televisión	Periodista	Desconocidos le dispararon mientras estaba en una motocicleta en el Bajo Cauca. Fue director de la emisora Morena FM hasta 2013. Antes de su asesinato era corresponsal en Teleantioquia Noticias. Tenía amenazas desde el 2010. Realizaba denuncias en contra de la corrupción en el gobierno local y las posibles relaciones con el grupo Los Urabeños (tomado del comunicado de CPJ).	Corrupción Política
152	Peralta Cuellar	Luis	2015	Febrero	15	Caquetá	El Doncello	Linda Estéreo	Radio	Periodista	Periodista de la emisora Linda Stereo, filial de Caracol. El homicidio ocurrió en el municipio de El Doncello, al norte del departamento del Caquetá. El crimen ocurrió a las 5:30 de la tarde, cuando Luis se encontraba en el andén de su casa, donde también se encuentra ubicada la emisora. Recientemente habían tratado temas de extracción de petróleo y corrupción administrativa, concretamente sobrecostos en la adquisición de vehículos compactadores. Además, era insistente con los escándalos de corrupción en las empresas públicas. Por este homicidio fue capturado Yean Arlex Buenaventura, como presunto autor material, a quien se le dictó medida de aseguramiento el 4 de marzo de 2015.	Corrupción política

Fuentes: FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) Estadísticas: González y Lozano, 2004, "La censura del fuego: Periodistas asesinados en Colombia"; CNMH, 2013-2015. Entrevistas de campo en diferentes regiones del país; Revisión de prensa escrita *El Tiempo* y *El Espectador*, realizada por el Grupo de investigación CNMH. Nota: Existen asesinatos que la FLIP no considera que fueron por razones de oficio. Por eso, sus estadísticas se limitan a 139 casos. Los 152 casos que se registran incluyen casos del libro "La Censura del Fuego". Además, se consolidaron las cifras complementarias que otras fuentes como Fecolper y CPJ tienen registradas.

Hay que aceptar que el mundo está “descuadernado” y que, como el viejo libro cuyas hojas se han venido cayendo, es necesario reencuadernarlo, a la sociedad humana hay que rejuvenecerla con una savia limpia de odios. Porque, ciertamente, nada hemos de conseguir si no nos enfrentamos valerosamente a la pregunta: ¿cómo y por qué pudo pasar y está pasando todo esto?

Guillermo Cano Isaza

*Ese es el gran mal que tiene este país: la imposibilidad de utilizar la única arma decente de confrontación que existe que es la **palabra**.*

Orlando Sierra Hernández

*Tratar de silenciar o callar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es, al miedo, infundirle el **silencio**.*

Orlando Sierra Hernández

...debemos escuchar las palabras que jamás fueron dichas, que permanecieron en el fondo de nuestros corazones (palpen los vuestros, allí están); es preciso hacer hablar los silencios de la historia, esos terribles puntos culminantes, donde ella ya no dice nada y que son, justamente, sus acentos más trágicos.

J. Michelet



ISBN:



Centro Nacional
de Memoria Histórica



DPS Departamento
para la Prosperidad
Social



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN